

La cadena:

vida y negocio en el límite
entre México y Guatemala

Rebecca Berke Galemba

**La cadena: vida y negocio
en el límite
entre México y Guatemala**

Galemba, Rebecca B., 1981- , autora.

La cadena: vida y negocio en el límite entre México y Guatemala / Rebecca Berke Galemba.

Descripción: Primera edición. | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas : Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, 2021.

LIBRUNAM 2099186 | ISBN 978-607-30-4352-6

Contrabando — Región fronteriza mexicano-guatemalteca. | Región fronteriza mexicano-guatemalteca — Comercio. | Seguridad fronteriza — Región fronteriza mexicano-guatemalteca. | Regiones fronterizas — Aspectos económicos — México. | Regiones fronterizas — Aspectos económicos — Guatemala.

Clasificación: LCC HJ6767.G3518 2021 | DDC 364.1—dc23

Primera edición 2018, Stanford University Press.

Título original: *Contraband Corridor Making a Living at the Mexico-Guatemala Border*

Traducción: Marisa Ordaz Velázquez y Eduardo Aguilar Espinoza, Dikaryon Language Consultants.

Imagen de cubierta: fotografía de Rebecca Berke Galemba

Primera edición en español: 2021

D.R. © Rebecca Berke Galemba

D.R. © 2021, Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad Universitaria, 04510, Del. Coyoacán, Ciudad de México, Coordinación de Humanidades,

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur

Calle María Adelina Flores, núm. 34-A, Barrio de Guadalupe, 29230,

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel.: (967) 678 2997

www.cimsur.unam.mx

ISBN: 978-607-30-4352-6

Esta obra fue dictaminada positivamente por pares ciegos externos, a solicitud del Comité Editorial del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Queda prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en México / Printed in Mexico

Rebecca Berke Galemba

**La cadena: vida y negocio
en el límite
entre México y Guatemala**



San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la Frontera Sur
Universidad Nacional Autónoma de México
MÉXICO, 2021

A mis hijas:

Elena Rose y Alexandra Elizabeth

Índice

Agradecimientos	11
Introducción	17
¿Un paraíso para el contrabando?, 17; El contrabando como negocio, 24; Neoliberalismo e informalidad, 27; Seguridad y comercio en las fronteras, 31; Informalidad, ilegalidad e ilicitud en las fronteras, 39; Ilegalidad, seguridad y neoliberalismo, 43; La economía fronteriza, 48; La etnografía de la frontera, 54	
1. Ingresos y reingresos en la frontera	57
Entrada, 57; Reingreso, 60; Una gringa entre hombres contrabandistas, 63; Haciendo las tierras fronterizas, 68; Demarcando la frontera, haciendo a México, 70; Nación y etnicidad en Guatemala, 78; Las comunidades de la frontera, 81; Espacios etnonacionalistas tensos, 88	
2. Documentar la vida nacional	89
Sentimiento cruzado, 96; Un automóvil no puede tener dos nacionalidades, pero una persona sí, 100; La vida de los documentos, 104; La nacionalidad y la ley, 117; Documentos interrumpidos, 122	
3. El maíz es comida, no contrabando	125
Transportando maíz, 130; El maíz como cultura, cultivo y mercancía, 140; Libre comercio en tierras fronterizas, 144; Cómo se liberó el maíz, 151; Las autoridades se ciegan, 156; Legalizando el maíz, 160; Comercialización de maíz de los Estados Unidos, 163;	

El coyote es quien más se beneficia, 164; ¿Libre comercio alternativo?, 167	
4. Gravando la frontera	169
Establecimiento de la cadena, 175; Crisis de gobernanza y movimientos sociales, 178; Límites del control, 189; ¿Seguridad o negocios?, 194; Autonomía ambivalente, 199; Viva el mal gobierno, 204	
5. Comercio fantasma	207
Exclusivamente turismo, 211; Reformas aduanales, 214; La historia no oficial, 224; A río revuelto, ganancia de pescadores, 235; Neoliberalismo securitizado, 246; ¿Seguridad de quién?, 247	
6. Heredando la frontera	249
Ética empresarial, 252; Intermediarios contrabandistas, 258; Ser camionero como forma de vida, 267; Vulnerabilidad y explotación, 272; La economía (extra)legal, 275; Promesas ilusorias, 280; Una lucha tensa, 282; Tomar en serio el contrabando, 285	
7. Descubrimiento de petróleo	289
Oleada de combustible, 292; Ir de <i>ride</i> , 295; Escalamiento y «la ley», 301; Sueño y pesadilla del trabajo de campo, 304; Nutriendo al poder, 307; Una espiral de gobernanza, 310	
Conclusión. El trío ilícito: drogas, armas y migrantes	319
La ilegalización de la migración, 323; Lo ilícito y la guerra contra las drogas, 336; Las mismas ratas, 339; Cuestionando la ilegalidad, 345; Búmeran fronterizo, 354	
Referencias	357

Agradecimientos

Este libro se ha transformado en la última década tanto como la región fronteriza en la que se gestó; mis propios pensamientos han cambiado. La percepciones generosamente compartidas por algunos colegas me han indicado nuevas líneas de investigación. Primero, agradezco a todas las personas que en la frontera México-Guatemala me aceptaron en la convivencia y que me abrieron sus hogares y me confiaron sus historias. Espero haber hecho justicia a sus decisiones y haberlas retratado de una manera imparcial e integral que impulse a otros a cuestionar los estereotipos sobre las fronteras, la ética en la gestión económica y el contrabando.

La idea de estudiar la frontera sur de México surgió de mi investigación de maestría en la frontera entre los Estados Unidos y México, en un momento en el que pocos académicos de los Estados Unidos contemplaban con un criterio etnográfico la frontera entre México y Guatemala. Mi primer viaje a Chiapas en 2005 me mostró la rica erudición que perseguían los estudiosos locales y el trabajo de los activistas sobre el terreno. Estoy especialmente en deuda con Juan Carlos Velasco, quien me llevó a varias visitas a sitios en la región fronteriza, me presentó a las comunidades fronterizas y continúa enviándome nueva información y fotos. José Luis Escalona Victoria ha sido un mentor invaluable en Chiapas. Como mi supervisor mientras fui investigadora invitada en el CIESAS-Sureste, él continuó asesorando mi trabajo y ayudándome a difundirlo en México. En Chiapas me enriquecí con las conversaciones

y comentarios de Edith Kauffer-Michel, Miguel Pickard, Justus Fenner, Jan Rus, Daniel Villafuerte Solís y Alain Basail Rodríguez. Rosalva Aída Hernández Castillo también me brindó un apoyo invaluable. Se reunió conmigo en la Ciudad de México y en Washington D.C., e incluso me visitó en la frontera. Los compañeros estudiantes que realizaban investigaciones en Chiapas, Sarah Osten y Rebecca Englert, también me ayudaron a formular mis pensamientos en el campo y compartieron sus reflexiones conmigo.

Quiero agradecer a mis mentores en la Universidad de Brown, Kay Warren, Catherine Lutz, Matthew Gutmann y Nicholas Townsend, quienes me ayudaron a guiar mis pensamientos en varios momentos del proceso de investigación y redacción. Kay Warren fue la columna vertebral de este proyecto. Al principio me sentía nerviosa acerca de mis planes de campo en la frontera sur, pero su confianza en mis habilidades me impulsó consistentemente. Ya fuera a través de un breve correo electrónico de apoyo, ofreciendo consejos acerca de situaciones potencialmente riesgosas o revisando línea por línea los capítulos por vía telefónica a altas horas de la noche, cuando regresaba, o mediante su recomendación enfática de cuidar que mis contribuciones destacaran en la edición final de este libro, ella siempre estuvo allí. Tuvo fe en mi labor, incluso cuando vacilé. Kay siempre me apoyó también en mi camino académico no tan directo, para que balanceara la familia y el trabajo, y optara por acercarme más a mi familia mientras seguía una senda de profesorado intensivo antes de obtener un puesto como titular, luego de más de seis años, y de concluir mi larga labor de investigación para este libro. Con Carolyn Nordstrom también tuve una valiosa retroalimentación. Ella fue una verdadera inspiración, no solo para mi análisis, sino también para el tipo de trabajadora de campo y etnógrafa que me esfuerzo por ser. Durante mi permanencia en Brown me beneficié de mis extraordinarios colegas «latinoamericanistas» de posgrado, con quienes sigo colaborando e intercambiando borradores: Kathleen Millar, Jennifer Ashley, Kristin Skrabut y Susan Ellison. Mi compañera Katie Rhine siempre ha estado a una ventana de chat de Google de distancia, brindándome constantemente consejos durante el proceso del libro,

así como apoyo y respuestas a todas mis preguntas técnicas. Después de Brown tuve la suerte de volver a conectar con Susi Keefe, quien ha sido una útil caja de resonancia para mis empeños. Mientras escribía versiones preliminares del manuscrito en la Universidad de Dartmouth, donde impartía clases lejos de mis colegas y asesores de Brown, me beneficié de la tutoría de John Watanabe, quien despertó mi interés por México y Guatemala. En Dartmouth tuve la suerte de conocer a Lourdes Gutiérrez-Nájera, quien me ha dado un inestimable apoyo a lo largo de los años. Navegar la transición del posgrado a la enseñanza y una nueva maternidad con Jennifer Darrah Okike en la Universidad de Harvard me ayudó a priorizar, perseverar y dar los siguientes pasos.

En los últimos años, mi trabajo ha evolucionado hasta involucrarse en conversaciones críticas sobre la ilegalidad, las fronteras y la legitimidad social, así como la relación más compleja entre los Estados y las prácticas ilegales. Mi desarrollo profesional y este libro se beneficiaron enormemente de las conversaciones y colaboraciones con Peter Andreas, Josiah McC. Heyman, Madeleine Reeves, Kedron Thomas, Ieva Jusionyte y Noelle Bridgden.

Me gustaría agradecer a Peter Andreas, José Luis Escalona Victoria, Alain Basail Rodríguez, Kay Warren, Daniel Goldstein, Kathleen Millar, Ieva Jusionyte, Jan Rus, Henio Hoyo, Beatriz Reyes-Foster, Noelle Brigden y Wendy Vogt por sus generosos comentarios de los capítulos o versiones preliminares de este trabajo, así como a los dos revisores anónimos de la Stanford University Press. Michelle Lipinski de Stanford University Press ha sido un apoyo increíble en este proceso. Ella ha ayudado a asegurar que mi voz etnográfica se destaque. Me gustaría agradecer a Margaret Pinette de Thompson Type por sus cuidadosas revisiones y sugerencias, y a Gaby Driessen por proporcionar un ojo editorial perspicaz para el manuscrito. Por su ayuda en la edición y el flujo general de las versiones anteriores del manuscrito, agradezco los comentarios de John Elder, Susi Keefe, mi padre Michael Meyers y mi esposo Dan Galemba. Con un padre y un esposo especialistas en la lengua inglesa, estuve constantemente bajo escrutinio. Gracias a ellos, ¡espero que los no académicos también disfruten este libro! En la Universidad de

Denver he tenido la suerte de estar rodeada de importantes académicos «latinoamericanistas» que me han ayudado a ampliar mi trabajo más allá de la antropología. Por ello, estoy especialmente agradecida con Aaron Schneider por su tutoría y apoyo.

Quisiera reconocer a la Fundación Wenner-Gren para la Investigación Antropológica por financiar el trabajo de campo a largo plazo en el que se basa la mayoría del libro; además, al Departamento de Antropología de la Universidad de Brown, al Centro de Estudios Poblacionales y Capacitación de la Universidad de Brown y al Premio Craig M. Cogut del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brown. El Instituto de Ética de la Universidad de Dartmouth también me proporcionó una estructura de apoyo para escribir fuera de mi institución de origen.

Partes del Capítulo 3 fueron publicadas previamente en Rebecca B. Galemba, 2012, «'Corn Is Food, Not Contraband': The Right to Free Trade at the Mexico-Guatemala Border», *American Ethnologist*, 39(4), noviembre, pp. 716-734, reproducido con permiso de la American Anthropological Association. Partes del Capítulo 4 aparecen en Rebecca B. Galemba, 2012, «Remapping the Border: Taxation, Territory, and (Trans) National Identity at the Mexico-Guatemala Border», *Environment and Planning D: Society and Space*, 30(5), octubre, pp. 822-841, reproducido con permiso de SAGE Publications. Pequeñas partes del Capítulo 6 aparecen en Rebecca B. Galemba, 2012, «Taking Contraband Seriously: Practicing 'Legitimate Work' at the Mexico-Guatemala Border», *The Anthropology of Work Review*, 33(1), julio, pp. 3-14, reproducido con permiso de la American Anthropological Association.

También me gustaría agradecer a mi familia por apoyarme a lo largo de los años, incluido el tiempo que me tomó volver a la investigación original para enmarcar el material en este libro. Mis padres, Barbara y Michael Meyers, siempre respaldaron mis decisiones, incluso cuando no estuvieron de acuerdo; me visitaron en el campo, me ayudaron a cuidar a mis hijas en una visita de seguimiento y siempre me ofrecieron apoyo. Mi madre, Barbara Meyers, quien regresó a la escuela para obtener su doctorado en psicología cuando yo estaba en la escuela secundaria,

motivó mi camino y me enseñó sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida. Mi abuela, Rose Berke, también es inspiración para el tipo de maestra, mentora y madre que espero ser. Sus padres no le permitieron asistir a la Universidad de Cornell a pesar de tener una beca parcial solo porque era mujer; sin embargo, perseveró hasta convertirse en maestra, subdirectora, maestra de gimnasia y defensora del Título IX. Más que nada, mi esposo Dan Galemba me alentó a continuar con este proyecto y terminar el libro. Me gustaría agradecerle especialmente por acompañarme durante la mayor parte del trabajo de campo, lo que significó tomar un receso en su propia carrera para ayudar enseñando inglés, a aprender sobre la frontera, enfrentar su miedo a las arañas y volver a aprender un idioma que no hablaba desde la secundaria. Claramente fuera de su zona de confort, él continuamente validó y apoyó mi pasión por la antropología y el trabajo de campo, recordándome lo inusual que es encontrar lo que te apasiona. Gracias por estar siempre a mi lado.

Mis dos hijas, Elena y Alexandra, nacieron en 2010 y 2013. Este libro está dedicado a ellas y espero que sigan sus pasiones incluso cuando encuentren un camino largo y sinuoso en lugar de uno recto. Con una carga de clases pesada y dos hijas pequeñas, la finalización de este libro no hubiera sido posible sin una red de apoyo sólida. Me gustaría agradecer a mi esposo, Dan Galemba, a mis padres Barbara y Michael Meyers, a mis suegros Anita y Ed Galemba, así como a los proveedores de cuidado infantil, niñeras, escuelas y guarderías que me ayudaron a darme el tiempo para escribir. También me gustaría reconocer a todas las otras mamás académicas que conocí en el camino y me aconsejaron sobre las diversas maneras de equilibrar una carrera académica con la familia. Aprecio la suerte que he tenido.

Finalmente, aunque no son sus nombres reales e intento esconder sus identidades para protegerlos, estoy especialmente agradecida con las familias de «Tito», «Paco», «Héctor», «Fani» «Francisca», «Ramón», «Alonso» y la familia que me invitó a vivir en su casa, por la confianza, amistad y enseñanza. Espero que los lectores entiendan cómo las personas se ganan la vida en la frontera a través de sus ojos y se cuestionen sus prejuicios sobre las fronteras, las actividades económicas legítimas y

la legalidad. Este libro demuestra la necesidad no solamente de examinar las rutas de otros y por qué las eligen, sino que también cuestiona las exclusiones, los privilegios y los juicios de valor incluidos en el orden legítimo o deseado.

También quiero agradecer a Justus Fenner, así como a los traductores Marisa y Eduardo, de Dikaryon, y en general a quienes colaboraron para que este texto llegue a lectores hispanohablantes.

Introducción

¿Un paraíso para el contrabando?

En 2006, un artículo en *El Financiero* describía la frontera entre México y Guatemala como «un paraíso para el contrabando... De esa frontera sur donde el negocio es redondo se habla poco; el problema es que en todo predomina la ilegalidad».¹ Cada día, viejos camiones de diez toneladas retumban sobre un camino no controlado que cruza la frontera México-Guatemala en las secas tierras bajas de Frontera Comalapa, Chiapas, México, y La Democracia, Huehuetenango, Guatemala (figuras 1.1 y 1.2), revolviendo una mezcla de tierra y pavimento agrietado. Los periódicos locales informan que al menos 100 camiones transitan la ruta cada día, contrabandeando desde maíz hasta azúcar, café, ropa, verduras, refrescos y gasolina.² La ruta también es cada vez más importante para el comercio de drogas. Un cruce fronterizo oficial, repleto de las manifestaciones modernas de los Estados de México y Guatemala, se extiende a lo largo de la Carretera Panamericana a unos pocos kilómetros de distancia, en Ciudad Cuauhtémoc del lado mexicano y en La Mesilla del lado guatemalteco. Cientos de pasajes no vigilados atraviesan aquella frontera de más de 869 kilómetros de largo, incluidos senderos que cruzan montañas, selvas y ríos. Con solo diez puntos de entrada oficiales entre ambos países, de

¹ *El Financiero*, septiembre 7, 2006.

² No hago referencia a estos artículos, ya que al hacerlo revelaría las identidades de las comunidades fronterizas.

Figura 1.1. Mapa de Chiapas, región fronteriza México-Guatemala con ciudades más importantes.



Fuente: Map Data@ 2016 Google, INEGI.

los cuales solamente ocho son visibles, la mayoría de los cruces son informales.³ De los cuarenta y cinco cruces vehiculares informales a lo largo de la frontera Chiapas-Guatemala, esta es la zona en la que se realiza la mayor actividad comercial.⁴ Un reciente informe del gobierno mexicano que detalla las implicaciones de seguridad de los «puntos ciegos» a lo largo de la frontera tenía especialmente en la mira este lugar.⁵

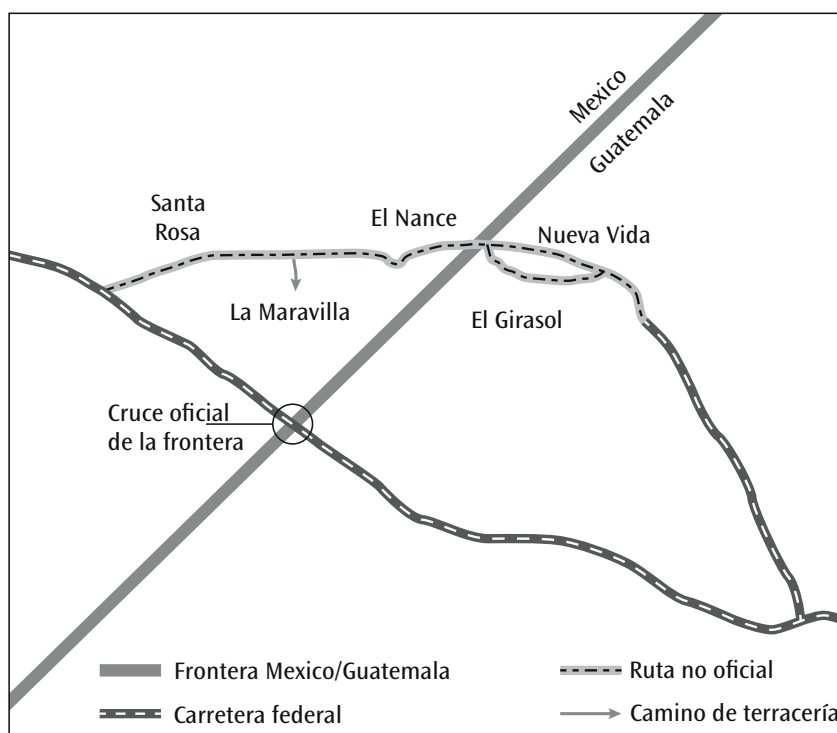
Solamente monumentos blancos que se extienden sobre las laderas marcan esta frontera. En la vida cotidiana, estas demarcaciones parecen importar poco. Los camiones cruzan, los niños juegan en el pequeño

³ Isacson, Meyer y Morales (2014:7, 10). Siete están localizados en la frontera Chiapas-Guatemala (Basail 2016b:5).

⁴ Isacson, Meyer y Morales (2014:10); Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2015). El número de cruces vehiculares varía según la fuente.

⁵ No cito este reporte para preservar el anonimato del punto de cruce.

Figura 1.2. Mapa de comunidades fronterizas.



Fuente: realizado por la autora.

arroyo que se forma en la frontera durante la temporada de lluvias, y los trabajadores y las familias también cruzan. No hay cercas ni funcionarios u otros indicadores de que se esté ingresando en otro país. Un letrero que señala la frontera se erigió apenas en el verano de 2007 (foto 1).

Aunque generalmente no hay presencia de funcionarios estatales, el ejército mexicano se estuvo acantonando periódicamente dentro de esta ruta en la primavera de 2007. Me dijeron que esto fue en respuesta a la promesa del entonces recientemente electo presidente Felipe Calderón de adoptar un enfoque de línea dura con respecto a la seguridad fronteriza y la violencia asociada con las drogas. Al principio, los contrabandistas, los negociantes y los residentes se abstendían de cruzar la frontera hasta que los Humvees (vehículos militares) se retiraran, pero después de



Foto 1. Rótulo que demarca la división entre México y Guatemala, erigido en el verano de 2007 (fuente: foto de la autora).

algunas semanas comenzaron a hacer negocios como de costumbre, conduciendo directamente entre los militares. Por lo tanto, me sorprendió cuando un soldado mexicano me detuvo para interrogarme, en mayo de 2007, mientras manejaba desde mi casa en el lado mexicano para visitar amigos del lado guatemalteco. Cuando salí del auto me puse nerviosa. Después de vivir en la frontera durante ocho meses, no estaba acostumbrada a encontrarme con agentes del Estado y no llevaba mi pasaporte. «¿Qué estás haciendo en este camino ilegal?», me preguntó el soldado, dando a entender que tanto la ruta como las personas y las actividades allí presentes, al carecer de reconocimiento oficial, eran ilegales. Mientras hablábamos, miré por encima de mi hombro y vi personas contrabandeando botes de gasolina que resonaban en la parte trasera de las camionetas al remontar las colinas rocosas hacia Guatemala. Pronto me di cuenta de que el soldado me veía más como una curiosidad que como sospechosa. Mientras intentaba explicar mi investigación, me percaté de

que él estaba preocupado por la opinión de los residentes acerca de la vigilancia militar en una ruta fronteriza en la que se resiente la interferencia oficial. Me preguntó con incredulidad: «¿Vives aquí? ¿Qué piensa la gente de nosotros?». ⁶ Este encuentro me hizo cuestionar mis suposiciones acerca de la seguridad y la ilegalidad. ¿Eran la seguridad y el control de fronteras un espejismo? ¿Se entrelazaban íntimamente la seguridad y la ilegalidad en lugar de oponerse? ¿Cómo se trazan estas designaciones en las regiones y poblaciones fronterizas y con qué efecto?

La facilidad del comercio que transita por este camino no controlado contrasta con el discurso oficial acerca de priorizar la seguridad fronteriza que emana de Washington, D. C., de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Cuando llegué a la frontera sur de México para iniciar mi investigación, en septiembre de 2006, consideré que estaba estudiando las paradojas de una frontera cada vez más abierta al comercio a través de acuerdos regionales, pero que restringía el movimiento de personas con base en medidas de seguridad intensificadas. La respuesta más común fue una risa incrédula. Los residentes estaban perplejos ante la suposición de que había más seguridad.

Después de 2006, en cada nueva visita a la frontera notaba una mayor presencia de policías fronterizos y unidades militares, y también más contrabando visible. Esta presencia de las fuerzas del orden no generaba entre los residentes una sensación de seguridad en términos de protección o reducción de flujos ilícitos. ¿Por qué, en ese contexto de integración comercial oficial de la región y la mejora de la policía fronteriza, los residentes percibían esta presencia de cuerpos de seguridad como algo risible? ¿Por qué se incrementaba el contrabando de bienes a través de esta frontera? En general, con la liberalización comercial disminuye el contrabando de bienes para evadir aranceles y se concentra más en los artículos prohibidos. ⁷ Los residentes también se mostraban más dispuestos a justificar y legitimar el contrabando de bienes básicos y con expectativas de una mayor tolerancia oficial hacia sus actividades.

⁶ Véase descripción de este incidente en Galemba (2013).

⁷ Véase Andreas (1999).

¿Por qué las políticas oficiales conducen a resultados contradictorios, desconcertantes e incluso contraproducentes? Esta pregunta puede responderse al destacar las voces de las personas afectadas por políticas que tienden a omitirlas no solo en su diseño, sino también en su implementación y evaluación. En contraste con los análisis macroeconómicos que debaten sobre cómo la integración comercial y la seguridad fronteriza militarizada afectan los flujos ilícitos, o que postulan el comercio ilícito como una amenaza inherente a la seguridad y estabilidad del Estado, las interacciones cotidianas entre habitantes, funcionarios y contrabandistas regionales proporcionan información sobre cómo se experimentan las políticas en determinados lugares y de qué modo estas pueden generar consecuencias no deseadas.

Este libro desafía los supuestos simplistas sobre seguridad, comercio e ilegalidad al detallar la manera en que los residentes fronterizos participan en prácticas extralegales y las justifican, en un contexto de seguridad fronteriza aumentada, de oportunidades económicas restringidas y de políticas de integración comercial que excluyen a los habitantes locales. En vez de suponer que las actividades extralegales necesariamente socavan al Estado y a la economía formal, este libro retoma el tema para formular una pregunta de investigación etnográfica. En la frontera, las lógicas sobre la informalidad, la ilegalidad, la economía formal y la seguridad se entrelazan y se confunden en el contexto de lo que llamo neoliberalismo «securitizado», o el entramado de políticas de seguridad con políticas y lógicas económicas neoliberales.⁸ El neoliberalismo securitizado funciona para valorar ciertas actividades económicas y a ciertos actores, mientras excluye y criminaliza a otros, en un entorno en el que la economía informal e ilícita es cada vez más una de las pocas opciones de supervivencia para los pobres, y la informalidad también permea el sector formal.⁹ La distinción entre contrabando y negocios privilegia actividades económicas particulares, ya que criminaliza las estrategias de subsistencia de habitantes marginados. Si bien la seguridad, el neoliberalismo

⁸ Véase Goldstein (2010; 2012); Zilberg (2011); Jusionyte (2015); Aguiar (2014) y Arroyo (2006).

⁹ Véase también Zilberg (2011:4, 6) y Goldstein (2012:17).

lismo y la ilegalidad son interdependientes en formas complejas, la manera en que se desarrollan depende de negociaciones contingentes entre diversos actores fronterizos.

Las actividades económicas extralegales, como el contrabando, proporcionan a los campesinos de las fronteras un medio para ganarse la vida en el contexto de las políticas económicas neoliberales que diezmaron los medios de vida agrícolas. Sin embargo, esta práctica también exagera las desigualdades predominantes, obstruye la posibilidad de cambio político y económico más sustancial y brinda beneficios de bajo riesgo a determinadas empresas formales, agentes estatales y actores ilícitos, a menudo a expensas de los residentes fronterizos. Además, la amenaza de la economía extralegal refuerza una agenda de seguridad fronteriza¹⁰ que combina diferentes actividades ilícitas e informales y fomenta una política de criminalización que hace que los residentes estén menos seguros.

Gran parte de la literatura académica sobre esta región describe la migración hacia el norte como un medio de supervivencia después de la crisis económica en las décadas de 1980 y 1990.¹¹ Vecinos de las fronteras continúan emigrando a los Estados Unidos, pero la recesión económica de 2008 combinada con las políticas de inmigración punitivas, especialmente en los estados donde estos tienen redes de migrantes (Florida, Carolina del Norte y Georgia), hacen que esa estrategia sea menos atractiva. Después de 2008, muchos residentes de la frontera comenzaron a regresar a sus hogares. Cada vez menos estudios prestan atención a las estrategias que siguen los campesinos en sus hogares para ganarse la vida ante el deterioro de los medios de vida tradicionales. Muchas de sus opciones oscilan entre lo legal/ilegal y lo formal/informal. En las zonas fronterizas, debido a que la frontera ha sido históricamente porosa, el comercio (legal e ilegal) ha significado durante mucho tiempo una parte integral de la vida diaria.¹²

¹⁰ Véase Andreas (1999:96, 2010-2011).

¹¹ Véase Villafuerte (2009).

¹² Guzmán (2004:138).

Como la frontera entre México y Guatemala se ha convertido en los últimos años en un semáforo rojo a nivel geopolítico para contener flujos ilícitos, *La cadena* busca comprender la frontera desde la óptica de sus habitantes. Una perspectiva etnográfica implica no solo escuchar los puntos de vista locales, sino también experimentar la vida en la frontera con los residentes a lo largo del tiempo para revelar el panorama más amplio en el que se sitúa, comprende y debate la economía informal e ilícita. Las personas no están solamente influenciadas por las desigualdades de la frontera, sino que ellos también las moldean y las modifican de manera activa para adaptarlas a sus propios intereses. Los habitantes locales han dependido de la frontera por mucho tiempo; incluso desde antes, durante y en momentos en que el discurso de la seguridad se interrumpe de manera reiterada.¹³ La investigación etnográfica conllevó entrevistas con los residentes fronterizos, los funcionarios locales y los productores regionales, así como observación participante y el involucramiento diario en la vida fronteriza por un año entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, además de visitas de seguimiento en los veranos de 2008, 2011 y 2014.

El contrabando como negocio

Para los residentes, el transporte de bienes a través de la frontera ha sido durante mucho tiempo una forma legítima de ganarse la vida y de acceder a ellos en una región relativamente descuidada. Chiapas es el estado más pobre de México, y Huehuetenango es uno de los departamentos más desfavorecidos de Guatemala.¹⁴ Las poblaciones fronterizas históricamente han compartido lazos más fuertes a través de la frontera que

¹³ Así como los discursos sobre seguridad son repetidamente interrumpidos, Goodale y Postero (2013:1-2) señalan la naturaleza cuestionada e interrumpida del neoliberalismo en América Latina para demostrar cómo incluso a los márgenes de su dominio continuo emergen nuevas posibilidades.

¹⁴ IFAD (2012).

con sus compatriotas.¹⁵ En contraste, los Estados etiquetan estas prácticas comerciales transfronterizas como contrabando, refiriéndose a la venta de productos que pueden ser prohibidos, robados, que evaden impuestos o evitan inspecciones y procedimientos oficiales. Como observa Jean Clot, la etiqueta de contrabando oculta no solo las interconexiones fronterizas históricas, sino también la manera en que la propia formalización de la frontera y sus regulaciones crean los problemas del comercio informal y extralegal.¹⁶ Las poblaciones fronterizas históricamente han contrabandeado pequeñas cantidades de bienes, a menudo de poco valor monetario, mediante una práctica que suele denominarse «comercio hormiga», de cruces breves por la frontera.¹⁷ Sin embargo, ahora también está ocurriendo que utilicen camiones de diez toneladas y tráileres que transportan un mayor volumen de mercancías. Aunque muchas personas trasladan bienes para el consumo personal y la subsistencia, el contrabando también se ha convertido en un negocio del que dependen los habitantes de la frontera, los negocios formales y más actores ilícitos.

Una noche me senté afuera de la casa de Tito,¹⁸ ubicada cerca de la línea fronteriza, del lado mexicano. Al ocultarse el sol, la sala principal de su hogar se convertía en una bulliciosa tienda donde los niños compraban papas fritas y su hija vendía cervezas. Ahí conocí a Javier, sobrino de Tito, que pasaba ahí sus vacaciones de verano. Estudiaba en una universidad del norte de México. Me explicó cómo las personas comenzaron a desarrollar negocios de contrabando, aunque siempre habían dependido de los intercambios fronterizos: «Las personas con tierras o una herencia tenían los recursos para dedicarse a los negocios. Algunas personas emigraron a los Estados Unidos y regresaron para construir casas más grandes. Compraron coches, camiones, y con el dinero comenzaron a hacer negocios».

¹⁵ Vázquez Olivera (2010); Clot (2013).

¹⁶ Clot (2013:16); Andreas (1999).

¹⁷ Clot (2013:8); Mathews y Vega (2012); Gauthier (2007); Basail (2016).

¹⁸ Se utilizan pseudónimos, salvo indicación específica, para proteger las identidades. Algunas cualidades individuales también han sido alteradas o he creado personajes compuestos para proteger a los informantes.

Aunque es tan antiguo como la propia frontera, el contrabando se intensificó en la década de 1990 debido a factores como la crisis económica en ambos lados, el colapso de las opciones de medios de vida tradicionales y las mejoras en infraestructura y tecnología en la región. Y la expansión de la carretera en Chiapas en la década de 1990, cuya intención original era atender proyectos de megadesarrollo o extractivos y facilitar la integración comercial regional, también aceleró el comercio y la comunicación extralegales.¹⁹ En ese decenio también ocurrió que los residentes de la zona fronteriza comenzaron a disponer de capital para adquirir camiones y para invertir en negocios de contrabando debido en buena medida al aumento de la migración a los Estados Unidos. En este mismo periodo las comunidades fronterizas tuvieron al fin acceso al servicio telefónico, poco después de recibir la electricidad. A principios de la década de 2000 empezaron a popularizarse los teléfonos celulares, y en 2013 llegaron los teléfonos inteligentes.

Desde la década de 1950 hasta la de 1990 era habitual el patrullaje intermitente de funcionarios mexicanos y guatemaltecos, incluidos agentes de inmigración, oficiales de aduana, agentes de policía estatal, municipal y de caminos y militares. A mediados y finales de la década de 1990, los residentes de la frontera se organizaron para expulsar de esta ruta a los agentes del Estado, con lo cual afirmaron su autoridad para controlar la región; camioneros y cargadores en varios comercios monopolizaron posiciones como contrabandistas —ellos se autodenominan «negociantes»— y levantaron casetas comunitarias de peaje y cobraban cuotas a los transeúntes para reunir fondos destinados a financiar proyectos locales. Aunque en general no se consideran ilegales las actividades asociadas con el contrabando, sino que son vistas como estrategias de avance legítimas en medio de la escasez de oportunidades, la percepción en cuanto a las condiciones que impone es ambivalente, pues si bien ofrece oportunidades de trabajo en un medio en el que existen pocas alternativas legítimas, también acarrea riesgos.

¹⁹ La expansión de la carretera en la década de 1990 también se ha vinculado a la vigilancia de los zapatistas (Hernández Castillo 2001; Nash 2001:93).

Neoliberalismo e informalidad

La intersección de las políticas económicas neoliberales con la intensificación de iniciativas de seguridad en la frontera entre México y Guatemala no creó el contrabando, pero proporcionó el contexto para comprender por qué los residentes confían cada vez más en el comercio informal, y cómo y por qué esta estrategia histórica de medios de vida se ha criminalizado de forma creciente. El advenimiento de las políticas económicas neoliberales²⁰ y de libre mercado en México y Guatemala en la década de 1980, que se aceleraron en los decenios de 1990 y 2000, exacerbaron las desigualdades predominantes y contribuyeron al despojo rural, una creciente dependencia en la economía informal y un aumento de la migración interna e internacional.²¹ Los efectos fueron particularmente agudos para los estados más pobres del sur de México, como Chiapas, y en las tierras altas del oeste de Guatemala.

Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), priorizaron los cambios del sector público al privado y se centraron en el libre mercado para mejorar la crisis de la deuda de los años ochenta. Cuando se elevaron los precios del petróleo en los años setenta, las naciones productoras del hidrocarburo invirtieron dinero en bancos multinacionales, los cuales reciclaron fondos en préstamos a países latinoamericanos, que fueron alentados a endeudarse en aras de la industrialización. Dados los altos precios del petróleo, los bancos y las naciones ricas tenían pocas razones para temer que los créditos no fueran pagados. A principios de los años ochenta, el aumento en las tasas de interés, la disminución de los precios del petróleo, una contracción súbita en la disponibilidad del crédito y una caída en los precios de las mercancías precipitaron una crisis económica y de deuda a nivel mundial.²²

²⁰ En sus facetas más básicas, el neoliberalismo se refiere a un ensamblaje político y a prácticas económicas guiadas con la creencia de que el bienestar individual y social puede ser mejor garantizado al avanzar en el libre mercado (Harvey 2005:2).

²¹ Thomas, O'Neill y Offit (2011:9); Burrell (2013).

²² Grindle (1996:1).

En 1982, México anunció tener dificultades para pagar su deuda, y se vio orillado a reestructurarla bajo los estrictos términos impuestos por el FMI y el Banco Mundial en el sentido de abrir mercados, liberalizar el comercio, privatizar las empresas estatales, desregular precios y salarios, reducir el gasto público y los apoyos sociales y centrarse en el potencial de exportación.²³

La privatización y la desregulación en México se aceleraron en la década de 1980, cuando el país ingresó en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986,²⁴ pero la desregulación, la privatización y la liberalización se intensificaron entre 1988 y 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1992 por México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigencia el 10 de enero de 1994. El tratado se orientó a reducir las barreras arancelarias entre los tres países para facilitar los flujos de capital, bienes y servicios. Funcionó para mejorar antiguas ventajas en las regiones del norte y centro de México, donde los agronegocios y las grandes haciendas podían aprovechar las oportunidades de exportación debido al acceso al crédito, los insumos de riego y la tecnología.²⁵ En cambio, los estados del sur llegaron a constituirse en una «región de la agrosubsistencia», donde la producción se orientaba principalmente a la subsistencia.²⁶ En México, el ajuste estructural también significó abandonar el modelo de desarrollo dirigido por el Estado, lo que resultó en una disminución del gasto público y de la inversión, así como del salario mínimo y en un incremento del desempleo. En particular, la liberalización agrícola fue un duro golpe para los pequeños campesinos, especialmente en las entidades del sur de México.²⁷ En 1992, en preparación para el tratado de libre comercio, se modificó el Artículo 27 de la Constitución mexicana para permitir la venta privada de tierras comunales de los eji-

²³ Kelly (2008:11).

²⁴ De Ita (1997).

²⁵ Fox y Haight (2010:11); Wise (2011).

²⁶ Morales (1999:990); McCune et al. (2012).

²⁷ Kelly (2008:12).

dos, y se promulgó una moratoria sobre nuevas peticiones de tierras ejidales al Estado. Esto ocasionó escándalo en estados como Chiapas, donde la reforma agraria había sido tardía, lenta e incompleta.²⁸ El colapso de los Acuerdos Internacionales del Café, una brusca caída en los precios y el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) en 1989, afectaron a un sector del que dependían muchos agricultores de Chiapas, lo que generó nuevas dificultades y aumentó la migración hacia el norte.²⁹

El decenio de 1980 y el inicio de los años de 1990 llegaron a conocerse como «década perdida» en Latinoamérica, caracterizada por el aumento del desempleo, la desigualdad y la pobreza.³⁰ El producto interno bruto (PIB) de México ha crecido desde que se adoptaron las políticas de ajuste estructural, pero la pobreza y la redistribución de la riqueza han permanecido estancados.³¹ México tiene el decimoquinto PIB más grande del mundo, pero es altamente desigual, ya que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza.³² Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2011 identificó a México como el país de la OCDE con la segunda tasa más alta de desigualdad.³³ Chiapas es el estado mexicano con el porcentaje más alto de población que vive en pobreza (pasó de 74.7% en 2012 a 76.2% en 2014).³⁴ A pesar de contar con recursos naturales abundantes, la entidad se ubica constantemente entre los últimos estados mexicanos en recibir inversión extranjera directa.³⁵ La adopción del neoliberalismo en Chiapas tuvo el efecto de bajar los precios de los productos de los campesinos,

²⁸ Nash (2001).

²⁹ Hernández Castillo (2001); Kelly (2008).

³⁰ Nash (2001).

³¹ Villafuerte (2005:479).

³² Coneval (2015); Banco Mundial (2014).

³³ Bradford (2011).

³⁴ Coneval (2015); Villafuerte (2015).

³⁵ Villafuerte (2005; 2009); Secretaría de Economía (2016:24).

reducir su poder adquisitivo y devaluar su mano de obra, haciendo de la migración a los Estados Unidos la opción más viable para muchos.³⁶

En Guatemala, las políticas neoliberales comenzaron a implementarse en la década de 1980, en medio de los brutales hechos de una guerra civil que duró treinta y seis años y que privó aún más de derechos a una población rural indígena que durante el conflicto fue objeto de violencia genocida.³⁷ Una perspectiva de desarrollo enfocada en exportaciones y privatizaciones favoreció a las elites transnacionales y domésticas, ya que pocos guatemaltecos en el medio rural tenían la capacitación o el capital para aprovechar las oportunidades del comercio exterior.³⁸ Mientras tanto, los recortes en el gasto estatal y los servicios sociales exigidos por las instituciones internacionales de crédito agravaron la pobreza y la vulnerabilidad, al tiempo que erosionaban las redes de apoyo ya frágiles por la guerra.³⁹ Las secuelas de un conflicto genocida, de la represión continua y la cooptación política y económica dejaron a un sector popular débil y fragmentado.⁴⁰ Guatemala sigue marcada por una fuerte desigualdad; según USAID, «2,5% de las fincas más grandes ocupan dos tercios de las tierras agrícolas, mientras que 90% de las fincas abarcan una sexta parte de las tierras agrícolas».⁴¹

Las políticas neoliberales no solo tensaron la vida de los pobres rurales, que ya no podían ganarse la vida cultivando maíz y café, sino que también precipitaron un crecimiento del sector informal.⁴² Junto con la migración, el trabajo informal ha amortiguado los efectos del desempleo.⁴³ Pero en la frontera, la economía del comercio informal ya no fue

³⁶ Paláez-Herreros (2012:207); Villafuerte y García (2006); Villafuerte (2005). Véase también Fábregas y González Ponciano (2014).

³⁷ Thomas, O'Neill y Offit (2011:8).

³⁸ Thomas, O'Neill y Offit (2011:8); Fischer y Benson (2006); Little (2013); Goldín (2011); Thomas (2011).

³⁹ Benson, Thomas y Fischer (2011).

⁴⁰ Schneider (2012:179).

⁴¹ USAID (2010:1).

⁴² Kelly (2008:64).

⁴³ David Lozano, citado en Conn (2014) y Villafuerte (2005).

solo una opción. Se estaba convirtiendo en una alternativa legítima y preferible.⁴⁴

Seguridad y comercio en las fronteras

En la década de 1990 y principios de 2000, la frontera entre México y Guatemala recibió una mayor atención por parte tanto de los Estados Unidos como de México, por ser el nexo de seguridad y comercio entre América del Norte y Centroamérica. México, que es fundamental para los intereses económicos de los Estados Unidos como su tercer socio comercial más grande, segundo en términos de exportaciones y tercero en importaciones,⁴⁵ ha considerado periódicamente la frontera sur como una amenaza potencial para su identidad y soberanía nacional; pero la seguridad fronteriza comenzó realmente a ser importante de modo imperativo después de la crisis de refugiados guatemaltecos de la década de 1980, cuando miles de ellos intentaron ingresar a México.⁴⁶ Antes de la década de 1990, la migración a través de la frontera México-Guatemala planteaba pocos problemas para México. Este país comenzó a construir su aparato de seguridad fronteriza con la creación del Instituto Nacional de Migración (INM), a principios de la década de 1990, para lidiar con las repercusiones de las crecientes deportaciones estadounidenses de migrantes centroamericanos, que afectaban directamente a México.⁴⁷

México también tenía interés en alinearse con la agenda de seguridad hemisférica de los Estados Unidos. El gobierno de Vicente Fox (2000-2006) esperaba que la colaboración condujera a un mejor acceso al mercado de los Estados Unidos y a una vía para regularizar a millones de

⁴⁴ Véase Centeno y Portes (2006) sobre el rol de la economía informal.

⁴⁵ Oficina de Censo Estadounidense (2017); véase también Paley (2014).

⁴⁶ Cruz (1998).

⁴⁷ Casillas (2008:144).

migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos.⁴⁸ México inauguró el Plan Sur en el verano de 2001, pocos meses antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, para fortalecer su frontera sur. Dicho plan incluyó una extensión de la esfera policial de la frontera entre los Estados Unidos y México hacia la frontera entre México y Guatemala con el apoyo de los Estados Unidos.⁴⁹ Guatemala lo siguió con un programa similar de mejora de fronteras denominado Venceremos 2001.⁵⁰ Pero debido a que después de los ataques terroristas del 11 de septiembre la migración se convirtió en alta prioridad para los Estados Unidos, la agenda de seguridad de ese país no incorporó las preocupaciones migratorias de México.⁵¹ Al ser la nación más poderosa, Estados Unidos ha determinado cuáles amenazas de seguridad prevalecen en la agenda hemisférica.⁵² La asimetría en las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y México otorga al primero una influencia política considerablemente mayor.⁵³ En 2002, se creó el Grupo de Seguridad Fronteriza de Alto Nivel México-Guatemala, en coordinación con los secretarios de Gobernación de ambos países para facilitar la cooperación en temas de migración, derechos humanos, seguridad pública, crimen organizado, terrorismo y asuntos judiciales.⁵⁴ En 2005, el INM de México se incorporó al Sistema de Seguridad Nacional de México, en paralelo a la securitización de la migración en los Estados Unidos, que de manera similar cambió los Servicios de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia al Departamento de Seguridad Nacional en 2003.⁵⁵

⁴⁸ Hristoulas (2003:40); Andreas (2003:13), expansión de la vigilancia fronteriza de los Estados Unidos a la frontera México-Guatemala.

⁴⁹ Pickard (2005). Sobre el ensanchamiento de la frontera, que también puede aplicarse a la expansión de la policía fronteriza de los Estados Unidos a la frontera México-Guatemala, véase Rosas (2006:344).

⁵⁰ Birson (2010); Jaramillo (2001).

⁵¹ Hristoulas (2003:41); Hufbauer y Vega-Cánovas (2003:128).

⁵² Benítez-Manaut (2004:14); Sandoval (2006).

⁵³ Andreas (2003:12).

⁵⁴ Más tarde se convirtió en el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala. Villafuerte (2014:127-128).

⁵⁵ Johnson (2008); véase también Nevins (2014).

A medida que la frontera México-Guatemala se ha convertido en un escenario de seguridad también se ha vuelto parte de la integración comercial regional, lo que la ha colocado como la nueva frontera entre el bloque comercial del norte y Centroamérica.⁵⁶ Los Estados Unidos, México y Canadá formalizaron el TLCAN en 1994; Guatemala firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA o CAFTA) en 2006, y Guatemala, México y otros países de Centroamérica asumieron el Acuerdo de Libre Comercio de México-Triángulo del Norte en 2001. Los países están cada vez más interconectados a través de la integración regional, el comercio y la seguridad.⁵⁷ En 2001, el presidente mexicano Vicente Fox dio a conocer avances del Plan Puebla Panamá (PPP), el cual crearía un corredor de desarrollo regional que abarcaría los estados del sur de México y los países centroamericanos. El plan se retiró oficialmente debido a las protestas de la sociedad civil, de pueblos indígenas y de ambientalistas, aunque muchos de sus proyectos se desarrollaron y han sido reactivados (véase Conclusión).⁵⁸

En 2012, Alan Bersin, entonces subsecretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, declaró: «La frontera de Guatemala con Chiapas es ahora nuestra frontera sur» en la lucha por reducir el flujo hacia el norte de migrantes indocumentados, redes criminales, drogas y otros flujos ilícitos.⁵⁹ En julio de 2014, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto implementó el Programa Frontera Sur, en coordinación con los Estados Unidos, para reducir el creciente cruce fronterizo de menores centroamericanos desde México hacia los Estados Unidos. En la cartografía de la seguridad hemisférica de los Estados Unidos, la frontera entre México y Guatemala, considerada comparativamente menos importante económicamente que la frontera entre los Estados Unidos y México, comenzó a asumir «la función de la ‘última frontera’, donde ocurren las génesis de los problemas, los cuales pueden contaminar la

⁵⁶ Ogren (2007:210); Sandoval (2006); Villafuerte y Leyva (2006).

⁵⁷ Benítez-Manaut (2004:50); Villafuerte y Leyva (2006).

⁵⁸ Tenuto-Sánchez (2014); Pickard (2003).

⁵⁹ Isacson, Meyer y Morales (2014:5).

frontera del norte». ⁶⁰ Simbólica, política y económicamente, la frontera entre México y Guatemala se representa a la vez como una región de oportunidad y como una amenaza potencial, principalmente en línea con los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos. ⁶¹ Las recientes protestas políticas y de los medios de comunicación dirigidas a la frontera sur de México reflejan una intensificación de la situación, pero a menudo la malinterpretan como algo nuevo. El cambio en la atención a las fronteras por parte de los Estados Unidos y el pánico moral hacia fronteras no reguladas al sur de México ha estado en marcha desde la década de 1990 y principios de 2000.

Algunos académicos han cuestionado si el mandato de asegurar la frontera pondría en peligro el TLCAN e impediría las relaciones comerciales. ⁶² Sin embargo, la liberalización comercial y las demandas de seguridad fronteriza no se contraponen; más bien «la seguridad bilateral y norteamericana fue un resultado inevitable del TLCAN, y la evolución de este acuerdo [...] vincula el comercio con el intercambio y la seguridad». ⁶³ La seguridad fronteriza puede frenar el comercio y generar costos adicionales, pero fases previas de militarización en las fronteras, como su intensificación entre México y los Estados Unidos en la década de 1990 para contener drogas e inmigrantes indocumentados, balancearon la seguridad con las necesidades de las empresas que dependían del comercio. ⁶⁴ Aunque los escalamientos fronterizos pasados y actuales a menudo no lograron contener las corrientes ilícitas, sí mostraron una imagen de una frontera «bajo control» al concentrar las actividades de represión en determinados lugares visibles mientras el contrabando se desviaba hacia áreas más remotas. ⁶⁵ Las directivas de seguridad no impidieron las transacciones transfronterizas; el comercio entre los Estados

⁶⁰ Villafuerte (2004:67).

⁶¹ Véase Sandoval (2006).

⁶² Véase, por ejemplo, Hufbauer y Vega-Cánovas (2003:128).

⁶³ Benítez-Manaut (2004:50).

⁶⁴ Andreas (2003:4).

⁶⁵ Andreas (2003:5-6); véase también Andreas (2000; 2002).

Unidos y México ha crecido 600% desde 1990.⁶⁶ Más que una contradicción, Joseph Nevins señala cómo la integración del comercio y la seguridad se complementan, porque la vigilancia fronteriza es fundamental para crear una atmósfera propicia para la acumulación de capital.⁶⁷ La mayor seguridad de la frontera entre los Estados Unidos y México en la década de 1990, junto con el TLCAN, sirvió para contener el «aumento previsto de la migración autorizada» de México que acompañó a la liberalización de la economía mexicana y la integración comercial regional.⁶⁸ En lugar de disuadir a los migrantes no autorizados, la securitización los hizo ilegales y, por lo tanto, más explotables por parte de los empleadores que demandan mano de obra barata.⁶⁹

En la frontera México-Guatemala los habitantes locales y los migrantes se encuentran con la vigilancia fronteriza de manera más palpable en términos de la expansión de puntos de control móviles a lo largo de las carreteras de Chiapas. De acuerdo con el Programa Frontera Sur, México modernizó los puntos de entrada existentes pero también instituyó más de 100 puntos de inspección móviles en las carreteras.⁷⁰ Funcionarios entrevistados por un equipo de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) en la frontera sur de México señalaron cómo la seguridad reforzada también ha contribuido a proporcionar «seguridad para el desarrollo» y «desarrollo para la seguridad», en línea con los planes más amplios de desarrollo regional del presidente Peña Nieto, incluidas la extracción de recursos y las Zonas Económicas Especiales.⁷¹ Cuando llegué a la frontera en septiembre de 2006 uno de los rumores que circulaban algunos rumores. Uno era que el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, sería demolido para construir una represa hidroeléctrica. Otro, que el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, quería comprar Chiapas por su pe-

⁶⁶ Andreas (2003:6); Figueroa, Lee y Schoik (2011).

⁶⁷ Nevins (2002:138).

⁶⁸ Nevins (2002:138).

⁶⁹ Gomberg-Muñoz (2011:34, 303).

⁷⁰ Seelke (2016).

⁷¹ Isacson, Meyer y Morales (2014:21).

tróleo. Como me dijo un residente de la frontera, «México ya está vendido. Los Estados Unidos quieren los recursos sin la gente. Pero no lo venderemos». Aunque ninguno de estos rumores era cierto, los residentes se percataron del clima de despojo. A partir de 2015 existen 99 concesiones mineras en Chiapas, las cuales fueron otorgadas por el gobierno mexicano principalmente a empresas canadienses y chinas, y constituyen más de 14% del territorio chiapaneco.⁷² Las licencias durarán hasta 2050 y 2060; los activistas aseguran que se están otorgando más concesiones, además de los planes para cinco represas hidroeléctricas a lo largo del río Usumacinta en Chiapas.⁷³ Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), Chiapas provee 44.5% de la energía hidroeléctrica del país, 7.5% de la producción eléctrica, 1.8% del petróleo crudo y 3.1% del gas natural.⁷⁴ Aunque la cobertura ha mejorado, Chiapas se ubica en la parte inferior de los estados mexicanos con respecto al porcentaje de hogares que poseen electricidad.⁷⁵ En el contexto del neoliberalismo securitizado, una mayor seguridad y presencia militar en Chiapas crean un clima propicio para asegurar la inversión, la extracción de recursos y la construcción de carreteras que sirven para proyectos de megadesarrollo, al tiempo que silencian y criminalizan la oposición y controlan la movilidad.⁷⁶ En 2015, México aprobó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, criminalizó la protesta social y la limitada transparencia en torno a los proyectos de extracción de recursos facilitados por la Reforma Energética de 2013.⁷⁷

México y Guatemala también están integrados en la agenda de seguridad de los Estados Unidos para abordar el tráfico de drogas y la violencia criminal. En 2006, el entonces presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró la guerra a los cárteles de la droga y desató la violencia

⁷² Castro Soto (2015).

⁷³ Henríquez (2016).

⁷⁴ INEGI (2011).

⁷⁵ INEGI (2011).

⁷⁶ Isacson, Meyer y Morales (2014:31); Paley (2014).

⁷⁷ Alianza Mexicana contra el Fracking (2015).

relacionada con las drogas. México entró en la Iniciativa Mérida en 2008, un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional, y para asegurar las fronteras de México. Desde 2008 hasta 2016, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de 2500 millones de dólares a México bajo la Iniciativa Mérida y desembolsó más de 1600 millones de dólares en «capacitación, equipo y asistencia técnica» a partir de 2016.⁷⁸ La frontera del norte originalmente tenía prioridad, pero en los últimos años la frontera del sur comenzó a captar más atención. Además del apoyo de la Iniciativa Mérida, desde 2011 el Departamento de Defensa ha brindado asistencia en el marco del Programa de la Región Fronteriza México-Guatemala-Belice.⁷⁹ Aunque anteriormente era un componente más marginal de la Iniciativa Mérida, en 2014 más atención y recursos fueron dedicados al Pilar 3, esto es, hacia «crear una frontera del siglo XXI» y asegurar las fronteras de México, sin olvidar la del sur.⁸⁰ La ayuda militar y policial, incluida la militarización de la policía, domina la financiación a pesar de que la segunda fase de la iniciativa se centra en la creación de instituciones y en la corrección de los malos antecedentes en materia de derechos humanos y la corrupción de la policía y el ejército mexicanos.⁸¹ Como resultado del enfoque militarizado de México en la guerra contra las drogas, desde 2006 más de 150 000 personas han muerto, más de 42 000 han desaparecido, y la corrupción sistémica y el aumento de los abusos contra los derechos humanos siguen sin resolverse, con menos de 5% de los delitos investigados.⁸²

La Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), que fue separada de la Iniciativa Mérida en 2010 y recibió 979 millones de dólares en asistencia de seguridad civil por parte de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y

⁷⁸ Seelke y Finklea (2017:1).

⁷⁹ Isacson, Meyer y Morales (2014).

⁸⁰ Seelke y Finklea (2017); Isacson, Meyer y Morales (2014:5).

⁸¹ CIP Americas Program in MAWG (2013:18).

⁸² Paley (2014:25-26, 35). Véase la Conclusión para actualizaciones sobre la impunidad en México.

Procuración de la Justicia (INL, por sus siglas en inglés) de 2008 al 2017, articula una estrategia de militarización similar para combatir el narcotráfico y la inseguridad en Guatemala y otras naciones centroamericanas.⁸³ En lugar de mejorar la seguridad, los críticos como el Grupo de Trabajo Mesoamericano (MAWG, por sus siglas en inglés) sostienen que «un enfoque militarizado de la seguridad no ha llevado a una disminución de la actividad criminal o la violencia. En cambio, ha provocado una mayor represión, violaciones de los derechos humanos y ha debilitado el proceso de justicia transicional en Guatemala», en un contexto de posguerra en el que las conexiones estrechas entre organizaciones criminales y militares están bien documentadas.⁸⁴ Las unidades paramilitares y los escuadrones de la muerte del Estado guatemalteco no fueron rehabilitadas ni reintegradas después de la guerra civil de treinta y seis años, desde 1960 hasta 1996, sino que ahora forman parte de los cárteles de la droga, las bandas criminales y las fuerzas de seguridad privadas.⁸⁵ Los elementos criminales han permeado casi todos los niveles de gobierno, creando una confusión de posguerra entre actores extralegales y el Estado.⁸⁶ Una reintroducción de los militares en la seguridad pública a través de CARSI pone en peligro las reformas de la posguerra en Guatemala que buscaban limitar el poder de los militares.⁸⁷

Casi todos los informes de seguridad mexicanos, las iniciativas transfronterizas e incluso los cables de WikiLeaks apuntan a rutas fronterizas no controladas como focos para el narcotráfico y la criminalidad con poco contexto adicional. Los informes oficiales asumen que las actividades informales, y la tolerancia oficial de estas, generan un clima más amplio de inseguridad y anarquía propicio para el crimen organizado sin analizar las diferencias entre los diferentes actores, así como las prácticas y las condiciones subyacentes. Los periódicos locales y los

⁸³ Departamento de Estado de los Estados Unidos (2017); MAWG (2013); Abrego (2014).

⁸⁴ MAWG (2013:3); Paley (2014).

⁸⁵ Grann (2011).

⁸⁶ Paley (2014).

⁸⁷ MAWG (2013).

funcionarios estatales describen a los residentes fronterizos como criminales o campesinos obstinados listos para bloquear la carretera con machetes en cualquier momento. Las fuentes oficiales postulan que el remedio es la regularización de los cruces informales. Según estimaciones recientes, solo 125 agentes de inmigración patrullan toda la frontera México-Guatemala.⁸⁸ Sin embargo, el comercio informal también ocurre a plena vista en los cruces oficiales, como a través del río Suchiate en Ciudad Hidalgo, México, y Tecún Umán, Guatemala. El pánico moral sobre el comercio informal e ilícito no logra comprender cómo este tipo de comercio ha proporcionado un medio de vida por generaciones y cómo se integra en la economía en general. Además, poner la responsabilidad de la seguridad en manos de las unidades oficiales a menudo vinculadas con la corrupción y los grupos delictivos, a los que por mandato deben combatir, solamente sirve para aumentar el clima de violencia e inseguridad.

Informalidad, ilegalidad e ilicitud en las fronteras

Conforme iba siendo testigo de cómo los camioneros traficaban bienes a través de la frontera a plena luz del día, tuve que luchar con mis expectativas con respecto a la informalidad, la ilegalidad y la ilicitud. Este comercio no se veía muy diferente de lo que ocurre en los puntos de entrada oficiales o incluso del comercio dentro de las fronteras de un país. La mayoría de estos productos se consideraban ilegales solo porque usaban la ruta no controlada para entrar y salir de ambos países; de lo contrario, serían artículos comunes como maíz, café y ropa. Muchos residentes podían distinguir el comercio legal del contrabando, pero otros no. Si este comercio fuera ilegal, razonaban, no se permitiría que ocurriera tan abiertamente. Una mujer explicó: «Para nosotros, estos es libre comercio porque atraviesa diario. Si fuera contrabando, no lo dejarían pasar. No hace ningún daño [...] es puro negocio».

⁸⁸ Isacson, Meyer y Morales (2014), citando Cable del Departamento de Estado (2010).

En la década de 1970, el término «economía informal», basado en el trabajo de Keith Hart, se puso de moda para describir las prácticas laborales de los trabajadores por cuenta propia y de los capitalistas en pequeña escala que existen fuera de las protecciones y regulaciones formales.⁸⁹ No obstante, esta ruta también alberga el contrabando de lo que los Estados determinan que son actividades más ilícitas, como el tráfico de narcóticos, armas y migrantes indocumentados. Miguel Ángel Centeno y Alejandro Portes distinguen entre informal e ilegal con el argumento de que las empresas ilegales implican la producción y la comercialización de bienes que las sociedades consideran ilícitos, mientras que las empresas informales tienden a centrarse en la producción y comercialización de productos básicos lícitos pero fuera de la regulación estatal.⁹⁰ Afirman que la diferencia entre la formalidad y la informalidad tiene que ver con el proceso por el cual se transfieren las mercancías y no con los productos en sí.⁹¹ Sin embargo, estas distinciones no captan plenamente cómo y por qué las prácticas de contrabando informal de bienes lícitos de los residentes de la frontera —las cuales evaden las regulaciones oficiales, las inspecciones y los impuestos— son vistas cada vez más como comercio ilícito en un clima de frontera securitizado. En lugar de aceptar la ilegalidad como estática y desde un punto de vista centrado en el Estado, es necesario preguntarse cómo y bajo qué condiciones se considera que ciertas actividades o personas son informales, ilegales o ilícitas. En lugar de distintos ámbitos, el comercio informal, formal, legal e ilegal se fusionan y se constituyen mutuamente en el flujo del comercio global a través de las fronteras.⁹²

El contrabando de mercancías a través de la frontera parece interrumpir la capacidad de los Estados mexicano y guatemalteco para controlar sus fronteras. Aunque las economías de contrabando pueden

⁸⁹ Hart (1973); véase Goldstein (2016:19-20); Castells y Portes (1989); Centeno y Portes (2006:25-26).

⁹⁰ Centeno y Portes (2006:26), basado en Castells y Portes (1989).

⁹¹ Centeno y Portes (2006:26), basado en Castells y Portes (1989).

⁹² Sobre la fluidez entre la formalidad y la informalidad véase Goldstein (2016:21, 23), en referencia a Gandolfo (2009).

amenazar con socavar esta autoridad, «paradójicamente, estas actividades reafirman las mismas fronteras que tratan de subvertir, ya que sin fronteras estas actividades simplemente dejarían de existir».⁹³ Como me recordaron los residentes, sin la frontera, la venta de maíz, café y ropa al otro lado de la frontera sería comercio regular. Al mismo tiempo, la frontera vigilada de manera intermitente y los diferentes precios, regulaciones e impuestos en cada país son los que hacen que este comercio sea lucrativo. Es por eso que residentes de la frontera guatemalteca, como Francisca, compran productos en México para venderlos en sus tiendas guatemaltecas. La relación entre el Estado y las prácticas ilegales rara vez está marcada por una oposición estricta, sino que más bien vacila en un continuo que abarca la cooperación, el antagonismo y la interdependencia.⁹⁴ Son las regulaciones del Estado y la brecha entre estas regulaciones y la voluntad y capacidad del Estado para hacerlas cumplir las que dan forma a la informalidad y la ilegalidad en primer lugar.⁹⁵

Los habitantes locales consideran en gran medida el contrabando de productos como un negocio legítimo, mientras que los funcionarios del Estado lo consideran un contrabando ilegal.⁹⁶ Los residentes se definen a sí mismos como «negociantes», «fleteros» o «comisionistas» en lugar de contrabandistas. Utilizo los términos «negociantes» e «intermediarios» (quienes actúan como intermediarios en los intercambios fronterizos) porque los negocios suelen ser dominados por hombres y estar asociados con ellos. Sin embargo, las mujeres también juegan un papel importante en estas empresas. Itty Abraham y Willem van Schendel distinguen entre ilegalidad e ilicitud al llamar la atención sobre cómo pueden chocar la ilegalidad, una determinación política de aceptabilidad determinada por los Estados, y la licitud, una distinción social de legitimidad. Esto debido a que son ideas sobre aquello que los Estados consideran legítimo o ilegítimo, y que pueden no ser compartidas por quienes participan

⁹³ Donnan y Wilson (1999: 105).

⁹⁴ Aguiar (2014); Heyman y Smart (1999); Smart (1999); Galemba (2013); Davis (2012); Goldstein (2016).

⁹⁵ Andreas (2011:7); Friman (2009a); Heyman y Smart (1999).

⁹⁶ Véase también Basail (2016b:13).

de estas actividades.⁹⁷ Enfatizan cómo las zonas fronterizas complican la evaluación de las actividades que atraviesan diferentes esferas sociales y políticas de la regulación.⁹⁸ Los habitantes fronterizos pueden tener legados de exclusión por parte del Estado, experimentar la violencia estatal dirigida a afirmar la soberanía en los márgenes, encontrarse diferentes sistemas legales en estrecha proximidad y continuar los vínculos sociales, de parentesco, étnicos y económicos transfronterizos.⁹⁹ La imposición y la aplicación efectiva de fronteras nacionales pueden crear o interrumpir los lazos transfronterizos, en tanto que la vigilancia fronteriza facilita algunas interacciones mientras que penaliza otras que de otro modo podrían considerarse como comercio de poca monta.¹⁰⁰ Sin embargo, diferenciar entre licitud y legalidad tampoco explica la complejidad de las opiniones contingentes sobre ambos conceptos.¹⁰¹ Las percepciones sociales a menudo cambian situacionalmente y en términos relativos a la posición particular de cada actor con relación a la economía de contrabando.

Tomar en serio las evaluaciones éticas locales desafía los supuestos dominantes de la ilegalidad determinados por el Estado, al resaltar la ilegalización como el proceso político y social mediante el cual personas, lugares u objetos se designan como ilegales y, por lo tanto, son objeto de sanciones, indignación moral, así como de contención violenta, prohibición y exigencia de cumplimiento.¹⁰² Al distinguir la ilegalización como un proceso social y político, más que como un estado de cosas natural y normativo, hago un llamado de atención sobre el fetichismo de la ilegalidad, que se basa en la noción de Marx del fetichismo mercantil.¹⁰³ La ilegalidad surge como una cosa en sí misma con un valor negativo in-

⁹⁷ Abraham y Van Schendel (2005:4, 25); Martínez (1994); Clot (2013); Grimson (2002); Jusionyte (2015).

⁹⁸ Abraham y Van Schendel (2005).

⁹⁹ Véanse Donnan y Wilson (1999); Martínez (1994).

¹⁰⁰ Donnan y Wilson (1999); Abraham y Van Schendel (2005); Wilson y Donnan (1998); Galemba (2013:276).

¹⁰¹ Véase Karibo (2011:85).

¹⁰² Véanse Thomas y Galemba (2013); Heyman (2013); Jusionyte (2015).

¹⁰³ Marx (1990[1867]).

herente asociado. Funciona para validar, y dejar sin cuestionar, una serie de medidas disciplinarias que se separan de los procesos políticos, económicos y sociales que producen, designan y naturalizan la ilegalidad.¹⁰⁴ La ilegalidad como proceso pone de relieve cómo estas percepciones y su prominencia cambian con el tiempo y el espacio. La ilegalización, como han argumentado estudiosos sobre la inmigración, con frecuencia se invoca como racionalización para justificar un trato diferencial, al tiempo que niega las formas en que la economía extralegal subsidia a la economía formal y mantiene acuerdos de privilegios económicos, raciales y políticos.¹⁰⁵ En la frontera, ver a la vez la ruta y a sus habitantes como ilegales justifica la negligencia del Estado, así como la vigilancia y la disciplina. En la práctica, sin embargo, los tratos cotidianos entre los agentes estatales y los residentes fronterizos varían en un rango que va desde la negligencia, la oposición, la supresión, la colusión hasta incluso el beneficio mutuo.¹⁰⁶ Es a través de tales maniobras cotidianas que la relación entre seguridad, ilegalidad y comercio se concreta en las zonas fronterizas.

Ilegalidad, seguridad y neoliberalismo

La ilegalización funciona en conjunto con la securitización, lo que significa la designación de personas, temas y lugares específicos como amenazas, ante las que el uso de la fuerza se convierte en un medio justificable para defender la seguridad.¹⁰⁷ La seguridad funciona como una tautología: se necesita más seguridad en nombre de la preservación de la seguridad.¹⁰⁸ La ilegalización y la criminalización, como procesos so-

¹⁰⁴ Véase Comaroff y Comaroff (2006) sobre la fetichización de la ley en la poscolonia donde hace un llamado al «Estado de derecho» o a observar que más leyes son usadas para justificar la corrupción, violencia e ilegalidad. También véase Penglase (2011).

¹⁰⁵ Por ejemplo, Bacon (2008); Gomberg-Muñoz (2011).

¹⁰⁶ Heyman y Smart (1999); sobre los entornos fronterizos véase también Martínez (1994:10).

¹⁰⁷ Ybarra (2016:195); Goldstein (2010, 2012); Jusionyte (2015).

¹⁰⁸ Sobre la ley como una tautología véase Benjamin (1986); Aretxaga (2003:405-406).

ciales y políticos que sirven para identificar poblaciones, lugares y actividades potencialmente amenazadores, ejemplifican el objetivo cambiante de la seguridad, desviando la atención de las causas subyacentes de la inseguridad, incluidas la desigualdad persistente, la erosión de las alternativas económicas y la debilidad y corrupción en las instituciones estatales.¹⁰⁹ Mientras tanto, la actuación policial agresiva para combatir la ilegalidad puede agravar la violencia en contextos donde los agentes de la ley son vistos como corruptos o ilegítimos. En México, a pesar de las reformas, las fuerzas policiales locales y estatales continúan plagadas de corrupción, abuso, bajos salarios y baja confianza pública.¹¹⁰

Fundamentados en la escuela de Copenhague, los académicos llaman la atención sobre la seguridad como una construcción social, política y performativa; la capacidad de etiquetar una amenaza y de suspender las protecciones normales, las leyes y los derechos para combatirla son indicadores de poder.¹¹¹ Ampliando las nociones de seguridad a partir de la seguridad nacional del Estado, desde la década de 1990 los Estados de América Latina se han preocupado cada vez más por la «seguridad ciudadana» para tener en cuenta la creciente preocupación por la delincuencia y la inseguridad.¹¹² Sin embargo, en la práctica, este enfoque ha llevado a una disminución del potencial de la seguridad ciudadana para considerar los derechos de los ciudadanos, y a priorizar en cambio la conservación del orden público a través de cualquier medio necesario.¹¹³ El Estado mantiene el poder de determinar una amenaza pero también alienta a los ciudadanos a asumir responsabilidad individual; lo que lleva a lo que Daniel Goldstein denomina la «privatización» o «neoliberalización» de la violencia, ya que las personas toman la seguridad en sus propias manos cuando el Estado no cumple con sus

¹⁰⁹ Véanse Goldstein (2012:25; 2016:104); Benson, Thomas y Fischer (2011); Burrell (2013).

¹¹⁰ Seelke y Finklea (2017:4-5).

¹¹¹ Goldstein (2012:14); Ybarra (2016); Jusionyte (2015); Buzan, Waever y De Wilde (1998).

¹¹² Goldstein (2016:103); Goldstein (2010; 2012:23-25); Jusionyte (2015:17).

¹¹³ Goldstein (2012:25).

expectativas.¹¹⁴ En este encuadre, las inseguridades generadas por el neoliberalismo se desplazan hacia la figura del criminal, a medida que la seguridad se convierte en un marco general que anima respuestas violentas para enfrentar el crimen y el miedo al crimen.¹¹⁵ En lugar de brindar seguridad, estos enfoques suelen exacerbar la inseguridad y fomentar la criminalización de las poblaciones marginadas. Elana Zilberg argumenta que el avance simultáneo de las políticas de seguridad (como los enfoques «de mano dura contra el crimen») y el neoliberalismo producen un «panorama de seguridad neoliberal» que genera inseguridad y violencia.¹¹⁶ Además, sostiene que «las políticas de seguridad y los acuerdos comerciales neoliberales se apoyan y a la vez provocan flujos a través de las fronteras... lícitos e ilícitos».¹¹⁷

En la frontera, los residentes han tomado el control de este espacio en sus propias manos en un contexto en el que ambos Estados dejaron de brindarles protección y servicios. En gran parte, los residentes adoptan esta autoridad de manera pacífica, pero mantendrán como rehenes a los funcionarios que no cooperen, pondrán a las personas que amenacen la seguridad local en cárceles comunitarias y utilizarán bloqueos de caminos cuando sea necesario. Aunque los residentes carecen de confianza en el Estado, muchos apoyan los enfoques estatales de mano dura para enfrentar la inseguridad. Dan paso a los funcionarios para que entren en la ruta si es para realizar sus trabajos de protección, sin interferir con los negocios fronterizos. Sin embargo, como lo ilustra el Capítulo 4, el control local no necesariamente garantiza la seguridad.

En Guatemala, la violencia en la actualidad toma la forma de violencia cotidiana criminal, de pandillas, comunitaria, controlada por el narco, doméstica e interpersonal.¹¹⁸ Esta nueva violencia ahora significa que «para muchos guatemaltecos, es más probable ser asesinados ahora que

¹¹⁴ Goldstein (2005; 2010:498; 2012:13, 26).

¹¹⁵ Goldstein (2010:487); Burrell (2013:16); Benson, Thomas y Fischer (2011).

¹¹⁶ Zilberg (2011:10).

¹¹⁷ Zilberg (2011:4).

¹¹⁸ Thomas, O'Neill y Offit (2011:16); Camus (2012).

durante la guerra».¹¹⁹ Las Naciones Unidas y el Banco Mundial informaron en 2007 que Guatemala tenía la tercera tasa de homicidios más alta del mundo y uno de los índices de impunidad más altos, con 97%.¹²⁰ En Guatemala, los niveles de delincuencia y de inseguridad en la era de la posguerra son generalmente atribuidas a pandillas, cárteles de la droga y «delincuentes», o jóvenes malhechores, ya que los discursos de culpabilidad justifican una respuesta estatal cada vez más represiva, así como reacciones extralegales violentas de las comunidades y otros actores.¹²¹ No obstante, reducir la violencia actual de Guatemala a las pandillas y al crimen organizado desvía la atención de «un legado de violencia estatal; profunda desigualdad socioeconómica; la penetración de las industrias extractivas; la erosión de las infraestructuras políticas y sociales; y el acceso desigual a la atención médica, educación y oportunidades de vida» que crean las condiciones para que prosperen las formas cotidianas de violencia.¹²² Al igual que durante la guerra, las comunidades indígenas y los pobres urbanos son culpados por la criminalidad como medio de privatizar la violencia en manos de actores cotidianos; así lo demuestra el aumento en las firmas de seguridad pública (las cuales suelen emplear a exmilitares paraestatales), grupos de vigilantes locales y comités de seguridad y pandillas urbanas.¹²³ En respuesta al temor a la delincuencia y a la falta de respuesta del Estado o a su connivencia directa con los agentes delictivos, agravada por la pobreza y la exclusión socioeconómica, algunas comunidades han asumido su propio control de la delincuencia participando en comités de seguridad y patrullas, así como

¹¹⁹ Thomas, O'Neill y Offit (2011:16).

¹²⁰ Grann (2011); Burrell (2013:5). La tasa de impunidad disminuyó de alrededor de 95% a 70%, y la justicia avanzó con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2007, y bajo el liderazgo de Claudia Paz y Paz como procuradora general en 2010 (B. Reeves 2014). Sin embargo, la élite de negocios y política conservadora fue exitosa en acortar el término de Paz y Paz mediante una querrela legal en 2004 (Lakhani 2014).

¹²¹ Thomas, O'Neill y Offit (2011); Thomas (2011); Benson, Thomas y Fischer (2011); Burrell (2013); Burrell y Moodie (2013); Goldstein (2012).

¹²² Benson, Thomas y Fischer (2011:140).

¹²³ Benson, Thomas y Fischer (2011:141); Goldstein (2010); Dickens de Girón (2011); Godoy (2004, 2006); Burrell (2013).

perpetrando linchamientos comunitarios de delincuentes.¹²⁴ Los linchamientos fueron prominentes en 2009 en Huehuetenango. Este departamento fue también el que sufrió algunos de los casos más severos de violencia en tiempos de guerra.¹²⁵ A través de la búsqueda de seguridad, estas comunidades terminan siendo aún más criminalizadas a medida que el impulso de las políticas de mano dura contra el crimen aumenta, a pesar de que estos enfoques contribuyen a la erosión de los derechos humanos y la remilitarización de una sociedad de posguerra.¹²⁶

Conforme los Estados neoliberales han reducido su provisión de servicios y apoyos a sus poblaciones, también han desempeñado cada vez más la función de «proveedores de seguridad para el capital global», que anteriormente describí como «seguridad para el desarrollo y desarrollo para la seguridad» o neoliberalismo securitizado.¹²⁷ Este rol a menudo entra en conflicto con las necesidades y la seguridad de los ciudadanos, quienes pueden ser considerados como impedimentos o amenazas para el desarrollo y los negocios legítimos.¹²⁸ En Chiapas, algunas comunidades y activistas expresan su preocupación por que las fuerzas de seguridad están más posicionadas para mitigar los conflictos que rodean la extracción de recursos que para cumplir con el propósito declarado de interceptar drogas y migrantes no autorizados.¹²⁹ Bajo el neoliberalismo securitizado, las políticas de seguridad aseguran un ambiente amigable para el capital junto con los compromisos neoliberales de desregulación, privatización y liberalización, que se traducen en impuestos y regulaciones mínimos, salarios bajos, condiciones laborales poco estrictas y oposición restringida.¹³⁰ En las economías latinoamericanas,

¹²⁴ Godoy (2004; 2006); Burrell y Moodie (2013); Goldstein (2010); Burrell (2013).

¹²⁵ Burrell (2013:117, 181, n6), citando al Grupo de Apoyo Mutual y a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre estadísticas de la Corte Suprema de Guatemala compilado por Carlos Mendoza del Ministerio de Gobernación.

¹²⁶ Burrell (2013)

¹²⁷ Goldstein (2012:17); Jusionyte (2015:17); Isacson, Meyer y Morales (2014:21); Paley (2014).

¹²⁸ Goldstein (2012:17).

¹²⁹ Isacson, Meyer y Morales (2014:31).

¹³⁰ Goldstein (2010; 2012:17); Centeno y Portes (2006:37, 40).

plagadas por altos niveles de desigualdad, estas medidas perpetúan la desigualdad, la dependencia en el sector informal y la desconfianza en el Estado y sus instituciones.¹³¹ La criminalización del contrabando sirve para moralizar las limitadas opciones que tienen los pobres al culparlos de su difícil situación, al tiempo que permite a entidades más poderosas reclamar y proteger ganancias legítimas y determinar quién puede tener acceso a los bienes.¹³² Como señala Alexander Dent en su trabajo sobre la piratería, «la presencia de lo pirateado en economías informales [... es] usada para ‘mantener’ al informal en esa situación».¹³³

Estudios antropológicos críticos de la seguridad y el neoliberalismo señalan cómo las personas marginadas por las políticas de seguridad impulsadas por el Estado experimentan, cuestionan y construyen seguridad.¹³⁴ Sin embargo, como señalan Heyman y Campbell, el lente de la construcción social puede fallar en explicar «qué, cómo y por qué surgen construcciones particulares [de crimen, amenaza]» en lugares y tiempos determinados.¹³⁵ Por lo tanto, es necesario desentrañar cómo y por qué el comercio fronterizo clandestino y las zonas fronterizas se convierten en amenazas contra la economía política regional, dado que están fundamentalmente integradas en ella.

La economía fronteriza

Para un observador casual, nadie parece saber acerca de este camino no controlado. Los residentes de la frontera usan el término «extravío» para describir la ruta, que proviene del verbo «extraviar», con varios significados, todos con connotaciones negativas: perderse, desviarse del camino [deseado], errar, desviarse de manera irregular, engañar o despistar. Más que una desviación en la geografía social y política, el «extravío» es

¹³¹ Centeno y Portes (2006:37, 40); Goldstein (2012:22-23).

¹³² Véanse Goldstein (2016:24); Dent (2012:31-32, 44); Thomas (2013).

¹³³ Dent (2012:32), énfasis en el original.

¹³⁴ Véanse Goldstein (2010, 2012); Burrell (2013); Jusionyte (2015).

¹³⁵ Heyman y Campbell (2011:189).

fundamental para comprender los flujos transfronterizos de bienes, personas, capital, información y los patrones de gobernanza en proceso en la región. Tales brechas no son evidencia de falla del Estado o necesariamente de su ausencia; sino que más bien son integrales para definir al Estado y a la economía formal como las excepciones que confirman la regla.¹³⁶ Los «extravíos» son donde nada y todo cruza. La mayoría de los flujos de mercancías transfronterizas en esta región se producen a través de dichas rutas. Residentes, comerciantes y funcionarios, todos relacionados, saben que todos conocen este cruce, aunque oficialmente no existe. Es a la vez oculto y conocido.¹³⁷ Esta (in)visibilidad selectiva mantiene la imagen de seguridad fronteriza y la importancia de los flujos oficiales, al mismo tiempo que permite a varias partes interesadas aprovechar los beneficios del comercio informal/extralegal.

Una tarde llegué a un campo polvoriento y abandonado al que los residentes de la frontera llaman una «bodega», en el lado mexicano de la frontera. Estos espacios son campos áridos en tiempos de poco comercio, pero la mayoría se han convertido en estacionamientos en los que se reúnen los camiones para transferir cargamentos. Los comerciantes se dan cita en este corredor no controlado para transferir la carga y evadir el cruce formal de fronteras, los impuestos y las inspecciones oficiales. Un camión puede ingresar en la ruta desde la carretera mexicana y seguir a la de Guatemala (y viceversa) sin encontrarse con ninguna vigilancia oficial. El intercambio encubierto de cargas entre camiones dentro de la ruta no controlada tiene un efecto de «cabina telefónica de Superman»; los productos mexicanos que se traen a la ruta se transfieren a los camiones guatemaltecos y luego salen a la carretera guatemalteca en camiones guatemaltecos transformados en productos guatemaltecos (y viceversa, desde Guatemala a México). Un camión mexicano en territorio guatemalteco (y viceversa) de otro modo invita a un control oficial de inspecciones y permisos.

¹³⁶ Das y Poole (2004:4); véase también Ferme (2004); M. Reeves (2014).

¹³⁷ Véase Coutin (2005).

Grupos de hombres esperan en las bodegas a lo largo de la ruta fronteriza cotilleando, buscando sombra y esperando los camiones para que ellos puedan descargar y volver a cargar mercancías. Estos lotes polvorientos, aparentemente marginales, son, de hecho, centros críticos en las cadenas comerciales legales y extralegales. El transporte en camiones revela cómo los flujos legales e ilegales se entrelazan en el negocio diario del comercio internacional.¹³⁸ En este día en particular, cuando estaba en la bodega, conocí a un hombre al que llamo Eduardo, de Puebla, México. Llegó a la bodega de la frontera mexicana para entregar cebollas a un comerciante guatemalteco. Un mercado de la Ciudad de México se contactó con él porque era miembro de un sindicato de camioneros, para que se reuniera con un comprador guatemalteco en este lugar. Mientras estábamos hablando, dos vehículos militares mexicanos de una base militar cercana pasaron por allí. No se detuvieron y pronto dieron la vuelta para salir a la carretera mexicana. Nadie parecía nervioso; afirmaron que los funcionarios entraban en la ruta de vez en cuando, pero «no molestaban los negocios». «Si los oficiales entran para perturbar sus negocios —me dijo un cargador—, nos avisan [antes a todos]. Hay gente aquí que es espía. O los funcionarios que trabajan con los negociantes [que viven] aquí llaman para alertarlos. Todos dejaríamos de trabajar. No habría ningún movimiento». Me di cuenta de que la implementación y la experiencia de la seguridad no dependían de las políticas oficiales ni de los mandatos policiales de frenar los flujos ilícitos, sino del conocimiento íntimo y las redes personales.

Eduardo tenía un conocimiento limitado de la frontera; era apenas su segunda vez allí. Reconoció que el comprador guatemalteco estaría transportando ilegalmente cebollas a Guatemala, evitando inspecciones, impuestos y documentación, y atravesando un cruce fronterizo no controlado, en lugar del oficial. Sin embargo, se sentía seguro porque tenía permisos para vender cebollas en México y técnicamente no estaba infringiendo ninguna ley. Eduardo se impacientó mientras esperaba. Se preocupó porque todavía tenía que recoger papayas en la cercana ciudad

¹³⁸ Nordstrom (2007:73).

de Comitán para llevarlas a la Ciudad de México. Especialmente a la luz del aumento en los precios del combustible en la primavera de 2007, el viaje valía la pena solo si él podía transportar carga en ambas direcciones. Tal es la necesidad de los camioneros, que destaca cómo las actividades comerciales dispares, tanto legales como ilegales, se interconectan.¹³⁹ Los cargadores locales también habían estado esperando la mayor parte del día por trabajo para transferir las cebollas mexicanas a los camiones guatemaltecos. Arriesgaron tiempo que de otra manera podrían usar cuidando sus cosechas o trabajando como peones en el campo. Para la mayoría, la espera valió la pena. Un cargador gana entre 50 y 60 pesos (aproximadamente entre cinco y seis dólares en 2007) por cada camión cargado, lo que equivale a la paga por un día completo de trabajo como peón de campo (foto 2).

El comerciante guatemalteco, Mauricio, finalmente llegó con dos camiones guatemaltecos de diez toneladas. Hace viajes semanales desde



Foto 2. Cargando cebollas entre camiones en el depósito fronterizo (fuente: foto de la autora).

¹³⁹ Nordstrom (2007:73).

la Ciudad de Guatemala a la frontera para comprar frijoles, cebollas y a veces maíz para vender en su bodega en el mercado, en la Ciudad de Guatemala. Había estado viniendo a la frontera por diez años y había establecido amistades locales. Anteriormente, compraba productos solo en Guatemala. Se enteró del cruce fronterizo por medio de un amigo. Antes, contactos de los residentes mexicanos de la frontera traían el maíz al lado guatemalteco, donde él lo compraba. Luego aprendió, a través de los residentes fronterizos, que podía comprar cebollas más fácilmente en el lado mexicano, y sin problema para cruzar la frontera.

Las conexiones transfronterizas informaron a Mauricio y le facilitaron nuevas oportunidades de intercambio mercantil. Los contactos locales le enseñaron sobre los patrones regionales de vigilancia estatal cuando se dio cuenta de que la ruta estaba relativamente sin patrullaje. Aprendió que podía obtener acceso a bienes en el lado mexicano sin encontrarse con agentes estatales (que estaban presentes en las carreteras mexicanas) o utilizar intermediarios en la frontera con Guatemala. Con el tiempo, mientras cultivaba amistades, pudo evitar el uso de intermediarios fronterizos locales para sus intercambios, los cuales generalmente son requeridos por los residentes fronterizos a los comerciantes de larga distancia para mantener trabajo para sí mismos. Aunque las cebollas eran de la Ciudad de México, él mantuvo relaciones locales comprándoles maíz y frijol.

Le pregunté a Mauricio cómo transportaría sus cebollas a Guatemala. ¿A dónde irían las cebollas después? Un seguimiento de la cadena de intercambios colocaba las cebollas en una cadena transnacional donde lo legal y lo ilegal se desdibujan. Mauricio explicó:

Llamé a la Central de Abastos en México ayer... Conozco... es un amigo ya. Llamé para ver cómo era el precio de las cebollas. Si es bueno, haré arreglos para que los traigan aquí para comprarlos. Es barato ahora, la cebolla... Con las cebollas sigue pagando todos autoridades, siempre hay que pagar... [y] ya está de acuerdo todo.

Llamé al mercado de México ayer. Así es como supe cuándo llegar [a la frontera]. Llamé para comprobar los precios de las cebollas, para ver si vale

la pena comprarlas. Si es así, me encargo de que las transporten a la frontera. Para que las cebollas lleguen a Guatemala tengo que pagar a muchas autoridades. Siempre hay gente a la que pagar. Entonces todo acordado. Necesito un pase en La Mesilla en caso de que las autoridades me detengan. También tengo un acuerdo con la SAT [Superintendencia de Administración Tributaria, el organismo de administración tributaria de Guatemala].¹⁴⁰ Siempre que vengo a comprar cebollas, hablo primero con la SAT. Me dan recibos de mis cebollas en Huehuetenango. Pago un recibo que certifica que las cebollas son de Huehuetenango para que la policía no me moleste en los puestos de inspección. Es un poco de corrupción. Como los recibos dicen [las cebollas son de] Huehuetenango, no me inspeccionan, y no pago más. Solo muestro a las autoridades los recibos, y me dejan pasar.

Debido a que transfiere las cebollas mexicanas a su camión guatemalteco dentro de la ruta no controlada, las cebollas parecen ser, y siempre han sido, guatemaltecas con plena certificación. Le pregunté qué pasa cuando llega a Guatemala. «En Guatemala vendo las cebollas a comerciantes hondureños», dijo. «¿Cómo las compran los hondureños?», le pregunté. Respondió de manera práctica que la venta a los hondureños es legal porque pasan por la inspección. Mauricio transporta cebollas de México a Guatemala de manera ilegal, pero legalmente a Honduras con las facturas que recibe de SAT. Él da a los hondureños las mismas facturas que recibe de la SAT. Me explicó que las facturas hacen una gran diferencia. Si transportara las cebollas legalmente en La Mesilla, pagaría «6000 quetzales por la camionada. En cambio, pago 200 por camión, solo por la factura».

Esta ruta no es un «agujero negro» o una desviación irregular en la economía donde «las normas que regulan el orden social no existen».¹⁴¹ En cambio, es parte integral de la economía regional. Al principio me sorprendió la franqueza de Mauricio. Eduardo y Mauricio hacen más complejas las distinciones simplistas entre comerciantes y contraban-

¹⁴⁰ Además de las funciones en el tema de los impuestos, la SAT es responsable de la administración de las aduanas.

¹⁴¹ Arriola (2009:33); citando también a Naim (2005:25).

distas. Ambos hombres realizan intercambios comerciales a través de designaciones y fronteras legales e ilegales. Los lugares particulares como esta ruta son críticos para facilitar los flujos transnacionales a través de líneas legales e ilegales, mientras que el comercio extralegal también configura la ruta fronteriza y a sus residentes. Las tensiones entre la seguridad, el comercio y los medios de vida no se manifiestan por medio de dictados oficiales, sino de vínculos sociales, económicos e históricos y negociaciones contingentes.

La etnografía de la frontera

La cadena detalla la vida cotidiana de las personas que residen en un cruce fronterizo no controlado. Explora cómo las personas manejan y reinterpretan las directivas de seguridad y comercio regionales que no son de su propia creación y que, sin embargo, tienen un impacto en sus vidas al esforzarse por mantener a sus familias en medio de opciones limitadas. Mi objetivo es desafiar los discursos políticos y de los medios sensacionalistas, que omiten la historia y están descontextualizados sobre las crisis de criminalidad y los flujos ilícitos. La etnografía demuestra las tensiones entre la política y la práctica, las intenciones y las realidades, y cómo las políticas comerciales y de seguridad, aparentemente neutrales, reflejan intereses económicos particulares y lógicas culturales que pueden chocar con las experiencias locales.

El Capítulo 1 sitúa el enfoque etnográfico de la realización de investigaciones sobre flujos extralegales, y presenta el contexto y las comunidades fronterizas. Examina el controvertido e inacabado proceso por el cual las tierras fronterizas y las naciones mexicana y guatemalteca tomaron forma para contextualizar el modo en que los residentes fueron marginados de, pero también integrados en dos Estados-nación.

El Capítulo 2 retoma la frontera indeterminada para detallar cómo sus residentes utilizan estrategias extralegales/informales y recursos locales para vivir en múltiples Estados-nación. El capítulo sigue a residentes como Fani, Rosa, Daniela y Ramón, quienes logran la doble

nacionalidad por medios extralegales, al certificar que nacieron tanto en México como en Guatemala. A medida que los residentes se apoyan en prácticas extralegales para utilizar la frontera en su beneficio, socavan los intentos del Estado de manejar a las poblaciones fronterizas mientras participan simultáneamente en prácticas que llevan al Estado a surgir en los márgenes.¹⁴²

El Capítulo 3 explora el contexto de las políticas de liberalización agrícola que han socavado las formas tradicionales de sustento y promovido una creciente dependencia del contrabando y el comercio informal en la frontera. El examen del maíz, que es el cultivo de subsistencia básico en la región y el bien más comerciado a través de esta frontera, ofrece una ventana para comprender la ética local que apuntala la legitimidad del contrabando. Los residentes reinterpretaron este comercio de maíz como «libre comercio», en vez de contrabando, en un contexto en el que las disposiciones oficiales de libre comercio los excluían y diezmaban sus medios de vida. Para vender maíz mexicano a Guatemala, los residentes fronterizos aprovecharon un clima más amplio de crisis política y económica en la década de 1990 para evitar que los agentes estatales vigilaran la ruta.

El Capítulo 4 muestra cómo la frontera se volvió relativamente libre de funcionarios, ya que los residentes negociaron un grado de autonomía de funcionarios estatales y otros actores regionales. Sin embargo, la frontera también vacila entre el control local y la tolerancia oficial, lo que refleja tensiones más amplias entre la seguridad, el comercio, la pobreza y la (in)estabilidad política.

En el Capítulo 5 se expone un estudio de los agentes de aduanas de primera línea, que describen cómo se equilibra mantener la seguridad fronteriza con las demandas del comercio, los escasos recursos y las demandas locales. A través de la lente del «comercio fantasma» o comercio clandestino, que es técnicamente invisible pero que sin embargo produce efectos tangibles, el capítulo demuestra la compleja interdependencia, en vez del necesario antagonismo, entre los flujos ilícitos, la seguridad y el comercio formal.

¹⁴² Das y Poole (2004); M. Reeves (2014:145).

El Capítulo 6 examina cómo comerciantes, camioneros y contrabandistas de la frontera entienden su trabajo y navegan en las intersecciones entre la economía legal y la ilegal. Al actuar como intermediarios comerciantes, camioneros y cargadores, los residentes permiten que el «comercio fantasma» distribuya recompensas de bajo riesgo a agentes estatales seleccionados y a empresas formales. Incluso cuando los residentes se benefician, también asumen los riesgos.

El Capítulo 7 se centra en un conflicto por el contrabando de gasolina para ilustrar cómo los residentes de la frontera dependen del Estado para evadirlo. También muestra cómo están cada vez más situados en un contexto impredecible, a medida que los conflictos entre y dentro de los grupos criminales y las fuerzas estatales permean la región en general.

Cuando realicé la mayor parte de mi trabajo de campo: en 2006 y 2007, la represión de México contra los cárteles de la droga y la consiguiente escalada de violencia apenas estaban comenzando. El lanzamiento del Programa Frontera Sur en 2014, el cual intensificó los esfuerzos para contener los flujos de migrantes centroamericanos, aún no se había producido, pero sus precursores estaban operando. Este no es un libro sobre la guerra contra las drogas o acerca de una «crisis migratoria».¹⁴³ Sin embargo, apunta al contexto político, social y económico que con frecuencia se omite cuando la criminalidad, las drogas y la migración clandestina se aíslan de los contextos en los que se producen y reproducen.¹⁴⁴ Este escenario no solo ha permitido que la guerra contra las drogas y la «crisis de los migrantes» prosperen al tiempo que prolongan la violencia criminal, la corrupción y la inseguridad; también ha sostenido sus fuentes no resueltas y subyacentes: las violencias estructurales y simbólicas de la pobreza, la criminalización y la exclusión social y económica.

La Conclusión lleva las implicaciones de las interdependencias sin resolver entre seguridad, comercio e ilegalidad hasta el presente para explorar cómo se han combinado la securitización de la migración y las drogas para hacer que las personas estén menos seguras al tiempo que generan mayores flujos clandestinos a través de las fronteras.

¹⁴³ Véase la crítica al término «crisis de migrantes» en Sánchez (2014).

¹⁴⁴ Schneider y Schneider (2008).

1. Ingresos y reingresos en la frontera

Como periferias de naciones, las fronteras están sujetas a fuerzas de frontera y a influencias internacionales que moldean la vida particular de los habitantes fronterizos, enfrentándolos a miles de retos que surgen de la naturaleza paradójica del escenario en el que viven.

OSCAR J. MARTÍNEZ, «BORDER PEOPLE»

Entrada

«Comalapa, Comalapa, Comalapa»,¹ gritó el asistente del conductor de la miniván desde un edificio de cemento al pie de la carretera Panamericana en Comitán, Chiapas. Jugaba con el tono de su voz, acentuando alternadamente diferentes sílabas de *Co-ma-la-pa*. Llamaba a los viajeros a abordar las minivanes o «combis» cuyo destino era el municipio de Frontera Comalapa. Con asientos para unos siete u ocho pasajeros, las combis generalmente llevan al menos a quince personas con sus pertenencias. Los habitantes de la región fronteriza viajan a Comitán para adquirir ropa y muebles usados más baratos. Compran en mercados de frutas y verduras, mercados de pulgas y las recientes instalaciones de Walmart y Sam's Club. Abordé la combi; mi mochila y yo apretujadas

¹ Los habitantes de la región se refieren a menudo a Frontera Comalapa como «Comalapa»,

en un asiento junto a la ventana. Contenía el aliento cuando el conductor se persignaba y tocaba el ornamento de Jesús colgando de su espejo retrovisor cada vez que tomaba una curva. Nos abalanzamos por la carretera Panamericana desde los altos frescos de Comitán hacia las tierras bajas, calientes y secas de Frontera Comalapa. Me convencí de que, mientras más rápido la combi tomara las curvas, mejor podría aferrarse a las colinas por pura fricción y *momentum*... o quizás era gracias al rezo del conductor.

Era el verano de 2005 y mi primer viaje a la frontera para encontrar un sitio donde realizar mi investigación. Juan Carlos Velasco,² un asistente de investigación de ECOSUR (El Colegio de la Frontera Sur) de San Cristóbal de Las Casas me llevaba en excursiones a través de la región fronteriza, donde había sido parte de un grupo de investigación que estudiaba la integración de pasados refugiados guatemaltecos dentro de México.³ No sabía qué esperar cuando llegamos a Frontera Comalapa, un pueblo pequeño con una plaza colonial, edificio municipal, mercado al aire libre, tiendas, unos cuantos restaurantes y moteles, y los recién llegados cibercafé y agencias de viaje con anuncios de viajes a Tijuana y Tecate, Baja California, o Altar, Sonora.⁴ Cualquiera que haya ido a Altar, Sonora, sabe que no es un destino turístico. Estos autobuses ocupan un nicho lucrativo que ofrece transporte a través de México a aquellos que desean viajar a los Estados Unidos. Los dejan en el desierto del norte de México, donde pueden contactar a coyotes o intentar atravesar el desierto por su cuenta. La proliferación de agencias turísticas refleja el papel que juega la frontera México-Guatemala como zona de tránsito y envío de migrantes. En la última década, Frontera Comalapa se ha convertido en un centro de migración, comercio irregular, prostitución y comercio de drogas.

Juan Carlos sabía que las combis destinadas a las comunidades a lo largo de la particular ruta fronteriza sin monitoreo, donde terminé realizando mi trabajo de campo, salían de la esquina opuesta a los

² Uso su nombre real para darle crédito por su asistencia y trabajo en la frontera.

³ Véase Kauffer y Velasco (2002).

⁴ Véase Hernández (2012).

puestos del mercado en Frontera Comalapa. Cuando abordamos el transporte, Juan Carlos comenzó una conversación con un hombre al que llamo Federico. Dado su intercambio amigable, asumí que debían de conocerse, pero Juan Carlos tenía facilidad para la serendipia etnográfica. Federico no solo nos habló durante todo el camino, sino que también procedió a llevarnos en un paseo a su comunidad mexicana, Santa Rosa,⁵ y a presentarnos a sus vecinos guatemaltecos del otro lado de la frontera. Nos trepamos en la parte trasera de la *pick-up* de uno de sus amigos para atravesar el camino sin vigilancia de tres comunidades fronterizas mexicanas, Santa Rosa, La Maravilla y el Nance, y directamente cuesta arriba hacia las dos comunidades fronterizas guatemaltecas, El Girasol y Nueva Vida. Ya que no transportábamos bienes comerciales, nos dejaron pasar a través de la cadena de cada comunidad. Cada comunidad fronteriza erige una cadena en una sección del camino para marcar su territorio y establecer una caseta de cobro para imponer un impuesto a los contrabandistas y negociantes que utilizan la ruta. Federico se rio de nuestra necesidad de pasaporte mientras conducíamos subiendo una colina rocosa, más allá de algunos monumentos blancos que eran la única indicación de que cruzábamos la frontera internacional a Guatemala. La primera casa que vimos en Guatemala tenía la bandera de ese país de un lado de su barda y la mexicana del otro. El dueño de la casa se rio cuando le comentamos que su cabra técnicamente estaba pastando en México. ¿Estábamos en México o en Guatemala? Este capítulo detalla mis múltiples ingresos iniciales a la frontera y el trabajo de campo en un cruce fronterizo sin vigilancia. Partiendo desde mi propio ingreso, hace referencia a la composición de las tierras y las comunidades fronterizas en relación con los contextos regionales y nacionales. Los habitantes locales han sido históricamente marginados por ambos Estados-nación, a los que ayudaron a conformar desde sus márgenes⁶ (foto 3).

⁵ Disfrazo los nombres de las comunidades fronterizas y algunas de sus características distintivas para proteger las identidades de los residentes.

⁶ Clot (2013).



Foto 3. Monumentos fronterizos que delinear la división entre México y Guatemala (fuente: fotografía de la autora).

Reingreso

En septiembre de 2006, cuando regresé a vivir a la frontera por un año, Juan Carlos nos ayudó a mi esposo y a mí a encontrar una casa para rentar en Santa Rosa, México. Después estuvimos por nuestra cuenta. Entendí que las conexiones de Juan Carlos eran limitadas debido a restricciones del amplio proyecto de integración de refugiados. Su equipo de investigación no había cruzado a Guatemala porque estaba más allá de su alcance. Después de oír rumores de periodistas que habían sido expulsados de la comunidad fronteriza El Nance en el pasado, empecé a ponerme nerviosa.

Paco, un joven flaco de 17 años originario de El Nance, por suerte se convirtió en mi guía local. Apodado «El Gringo», debido a su interés por los Estados Unidos, Paco conocía a todo el mundo y buscó

formar amistad con mi esposo y conmigo. Nos explicó cómo casi toda su comunidad de 100 hogares pertenecía a cuatro familias; nos presentó a contrabandistas o «negociantes» locales; nos llevó a conocer amigos en Guatemala y nos invitó a fiestas, partidos de fútbol y comidas. «Puro Hernández», decía riendo, refiriéndose a que existían apellidos y relaciones de parentesco compartidos en ambos lados de la frontera. En su familia había negociantes locales que contrabandean mercancías a través de la frontera, primos en fábricas de Carolina del Norte, y su padre, quien trabajaba como cargador para contrabandistas-negociantes de café y como mano de obra en el campo.

Paco quería convertirse en agente de migración, como su primo Rigo. Me mostró la casa de dos pisos de Rigo cerca de la frontera internacional. En un principio, cuando escuché que un hombre que trabajaba para migración vivía en ese lugar, supuse que era un puesto remoto de vigilancia del Estado. Aprendí, sin embargo, que Rigo había vivido ahí su vida entera y trabajó durante gran parte de su carrera en otras partes de México. Recientemente, su puesto había cambiado a una rotación entre varias oficinas migratorias de Chiapas, lo cual significaba que los residentes podían recurrir a él o mencionar su nombre para obtener favores. El deseo de Paco de convertirse en un agente migratorio fue el primer golpe a mis nociones preconcebidas de la seguridad e ilegalidad en la frontera. Un joven cuya vida estaba íntimamente moldeada por el contrabando y el comercio informal también quería trabajar para una agencia estatal supuestamente comprometida con la vigilancia de flujos no autorizados.

Cuando llegué por primera vez a la frontera expliqué mi investigación en reuniones de asamblea en cada comunidad y me entrevisté con autoridades locales clave; la mayor parte de las personas fueron receptivas. En retrospectiva, creo que las personas apreciaban el hecho de que quisiera escuchar sus puntos de vista en contraste con el modo en que oficiales y periodistas frecuentemente asociaban la frontera con crimen. Cuando fui a las oficinas de migración en Ciudad Cuauhtémoc a registrar mi residencia de trabajo de campo de acuerdo con las regulaciones mexicanas para investigadores extranjeros, el agente comentó

con desdén: «Es un paso sin ley. La gente allá [cree que] está sobre la ley. Es malo... Las comunidades hacen su ley». Después de esto, cuando entrevistaba a oficiales no mencionaba mi lugar de residencia. Mientras más tiempo vivía en la frontera, más se sosegaban las sospechas, ya que la gente podía ver mis actividades diarias, me llegaban a conocer y veían que nada estaba cambiando. Algunos residentes reían ante la idea de que pudiera amenazar sus empresas. Sabían de dónde venían las amenazas y compensaban a estos individuos en consecuencia. Su sustento dependía de ello.

Este cruce tampoco es tan escondido como parece. Este es el mito de la ilegalidad, que es oculta y desconocida. De hecho, la clandestinidad podría ser la clave para mantener la soberanía de un Estado y la justificación de la vigilancia fronteriza. En su trabajo con migrantes indocumentados en los Estados Unidos, Susan Coutin define la clandestinidad como «oculta, pero conocida», basándose en Gupta y Ferguson (1997), para mostrar cómo las perturbaciones y las exclusiones son críticas para definir la integridad territorial.⁷ La existencia de esta ruta está legalmente prohibida, aunque los oficiales, habitantes regionales y comerciantes admiten que provee un corredor central para el movimiento de bienes y de personas. Las vacilaciones entre la representación del cruce como algo selectivamente invisible o hipervisible refuerzan el mito de una frontera ordenada, mientras que permiten flujos de los cuales dependen los habitantes locales.⁸ Al mismo tiempo, llamar la atención periódicamente hacia estos vacíos justifica muestras de violencia estatal para recuperar la autoridad.⁹ La ruta es bien conocida para cualquiera que esté involucrado en comercio transnacional, así como para oficiales de los gobiernos de México, Guatemala y los Estados Unidos. He estado siguiendo informes de políticas de los tres países que mencionan este cruce desde 2004, y aún no veo cambio alguno. No obstante, dado que la situación es incierta, disfrazo los nombres de las comunidades, algunas de sus características y las identidades individuales. Reconozco como

⁷ Gupta y Ferguson (1997); Coutin (2005:195); véase también M. Reeves (2014).

⁸ Véanse paralelismos en Andreas, 2010.

⁹ Véase Andreas, 2010; McMurray 2001; Coutin, 2005, y Nevins, 2002.

mía la responsabilidad por el uso descontextualizado de la información para sustentar más criminalización. Equilibro este miedo de representación errónea con la importancia de dar voz a aquellos que son tildados de ilegales por designaciones oficiales, quienes ilustran en primera persona las espirales de violencia e inseguridad que pueden resultar de estrategias militarizadas para el combate a la ilegalidad.

Una gringa entre hombres contrabandistas

¿Cómo es que una antropóloga joven, blanca, estadounidense consigue acceso al mundo del contrabando y el negocio fronterizo? Investigadoras mexicanas que sabían de mi trabajo de campo y me habían visitado se preocupaban por mi seguridad. Mi familia pensaba que estaba loca. Sin embargo, rara vez me sentí insegura en la frontera. La etnografía sitúa las prácticas extralegales en el cotidiano, lo cual en zonas rurales fronterizas también está lleno de comidas familiares, cosecha de maíz, hacer tortillas y tamales y tomar café en los patios. Lo extralegal no pertenece a un bajo mundo separado y sombrío. El contrabando de bienes y facilitar el paso a camioneros es parte del día a día. Estar embebida en la vida fronteriza y desarrollar relaciones con familias locales también me ayudó a desarrollar ingenio fronterizo: saber a dónde ir y a dónde no, con quienes hablar y las cosas de las que no debía hablar o escribir. No comencé mi etnografía sobre contrabando o migración, sino sobre lo que significaba para la gente vivir en la frontera. Inicialmente, pregunté qué les gustaba y qué no de la frontera, y el tema común que emergió fue del beneficio de las oportunidades de negocios que ofrecía este espacio. Sin embargo, el negocio no podía separarse de las relaciones, las historias y el curso de la vida social de la frontera. Gradualmente entendí por qué los periodistas no eran bienvenidos y por qué las comunidades eran suspicaces ante las investigaciones rápidas, como me dijo un residente sobre alguien que vino a investigar antes que yo y que tomó fotos, pero que nunca se supo qué hizo con ellas. Prestar atención o reportar exclusivamente lo extraordinario o criminal produce un divorcio de las actividades extralegales y su contexto

social, haciendo que la ilegalidad parezca la característica definitoria de la frontera y sus habitantes. Con el tiempo, las personas comenzaron a compartir sus vidas conmigo y a cuidarme. A mitad de mi trabajo de campo, mis padres vinieron de visita y realizamos un viaje de una semana por Guatemala. Durante el paseo recibí llamadas de algunos residentes de la frontera que estaban preocupados por mí, ya que habían escuchado por la radio noticias del asalto a una «gringa» en el pueblo cercano de La Mesilla, Guatemala.

Las comunidades fronterizas nunca habían sido anfitrionas de una investigadora académica extranjera por un tiempo largo. Estaban familiarizados con los aspectos de una tesis, porque algunos jóvenes ahora van a las universidades, escriben tesis y llevan a cabo servicio social en comunidades rurales. Se preguntaban, sin embargo, por qué trabajaba allí y no en una comunidad indígena, lo cual viene del legado de la investigación científica, en particular de la antropología en México (y de la antropología estadounidense hasta cierto punto). A algunos les costaba ubicarme, a pesar de mi insistencia, como una investigadora escribiendo su tesis. ¿Estaba segura de que no era parte de una iglesia? ¿Alguna amiga o pariente de los amigos de un migrante o sus parientes en Estados Unidos? ¿Una agente de la AFI (la entonces Agencia Federal de Investigación, ahora Policía Federal Ministerial)? Estas eran las únicas razones por las que muchos podían imaginar a una «gringa» residiendo en su comunidad. Incluso tras establecer un *rapport* sustancial, un residente me confió que había un hombre que seguía sospechando y que me había estado siguiendo en su motocicleta por una semana para ver «qué era lo que realmente estaba haciendo». Siempre hubo gente que prefirió no hablarme. Por lo tanto, comencé y continué mi investigación lentamente, teniendo que mantener constantemente mi *rapport*.

El ser una mujer joven y casada con un hombre de los Estados Unidos y, en visitas posteriores, una madre de dos pequeñas hijas, me abrió algunas puertas y me cerró otras. Me tomé mi tiempo para establecer una buena relación con los negociantes. El comercio fronterizo es una empresa dominada por hombres. Se hacen burlas entre ellos por tener novias en ambos lados de la frontera para establecer su desempeño

masculino y como negociantes. A veces, estas pláticas se volvían incómodas cuando los hombres me preguntaban una y otra vez si las mujeres norteamericanas eran más promiscuas.

Sin embargo, los hombres frecuentemente me compartían información que no estarían tan dispuestos a divulgar con otros hombres. Cuando mi esposo comenzó un negocio de comercio justo con artesanos indígenas en San Cristóbal, Chiapas, algunos hombres criticaron sus estrategias. Le dijeron que podría ganar más dinero en el contrabando de bienes artesanales de Guatemala para venderlos en Chiapas, como muchos de ellos hacían. Varios ofrecieron su consejo, mientras que otros temieron la competencia. En las arenas de la vigilancia y el contrabando, dominadas por hombres, yo no representaba una amenaza o competencia. Las mujeres también juegan roles importantes en el sostén del negocio detrás del telón, ya sea haciendo cuentas, falsificando certificados, vendiendo comida y bebida a los comerciantes o entreteniendo a los compañeros en el negocio. Quizás el ser una mujer llevó a algunos a verme como alguien que entendía cómo el contrabando era decisivo para el sustento de las familias y comunidades (foto 4). Sin embargo, también hay información a la cual no tenía acceso no solo por ser mujer, sino también foránea.



Foto 4. Niños conviviendo y jugando en un camión (fuente: foto de la autora).

Mi aproximación metodológica equilibró el seguimiento de intercambios de contrabando con la investigación intensiva con residentes de la ruta sin vigilancia, cuyas vidas son afectadas íntimamente por estos flujos extralegales. Busqué las perspectivas de los actores locales con diferentes niveles de involucramiento, desde negociantes hasta cargadores, viudas y maestros que se preocupan por la influencia de esta economía en los jóvenes. Los negociantes tienen más poder para moldear las decisiones y la cultura de sus comunidades, pero otros puntos de vista brindan reflexiones sobre cómo es que esta influencia es retada y mitigada en la vida cotidiana. Las repercusiones de vivir en un cruce no oficial usualmente son sentidas de forma más aguda por los residentes más inmóviles¹⁰ que por los contrabandistas móviles.

Era necesario establecer *rapport* en las comunidades fronterizas con múltiples actores antes de entrevistar a los agentes estatales, políticos, comerciantes y productores de maíz fuera de la ruta fronteriza. Esto me enseñó qué podía decir y qué necesitaba omitir para proteger a aquellos con quienes residía, así como a mí misma. Viviendo en una comunidad fronteriza de México, comencé a asistir a las asambleas comunitarias en ambos lados de la frontera, yendo de casa en casa a conocer a los vecinos, y acordando entrevistas con autoridades comunitarias activas y pasadas. Como un servicio comunitario, enseñaba inglés un día por semana en cada comunidad. Después de la clase, cenaba con la familia de algún estudiante, lo cual amplió mis redes. Al seguir sus conexiones a través de la frontera, aprendí cómo las relaciones sociales, de parentesco y económicas unían a las comunidades transfronterizas.

Al pasar tiempo en las bodegas donde los contrabandistas comerciantes intercambian sus cargas, pude entrevistar y llevar a cabo observación participante con comerciantes y contrabandistas locales, camioneros y cargadores, quienes dependen de la vía sin vigilancia para su subsistencia; asimismo, conocí a camioneros de largas distancias. Conduje observación participante en las casetas de las cadenas comunitarias, donde los residentes cobran un impuesto a los negociantes de paso. El tiempo que pasé en las cadenas y los turnos de 12 horas que cubrí me

¹⁰ Véanse paralelismos en Muehlmann (2014).

mostraron cómo los peajes beneficiaban a la comunidad, así como el modo en que los residentes ganaban familiaridad con los camioneros y sus mercancías.

Hacia la mitad de mi investigación, mi casero decidió vender la casa que estábamos rentando. Hablando con los residentes en una fiesta local, Paco me presentó a otro primo de El Nance que era un negociante de azúcar y café. Quizás fue el ambiente festivo o las cervezas «coronitas», pero su primo sugirió que me mudara con su familia. Se lamentaba de haber construido una extensión en su casa que había quedado vacía ya que sus hijos se habían mudado a otras ciudades o habían construido sus propias casas. Dejé de lado la petición hasta una tarde más sobria y me sorprendí cuando volvió a extender la oferta. Al conocer a su familia, aprendí cómo combinaban diversas estrategias de ingreso y confiaban en un panorama impredecible y de relaciones de asistencia con políticos y oficiales para seguir en el negocio. El conocer a esos negociantes y sus familias hizo más compleja la mediática dicotomía «blanco y negro» de criminales y víctimas, y reveló las áreas grises en las cuales todos luchaban por «superarse» o avanzar. Muchos de estos individuos eran de hecho comisionados por compañías legítimas para suplementar sus inventarios (Capítulo 6).

También entrevisté a policías locales, oficiales de migración, políticos y agentes de aduana para entender las reglas y las normativas oficiales. Aprendí que las reglas eran entendidas y aplicadas de manera inconsistente; en cambio, dependían de dinámicas e interacciones locales sociales, económicas y políticas. En gran parte, pasé tiempo con familias, fui a eventos sociales y conversé con personas que sospechaban de las repentinas ganancias de los contrabandistas. Al integrarme en las comunidades fronterizas examiné el flujo transfronterizo mientras entendía cómo los residentes apoyaban a los negociantes debido a ciertos beneficios económicos para la comunidad, pero simultáneamente deseaban una presencia del Estado más legítima que los protegiera y abasteciera.

El vivir con residentes de la frontera y escuchar sus justificaciones para tomar parte de prácticas extralegales, sin embargo, podía cegarme a los aspectos negativos. ¿También me hacía cómplice? Trataba de

escuchar abiertamente, pero también lanzaba preguntas provocadoras. Entrar en debates con los residentes y exponer algunos de mis propios sesgos en el proceso revelaba cómo las personas balanceaban discrepancias reconocidas entre las justificaciones para sus acciones, la realidad de sus vidas y sus diversas motivaciones y ansiedades.

Para protegerme y proteger a los residentes fronterizos, no preguntaba directamente sobre actividades que son consideradas riesgosas o ilícitas en el contexto local, incluido el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el tráfico de migrantes indocumentados. Aunque estos temas surgieron en las conversaciones, frecuentemente eran rumores, lo cual también ilustraba el entendimiento local del panorama cambiante. Seguí las estrategias de los residentes: no veas, no escuches... y no hables. No obstante, también indagué analíticamente los silencios y el cambio discursivo sobre riesgos en cuanto a ciertos tipos de actividades, como el contrabando de migrantes, que se criminalizan cada vez más.

Haciendo las tierras fronterizas

Inicialmente fue atravesando el camino con Juan Carlos y Federico que comencé a entender cómo las comunidades que abarcan la frontera se fueron haciendo interdependientes, al parecer a pesar de, pero también a causa de la frontera internacional. Cada comunidad tiene sus propias dinámicas e intereses, pero están ligadas por su dependencia mutua en el mantenimiento de una ruta propicia para el comercio. Si una comunidad eleva mucho sus cuotas de impuestos o no da mantenimiento a su tramo de carretera, el comercio de todos se ve amenazado. Una frontera históricamente indeterminada y porosa, junto a la marginación de los principales centros económicos y políticos, frecuentemente ha llevado a los residentes de la frontera a depender más de las relaciones con el otro lado de la frontera que con sus propios paisanos y vecinos estatales.¹¹

¹¹ Vázquez Olivera (2010); Martínez (1994); Clot (2013).

En lugar de tomar la marginalidad de las fronteras al pie de la letra, los procesos de construcción de nación y desarrollo económico han convertido las fronteras y a sus habitantes en marginados y, al mismo tiempo, en elementos fundamentales para el Estado-nación moderno.¹² Al residir en los márgenes del territorio estatal, las poblaciones fronterizas son frecuentemente representadas de modos que sugieren ingobernabilidad, lo cual sirve al propósito de justificar intentos del Estado de «administrarlas» y hacerlas comprensibles.¹³ Los márgenes, y su potencial amenaza al territorio del Estado, son críticos para los esfuerzos de afirmación de soberanía cuando esta es más disputada. Las tierras fronterizas, y especialmente las perturbaciones oficiales del paisaje fronterizo, se asocian a menudo con la posibilidad de la ilegalidad, ya que los habitantes fronterizos son arrastrados, atraídos y repelidos en direcciones opuestas.¹⁴ En vez de ser un Estado inherente, esto refleja procesos históricos de exclusión combinados con formas de inclusión forzada en favor de la afirmación de los límites del Estado, el mejoramiento de la seguridad o la extracción de capital, recursos y mano de obra para las necesidades del Estado moderno. Las estrategias de subsistencia de los residentes fronterizos, frecuentemente estigmatizadas como ilegales, reflejan cómo los que se encuentran al margen de los procesos de construcción de la nación se han adaptado para resistir la incorporación y la vigilancia del Estado,¹⁵ al tiempo que buscan la inclusión en sus propios términos. Ambos lados de la frontera están caracterizados por su relación periférica con sus Estados-nación, marcada por altos niveles de pobreza y falta de servicios e infraestructura.¹⁶ Es también en los intersticios entre la ley, el Estado y la nación donde surgen modos alternativos de creación de sujetos, legibilidad y supervivencia, incluso cuando los fronterizos pueden seguir siendo objeto de exclusión y criminalización.¹⁷

¹² Véase Goldstein (2012:28-29); Goldstein (2016); Das y Poole (2004).

¹³ Das y Poole (2004:9).

¹⁴ Martínez (1994:25).

¹⁵ Scott (2009:9).

¹⁶ Clot (2013:4-5), basado en Canales et al. (2010:37).

¹⁷ Das y Poole (2004:9, 20).

Demarcando la frontera, haciendo a México

Al explicar mi investigación a los residentes de la frontera, me identifiqué como antropóloga. Sin embargo, a las personas les costaba trabajo entender qué tenía que ver el estudiar la vida en la frontera con la antropología, a la que veían como sinónimo del estudio de pueblos indígenas. Pensaban que debía estudiar en los altos de Chiapas o Guatemala, donde había más población indígena, basándose en la historia de la antropología nacionalista en México.¹⁸ Un residente fronterizo mexicano, perplejo, me comentó: «pero no hay indígenas aquí. Los indígenas de aquí en verdad son de Guatemala». A pesar de la historia fluida entre Chiapas y Guatemala y la composición de base fuertemente indígena de la región, los residentes fronterizos mexicanos borraron a la población indígena de la frontera o los reubicaron en Guatemala.

Muchos residentes mexicanos de la frontera en El Nance llaman a Héctor, un hombre de 74 años, el historiador de la comunidad, debido a su afición por coleccionar libros de historia. Un día, mientras estábamos sentados en su patio bebiendo atole,¹⁹ trajo un libro sobre la historia de Chiapas. Lo hojeó hasta llegar a una página que había separado para mostrarme cómo Chiapas fue parte de Guatemala durante el periodo colonial. «La frontera no era siempre así —leyó del libro— Iturbide firmó, el 16 de enero de 1822, que Chiapas sería declarado parte de México». En el periodo colonial, Chiapas era parte de la capitánía de Guatemala; después de la independencia de España, en 1821, tanto México como Guatemala deseaban anexionar a Chiapas.²⁰ Chiapas se integró formalmente a México en 1824. Guatemala continuó haciendo reclamos territoriales. Algunas regiones de Chiapas inicialmente estaban a favor de unirse a Guatemala.²¹ La región del Soconusco se resistió por

¹⁸ Los residentes fronterizos se habían dado cuenta de una larga tradición de estudios antropológicos nacionales, así como de los Estados Unidos, de estudiar las comunidades indígenas mexicanas (véase crítica en Kelly 2008: 32).

¹⁹ Bebida caliente hecha con masa de maíz, canela y azúcar.

²⁰ Lewis (2005:3).

²¹ Lewis (2005:6).

más tiempo a incorporarse a México, manteniéndose autónoma hasta 1842.²² La frontera entre Chiapas y Guatemala se acordó en un tratado de límites iniciado en 1882 y que finalizó en 1895.²³ Para los residentes, la frontera continuó siendo porosa e imprecisa por generaciones, lo que resultó en conexiones cercanas entre los habitantes fronterizos chiapanecos y guatemaltecos.²⁴ Héctor continuó narrando que hasta la década de 1960, «hubo mucha confusión [en la frontera]». Muchas personas no estaban al tanto de dónde estaba la línea divisoria. Según Stephen Lewis, dado que las fronteras coloniales estaban ocultas y la información escaseaba, los países, a falta de certidumbre, «dibujaron líneas cartográficas rectas».²⁵ En este cruce, muchas personas no estaban seguras sobre dónde estaba la línea fronteriza, ya que los monumentos que la demarcaban estaban separados por grandes distancias. En la década de 1960, la Comisión Internacional de Límites y Aguas instaló mojones adicionales para hacer más clara la línea fronteriza. Como resultado, algunos terratenientes tuvieron que intercambiar tierras, ya que no se habían dado cuenta de que parte de sus tierras estaban en otra nación.

La mayoría de los habitantes en ambos lados de la frontera rastrean sus raíces en Guatemala y tienen familia en los dos países. Alonso, quien vive en Santa Rosa, México, afirmó que si preguntas a quien sea (refiriéndose a los residentes fronterizos adultos), aquí o en el otro lado de la frontera, que de dónde son sus abuelos, casi todos te dirán que son de Guatemala. Héctor me recordó que los flujos no siempre van en una dirección. La familia de su esposa huyó a Guatemala desde México durante los años violentos de la Revolución mexicana, alrededor de 1915. De acuerdo con Héctor, «No sabían la línea [...] no estaba bien marcada. Entraron a Guatemala [...] por accidente».

Los grupos étnicos históricamente han cruzado las tierras fronterizas entre México y Guatemala debido a que la imposición de la frontera internacional es relativamente reciente, así como a un patrón temporal de

²² Lewis (2005:7).

²³ Lewis (2005:7).

²⁴ Vázquez (2010:112).

²⁵ Lewis (2005:6).

migración de trabajadores guatemaltecos a las plantaciones de café del sur de Chiapas. A finales del siglo XIX la región fronteriza y las áreas de plantación de café en el sur de Chiapas estaban escasamente habitadas, y México favorecía la importación de mano de obra guatemalteca, así como la colonización por parte de guatemaltecos (frecuentemente indígenas), quienes subsecuentemente se naturalizaban como mexicanos.²⁶ A pesar de que se reclutaba a los guatemaltecos como trabajadores, la administración de Porfirio Díaz de finales del siglo XIX tenía un componente racial detrás de sus metas para modernizar y desarrollar la economía del café y la agricultura en la región del Soconusco.²⁷ Tal modernización no tenía la intención de incluir a campesinos, sino que estaba orientada a atraer inversiones extranjeras y reclutar migrantes europeos y norteamericanos. Los alemanes fueron el contingente más grande que llegó a Chiapas.²⁸ Porfirio Díaz y sus sucesores pensaban que la gente indígena deprimía el desarrollo económico y «creyeron en la habilidad inherente de [los inmigrantes europeos] para mejorar la calidad de las personas en México».²⁹

A principios del siglo XX, después de la Revolución, México cambió el rumbo, pasando de ver a su población indígena como una plaga para la nación a abrazar su patrimonio indígena. Sin embargo, lo hizo mediante la lógica de la nación mestiza, lo cual se refiere a la población mezclada descendiente de colonizadores españoles y pueblos indígenas. Creó instituciones nacionales como la Secretaría de Educación y el Departamento de Antropología y Poblaciones Regionales de la República, el cual más adelante se convertiría en el Instituto Nacional Indigenista (INI), para integrar a la población indígena y preparar a la nación para una «fusión racial».³⁰ Esta estrategia buscaba incorporar a diversas poblaciones al Estado-nación; también exudaba un fuerte tono asimilacionista

²⁶ Hernández Castillo (2001:34).

²⁷ Nolan-Ferrell (2005:302).

²⁸ Nolan-Ferrell (2005:302).

²⁹ Nolan-Ferrell (2005), basado en Knight (1986 t. I:8-9).

³⁰ Hernández Castillo (2001:21).

que dejaba a un lado tanto a la población de elite blanca de ascendencia española, como a la gran población marginada indígena.³¹

Debido a que Guatemala siguió albergando resentimiento por la pérdida de territorio y periódicamente intentaba reclamarlo, México enfocó en las regiones fronterizas sus esfuerzos de nacionalización para reafirmar su territorio.³² En la década de 1930, las políticas asimilacionistas de México se manifestaron en Chiapas mediante una campaña de aculturación forzada, que incluyó la prohibición del uso de lenguas indígenas, la quema de ropa indígena y la instalación de centros de hispanización y escuelas fronterizas.³³ Para asegurar la identidad mexicana en las tierras fronterizas, México ofreció otorgar ciudadanía y tierra a trabajadores guatemaltecos en las áreas fronterizas de Chiapas.³⁴ La campaña fue más dramática en aquellas regiones en las que los grupos indígenas compartían identidades étnicas e idiomas con grupos guatemaltecos, incluyendo mam, chuj, kaqchikel y k'anjol.³⁵ A pesar de que las comunidades indígenas en los Altos de Chiapas también fueron señaladas para estas políticas de integración, los grupos indígenas de los Altos eran considerados distintivamente mexicanos. En contraste, se enfocaron de manera más intensa en asimilar a los grupos indígenas de la frontera, porque compartían afinidad con los grupos indígenas guatemaltecos.³⁶ De acuerdo con Rosalva Aída Hernández Castillo: «La política de 'mexicanización' cumplía la función política de demarcar los límites de la nación [...] mientras que los habitantes fronterizos [...] no representaban solo retraso cultural, sino también antinacionalismo».³⁷ Convertirse en mexicano en la frontera se apoyaba necesariamente en una retórica antiguatemalteca.³⁸ En 2010, Chiapas ocupaba el segundo lugar nacional en

³¹ Hernández Castillo (2001:21).

³² Lewis (2005:6-7); Hernández Castillo (2001).

³³ Hernández Castillo (2001:24); Lewis (2005:7).

³⁴ Lewis (2005:7).

³⁵ Hernández Castillo (2001:24).

³⁶ Hernández Castillo (2001:24).

³⁷ Hernández Castillo (2001:24).

³⁸ Hernández Castillo (2001:24).

número de hablantes de lengua indígena en México,³⁹ pero la región de la frontera es una de las partes menos indígenas del estado.

Como resultado de esta historia, la mayoría de los habitantes en la región de Frontera Comalapa ya no se identifican con ningún grupo indígena, aunque recuerdan que sus antepasados pudieron haber sido indígenas. Sin embargo, esta región se transformó con la llegada de entre 150 000 y 200 000 refugiados indígenas que huían hacia México en los momentos más intensos de la guerra civil de Guatemala, a principios de la década de 1980.⁴⁰ Mientras los refugiados guatemaltecos cruzaban la frontera, México temía que el conflicto se desbordara hacia Chiapas y exacerbara las tensiones sobre tenencia de tierras. México adoptó la postura del ejército guatemalteco que señalaba a los pueblos indígenas como guerrilleros, parte de la insurgencia. Debido a su situación precaria, los refugiados trabajaban por menos que el salario mínimo, iban a escuelas mexicanas y rentaban tierra a mexicanos (entre estos, algunos eran compasivos, pero otros explotaban esta vulnerabilidad).⁴¹

A pesar de una historia de ofrecer asilo a poblaciones agraviadas, México no firmó la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, ni contaba con mecanismos legales para lidiar con una situación prolongada de refugiados.⁴² Con el aumento de la presión internacional y la prolongación del conflicto en Guatemala, México cambió de estrategia y proporcionó a los refugiados credenciales de identidad en 1983, en vez de tratarlos como migrantes ilegales. El país estableció campos de refugiados, pero restringió su movilidad, por lo que no podían viajar más allá de los campamentos ni adquirir tierras.⁴³ Los documentos de identidad regían a los refugiados como habitantes temporales marginados y garantizaban su explotación como jornaleros. Solo se les reconocía como tales si se mantenían en los campamentos, de otro modo los

³⁹ INEGI (2010).

⁴⁰ ACNUR (2001); Freyermuth y Hernández (1992).

⁴¹ Ludy (1998); García García (2002).

⁴² Freyermuth y Hernández (1992).

⁴³ Montejo (1999).

consideraban migrantes ilegales y eran susceptibles a la deportación.⁴⁴ Faustino, un antiguo refugiado guatemalteco que ahora vive en el lado mexicano de la frontera en La Maravilla, relató:

Fuimos al [campo de refugiados] ya que no teníamos otra opción. Necesitábamos adquirir documentos como refugiados, y solo podíamos conseguirlos si estábamos en un campamento. Anteriormente, inmigración deportó a muchas personas a Guatemala. Si vivíamos en el campamento, México nos aceptaba. Si no, no nos ayudarían. Teníamos que aceptar cómo eran las cosas por la ley mexicana.

Los refugiados ocultaban su identidad indígena y temían viajar por miedo a que los oficiales de migración mexicanos los enviaran de vuelta a sus hogares, donde temían por sus vidas.⁴⁵ Una mujer recordó: «Tuvi- mos que quitarnos la ropa indígena [traje] para que la inmigración no nos deportara... para que no nos reconocieran como guatemaltecos».

Debido a tensiones sociales, étnicas y territoriales en Chiapas, así como a una afinidad cercana entre Chiapas y Guatemala desde sus relaciones históricas, de linajes y de mano de obra, el gobierno mexicano prefería que los refugiados se ubicaran en Campeche y Quintana Roo, en la península de Yucatán, en vez de Chiapas.⁴⁶ En 1984, México adoptó la política de trasladar a los refugiados a Campeche y Quintana Roo, y desalentaba la provisión de servicios a aquellos determinados a permanecer en Chiapas.⁴⁷ Debido a la proximidad geográfica, cultural y física respecto de sus hogares en Guatemala, 18 000 personas se reubicaron y 25 000 se negaron a hacerlo.⁴⁸ Simeón, un antiguo refugiado que ahora vive en Nueva Vida, Guatemala, y que vivió en Campeche por seis años, explicó: «El gobierno mexicano no nos quería en Chiapas. Corrían tras nosotros y nos enviaban de vuelta [a Guatemala], donde podían matar-

⁴⁴ 75% de los refugiados vivieron fuera de los campamentos designados (Jonas 2013).

⁴⁵ Véanse también Montejo (1999); Manz (2004).

⁴⁶ Freyermuth y Hernández (1992).

⁴⁷ Montejo (1999).

⁴⁸ Cutts (2000:130); véase también Montejo (1999); Manz (1988).

nos». Después de una enfermedad, sin embargo, regresó a Chiapas para estar más cerca de su familia. El ejército guatemalteco también realizó varias incursiones a territorio mexicano, incluidos ataques a los sitios donde residían los refugiados.⁴⁹ El gobernador de Chiapas también se resintió de la presencia de los refugiados.⁵⁰ Los residentes mexicanos recuerdan que se oían tiros en la noche. Héctor no olvida que unos soldados guatemaltecos se metieron en su milpa por accidente y los convenció de irse al informarles que por error habían entrado en México.

Cuando a mediados de la década de 1990 México ofreció una vía para la naturalización de refugiados que desearan convertirse en mexicanos mediante el Programa de Estabilización Migratoria, esta política fue promovida en la península de Yucatán dos años antes que en Chiapas.⁵¹ México prefería la repatriación de los refugiados; 43 000 de ellos regresaron a su lugar de origen o a comunidades recién establecidas en Guatemala en la década de 1990.⁵² En 1999, sin embargo, se estimaba que cerca de 22 000 refugiados guatemaltecos, de los cuales más de la mitad nacieron en territorio mexicano en los campos de refugiados, se quedarían.⁵³ Para 2000, 25 000 centroamericanos regularizaron su estatus en México con opciones de residente permanente o de visitante para aquellos que eventualmente regresarían, y 4 700 se habían naturalizado.⁵⁴

A pesar de su integración a México, los antiguos refugiados continúan siendo excluidos económica y simbólicamente del país, ya que están más propensos a carecer de agua, letrinas, electricidad, tierra y respeto de sus vecinos mexicanos.⁵⁵ Reciben trato de forasteros excluidos como población indígena, lo cual es sinónimo de Guatemala en esta región. Debido a la carencia de tierras y recursos, muchos mexicanos veían a los refugiados como competencia y resentían la ayuda que es-

⁴⁹ Cutts (2000:130); Montejo (1999).

⁵⁰ Montejo (1999).

⁵¹ Kauffer (2002); Fabila (2002).

⁵² M. A. Castillo (2006).

⁵³ García (2006:83).

⁵⁴ García (2006:83).

⁵⁵ Kauffer y Velasco (2002).

tos recibían. Para los mexicanos de la frontera, la identidad indígena, la nacionalidad guatemalteca y la «alteridad» se fusionan. A algunos residentes mexicanos aún los llaman «refugiados» o «guatemaltecos» aunque estén naturalizados.⁵⁶ Desde la década de 1990, aunque las razones políticas, económicas y sociales para migrar se difuminan, los guatemaltecos conforman la mayoría demográfica en las deportaciones de México.⁵⁷

La presencia de refugiados indígenas fue especialmente contenciosa en Chiapas tras la rebelión zapatista de 1994, cuando la identidad indígena se volvió sinónimo de subversión. El primero de enero de 1994, coincidiendo con la puesta en marcha del TLCAN, un ejército guerrillero de unos cuantos millares de campesinos indígenas organizados y enmascarados salieron de la selva lacandona para tomar varios poblados y municipios en todo Chiapas, y exigieron un compromiso más sustantivo hacia la democracia, la tierra, la identidad y los derechos. Basándose en el legado de Emiliano Zapata —un héroe de la Revolución mexicana a quien los campesinos recuerdan por su compromiso con la reforma agraria—, tomaron su nombre para establecer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al que haré referencia en adelante como los zapatistas o el EZLN. El enfrentamiento entre los zapatistas y el ejército mexicano duró menos de una semana, pero México militarizó Chiapas; un tercio del ejército estaba posicionado en el estado en 2001.⁵⁸ El presidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) adoptó la postura de negociar con los zapatistas y firmó los Acuerdos de San Andrés en 1996, que respetan las exigencias de derechos y autonomía de los indígenas. Sin embargo, renegó de estas promesas poco después. En 2001, en su lugar, México propuso la Ley de Derechos y Cultura Indígena. Esta legislación diluyó los compromisos con los derechos de los indígenas y alineó más a México con el multiculturalismo neoliberal, que constituía una forma limitada y regulada de reconocimiento sin mención de la autonomía.⁵⁹ A pesar de que esta legislación fue aprobada, nueve estados se opusieron, incluidos

⁵⁶ Véase Kauffer (2002).

⁵⁷ M. A. Castillo (2006); Alba y Castillo (2012).

⁵⁸ Stephen (1999); Swords (2010:120), citando al Centro de Derechos Humanos (2005).

⁵⁹ Hernández Castillo (2001); Hale (2005).

Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, los estados mexicanos con mayor población indígena.⁶⁰

La militarización en Chiapas en respuesta a los zapatistas se manifestó en forma de una escalada de bases militares temporales y *ad hoc* y de bloqueos de carreteras, así como de incursiones sorpresa en todo el estado.⁶¹ Los principales objetivos eran las comunidades indígenas, ya que la militarización se basaba en los relatos y prejuicios nacionales que miran a los pueblos indígenas como inferiores y en las amenazas a la unidad de la nación mestiza para convertirlos en sospechosos, someterlos a abusos de los derechos humanos, limitar sus movimientos e infundirles miedo.⁶² Chiapas ha experimentado una guerra de baja intensidad desde la década de 1990, ya que el gobierno ha ejercido una mezcla de concesiones selectivas a los partidarios, hostigamiento y represión selectiva, a menudo ejercida por unidades paramilitares aliadas. Una base militar por esta ruta fronteriza en la autopista mexicana fue instalada en la década de 1990.

Chiapas históricamente sirvió como puente y distinción entre México y Guatemala. Desde los lazos históricos que los habitantes compartían con los guatemaltecos al espectro de la subversión indígena que amenazaba al Estado-nación y supuestamente emanaba tanto de refugiados guatemaltecos como de partidarios de los zapatistas, los habitantes de Chiapas han internalizado las preocupaciones, los miedos y los impulsos disciplinarios del Estado para controlar sus fronteras.

Nación y etnicidad en Guatemala

En contraste, una jerarquía más explícita entre los indígenas mayas y los ladinos, o aquellos de ascendencia mixta que han sido hispanizados y son frecuentemente codificados como no indígenas, ha servido de base para la división racial en Guatemala. La dicotomía ladino-indígena fue crítica para el proceso de formación del Estado-nación guatemalteco

⁶⁰ SIPAZ (2001).

⁶¹ Stephen (1999).

⁶² Stephen (1999:830, 838).

moderno, ya que el Estado manipuló la distinción para defender la superioridad de los ladinos, denigrar a la población indígena apropiándose de su trabajo y cimentar los privilegios de elite de los criollos.⁶³

Hacia mediados de la década de 1930, las comunidades indígenas mayas enfrentaban una historia de expropiación de tierras, reclutamiento forzado para trabajo y desplazamientos combinada con un aumento poblacional que agravaba las presiones económicas y de tenencia de tierra.⁶⁴ Cansados de los privilegios de las elites e influenciados por las reformas agrarias y laborales en México, la creciente clase media guatemalteca derrocó al entonces presidente Jorge Ubico en 1944, lo cual inauguró los «diez años de primavera» de apertura política democrática y reformas sociales desde ese año hasta un derrocamiento orquestado y encubierto por la CIA, del presidente Jacobo Arbenz, en 1954, y la instauración de un líder militar, Carlos Castillo Armas.⁶⁵ Uno de los cambios más significativos de los «diez años de primavera» incluyó la reforma agraria. Esta representaba una amenaza no solo para las elites terratenientes locales, sino para los intereses del capital extranjero, y de manera más notoria para la empresa estadounidense United Fruit Company. La United Fruit tenía relaciones cercanas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con la CIA, cuyo director tenía inversiones en la compañía y era parte de su mesa directiva.⁶⁶ Eisenhower había ascendido al poder como presidente de los Estados Unidos de América con la promesa de una postura dura contra el comunismo, y Guatemala fue tomada como el lugar para establecer un precedente de aquella estrategia de operaciones encubiertas de la Guerra Fría en desarrollo.⁶⁷

Tras el golpe de Estado, la sociedad y las instituciones gobernantes guatemaltecas se militarizaron de manera creciente, mientras que los izquierdistas y campesinos mayas y ladinos se organizaban para combatir

⁶³ Smith (1990); Warren (2001:10); Little-Siebold (2001).

⁶⁴ Montejo (1999:37).

⁶⁵ Grandin (2000:199); Schlesinger y Kinzer (1999:19).

⁶⁶ Immerman (2010).

⁶⁷ Schlesinger y Kinzer (1999:17); Immerman (2010:14).

contra las medidas brutales del Estado hacia la reforma.⁶⁸ En la década de 1970 crecieron los movimientos de insurgencia en contra de la represión del Estado y del ejército; en las filas de la oposición de izquierda se formaron grupos de guerrilleros.⁶⁹ El conflicto escaló hasta convertirse en una guerra civil de 36 años, de 1960 a 1996, en la que el ejército guatemalteco recibió fondos y entrenamiento de los Estados Unidos bajo la excusa de combatir el comunismo.⁷⁰ La violencia dirigida a inicios del conflicto se transformó en una militarización generalizada y las políticas de «tierra arrasada» instauradas por el entonces presidente Efraín Ríos Montt a principios de la década de 1980 para contener al «enemigo interno» iban deliberadamente de la mano con el propósito de eliminar a los mayas.⁷¹ Hombres, mujeres y niños mayas fueron torturados, asesinados y aterrorizados. El ejército atacaba a las comunidades y las reorganizaba y reubicaba de acuerdo con modelos militares de control,⁷² bajo el criterio de considerar enemigos a quienes se negaran a cooperar, y en 1983 instituyó un sistema de patrullas de autodefensa civil (PAC) como parte de una forma de guerra psicológica para dividir a las comunidades y lograr que los militares fueran informados de cualquier actividad sospechosa que pudiera estar ligada a la guerrilla.⁷³ En contraste con declaraciones del ejército en las que responsabilizaba a los guerrilleros de la mayoría de las atrocidades que se estaban cometiendo, el reporte de la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico, realizado entre 1997 y 1999, concluía que se cometió un genocidio contra la población indígena. De las 200 000 muertes, 83% correspondieron a los mayas,

⁶⁸ Thomas, O'Neill y Offit (2011:5); Montejo (1999:4).

⁶⁹ Montejo (1999:40).

⁷⁰ Schirmer (1998); Manz (2004:21-23). Los fondos se suspendieron en 1977 debido a los informes de violaciones de los derechos humanos, pero se reanudaron como operaciones encubiertas de la CIA bajo el presidente Reagan para contener el comunismo después de la caída de Vietnam. Los Acuerdos de Paz de 1996 suspendieron la ayuda militar a Guatemala, pero el presidente Bush reanudó la ayuda para combatir la violencia por drogas después de que Guatemala prometiera respetar los derechos humanos (Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/Ficha técnica de EEUU 2015).

⁷¹ Burrell (2013:26); Schirmer (1998).

⁷² Montejo (1999:42); Burrell (2013:24); Manz (2004).

⁷³ Manz (2004:155); Burrell (2013:34).

mientras que el Estado y las unidades aliadas paramilitares fueron responsables de 93% de las atrocidades.⁷⁴

El fin de la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 representaron la paz del vencedor para la elite.⁷⁵ Muchos residentes fronterizos guatemaltecos que colaboraron con el ejército afirman que este «ganó la guerra». Los agravios sociales, éticos y económicos detrás del conflicto —incluidos concentración de tierras, desigualdad económica, pobreza, privilegios de la elite y racismo— se mantuvieron. La pobreza se concentra en las áreas rurales, donde habita más de la mitad de la población, especialmente en comunidades indígenas.⁷⁶

Las comunidades de la frontera

Las comunidades fronterizas mexicanas se localizan en el municipio Frontera Comalapa, en la región Fronteriza de Chiapas. Para 2010, 80.3% de la población de Frontera Comalapa vivía en la pobreza y cerca de 66% de la población mayor de quince años no había terminado la escuela primaria.⁷⁷ A pesar de que los habitantes de Frontera Comalapa no se identifican con ningún grupo indígena, reconocen su herencia como tales. Hubo cerca de 100 campamentos que recibieron a refugiados indígenas guatemaltecos a mediados de la década de 1980 en Chiapas. La mayor parte de dichos campamentos se encontraban agrupados cerca de la frontera, con Frontera Comalapa entre las principales áreas de asentamiento.⁷⁸ Los refugiados indígenas que se naturalizaron a finales de la década de 1990 y primeros años del nuevo milenio establecieron comunidades y hogares en esta región.

Las comunidades fronterizas guatemaltecas están ubicadas en el municipio La Democracia, en el departamento (equivalente guatemalteco a

⁷⁴ United States Institute of Peace (1997).

⁷⁵ Hale (2006:6); Burrell (2013).

⁷⁶ IFAD (2012).

⁷⁷ SEDESOL (2014).

⁷⁸ García (2006:51); Gómez (2002).

estado) de Huehuetenango, el cual es uno de los más diversos lingüística y étnicamente de Guatemala. A pesar de que en 2012 el 57,5% de la población de Huehuetenango se identificaba con algún grupo indígena, en La Democracia la proporción era menor (en particular comparando con las Tierras Altas del Oeste): alrededor de 44%.⁷⁹ Junto con otros departamentos occidentales, Huehuetenango tiene 25% de los indicadores más severos de pobreza y subdesarrollo:⁸⁰ en 2011 más de 60% de su población vivía en la pobreza (el indicador era de 70% en 2006) y 9.6% (20% en 2006) experimentaban pobreza extrema.⁸¹ De modo similar a Frontera Comalapa, las regiones fronterizas guatemaltecas han generado nuevas formas de empleo relacionado con migración indocumentada, drogas y tráfico sexual. El vigor de la frontera ha llevado a Huehuetenango y La Democracia a transformarse en puntos importantes de comercio informal y extralegal.⁸² En un recuento de los rápidos cambios regionales, La Democracia registró la mayor cantidad de homicidios en el departamento de Huehuetenango en 2012. Huehuetenango es el departamento que experimentó el mayor aumento relativo de homicidios de 1996 a 2010.⁸³

Tres comunidades mexicanas están asentadas en la ruta sin monitoreo. Para proteger la ubicación de la ruta y a sus habitantes, las llamo Santa Rosa, El Nance y La Maravilla. La mayor parte de los residentes mexicanos en esta ruta fronteriza no se identifican como indígenas, pero hay una pequeña comunidad de antiguos refugiados guatemaltecos naturalizados en La Maravilla que se identifican con el grupo étnico mam. La mayor parte de los niños en La Maravilla nacieron en México y no hablan mam.

Entrando en la ruta desde el lado mexicano de la carretera Panamericana el primer lugar con el que se encuentra uno es Santa Rosa. Santa Rosa es un ejido, es decir, una comunidad basada en un régimen de

⁷⁹ ENCOVI (2011), citado en INE (2013*b*).

⁸⁰ Guzmán (2004:62).

⁸¹ INE (2013).

⁸² Guzmán (2004); Camus (2012).

⁸³ INE (2013*a*); González (2011:5) citado en Camus (2012:85).

tenencia de la tierra colectivo que corresponde en este caso a unas 400 familias. Actualmente, la mayoría de las propiedades son administradas y trabajadas de manera privada. Debido a tensiones sobre la tierra, en 2007 Santa Rosa dejó de permitir la entrada a nuevos ejidatarios. Entre Santa Rosa y El Nance, en la subida a una colina empinada a medio pavimentar desde el camino principal hacia la frontera, está La Maravilla. Es el hogar de unas 30 familias de antiguos refugiados guatemaltecos y sus hijos, mayoritariamente nacidos en México. Un grupo de indígenas mam que vivieron en diversos campamentos de refugiados en Chiapas se unió para establecer La Maravilla en 2000, después de decidir naturalizarse como mexicanos. Eligieron quedarse en México en vez de regresar a Guatemala principalmente «por los hijos», según cuentan los residentes, porque creyeron que México les ofrecería mejores posibilidades económicas, de educación y de paz. Los residentes adultos recibieron documentos de ciudadanía mexicana con ayuda de la institución gubernamental mexicana COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) a principios de la década de 2000.⁸⁴ Debido a que los habitantes de La Maravilla no cuentan con tierra para cultivo, muchos rentan tierra o trabajan para sus vecinos mexicanos. Así que ellos ocupan nichos similares y compiten con jornaleros guatemaltecos que históricamente han cruzado la frontera para trabajar en campos mexicanos y continúan haciéndolo.

El Nance está compuesto por unas 100 familias que tienen pequeñas propiedades privadas. Algunos residentes poseen más de 30 hectáreas de tierra, mientras que otros no cuentan con tierra alguna. La principal forma de sustento en Santa Rosa, El Nance y La Maravilla es la agricultura de subsistencia, pero hay dueños de pequeñas tiendas y una pequeña clase creciente de profesionales que incluye maestros, enfermeras, políticos, contadores e ingenieros. Para encontrar empleo, sin embargo, la mayoría debe viajar o mudarse a ciudades más grandes en la región. Algunos residentes cultivan café, frijoles y cacahuates para autoconsumo y

⁸⁴ COMAR es una agencia del gobierno mexicano encargada de dar asistencia y protección a refugiados. Fue creada en 1980 para trabajar con el Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y abordar la situación de los refugiados en México.

venta del excedente, pero la mayor parte del tiempo la tierra se destina al cultivo del maíz. En El Nance algunos residentes han desarrollado un nicho más lucrativo con la ganadería; algunos venden su ganado al otro lado de la frontera, en Guatemala.

La apariencia rural de la frontera oculta el grado en el que están integrados los residentes —y lo han estado por un largo tiempo— a redes de comercio regionales y transnacionales. Más jóvenes están completando la educación superior técnica y algunos cuantos buscan grados universitarios. Aun así, entre 43% y 48% de los residentes de Santa Rosa y El Nance mayores de quince años no han completado la escuela primaria.⁸⁵ Muchas familias han vivido en la frontera por generaciones, pero casi todos los residentes fronterizos de México reconocen sus conexiones de parentesco recientes con Guatemala. Otros rastrean su residencia a lo largo de la frontera a la construcción de la Carretera Panamericana en la década de 1940 y principios de la de 1950, cuando sus parientes fueron reclutados como trabajadores de la construcción en otros municipios y estados mexicanos.

Hay dos comunidades fronterizas guatemaltecas a pocos kilómetros de sus contrapartes mexicanas, localizadas en el municipio La Democracia, en el departamento de Huehuetenango. Una de estas, a la que llamo El Girasol, es habitada por 120 familias, en su mayoría campesinos ladinos (no indígenas). Cerca de 80 familias de antiguos refugiados guatemaltecos reubicados, que se identifican con el grupo étnico mam, habitan la comunidad vecina, a la cual llamo Nueva Vida.

La mayoría de los habitantes de Nueva Vida son originarios de los altos de Huehuetenango, cerca de San Ildefonso Ixtahuacán; huyeron de las tácticas de tierra arrasada de la guerra de contrainsurgencia de 1980-1981. Después de residir en campamentos para refugiados en México por más de una década, comenzaron a buscar tierras para volver a Guatemala. Un grupo de refugiados encontró esta parcela cercana a la frontera que en su parecer les ofrecía mejor acceso al comercio, la tierra y la seguridad que sus propias comunidades de origen. Se establecieron allí en

⁸⁵ SEDESOL (2013).

1993, antes de los Acuerdos de Paz; fueron de los primeros refugiados en repatriarse a Guatemala. Simeón definió Nueva Vida como un caso de prueba, porque fueron algunos de los primeros en regresar. Relató que habían venido a Guatemala comisiones de derechos humanos y estaban observando, así que era importante cuidar que no tuvieran problemas. Aún había un puesto militar en El Girasol y algunos residentes no querían a los antiguos refugiados. Simeón relata: «No nos quisieron... Llegamos y decían que éramos guerrilleros, peleando... Pero después con tiempo... mejoró».

La ubicación fronteriza ofrecía varios beneficios. Les permitía a antiguos refugiados mantener conexiones que habían formado en México, así como un retorno a México relativamente simple en caso de reiniciar la violencia. Escuchaban historias de otros que habían participado en repatriaciones colectivas organizadas por el gobierno a tierras distantes y marginales, o quienes habían vuelto a sus comunidades de origen para encontrarse con la hostilidad de los que se habían quedado y que en muchos casos habían tomado sus tierras.⁸⁶ A Simeón le preocupaban las repatriaciones organizadas por el gobierno, ya que: «El gobierno... [con ayuda de] las organizaciones compraron la tierra, pero había que ir a donde decían». Sabía de personas que fueron enviadas a sitios en los que la tierra era menos arable y donde se sentían inseguros. El gobierno guatemalteco no les habría permitido asentarse en la frontera a través del proceso oficial de repatriación porque, como Simeón decía, ellos «temían la influencia subversiva. Así es que nos organizamos y nos presentamos como no guerrilleros... a pesar de que algunos de nosotros lo fuimos... no organizados de ese modo por izquierdistas, sino como personas que quieren vivir aquí tranquilos». Nueva Vida recibió ayuda de la Comisión Especial de Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR), el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), el Fondo para la Reinserción Laboral y Productiva de la Población Repatriada (FORELAP) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

⁸⁶ Rousseau, Morales y Foxen (2001); Manz (2004); Nolin (1999).

Adquirieron parcelas de tierra a través de FORELAP mediante un préstamo con pagos a diez años.⁸⁷

Los residentes de Nueva Vida, como sus compatriotas que se quedaron en México, también hicieron alusión a derechos, tierra y más libertad y oportunidades como las razones para decidir dónde establecerse tras la guerra, pero, en este caso, estas fueron razones para regresar a Guatemala. Como afirmó un residente: «[En Guatemala] tenemos derechos. En México casi no... solo podemos rentar tierras, o la gente tiene que comprar tierras a nombre de sus hijos porque no tienen derechos. Aquí [en Guatemala] sabemos que podemos comprar tierra... en el nombre de nosotros... y nadie puede quitárnosla». Se refiere al largo proceso de naturalización. A pesar de que México prometió proveer una vía para la naturalización en Chiapas en 1998, la mayoría de los residentes de La Maravilla recibieron sus documentos entre 2003 y 2005. La falta de documentos dejó a la gente en un limbo económico y político por años. Sin documentos, no podían adquirir tierras. En lugar de esto, los padres compraban la tierra a nombre de sus hijos nacidos en México. Algunos seguían luchando por transferir estos derechos. Muchos temían que los mexicanos les quitaran sus tierras. Había bases para estos temores; residentes de La Gloria (otra comunidad de antiguos refugiados naturalizados en Chiapas) reportaron haber tenido que comprar sus tierras tres veces. La tierra en Nueva Vida es una finca, la cual opera de modo similar a un ejido, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a ella y tal derecho se hereda a los hijos.

El Girasol, en contraste, está compuesto por parcelas de tenencia individual. Unos pocos individuos se identifican como mam, pero la mayoría se asumen como ladinos. La tierra perteneció previamente a un hombre quien la heredó a sus tres hijos y ellos a su vez comenzaron a vender parcelas en la década de 1980 durante la guerra. El último terreno fue comprado por Nueva Vida en 1993. Durante la guerra, los residentes de El Girasol siguieron las instrucciones de militares de participar en las patrullas de autodefensa civil. Ya que nunca fueron testigos

⁸⁷ Sobre el programa FORELAP que se usó para ayudar a los refugiados que regresaron a adquirir tierras, véase Worby (2001); Bradley (2013:111) .

de violencia o se encontraron con guerrilleros, muchos habitantes de El Girasol creyeron que el ejército los protegía. Sus puntos de vista contrastan con los de sus vecinos en Nueva Vida, quienes fueron testigos de la brutalidad del ejército en las Tierras Altas del Oeste. En un principio, las comunidades sospechaban una de la otra. Los residentes de Nueva Vida recuerdan a hombres jóvenes escondidos en los arbustos en El Girasol con máscaras para asustarlos. Cuando grupos de la sociedad civil realizaron talleres en Nueva Vida a mediados de la década de 1990 sobre los Acuerdos de Paz, la cultura maya, los derechos de las mujeres y derechos de los indígenas, los pobladores de El Girasol creían que las guerrillas les estaban lavando el cerebro. Con el tiempo, junto con la necesidad de colaborar no solo para establecer una escuela primaria conjunta, sino también para asegurar un clima estable para el comercio transfronterizo, las comunidades comenzaron a coexistir en relativa paz. Sin embargo, resurgen las diferencias sobre temas políticos y elecciones, de manera especialmente prominente durante la primera campaña en 2007 del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), un antiguo oficial militar durante la guerra de la contrainsurgencia y defensor las estrategias de «mano dura». Pedro, un residente anciano de Nueva Vida, temía que tuvieran que comenzar a realizar patrullajes en su comunidad, lo cual le hacía recordar las patrullas de la guerra civil. Los residentes de Nueva Vida señalaban a El Girasol como una base de apoyo para Pérez Molina. También hay muy pocos matrimonios entre las comunidades; es más probable que los jóvenes en El Girasol tengan cónyuges mexicanos y no de Nueva Vida.

En comparación con sus vecinos mexicanos, los residentes fronterizos guatemaltecos tienen menos tierra, y además esta es menos propicia para el cultivo debido a suelos rocosos. Muchos trabajan ya sea en plantaciones de café cercanas a la cabecera municipal de La Democracia y en la cercana Camojá, o bien rentan o trabajan tierras de sus vecinos mexicanos, como han hecho los habitantes de Huehuetenango por generaciones.⁸⁸ Algunos residentes en Nueva Vida están involucrados en

⁸⁸ Watanabe (1992); Guzmán (2004).

el negocio transfronterizo de maíz, pero la mayoría se mantiene en roles marginales, como el embarque de carga. Las diferencias de clase se han vuelto más evidentes en El Girasol, ya que muchos están involucrados como intermediarios en el negocio transfronterizo de maíz, y unos cuantos hombres han obtenido recientemente ganancias más sustanciales contrabandeando café y azúcar a través de la frontera.

Espacios etnonacionalistas tensos

Las preocupaciones de los Estados-nación acerca de los puntos de encuentro entre cultura, economía y geografía frecuentemente se expresan en las fronteras.⁸⁹ Las fronteras y los límites son integrales en la definición del Estado, aunque siempre amenazan con socavar su control. La mayor parte de los protagonistas en este libro ya no se identifican con entidades indígenas, pero ocupan tensos espacios etnonacionales en los que los Estados mexicano y guatemalteco han buscado asimilar, pacificar, marginar o extinguir a pueblos indígenas y poblaciones fronterizas. Simultáneamente, las poblaciones fronterizas han encontrado maneras creativas de moldear la frontera y sus relaciones desiguales en su propio beneficio.⁹⁰ Sin embargo, mientras la región se convierte geopolíticamente en un punto conflictivo para contener flujos ilícitos y favorecer la inversión transnacional, las narrativas de amenaza e ilegalidad que reflejan prejuicios políticos, económicos y raciales en la región resurgen con vigor renovado.

⁸⁹ Nevins (2002).

⁹⁰ Donnan y Wilson (1999); Martínez (1994).

2. Documentar la vida nacional

Sabes que Chiapas es solo [parte de México] porque fue comprado. Chiapas [era] de Guatemala. Ves [la palabra] chiapaneco y es parecida a la palabra chapín [guatemalteco].

AGENTE ADUANAL GUATEMALTECO

Rosa y Fani son mejores amigas. Ambas tienen diecinueve años y se preparan para presentar exámenes y convertirse en maestras. Viven en comunidades vecinas del lado guatemalteco de la frontera. Rosa vive en Nueva Vida, comunidad formada en 1993 por familias indígenas mam que regresaron a Guatemala después de vivir refugiadas en México. Fani y su familia han vivido durante generaciones en la comunidad vecina, El Girasol. Las chicas se destacan de sus compañeros por su deseo de seguir una educación universitaria. Ambas se ríen ante la perspectiva de casarse, prefieren jugar al baloncesto y continuar sus estudios. La madre de Rosa lleva su *corte* tradicional (falda indígena característica de su pueblo de origen, San Ildefonso Ixtahuacán), teje y es la presidenta del comité de mujeres de Nueva Vida. Rosa tiene *traje* (corte y huipil) pero no lo usa. Ella y su madre hablan mam, y su padre migró y trabaja en Florida. Fani es alta y delgada, y sus ojos tienen un tinte verde. Su padre, que trabaja como intermediario en el negocio transfronterizo de maíz, nació en México, pero fue criado en Guatemala por sus tías. El tío de Rosa fue asesinado en La Democracia, a principios de la década de 1980, por el ejército guatemalteco durante la guerra, lo que llevó a

su madre a huir a México. En contraste, el padre de Fani sirvió en las patrullas de autodefensa civil ordenadas por el ejército guatemalteco durante la guerra,¹ en la creencia de que estaba manteniendo la seguridad de su comunidad contra los insurgentes. Ambas chicas conocen sus tensas historias familiares, pero ven la guerra como parte de un pasado que no experimentaron directamente. No influye en su amistad.

Rosa nació en un campo de refugiados en Chiapas, México, y Fani en El Girasol, Guatemala. La madre de Rosa la trajo de regreso a Guatemala cuando era una niña pequeña. Ambas chicas poseen certificados de nacimiento mexicanos y guatemaltecos; cada uno de los documentos indica que nacieron en ese país. Me dicen que se identifican como «un poco mexicanas y un poco guatemaltecas». Votan solo en Guatemala, pero también debaten sobre la obtención de documentos de ciudadanía en México. Los hermanos de Rosa y Fani usaron sus certificados de nacimiento mexicanos, a pesar de vivir en Guatemala, para pasar más fácilmente a través de México y emigrar a los Estados Unidos. Aunque México y Guatemala ahora permiten la doble nacionalidad, cuando ellas nacieron no estaba permitido; tampoco, obviamente, es posible nacer en dos países simultáneamente. Un niño nacido en Guatemala de padres mexicanos tiene derecho a la nacionalidad mexicana debido a la nacionalidad de sus padres. Sin embargo, cuando el niño recibe un certificado de nacimiento mexicano, debe indicar la ubicación de su nacimiento y la nacionalidad de los padres. No debería decir que nacieron donde no estaban.

Una noche de mayo, mientras asistía a los bailes escolares del Día de la Madre en El Nance, México, vi a niños corriendo con disfraces de payasos y vaqueros en la cancha de baloncesto. Me sorprendió ver a Daniela de doce años posando con los payasos de quinto grado para mis fotos. Sabía que Daniela vivía en el lado guatemalteco

¹ El ejército guatemalteco creó patrullas obligatorias de civiles en cada comunidad para forzar a los hombres adultos a monitorear sus comunidades contra las guerrillas, efectivamente destruyendo formas locales de autoridad, cultura y solidaridad comunitarias (Montejo 1999; Manz 1988). Muchos residentes de El Girasol internalizaron la retórica del ejército de que «la patrulla permitiría a una comunidad protegerse de las guerrillas» (Montejo 1999:66; Manz 1988:38).

de la frontera. Le pregunté por qué estaba allí. Ella respondió que iba a la escuela en el lado mexicano: «También soy mexicana. Tengo papeles mexicanos. Entonces puedo asistir a la escuela aquí». Yo le pregunté: «¿Entonces tú naciste aquí en México?». Ella se rio: «Bueno, en realidad no. Nací en Estados Unidos. Pero mis padres me trajeron de vuelta cuando era bebé. Así que tengo las tres [nacionalidades]». La familia de su madre vive en el lado mexicano y la de su padre en Guatemala. Explicó cómo sus padres obtuvieron certificados de nacimiento para ella de los tres países a pesar de que viven en Guatemala. En cierto momento, sus padres también habían vivido en Santa Rosa, México. De hecho, han vivido en el cruce de tres países, lo cual ilustra las complejidades de la definición de nacionalidad. Al principio, la historia de Daniela me confundió: ¿tres nacionalidades? ¿Nacida en un país, viviendo en otro y asistiendo a la escuela en otro? Tratar de aclarar el historial migratorio de su familia era complicado, por decir lo menos. Y ella tampoco era la única. Había un puñado de niños que vivían en el lado guatemalteco que caminaban medio kilómetro cuesta abajo cada día, más allá de los monumentos blancos de la frontera, para asistir a la escuela en México.

Me di cuenta de la magnitud de las múltiples nacionalidades —individuos como Fani, Rosa y Daniela— cuando realicé una encuesta con estudiantes de quinto y sexto grado en ambos lados de la frontera sobre identidad nacional y étnica.² Cuando pregunté de dónde tenían certificados de nacimiento los estudiantes, me sorprendió que muchos niños tuvieran actas de nacimiento de México y Guatemala. Al principio pensé que quizás solo los niños de Nueva Vida tendrían dos certificados de nacimiento porque, como Rosa, muchos nacieron en México de padres guatemaltecos refugiados. Como hijos de guatemaltecos, sus padres pueden llevar el certificado de nacimiento del niño, junto con el suyo propio y otra forma de identificación, como una tarjeta de votación o

² El censo tenía como objetivo capturar las nociones de la juventud sobre la frontera y sus identidades étnicas y nacionales. Escogí niños de quinto y sexto grado, pero eran los mayores de quienes podría juntar muestras comparables en las comunidades fronterizas. Se obtuvo un consentimiento informado de los estudiantes, padres y maestros.

pasaporte, a la oficina del RENAP (Registro Nacional de las Personas) para registrar a sus hijos como guatemaltecos. Luego, el niño recibe un certificado de nacimiento guatemalteco que lo identifica como nacido en México de padres guatemaltecos. Se requiere traer los documentos de ambos padres si los dos están listados en el acta de nacimiento del niño, lo que significa que, dado el historial de guerra y huida, esto podría presentar una barrera.³

Muchos padres carecían de estos documentos o de acceso a información sobre este proceso. Acaso resultaba más fácil solicitar al municipio de Democracia nuevos certificados de nacimiento que confirmaran que los niños nacieron en Guatemala; quizás era más simple afirmar que los documentos originales se habían quemado con el edificio municipal durante la guerra que intentar adquirir la nacionalidad sobre la base de tener padres guatemaltecos; o tal vez, pensé, esta condición de múltiples nacionalidades también se aplicaba a los mexicanos naturalizados en La Maravilla, que podían haber conservado sus documentos guatemaltecos incluso después de naturalizarse. Me sorprendió encontrar múltiples nacionalidades no solo entre familias con historias de exilio, refugio, retorno y naturalización, sino también entre personas cuyas familias habían vivido en la frontera durante generaciones, como las de Fani y Daniela. Sus certificados de nacimiento no refrendaban que hubieran nacido en México de padres guatemaltecos o viceversa; cada uno afirmaba que habían nacido en ese país.

Los residentes fronterizos se han casado entre ellos y han buscado informalmente la doble nacionalidad para ellos y sus hijos durante generaciones, pero la situación de los refugiados acrecentó el problema de la doble nacionalidad, introdujo nuevos procesos y reveló fisuras en las asociaciones de residentes fronterizos entre nacionalidad, legalidad y etnicidad. En Guatemala se establecieron programas para redocumentar a los antiguos refugiados que habían abandonado y perdido sus documentos. Sin embargo, muchos, como la madre de Rosa, desconfiaban del gobierno y a su regreso optaron por registrar a sus hijos nacidos en

³ Consulado General de Guatemala en Denver, Colorado, Estados Unidos (comunicación personal con un empleado anónimo, 12 de agosto de 2016).

México como si hubieran nacido en Guatemala. En México, las agencias gubernamentales como la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) ayudaron a naturalizar a los antiguos guatemaltecos, lo cual introdujo un elemento oficial en un proceso históricamente informal. Debido a la dificultad que los extranjeros enfrentan a menudo cuando buscan naturalizarse en México, la asistencia a los refugiados provocó resentimiento entre muchos residentes de la frontera que durante mucho tiempo han tratado de naturalizar a sus cónyuges.

En la frontera, los documentos nacionales duales ayudan a las personas a cumplir con sus obligaciones diarias sociales, económicas y familiares que cruzan las fronteras. Residentes fronterizos desean múltiples documentos nacionales para que sus hijos tengan oportunidades en ambos lados, en lo que concierne a la capacidad de trabajar, vivir, casarse y viajar en cualquiera de los países (fotos 5 y 6). La nacionalidad mexicana ofrece a las personas más opciones si desean migrar a los Estados Unidos, lo que les permite pasar por los cada vez más numerosos puestos de vigilancia en México. Sin documentos en México, las personas no pueden casarse legalmente, aunque las relaciones románticas transfronterizas son comunes. Sin embargo, para los residentes de la frontera, las leyes relativas a la doble nacionalidad y al registro nacional son ambiguas en ambos países y no están bien supervisadas en la práctica. Se produjo una confusión adicional en la frontera cuando México enmendó su Ley de Nacionalidad para eliminar las restricciones que prohibían la doble nacionalidad en 1997 (la cual entró en vigencia en 1998), especialmente porque esto ocurrió en medio de los procesos de integración y naturalización de refugiados. Sin embargo, México realizó esta enmienda con el fin de apoyar a su numerosa población en los Estados Unidos.⁴ En lugar de permitir la búsqueda activa de la doble nacionalidad, que algunos diplomáticos y funcionarios temían podría llevar a una afluencia de centroamericanos,⁵ la reforma solo garantiza que los mexicanos por nacimiento no pierdan su nacionalidad de mexica-

⁴ Fitzgerald (2008:58).

⁵ Hoyos (2015:11) se basa aquí en Hubbard (2010:130-131).

nos,⁶ y que también la conserven aquellos mexicanos que se naturalicen en el extranjero y puedan recuperarla en caso de haberla perdido al naturalizarse en otro país.⁷ En contraste, la ciudadanía exclusiva todavía se aplica para quienes se convierten en mexicanos por naturalización.⁸ En 1996, Guatemala también comenzó a reconocer la doble nacionalidad, siempre que ambas nacionalidades no se ejerzan simultáneamente y que el otro país lo permita.⁹ Debido a los cambios recientes y a la falta de claridad en la forma en que se aplican, muchos residentes de la frontera no sabían si ellos y sus hijos podían tener la doble nacionalidad, ni cómo obtenerla. Lo que ocurre en la práctica, por tanto, tiene poca relación con la ley. Cuando hablé con una representante en el consulado de Guatemala en los Estados Unidos, ella hizo también referencia a la falta de claridad; al principio ella misma tampoco estaba segura si podría mantener su nacionalidad guatemalteca. Los residentes de la frontera sacan ventaja de la ilegibilidad de los procedimientos oficiales para obtener múltiples documentos nacionales a través de medios informales o ilegales que les permitan vivir sus vidas entre fronteras. Los documentos son auténticos, no falsos, aunque la gente los obtenga por un medio fuera de la ley.

Al centrarme en cómo los residentes navegan por la frontera y evalúan la adquisición de múltiples documentos nacionales,¹⁰ voy más allá de los supuestos reduccionistas sobre quebrantar la ley para examinar cómo esta no es neutral, sino que está influenciada por voluntades personales y prejuicios, diferencias de clase, ideologías nacionalistas, racismo y experiencias personales. Cuando traté de descifrar si era legal que

⁶ México también considera a los individuos de primera generación nacidos en el extranjero como mexicanos por nacimiento porque reconoce tanto el derecho a la nacionalidad *jus sanguinis* (derecho sanguíneo) como *jus soli* (derecho al suelo o nacionalidad por derecho) (Hoyo 2015:10-11).

⁷ Hoyo (2015:11).

⁸ No pueden obtener otra nacionalidad y prohibir el uso de su nacionalidad por nacimiento en México (Hoyo 2015:12).

⁹ Sarazúa (2016).

¹⁰ Sobre la navegación de múltiples nacionalidades en regiones fronterizas, véase Martínez (1994); Sahlins (1989). Sobre la manipulación de documentos véase Kelly (2006).

2. DOCUMENTAR LA VIDA NACIONAL



Fotos 5 y 6. Niños con doble nacionalidad (a) en su hogar mexicano con la bandera mexicana y (b) en la casa de sus abuelos en El Girasol, Guatemala, frente a la bandera guatemalteca. Estos niños tienen certificados de nacimiento tanto de México como de Guatemala (fuente: fotos de la autora).

los residentes de la frontera tuvieran doble nacionalidad y cómo podían obtenerla legalmente, me percaté de que centrarse en la ley distrae del asunto. En cambio, las necesidades de la vida cotidiana, así como la discreción individual, el poder y la política de los funcionarios estatales y los habitantes locales, determinaban cómo se aplicaba la ley y cómo se practicaba la doble nacionalidad.¹¹ Madeleine Reeves afirma que en Moscú las incertidumbres alrededor de la «autenticidad» de los documentos iluminan la política racial que anima a quien se considera un objetivo para el escrutinio y la sospecha.¹² A medida que los residentes fronterizos luchan por documentarse en dos países, producen irónicamente un «efecto estatal».¹³ Sus prácticas documentales funcionan para que surja el Estado como una idea y un objeto, lo que significa que el Estado-nación aparece como una entidad abstracta, poderosa y unitaria, incluso a veces ilegible, aunque técnicamente evaden los requisitos legales del Estado y revelan las tenues negociaciones que subyacen en los reclamos de los Estados por la integridad y la racionalidad territorial.¹⁴

Sentimiento cruzado

La identidad nacional es complicada en la frontera donde los individuos se encuentran y renegocian discursos nacionales contrapuestos en sus vidas diarias. Como lo explica Aída Hernández Castillo, «las identidades fronterizas confrontan no solo las tradiciones culturales, sino también la forma en que se define la tradición».¹⁵ Las tensiones entre pertenencia y exclusión que caracterizan las zonas de frontera, además del vacilante control fronterizo, contextualizan las estrategias que persiguen los residentes de la frontera para crear medios de vida que dependen de la frontera, la resisten y la remodelan.

¹¹ Véanse Ferme (2004); M. Reeves (2013).

¹² M. Reeves (2013:509).

¹³ Mitchell (1999).

¹⁴ Mitchell (1999:85, 89); M. Reeves (2014); Das y Poole (2004); Ferme (2004:82, 94).

¹⁵ Hernández Castillo (2001:6).

Alejados geográficamente de los centros de ambos Estados-nación y de sus normas culturales y lingüísticas dominantes, los mexicanos a menudo creen que los residentes fronterizos tienen más en común con Guatemala, mientras que los guatemaltecos del interior afirman que los guatemaltecos en la frontera son mexicanizados. Esto posiciona a los residentes de la frontera como «ni de aquí ni de allá»,¹⁶ incluso cuando se benefician de su capacidad para cruzar las fronteras. Rosa, quien nació en un campamento de refugiados mexicano de padres guatemaltecos y ahora vive en el lado guatemalteco de la frontera, me dijo que los guatemaltecos «dicen que somos mexicanos. En la escuela [en La Democracia] pedimos un *refresco* ya que vivimos cerca de México, y eso es lo que dicen en México. Pero la gente de La Democracia se ríe de nosotros y dice que somos mexicanos porque en Guatemala piden un *agua*». Los regionalismos (palabras utilizadas en la región) a veces cruzan la frontera, y a menudo no, diferenciando incluso a las personas que hablan el mismo idioma. Las necesidades de la vida cotidiana en la frontera dependen de la fluidez, el cruce y la manipulación de las identidades sociales y étnicas.¹⁷

Muchos residentes fronterizos expresan fuertes sentimientos nacionalistas, mientras que otros llevan consigo una noción fluida de pertenencia. Cuando le pregunté a Héctor, de setenta y cuatro años, residente de la frontera mexicana, si se sentía mexicano o guatemalteco, entrelazó sus dedos para argumentar que sentía como si la frontera cruzara su propio cuerpo. Respondió: «Me siento [de] los dos», y puso dos dedos muy juntos. Los padres de Héctor eran de Guatemala y todos sus hermanos nacieron allí. Después de que su padre murió, su madre embarazada cruzó la frontera en busca de oportunidades de trabajo y dio a luz a Héctor en México. Él relató: «La gente de toda la región fronteriza siempre ha estado viniendo de Guatemala». Un residente de la frontera

¹⁶ Sobre cómo «ni aquí ni allá» también caracteriza el drama de las madres en Los Ángeles, véase Hondagneu-Sotelo y Ávila (1997). Véanse Anzaldúa (1999); Martínez (1994:310).

¹⁷ Sobre la «versatilidad» que encarnan las poblaciones fronterizas, véase Martínez (1994:20)

me dijo que «estamos cruzados», lo que ejemplificaba sentimientos superpuestos de pertenencia tanto a México como a Guatemala. La noción de sentimiento cruzado se presta a múltiples interpretaciones, especialmente con respecto a las identidades que se cruzan en la frontera, incluidas las fronteras nacionales, éticas, religiosas, sociales y de clase.¹⁸ Los residentes de la frontera no se refieren a las múltiples interpretaciones posmodernas planteadas por la metáfora de la frontera.¹⁹ Estar cruzado se refiere a las exigencias de la vida cotidiana que abarcan las fronteras. Pueden sentir que pertenecen a dos países y simultáneamente experimentar exclusión de ambas naciones. Otros se identifican fuertemente con una nacionalidad, incluso cuando esta identificación está en constante tensión y relación con otra a través de la frontera. Se dan cuenta de que sus identidades y vidas fronterizas no pueden conceptualizarse ni realizarse sin considerar la imbricación de ambas nacionalidades en sus historias, genealogías y los aspectos prácticos de la vida cotidiana. Otro residente añadió: «Tengo una bandera guatemalteca en el lado derecho de la frente y una mexicana en el otro lado». Su amigo bromeó: «Y también una de Estados Unidos», refiriéndose a la cantidad de tiempo que había pasado allí.

Incluso cuando algunos residentes fronterizos se identifican con ambas naciones, otros apoyan firmemente la visión centrada en el Estado que asocia la identidad nacional exclusivamente con un territorio. Un residente de la frontera en México me preguntó: «¿Cómo alguien puede ser de dos lugares?». Él pensaba que no debía tener las dos «por respeto a su patria... no se puede de dos países». Sin embargo, incluso las personas que creen que sus identidades étnicas y nacionales están arraigadas en un territorio nacional cruzan las fronteras legales, nacionales, socioeconómicas y étnicas casi todos los días.

En la vida cotidiana, la frontera a menudo parece ser inexistente debido a la falta de una presencia oficial del Estado; sin embargo, politiza las acciones mundanas. Dependiendo de sus propias relaciones con los

¹⁸ De Vos (2002); Basail Rodríguez (2005); Hernández Castillo (2001); Rosaldo (2001:xi).

¹⁹ Véanse Anzaldúa (1999); Álvarez (1995); Heyman (1994); Rosaldo (1993[1989]).

funcionarios del Estado, los recursos y el conocimiento de los patrones policiales, los residentes son conscientes de cómo el simple hecho de visitar amigos en una comunidad vecina, casarse con alguien del otro lado de la frontera y llevar mercancías para venderlas puede verse a través de las lentes de la criminalización del contrabando y el cruce no autorizado de la frontera.²⁰ Regularmente brindé transporte a los residentes fronterizos dentro de esta ruta para visitar a mis amigos o asistir a fiestas, a menudo olvidando que cruzábamos la frontera geopolítica no monitoreada.²¹ Cuando mi amiga Francisca organizó en El Girasol, Guatemala, una fiesta de cumpleaños para su hijo, yo era chofer de sus amigos mexicanos que no tenían auto. Después de algunos meses en el campo, no lo pensé mucho para llevarlos a la casa de Francisca en El Girasol, Guatemala, y luego de regreso a sus hogares en Santa Rosa, México. Había aceptado como natural la inexistencia de la frontera, incluso cuando condicionaba inevitablemente una amplia gama de comercio extralegal. Conducirlos de esta manera habría sido arriesgado a mediados de la década de 1990, cuando los funcionarios monitoreaban esta ruta, lo que ilustra la contingencia y la construcción política de la ilegalidad, así como de la propia frontera. Si bien el límite mismo puede parecer intrascendente en lo cotidiano, en un clima cada vez más securitizado que eleva las recompensas provenientes del riesgo asociado con actividades ilegales, también es un recurso potencial que ha llevado a los residentes más conocedores a convertir el contrabando de mercancías a pequeña escala en negocios más grandes. Es lo que hace que sus negocios transfronterizos sean posibles, rentables y riesgosos.

A medida que la frontera México-Guatemala se vuelve cada vez más traicionera para los centroamericanos que cruzan debido a más puestos de control oficiales, corrupción oficial y la presencia de pandillas y cárteles de la droga, las redes de residentes de la frontera continúan brindándoles un grado de movilidad. Algunos residentes como Fani y Rosa tienen múltiples documentos nacionales que les permiten la libertad de

²⁰ Para un excelente relato procesal de las fronteras que examina cuándo y dónde las fronteras se vuelven pertinentes y socialmente significativas, véase M. Reeves (2014).

²¹ M. Reeves (2014).

movimiento, pero otros dependen del conocimiento fronterizo y de las relaciones con autoridades particulares.

Un automóvil no puede tener dos nacionalidades, pero una persona sí

Como me dijo un residente, «Vivimos en la frontera... somos fronterizos... nomás la línea [nos divide]». Se sentía como en casa en ambos lados. Las relaciones cotidianas sociales, económicas y de parentesco se extienden por la frontera. Por ejemplo, el uso de la moneda trasciende y complica la frontera. Los intermediarios de la frontera guatemalteca venden maíz mexicano a comerciantes guatemaltecos por pesos mexicanos, y las tiendas de ambos lados aceptan pesos y quetzales. Debido a que solo los teléfonos celulares guatemaltecos funcionan en ambos lados de la ruta fronteriza (los celulares mexicanos no tienen recepción ni siquiera en el lado mexicano), las mujeres venden tarjetas telefónicas guatemaltecas en quetzales en ambos lados. Las estaciones de televisión, cable y radio cruzan la frontera de manera compleja. La familia con la que viví tiene un teléfono fijo mexicano, pero todos tienen teléfonos celulares guatemaltecos. Los costos de llamarme a los Estados Unidos desde sus teléfonos celulares guatemaltecos eran en realidad más bajos que llamar a su propio teléfono fijo mexicano. Los residentes reciben servicio de televisión de México, cable de Guatemala y estaciones de radio de ambas naciones.

Aunque las oficinas de migración en el cruce fronterizo oficial cercano en Ciudad Cuauhtémoc, México, y La Mesilla, Guatemala, otorgan pases temporales locales gratuitos a los residentes fronterizos que viven entre Huehuetenango, Guatemala, y Comitán, Chiapas, para viajar hasta Comitán o Huehuetenango respectivamente, la mayoría de los residentes de la frontera no adquieren pases porque el puesto oficial está fuera del camino y conocen a la gente y la región. Pronto aprendí cuándo tenía que cruzar la frontera oficialmente y cuándo era una molestia similar a la que encontraban los residentes. Más allá de Comitán en México, los

residentes sabían que necesitaban un pasaporte, y que México era más estricto, pero un residente me dijo que los pases locales de Guatemala rara vez se hacían cumplir, argumentando que se podía llegar hasta El Salvador. Aunque crucé la frontera casi todos los días, solo tengo unos pocos sellos guatemaltecos en mi pasaporte, y son de antes de aprender cómo cruzar la frontera y de cuando hice excursiones más largas a la capital.

Más allá de Comitán, en México, y de Huehuetenango, en Guatemala, era donde los funcionarios generalmente empezaban a revisar los documentos.²² Las acusaciones de corrupción atribuidas a los agentes de migración son comunes. Los residentes argumentan que estos cobran por los pases fronterizos, aunque no deberían hacerlo. También experimenté el cumplimiento esporádico. A veces me cobraban al ingresar legalmente a Guatemala, y otras veces no. También hay un cargo de fumigación por las llantas de los vehículos al cruzar la frontera. Algunos residentes suponen que esto puede ser simple agua o aire. Los inspectores fronterizos cobran una tarifa por cruzar la frontera en un vehículo personal, con los cargos de fumigación, que generalmente ascienden a aproximadamente diez dólares. Sin embargo, las cuotas varían. El hermano de Fani es taxista. A pesar de que ocasionalmente brinda transporte a personas en el lado mexicano de la frontera, maneja principalmente en Guatemala porque solo tiene placas y licencia de Guatemala. Como también tiene nacionalidad mexicana, me dijo que podía gestionar una licencia mexicana, pero que necesitaría usar las placas en un auto diferente. «¿Entonces, un coche no puede tener dos nacionalidades, pero una persona puede?», pregunté. «Supongo que podría decirse eso», se rio, explicando que de lo contrario sería difícil para el país hacer un seguimiento del vehículo y registrar dónde entra y sale. Los residentes de la frontera guatemalteca generalmente buscan un aventón en un vehículo mexicano más allá de la ruta de frontera para evitar que las autoridades los detecten, porque los vehículos con matrícula extranjera se destacan más que las personas.

²² Esto cambió con la instalación de un puesto de control multiagencial CAITF (Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo) en La Trinitaria, que precederá a Comitán en 2015 (véase Capítulo 5).

Era relativamente sencillo cruzar incluso en la frontera oficial cercana entre Ciudad Cuauhtémoc, México, y La Mesilla, Guatemala. En ese tiempo nadie verificaba sistemáticamente que las personas pasaran por migración y recibieran los sellos correspondientes. Una vez me encontré con un autobús de turistas estadounidenses confundidos, que no sabían que cuando el transporte guatemalteco los dejó en la frontera, deberían verificar con la migración guatemalteca y registrarse con la migración mexicana antes de abordar una combi mexicana a su siguiente destino. Uno podría subir fácilmente a la siguiente camioneta sin registrarse en ninguna de las oficinas. Sin embargo, México ha implementado más puestos internos de control, incluidos los de inspección de aduanas e inmigración en todo Chiapas, así como puestos de control móviles, de aduanas e inmigración, que aparecen, desaparecen y reaparecen sin previo aviso. Los cruces fronterizos oficiales de México con Guatemala pueden ser relativamente porosos, pero México ha reforzado la seguridad en los «cinturones de control» a lo largo de las rutas de carreteras estratégicas, para reducir los flujos no autorizados.²³

En este contexto, los residentes de la frontera guatemalteca utilizan conexiones personales para cruzar la frontera. Durante las vacaciones de Semana Santa, Francisca (de El Girasol, Guatemala) me invitó a ir con su familia a los lagos de Colón, cerca de Chamic, México. Tendríamos que recorrer una parte mexicana de la carretera Panamericana para llegar allí. Una vez que los residentes guatemaltecos salen de la carretera fronteriza a la carretera mexicana, a menudo desconfían de viajar. Usualmente, Francisca, cuando necesitaba viajar por la autopista mexicana para comprar en las cercanías de Las Champas o Frontera Comalapa, le pedía a un residente de la frontera mexicana que la llevara. Cuando subí a la camioneta guatemalteca de su hijo, comencé a preocuparme. Me ofrecí a llevarlos porque mi auto tenía una matrícula mexicana. Francisca, la misma mujer que me contó cómo los funcionarios mexicanos, que estaban estacionados de manera intermitente en la ruta fronteriza desde la década de 1960 hasta la década de 1990, solían confiscar incluso un

²³ Isacson, Meyer y Morales (2014).

paquete de galletas si cruzabas la frontera con ellas, desechó mis preocupaciones. Me explicó que los funcionarios eran indulgentes durante las vacaciones. Sabían que la gente solo iba a pasear. Si no, sabía que podía hablar con quien estuviera patrullando el punto de control en Chamic. Francisca conocía a Rigo, el hombre de El Nance que trabajaba para migración. Dijo que él estaba estacionado a menudo en Chamic. «Todos lo conocen. Si no está allí, mencionamos su nombre y los funcionarios lo entenderán. Explicamos que somos de [la frontera] y que solo vamos al lago». Nuestro auto nunca fue detenido durante aquella salida.

En contraste, cuando visité una oficina de migración en Comitán conocí a tres mujeres detenidas del interior guatemalteco. Se quejaron de su detención; estaban esperando la deportación por sospecha de intentar emigrar a los Estados Unidos, pero ellas solo querían ir de compras. Una de ellas comentó: «Fue una tontería... no supimos..., ojalá lo supiéramos para conseguir un pase [de frontera]... Pero [los agentes] no nos dejaron volver por nuestra cuenta y nos llevaron aquí [a la detención]. [Explicamos que fue un] error inocente, pero no lo entendieron y nos encerraron así». Al carecer de redes fronterizas como Francisca, estas mujeres no sabían que las inspecciones interiores se habían vuelto más estrictas y que requerían un pase.

También aprendí a navegar por la frontera, al tiempo que reconocía cómo mi raza y mi ciudadanía proporcionaban una capa de protección y privilegio de la que carecían mis informantes. Aun así, me revisaron de manera rutinaria en la base militar mexicana cerca del cruce de la frontera, donde los soldados con frecuencia levantaban puntos temporales de inspección para los autos que venían de Guatemala y del mercado en La Mesilla. En contraste, vi pasar tranquilamente sin ser detenidos a residentes que yo sabía que estaban contrabandeando café. Los turistas extranjeros a menudo son sospechosos de transportar drogas; La Mesilla es un cruce turístico muy popular.

En la brecha entre la frontera geopolítica y la obligatoria (por ejemplo, en Comitán), la posesión de múltiples documentos nacionales y los recursos sociales, políticos y económicos que tienen los fronterizos son críticos. Quienes no tienen capital fronterizo ni pueden demostrar en

forma convincente su pertenencia,²⁴ como migrantes de lejos, o quienes parecen ser indígenas y, por lo tanto, estar fuera de lugar, son más vulnerables a autoridades corruptas e inconsistentes, a puntos de control impredecibles, a delincuentes y pandillas.

La vida de los documentos

Una mujer en El Nance, México, afirmó que si uno no tiene papeles, no tiene ninguna garantía de vida; «con papeles uno está más seguro». El documento en sí mismo viene a significar, y se separa de lo que supelementalmente representa, el tener en sí mismo un poder cuya inestabilidad genera la posibilidad de falsificación.²⁵ El documento falsificado, o el documento real obtenido por medios extralegales, se utiliza para señalar la pertenencia nacional. Sin embargo, también revela lo que Veena Das denomina la «ilegibilidad» del poder estatal en los márgenes, ya que la «ilegibilidad de las reglas y regulaciones del Estado» es lo que permite la falsificación y hace que el Estado se sienta inquietantemente presente incluso cuando está ausente o socavado.²⁶ El Estado y la ley se sienten ausentes para los residentes fronterizos que no tienen acceso a los procesos oficiales para obtener documentos nacionales, al tiempo que al residir en los márgenes estos documentos son aún más vitales. Para los habitantes de la frontera rural, alejados de los centros de poder del gobierno, lidiar con la burocracia no solo es arduo sino también incierto y, a menudo, estigmatizante.²⁷ Daniel Goldstein se refiere a esta «presencia ausente» simultánea del Estado como el «Estado fantasma», según el cual las reglas del Estado y las leyes existen, pero rara vez se materializan.²⁸

²⁴ Sobre aprender cómo «ser residente» y la legalidad véase Reeves (2013:515).

²⁵ Das (2007:162-163); Kelly (2006:90); Gordillo (2006); Benjamin (1986); Ferguson (2006); Comaroff y Comaroff (2006).

²⁶ Das (2007:168, 172).

²⁷ Goldstein (2012:98).

²⁸ Goldstein (2012:83), basado en Abrams (1988[1977]), sobre el Estado como una «ilusión» o una «máscara» para esconder las dinámicas de poder; Das (2007:162, 166-167) argumenta que el Estado «oscila entre una forma de ser racional y una mágica».

El poder del Estado también se siente, y se hace realidad, a través de sus manifestaciones más mágicas o inquietantes, generadas por esta presencia ausente y las prácticas cotidianas de rumores, burlas y mimetismo.²⁹ La búsqueda incierta de documentos reproduce la interrelación de las fronteras y el Estado, y puede extender la inseguridad y la sospecha; sin embargo, también proporciona espacio para que las personas diseñen alternativas y «adopten las apariencias de legalidad mientras carecen de la verdadera aprobación de la ley».³⁰

Obtener documentos nacionales de México y Guatemala es ideal para participar en la vida transfronteriza. Sin embargo, el poder del documento rutinariamente no se mantiene debido a los inestables fundamentos y relaciones de poder que sustentan incluso el documento legal. El documento, real o falso, siempre está sujeto a quienes lo leen e interpretan.³¹ En el lado mexicano de la frontera, los documentos y los argumentos sobre lo que representan están mediados a través de etnicidad, clase y política para ubicar a las personas y determinar su pertenencia. Para que los documentos funcionen, los habitantes de la frontera y los migrantes se esfuerzan en desempeñar los guiones raciales y nacionales que representan para los funcionarios y los demás, mientras que los funcionarios de migración conservan la discrecionalidad de interrumpir sus requerimientos.³²

Las actitudes oficiales mexicanas y guatemaltecas hacia la identidad nacional representan cualquier cosa menos la fluidez que caracteriza la vida en la frontera. En México, el cambio con respecto a la doble nacionalidad estaba destinado a permitir que los mexicanos que viven en los Estados Unidos invirtieran y compraran propiedades en su tierra natal y que la nacionalidad mexicana por nacimiento fuera permanente.³³ No se tenía en mente a quienes habitan la frontera Mé-

²⁹ Das (2007:166, 162). Véase Aretxaga (2003); M. Reeves (2014).

³⁰ Goldstein (2012:98); M. Reeves (2013:520); véase también Das y Poole (2004); Ferme (2004).

³¹ Das (2007:178); M. Reeves (2013); Kelly (2006:92).

³² Véase M. Reeves (2013:517); Brigden (2016).

³³ Fitzgerald (2008); Hoyo (2015).

xico-Guatemala, que viven sus vidas cotidianas entre dos naciones. A pesar de que Guatemala permite la doble nacionalidad, la mayoría de los residentes de la frontera desconocen o carecen de los recursos y la información para obtenerla para sus hijos. Los funcionarios de migración me informaron que uno primero necesita obtener un pasaporte, un complejo proceso burocrático que involucra tarifas que la mayoría de los residentes de la frontera no pueden pagar, así como documentos que pueden no tener, además de viajes a la Ciudad de Guatemala, que en autobús son de siete a ocho horas desde la frontera. El consulado de Guatemala, en contraste, me dijo que los padres guatemaltecos pueden registrar a un niño nacido en México en cualquier oficina de RENAP, incluida una en Huehuetenango, y que puede usarse una tarjeta de votación en lugar del pasaporte. Alejados política, económica y geográficamente de los centros nacionales y regionales, los residentes de la frontera mexicana y guatemalteca carecen de acceso y conocimientos sobre la nacionalidad dual oficial y los procedimientos de registro nacional para los niños cuyos padres son de nacionalidades mixtas.

La pertenencia se complica incluso más en la frontera debido a un entendimiento que yo llamo *ciudadanía fronteriza*, que describe cómo quienes viven en esta ruta fronteriza afirman que el derecho a trabajar en la economía local de contrabando y el cobro de impuestos a los negociantes se fundamenta en residir en la zona. En ocasiones, la identidad nacional se superpone o compite con los sentimientos de pertenencia a la frontera. Las personas con mayor capacidad de capitalizar y realizar efectivamente las múltiples formas de pertenencia —nacional y fronteriza— tienen el mayor capital económico, social y político. En efecto, la residencia a largo plazo en la frontera y las narrativas que fusionan nacionalidad, política y etnicidad, independientemente de los documentos que tengan, determinan quién puede hacer valer ciertos derechos, reclamos y recursos.

El trato a los exrefugiados indígenas en la región fronteriza es un ejemplo de la política regional de nacionalidad, raza y etnicidad. Los mexicanos de las zonas fronterizas, quienes históricamente contaban con identidades elásticas, comenzaron a defender con firmeza sus

identidades mexicanas luego de que los flujos masivos de refugiados guatemaltecos en la década de 1980 comenzaran a convertir la región fronteriza en un escenario de seguridad.³⁴ A pesar de sus documentos legales, muchos residentes mexicanos de larga data rechazan que los residentes de La Maravilla, que son exrefugiados de Guatemala, pertenezcan a la frontera. Las otras dos comunidades fronterizas mexicanas prohíben que La Maravilla cobre impuestos por comercio transfronterizo. Justifican esta exclusión argumentando que, debido a que los residentes de La Maravilla llegaron en el año 2000, no contribuyeron a la construcción de la carretera fronteriza en la década de 1980 y, por lo tanto, no tienen derecho a sus ganancias. Algunos vecinos mexicanos, basados en sentimientos políticos derivados de la guerra de Guatemala en la década de 1980, dudan de la integridad moral de los exrefugiados. Lorenzo, residente en la frontera de México, afirmó que los exrefugiados no merecían derechos. Afirmó: «Guerrilleros esos, son de Guatemala. Los subversivos vinieron aquí. Ahora sus hijos, sí, son mexicanos, pero ellos [sus padres] son refugiados». Pregunté: «¿Pero no se naturalizaron y ahora tienen documentos?» «No lo creo —continuó—, y si tienen [documentos], no son como los nuestros. Es diferente. ¿Alguno de ellos le ha mostrado [sus documentos]? No es tan fácil [naturalizarse]». La política de guerra y la escasez de tierras, junto con los recientes asentamientos, hacen que los residentes de La Maravilla sean ciudadanos de segunda clase y provocan la verificación de sus documentos. México también interpone muchas limitaciones a los derechos de los ciudadanos naturalizados. La mayoría de las democracias liberales garantizan los mismos derechos políticos tanto a los nacidos en el país como a los que se naturalizan, excepto que muchas sí reservan ciertos derechos para cargos selectos de gobierno e inteligencia de alto nivel.³⁵ Sin embargo, en México, los mexicanos a través de la naturalización no pueden ocupar una amplia variedad de puestos que abarcan las ramas del gobierno y no pueden tener otra nacionalidad, en contraste con los mexicanos por nacimiento.

³⁴ Véanse Hernández (1992); Fábregas (1996); Cruz (1998).

³⁵ Hoyo (2016:108).

En la frontera, sin embargo, hay muchos guatemaltecos que han vivido en México con sus parejas y familias mexicanas durante décadas. El hijo de Lorenzo se ha unido con una mujer guatemalteca que no ha podido naturalizarse durante ocho años. Él preguntó: «Si fuera tan fácil, ¿por qué no arregla ella? Ella no entró como subversiva escondida en el monte... no estaba huyendo... entró casada». Muchas de estas personas carecen de los documentos de ciudadanía mexicana que los antiguos refugiados poseen. Sin embargo, su residencia a largo plazo y sus conexiones socioeconómicas y políticas les permiten no solo tener acceso a recursos, sino también afirmar que tienen más derecho a ser mexicanos que los antiguos refugiados, a quienes algunos residentes de la frontera mexicana siguen llamando guatemaltecos o refugiados.³⁶ Los sistemas de pertenencia nacionales y fronterizos a menudo se contraponen, fomentando una dinámica en la que los documentos oficiales permiten a las personas reclamar derechos de identidad y ciudadanía nacionales, pero las jerarquías locales de política, etnicidad y clase determinan cómo se pueden cumplir los derechos y cuáles son los efectos materiales.

México ofreció un camino hacia la naturalización en Chiapas en 1998 para los exrefugiados que deseaban permanecer. Debido a que México no permite que aquellos que se naturalizan conserven su nacionalidad de origen, y Guatemala permite la doble nacionalidad excepto cuando el país al que se naturalizan lo prohíba, los refugiados que se naturalizaron legalmente no podían retener la nacionalidad guatemalteca.³⁷ Sin embargo, muchos conservaron sus documentos, en caso de no haberlos perdido durante la guerra o en el periodo de refugiados. Estos documentos fueron útiles porque muchas personas todavía poseían tierras y tenían familia en Guatemala. Como relató un residente de La Maravilla, «COMAR nunca nos dijo que no podíamos tener las dos». Aunque mucha gente entregó sus documentos de Guatemala, «nadie vino a recogerlos». Actualmente, casi todos³⁸ los habitantes de La Maravilla poseen

³⁶ Sobre estas etiquetas, véase Montejo (1999).

³⁷ Hoyo (2015); Sarazúa (2016).

³⁸ Algunos residentes todavía carecen de documentos porque se perdieron la oportunidad de procesar sus formularios mientras estaban en los Estados Unidos.

documentos oficiales mexicanos, pero se dieron cuenta de que tenían pocas garantías de derechos económicos, culturales y sociales en México. Una vez que recibieron los documentos, los mexicanos naturalizados fueron dejados a su suerte cuando la COMAR se retiró. Siguen careciendo de un acceso adecuado al agua, drenaje y tierras cultivables. Sus hijos asisten a escuelas que solo enseñan cultura e historia mexicanas.³⁹ Hay pocas oportunidades para enseñar a las generaciones más jóvenes sobre Guatemala, la guerra y las dificultades que soportaron, así como sobre su cultura e idioma mam. Hasta hace poco, México no reconocía oficialmente a los mam como un grupo étnico mexicano.⁴⁰

A medida que la comunidad de La Maravilla crece, muchos se preocupan de que no habrá suficiente tierra para que sus hijos construyan casas. Carecen de tierra para trabajar y hasta para enterrar a sus muertos. Como dijo Mariana, de La Maravilla: «Primero, necesitamos tierra... No hay suficiente agua ni dinero para comprar más terreno... Nosotros no tenemos nada. Ahora buscamos dónde o cómo comprar un terreno para... enterrar [a nuestros muertos]». Antes los enterraban en Santa Rosa, pero ahora la colonia les dice que ya no hay lugar, «ya no se puede». «¿Y entonces qué van a hacer con los muertos?». «Tirarlos», bromeó ella con una media sonrisa.

El acceso al programa Oportunidades (ahora Prospera) de ayuda del gobierno mexicano es otro servicio del que carecieron los de La Maravilla hasta hace unos años. El programa proporciona transferencias de efectivo condicionales a las familias para ayudar a pagar la educación de sus hijos y tiene como objetivo implementar programas de salud pública; a cambio, las madres deben asistir a charlas de salud, participar en talleres y asegurarse de que sus hijos asistan regularmente a la escuela y a visitas médicas.⁴¹ Cuando una mujer en La Maravilla finalmente descubrió a dónde acudir para hablar con el director de la institución gubernamental correspondiente en Tuxtla Gutiérrez para llevar Oportunidades a su comunidad (maniobrando un complejo entramado burocrático), supo

³⁹ Véase Ludy (1998).

⁴⁰ Véase Hernández Castillo (2001).

⁴¹ Véase Molyneux (2006).

que los funcionarios ni siquiera sabían que aquella comunidad existía y no la tenían en su mapa. En términos de acceso a los servicios, ellos no existían.

A pesar de su posición marginal, los habitantes de La Maravilla poseen documentos oficiales mexicanos que exhiben con orgullo. Cuando les pregunté si se identificaban como mexicanos o guatemaltecos, se apresuraban a mostrarme sus credenciales de elector mexicanas. Los documentos les permiten tratar de afirmar cierta superioridad sobre los mexicanos vecinos, quienes cuestionaron sus reclamos de nacionalidad y documentos. Como dijo un hombre en La Maravilla, «Con el papel ya no nos dicen refugiados... Ahorita [los vecinos mexicanos] nos tratan como mexicanos ya». Refiriéndose a la dificultad de adquirir documentos y la nacionalidad mixta de muchos residentes fronterizos antiguos, tanto «nuevos mexicanos» como algunos de sus vecinos están de acuerdo en que muchos de «los nuevos mexicanos son más mexicanos [que los mexicanos]». «¡Tenemos papeles, mientras que muchas de sus esposas [mexicanas de la frontera] no los tienen!», exclamó un nuevo mexicano. Los papeles, en este sentido, representan y legitiman los reclamos de pertenencia nacional, incluso cuando los exrefugiados permanecen excluidos material y simbólicamente.

Debido a que el proceso de naturalización de los exrefugiados ocurrió entre 1998 y 2005, en medio de la aceptación de la doble nacionalidad en México, muchas personas (incluidos empleados del gobierno y autoridades consulares con las que hablé) no estaban seguras sobre si los antiguos refugiados podían conservar ambas nacionalidades una vez que se naturalizaran en México. Un exfuncionario de la COMAR pensaba que los antiguos refugiados debieron renunciar a su ciudadanía guatemalteca, pero nadie los obligó a devolver sus documentos anteriores. México requiere que aquellos que se conviertan en mexicanos por naturalización tengan solo una nacionalidad.⁴² Pero Guatemala mantiene un sistema de ciudadanía inactiva, que permite a los guatemaltecos por nacimiento que perdieron su nacionalidad al naturalizarse (esto era requerido por Mé-

⁴² Hoyo (2015).

xico) regresar y recuperarla.⁴³ Por lo tanto, hubo confusión debido a las restricciones previas a la doble nacionalidad, a las normas nacionales en conflicto, a la prevalencia de información errónea y a la incapacidad de monitorear las acciones de manera efectiva a través de las fronteras. Para la mayoría de los residentes de La Maravilla esto no era un problema, porque habían perdido sus documentos guatemaltecos durante la guerra y el periodo de refugiados. Muchos exrefugiados, como Carlos, rechazaron a Guatemala; él me dijo: «Ya no Guatemala. Me costó mucho salir». Carlos salió de Guatemala por el miedo y la violencia. Luego decidió que no quería volver. Tenía miedo de que la guerra se repitiera.

Sin embargo, a pesar de que Carlos rechazó a Guatemala, retuvo sus documentos guatemaltecos. Todavía era propietario de tierras en Guatemala y quería poder venderlas.⁴⁴ Al tener dichos documentos también puede visitar a su familia en Guatemala con mayor facilidad. Aunque muchos rechazan en teoría a Guatemala, valoran conservar sus documentos.

No obstante, las ambigüedades de la doble nacionalidad no se aplican solo a los exrefugiados, sino también a muchos residentes fronterizos de toda la vida. Los estrechos vínculos familiares, sociales y económicos históricamente han vuelto comunes las relaciones románticas transfronterizas, y reproducen el concepto fluido de pertenencia transfronteriza. Los individuos expertos en negociar entre las ambigüedades pueden obtener beneficios de ambas naciones. Algunos pueden evitar la vigilancia de las dos naciones y sus intentos de manejar poblaciones a través de prácticas de documentación y enumeración.⁴⁵ Sin embargo, otros se quedan en las brechas.

Cuando conocí a Pedro, de setenta y cinco años, supe que nació en La Democracia, Guatemala, pero que había pasado la mayor parte de su vida en Santa Rosa, México. Le hice una pregunta que les había hecho

⁴³ Hoyo (comunicación personal, agosto 18 de 2016); Sarazúa (2016:11).

⁴⁴ Manz (2004); Egan (1999) y Rousseau, Morales y Foxen (2001) documentan las tensiones que experimentaron los refugiados cuando regresaron debido a que los militares habían dado muchas de sus tierras a aquellos que colaboraron con ellos.

⁴⁵ Véase Foucault (1990).

a muchos residentes de la frontera: «¿Te sientes mexicano o guatemalteco?». Su respuesta me sorprendió:

Ninguno de los dos. Ni de México ni de Guatemala me siento. Ya murieron los papeles. [No tengo] una acta de nacimiento de ninguno de los dos países. Pero me identifico más como mexicano que como guatemalteco ya que crecí aquí, y [cuando lleguen mis] papeles, seré reconocido como mexicano por el gobierno.

Después de conocer a muchas personas con dos y tres certificados de nacimiento, me sorprendió escuchar que Pedro había estado viviendo en México durante cincuenta y nueve años sin acta de nacimiento, lo que lo hacía sentir como si no perteneciera a ninguna parte. Se identificó como un mexicano con raíces y familia guatemaltecas, pero la falta de documentos dio forma a sus sentimientos de exclusión. Si bien muchas personas capitalizan la residencia en la frontera y las redes para adquirir múltiples documentos y de ese modo hacer valer estratégicamente varias identidades, aprendí que en los intersticios fluctuantes de la frontera era tan posible no tener documentos como tener múltiples. Siguiendo el caso de Pedro.

Nació en 1934 en La Democracia [Guatemala]. Pero su madre lo trajo a Santa Rosa, México, cuando era niño. Llegaron a vivir allí porque su padrastro era de Santa Rosa y quería que ellos vivieran con él. Su madre se naturalizó en México porque su padrastro la ayudó. Pero no le consiguió papeles a Pedro, aunque podría haberlo hecho. Nunca le ayudó. Todos sus hermanos tienen papeles desde que nacieron en México. Su madre y su padrastro están muertos, así que ya no pueden ayudarlo a conseguir sus papeles mexicanos. En aquellos días era más fácil conseguir documentos, pero ahora no. Él tampoco tiene un certificado de nacimiento de Guatemala. Después de dejar La Democracia, el municipio se quemó durante la guerra, y muchos documentos fueron destruidos. Sin embargo, Pedro no ha renunciado a Guatemala. Tiene una tarjeta de voto guatemalteca, pero no la usa porque espera conseguir papeles mexicanos. Pensaba que probablemente podría usarla si quisiera en

Guatemala y solicitar un nuevo certificado de nacimiento, pero ya no quería estar en Guatemala. Irónicamente, tiene una credencial de elector en México desde antes de que esto fuera más fácil. Ahora se necesita un certificado de nacimiento o prueba de naturalización para obtenerla. Con su credencial, él puede votar y comprar tierras, pero realmente se necesita un acta de nacimiento para muchas cosas, como si quiere viajar más lejos en México. Estaba solicitando documentos mexicanos en Tapachula. Ha estado dos o tres veces. Lleva mucho tiempo. Y se lamentó: «nadie ayuda». Antes las autoridades locales daban credenciales en el municipio; ahora, explicó, «piden muchos más papeles».

Los papeles adquieren vida propia para Pedro y le dan forma a su comprensión de su propia pertenencia, mientras que la búsqueda de papeles en sí misma hace que el Estado y su poder sobre su (in)movilidad diaria se manifiesten incluso a través de su ausencia en la frontera.⁴⁶

Pedro distingue entre una credencial de voto (cédula, y ahora Documento Personal de Identificación, o DPI⁴⁷) en Guatemala y credencial para votar, credencial de elector o INE⁴⁸ en México) y un acta de nacimiento. Un acta simboliza un reclamo de nacionalidad, pero tener una credencial de elector o una cédula/DPI es necesario para que las personas ejerzan su ciudadanía a los dieciocho años al permitirles votar, obtener empleos en el sector formal, participar en el servicio militar y tener acceso a los beneficios estatales. Un certificado de nacimiento es útil para las personas que buscan viajar más al norte de Comitán. En Frontera Comalapa se ha desarrollado un próspero negocio en la falsificación de actas de nacimiento para migrantes centroamericanos. Héctor me dijo que ahí puedes comprar cualquier documento que quieras. En México se requiere prueba de nacionalidad en forma de certificado de nacimiento o documento de naturalización (además de la prueba de domicilio y una identificación con foto) para solicitar una credencial de

⁴⁶ Véase Das y Poole (2004); Das (2007); Goldstein (2012).

⁴⁷ Desde 2013, el Documento Personal de Identificación (DPI) reemplazó la cédula (*Latino News* 2012).

⁴⁸ INE son las siglas del Instituto Nacional Electoral y es comúnmente usada para referirse a la credencial de elector. El INE se llamaba antes IFE (Instituto Federal Electoral).

elector a los dieciocho años. Sin embargo, Pedro pudo conseguir una sin tener evidencia de nacionalidad.

Mientras que algunos residentes de la frontera aprovechan esa situación para ostentar múltiples nacionalidades, otros, como Pedro, luchan por un lugar al cual llamar hogar. Un día conocí a Miguel, un residente de la frontera guatemalteca de veintiocho años, en camino a una fiesta en Santa Rosa, México. Me dijo que hacía cuarenta años gran parte de su familia se había mudado a México; tiene muchos familiares y amigos en la región fronteriza mexicana. Su madre huyó de la violencia en Guatemala a principios de la década de 1980 hacia los Estados Unidos, cuando su hermano y Miguel eran pequeños. Vivió en ese país durante quince años y lo considera su hogar. Era un excelente jugador de fútbol y estaba siendo reclutado por la Universidad de Duke, pero no pudo tomar la oportunidad por no contar con la ciudadanía. Fue deportado en 2004. Cuando le pregunté si era indígena, él respondió que no estaba seguro y que pensaba que probablemente no, ya que ninguno de sus parientes hablaba mam, aunque no descartó que probablemente algunos lo hicieran en algún momento. Añadió: «No sé lo que soy».

En contraste, Ramón, residente de Santa Rosa, México, obtuvo múltiples nacionalidades para él y sus hijos por medios distintos del proceso oficial. Nació y creció en la comunidad fronteriza guatemalteca de El Girasol. Tiene familia en el lado mexicano y con frecuencia iba allí por trabajo, torneos de fútbol y fiestas. En una fiesta conoció a Laura, de Santa Rosa, México, y se enamoraron. Y optó por mudarse a México con ella, en busca de mayores oportunidades económicas. Al principio no podía comprar tierras debido a la falta de ciudadanía. Por suerte, un amigo suyo era el vicepresidente de la comunidad en Santa Rosa, y autorizó y testificó que Ramón había nacido en México para que pudiera gestionar un certificado de nacimiento en el municipio de Frontera Comalapa, aprovechando un procedimiento mexicano que otorga la ciudadanía improvisada a aquellas personas nacidas en México pero que no hubieran sido registradas. La baja inscripción de nacimientos es común en muchas áreas pobres del país.⁴⁹ Más de siete millones de mexicanos

⁴⁹ Asencio (2012).

no tienen acta de nacimiento; Chiapas es el estado con el nivel más bajo de registros de nacimientos con menos de la mitad de la población inscrita a partir de 2009.⁵⁰ Autoridades comunitarias establecen conexiones entre individuos y el Estado al proporcionar al municipio documentos de ventas de tierras y ganado, nacimientos, defunciones y matrimonios. La adquisición informal de documentos de nacimiento fabricados depende de pequeños sobornos, la amistad y la disposición de la autoridad de la comunidad. En contraste, el vicepresidente actual de la comunidad afirma que tales acciones constituyen «corrupción ilegal». En los últimos años estas prácticas se han vuelto menos comunes.

A pesar de haber obtenido su certificado de nacimiento mexicano por medios fuera de la ley, el documento de Ramón es real (no es falso), figura en el registro municipal y le permite votar en México. Cuando él y su esposa tuvieron a sus tres hijos, los registraron como nacidos en Guatemala y también en México, por si decidían vivir de un lado o del otro. Ramón también tiene documentos que certifican que nació en ambos países. Algunos residentes mexicanos se quejan cuando personas como Ramón votan en elecciones en ambos lados de la frontera, pero él aparece legalmente en los dos registros con la documentación de respaldo.

Ramón se identifica como mexicano, pero la forma en que lo juzgan sus compañeros mexicanos y guatemaltecos refleja cómo puede adoptar su doble identidad. Una tarde, mientras hablaba con un grupo de hombres en El Nance, México, vimos a Ramón pasar por ahí. Lo saludé, gritando, «Hola Ramón». Uno de los hombres se rio y dijo que su verdadero nombre era Panchito [apodo o diminutivo de Francisco], pero prefería el nombre de Ramón. Me dijo: «Él es guatemalteco, es de Guatemala, pero aquí cambió su nombre cuando sacó sus papeles aquí». Subrayó que Ramón vive en México ahora, pero «es de allá». Un comerciante de maíz de la ciudad natal de Ramón, El Girasol, donde todavía viven sus padres, comentaba que creció con Panchito y era su apodo en Guatemala. Pero, «Ahora no lo quería [este nombre] cuando se fue a México. Ahora se pone bravo cuando la gente lo llama así». Algunos residentes cuestionan

⁵⁰ Asencio (2012).

el método por el cual Ramón obtuvo los documentos, lo que los lleva a deslegitimar sus pretensiones en México. Otros, sin embargo, validan su doble nacionalidad basándose en el hecho de que su padre nació en México, aunque fue llevado a Guatemala cuando era niño, y su madre nació en Guatemala. Tiene derecho a la nacionalidad mexicana, aunque no de la manera en que la obtuvo.

Los matrimonios transfronterizos, como el de Ramón y su esposa, se hicieron más comunes en la medida en que la disminución de la vigilancia oficial dentro de la ruta, las mejoras en las carreteras y el aumento de propietarios de vehículos facilitaban las interacciones transfronterizas. Los muchachos mexicanos a menudo bromeaban sobre buscarse una novia guatemalteca como un rito de paso para adolescentes. De acuerdo con las leyes de ambas naciones, una persona tiene derecho a la nacionalidad mexicana o guatemalteca si nace en el país o si al menos uno de los padres nació en el país o por naturalización. Sin embargo, la mayoría de las personas en la posición de Ramón prefieren certificar que realmente nacieron en el país, que es un proceso más simple y barato, aunque en su caso no fuera cierto, que adquirir la nacionalidad como hijo de un padre mexicano o guatemalteco. Los residentes también atribuyen más autenticidad a nacer en el país.

Cambiar su nombre cuando se mudó de Guatemala a México simbolizó el intento de Ramón de afirmar su condición de mexicano y su separación de Guatemala. Empero, necesitaba algo más que documentos para afirmar su doble nacionalidad ante los ojos de sus compañeros, quienes a menudo sospechaban sobre la manera en que los extranjeros adquieren documentos. Él invocó las conexiones de su familia y los lazos de sangre para afirmar su pertenencia en ambas naciones. La capacidad de convencer a otros de su nacionalidad, su residencia en la frontera a largo plazo, y cómo otros juzgaron sus manifestaciones, importó más que el «estado real de [los] documento[s]». ⁵¹

Las actitudes locales hacia quienes se convirtieron en mexicanos son más duras que en el caso opuesto, porque los mexicanos creen que

⁵¹ Véase M. Reeves (2013:516).

convertirse en mexicano es más deseable y difícil debido a la percepción de mejores oportunidades económicas y educativas en México. En Guatemala, la mayoría de los residentes de la frontera piensan que es más fácil registrarse en el municipio porque muchos registros fueron destruidos durante la violenta década de 1980. En algunos momentos históricos, sin embargo, ha sido más deseable convertirse en guatemalteco. Por ejemplo, cuando los residentes vieron que había más visas de trabajo oficiales en los Estados Unidos para nacionales guatemaltecos que para mexicanos en el decenio de 1990, muchos residentes de la frontera mexicana consiguieron documentos guatemaltecos para ingresar legalmente a los Estados Unidos y obtener un trabajo respetable. Las estrategias que usan los residentes de la frontera para adquirir documentos nacionales revelan la compleja relación entre lo legal y lo ilegal en la navegación de oportunidades limitadas y procesos oficiales confusos y, a menudo, inaccesibles.

La nacionalidad y la ley

Cuando escuché sobre los esfuerzos de los residentes en la frontera por obtener la doble nacionalidad por medios fuera de la ley, continué preguntándome si una persona podría tener legalmente la doble nacionalidad en México y Guatemala, y qué implicaba este proceso. Pasé meses preguntando a las personas y recibiendo respuestas diferentes, que indicaban cómo las preocupaciones sobre la ley tienen poca relevancia con respecto a lo que realmente sucede. Quedaba claro por qué las personas adquirieron estos documentos por medios informales y extralegales. El caso es que ambas naciones revisaron sus leyes de nacionalidad a finales de la década de 1990 en gran parte porque les interesaba que su población residente en los Estados Unidos conservara su nacionalidad original. No es difícil que los procesos en torno a la doble nacionalidad en la frontera sur se vuelvan complicados. Incluso los funcionarios dieron información contradictoria. Una delegada de migración en Chiapas demostró cómo los prejuicios raciales influían en las percepciones del

derecho a la pertenencia: «No. No metimos la doble nacionalidad con Guatemala. Con [algunos] países aceptamos la doble nacionalidad, pero con Guatemala no hay acuerdo ni con ningún país de Centroamérica ni América del Sur».

La delegada de migración siguió explicando que los refugiados que vinieron de Guatemala se naturalizaron, pero «deberían renunciar a su ciudadanía guatemalteca». Dijo que algunos conservaron sus antiguos documentos aunque deberían haber renunciado, pero era demasiado difícil seguirlos a todos, «ya que había miles de ellos». Afirmó que los que todavía los usan «están haciendo trampa... es corrupción. No es legal tener los dos; no hay ningún documento legal que diga que se puede tener doble así [ambos documentos de esta manera]». Según ella, en el momento en que renuncias a una nación, «haces un juramento a México... A menudo todavía están en los registros de su país. En realidad, pertenecen allí. Callados ellos van [cuando están en] Guatemala [y dicen] ‘soy guatemalteco’, y cuando están aquí [en México] dicen ‘soy mexicano’». Ella lamentaba que muchos inscriban a sus hijos como nacidos en ambos lugares. «Les conviene tener dos papeles, pero no deberían». Explicó que las personas que regresaron a Guatemala y nacieron en México pueden decidir dónde quieren vivir, pero «tienen que elegir y declarar [sus intenciones] con el gobierno. No pueden tener ambas».

La agente me informó que el proceso para que cualquier extranjero se case con un mexicano era complejo y requiere que una persona pase por una serie de procesos migratorios para completar el papeleo regular. Sin embargo, como ella bromeó, «Muchos no hacen esto. Por 200 pesos compran [documentos] falsos. Pero como trabajamos para la inmigración sabemos estas cosas y cómo detectar los documentos falsos». Le pregunté: «pero ¿qué pasa con las personas que obtienen documentos legales a través de medios equivocados?» Ella respondió que a veces los pueden atrapar más tarde. «Tenemos experiencia y sabemos... Eventualmente la mayoría caerá en problemas [con la autoridad de inmigración si tienen documentos que no deberían]... como cuando quieren casarse o registrar a un niño».

Aunque admitió que no pueden atrapar a todos, pensaba que pueden saber por experiencia. Le pregunté cómo podían saber si realmente no son mexicanos si viven en la frontera y tienen todos los documentos y no son falsos, y respondió: «De sus rasgos, la forma de hablar, vestir, sabemos de la experiencia... hicimos preguntas. Siguen teniendo sus propios modismos incluso cuando viven cerca de México. A menudo [podemos detectarlo] por el olor».

La delegada apoyó su argumento con términos legalistas mientras leía documentos de su computadora. Su interpretación de la ley, sin embargo, se vio afectada por un tono racista, nacionalista y clasista, como cuando afirmó que uno podía detectar por el olfato o el vestido a quienes no pertenecían. Muchos funcionarios vienen del norte de México y perpetúan representaciones históricamente despectivas del sur del país asociadas con su indigenidad, a menudo codificadas como atrasadas, sin educación e inferiores.⁵² Similar a los burócratas descritos en el análisis de Goldstein en Bolivia, a las poblaciones fronterizas no solo les resulta difícil tener acceso físico a los centros de poder, sino que también son excluidos en términos espaciales; lo cual refleja prejuicios de «raza, género e idioma... [que se usan para] deslegitimar al cliente».⁵³

Cuando llamé al consulado mexicano unas semanas después, me dijeron que México permite la doble nacionalidad con Guatemala, aunque bajo ciertas condiciones. Se supone que las personas no deben usar ambas nacionalidades de manera simultánea y estratégica como los residentes de la frontera intentan hacer; el agente de migración también lo detectó. México tampoco permite que aquellos que se convierten en mexicanos a través de la naturalización conserven su ciudadanía de nacimiento, aunque hace que la nacionalidad sea irrevocable para los mexicanos por nacimiento cuando adoptan otra nacionalidad. En 2013 se propuso un proyecto de ley en México para permitir que las personas que se hacen mexicanas a través de la naturalización conserven su

⁵² Véase Vila (1999); Stephen (1999).

⁵³ Goldstein (2012:95).

ciudadanía original; para la primavera de 2015 aún «no se había discutido ni votado».⁵⁴ Aunque Guatemala reconoce la doble nacionalidad, deja muchos de los detalles y posibles conflictos abiertos a interpretación.⁵⁵ Las inconsistencias entre los países y la escasa supervisión internacional entre ellos crean falta de claridad, así como espacio para maniobras estratégicas.

En un entorno en el que las reglas para la nacionalidad son ambiguas y con frecuencia ilegibles, se hace evidente cómo las nociones aparentemente claras de lo legal y lo ilegal están influenciadas por las relaciones de clase, raza, políticas, experiencias particulares e ideas históricamente construidas de la identidad nacional. Los ideales hegemónicos y restrictivos del nacionalismo retocados por una ideología racial se entrecruzan con la fluidez diaria. Estas contradicciones son omnipresentes en la frontera. Por ejemplo, debido a que las fechas de la Independencia de México y Guatemala están separadas por un día, cada lado organiza sus festividades. Los residentes cruzan para vender comida, ver los desfiles y participar en juegos de fútbol y bailes.

Debido a la inaccesibilidad y opacidad del proceso legal, los individuos evalúan los reclamos de nacionalidad de otros utilizando sus propios juicios subjetivos. Estas evaluaciones a menudo imitan las suposiciones de clase, raza y género del propio Estado, que se basan en la apariencia objetiva de la ley. A su vez, un enfoque en la ley naturaliza la aceptación de los límites territoriales, y oculta cómo las relaciones de poder de género, clase y raza han constituido las naciones y sus límites.⁵⁶ Sin embargo, las experiencias personales también complican las percepciones de los residentes. Lorenzo, de El Nance, se basó en lógicas patriarcales de la pertenencia nacional para argumentar: «Pienso que no es legal [tener dos nacionalidades], me parece... no sé si es posible... Quizás no es así, no sé, pero tal vez no se puede tener dos nacionalidades.... Debería tener una nada más... ¿Nosotros cómo podríamos respe-

⁵⁴ Hoyo (2015:20).

⁵⁵ Sarazúa (2016:13).

⁵⁶ Nevins (2002:10, 139, 166), basándose también en Sack (1986:33), sobre la relación entre territorialidad, nacionalidad y ley.

tar como padre a dos personas?... [Ni] se puede servir a dos patrones. Solo una nacionalidad se respeta nada más». Sin embargo, cuando se refiere al hecho de que su nuera aún no ha podido obtener la nacionalidad mexicana y ha estado esperando documentos durante muchos años, argumentó: «El amor no tiene fronteras».

Los intentos de las autoridades comunitarias locales, de los residentes fronterizos y de los burócratas individuales de ubicar adecuadamente a los residentes fronterizos refuerzan las formas de gobernabilidad basadas en documentos para determinar quiénes tienen derechos específicos y a quiénes el Estado reconoce como personas que pueden nacer, casarse, trabajar y morir.⁵⁷ Al eludir la ley y generar discursos alternativos en torno a la doble nacionalidad, las estrategias de los residentes fronterizos les permiten a algunos afirmar de manera selectiva la ciudadanía transnacional a través de las fronteras, mientras que otros se esconden de la mirada de un solo Estado.⁵⁸ La índole cambiante y críptica de navegar en las leyes de nacionalidad a través de dos o más países, aunada a la exclusión económica, racial y geográfica de las fronteras a su centro burocrático, motiva a los residentes a adquirir documentos fuera de la ley. Al mismo tiempo, la búsqueda creativa pero incierta de documentos invoca la presencia ordenadora del Estado mediante la persecución y la reproducción mimética de sus fantasmas.⁵⁹

Documentos interrumpidos

Al vivir en los márgenes de ambos Estados nacionales, muchos residentes fronterizos se valen de medios extrajudiciales para obtener documentos nacionales y utilizan conexiones personales para navegar la frontera. Los residentes reconocen la importancia de los documentos nacionales y a veces incluso los buscan con desesperación, así que simultáneamente

⁵⁷ Véase Foucault (1990). Sobre cómo los estados designan a los pueblos como legibles y gobernables, véase Scott (1998).

⁵⁸ Véase Sahlins (1989:225).

⁵⁹ Goldstein (2012); Mitchell (1999).

apoyan y desdeñan su valor y el de los Estados a los que están vinculados. Al hacerlo, refuerzan el poder o la magia del Estado sobre las vidas nacionales en los márgenes,⁶⁰ al tiempo que muestran que la ley y los documentos reales pueden no ser muy relevantes. No existe equilibrio en la relación entre los documentos y lo que se supone que garantizan. Mientras que unos cobran vida propia, los otros no cumplen totalmente su función de garantizar la inclusión nacional. Descifrar lo real de lo falsificado distrae el reconocimiento de cómo el referente original del documento también puede ser un fantasma. Las prácticas diarias de los residentes revelan que los procedimientos legales del Estado son tan discrecionales y politizados como los propios; ambos confían en las ideologías nacionalistas, la clase, el género y la raza para avalar juicios sobre la pertenencia adecuada. Madeleine Reeves sostiene que, en contextos donde los documentos son inciertos y abundan las falsificaciones, «la persona física es examinada con mayor rigurosidad como el lugar donde yace la verdad».⁶¹ En su reciente compromiso por mejorar el cumplimiento migratorio para reducir la cantidad de migrantes centroamericanos, las autoridades migratorias mexicanas han sido acusadas de usar evaluaciones cargadas de racismo.⁶² Como resultado, se ha obstaculizado el paso a un número creciente de mexicanos indígenas en el afán de «detener a los centroamericanos a cualquier costo».⁶³ Cuando viajé en un autobús desde Frontera Comalapa a la frontera norte en marzo de 2007, los agentes detuvieron a tres pasajeros en un puesto de control de migración cerca de Tuxtla Gutiérrez. Aunque afirmaron ser mexicanos, pero fueron bajados del autobús sin la oportunidad de recuperar documentos adicionales que habían guardado con su equipaje en el maletero del autobús. Los agentes intentaron juzgar la autenticidad de sus documentos sin importar que fueran ciudadanos mexicanos.

⁶⁰ Véase Das y Poole (2004), Das (2007); Taussig (1997).

⁶¹ Reeves (2013:512), basándose a su vez en Fassin y D'Halluin (2005); véase también Andersson (2014).

⁶² Lakhani (2016).

⁶³ Lakhani (2016). La autora cita a Gretchen Kuhener, directora del Instituto de las Mujeres Migrantes.

Las zonas fronterizas se caracterizan por tensiones entre fluidez y restricción, gobernanza y evasión, marginación y oportunidad. Los siguientes capítulos ilustran cómo los residentes manejan estas tensiones para ganarse la vida en el contexto de las políticas oficiales de integración comercial regional y de seguridad fronteriza, que definen a los habitantes locales como marginales, o incluso directamente como una amenaza para sus agendas. Las justificaciones de los residentes fronterizos para involucrarse en el contrabando como una respuesta a la exclusión económica están íntimamente relacionadas con la forma en que conciben quiénes son y su arraigo en la frontera. Los residentes cargan con la frontera y sus tensiones étnicas y de clase en la medida en que sus interacciones diarias la modifican. Sin embargo, la frontera también los cruzó y continúa moldeando sus vidas en situaciones cada vez más impredecibles.

3. El maíz es comida, no contrabando¹

Sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado para negocio es el hambre del hombre que fue hecho de maíz.

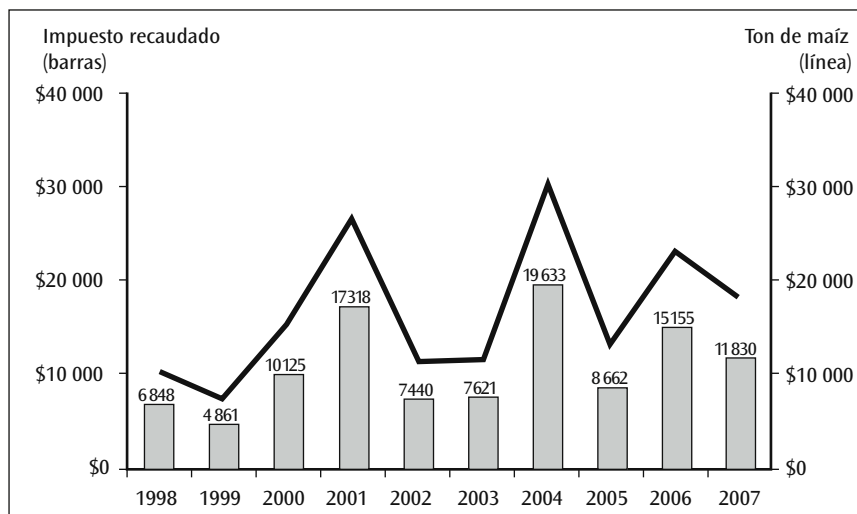
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, *HOMBRES DE MAÍZ* (1993:11)

En 2006, al menos 24 000 toneladas de maíz mexicano entraron en Guatemala a través del camino no monitoreado (figura 3.1).² Oficialmente, esto era contrabando porque los comerciantes vendían maíz a través de una frontera internacional sin monitoreo y evadiendo inspecciones oficiales, documentación e impuestos. Los residentes fronterizos tenían una opinión distinta. Cuando les pregunté por qué los camiones de maíz viajaban libremente por la frontera, los residentes afirmaban que era «libre», es decir, que los oficiales estatales no interferirían. Eran «libres» de hacer esto e insistían: «el maíz es comida..., no es contrabando... es grano básico». Algunos decían que este comercio se permite porque «México firmó un tratado de libre comercio».

¹ Partes de este capítulo aparecen en Rebecca B. Galemba, 2012a, «Corn Is Food, Not Contraband: The Right to 'Free Trade' at the Mexico-Guatemala Border», *American Ethnologist* 39(4), pp. 716-734.

² Esta cifra es probablemente subestimada porque solo se refiere a las cantidades registradas por el municipio. De acuerdo con la Asociación de Camioneros de Maíz Guatemalteca, cerca de 10 000 toneladas de maíz mensuales entran en Huehuetenango desde México (Bolaños y Castillo 2010). Esta ruta es la principal entrada para el maíz mexicano hacia Huehuetenango pero varía estacionalmente.

Figura 3.1 Impuestos recolectados por el municipio de La Democracia, Guatemala, por el comercio transfronterizo de maíz y toneladas de maíz que entraron en Guatemala desde México a través del cruce clandestino: 1998-2007.



La disminución en 2007 puede deberse a una supuesta escasez de maíz, a pesar de que los residentes fronterizos afirman que el flujo de maíz volvió a altos niveles para otoño del mismo año. Esta disminución también podría ser resultado de la falta de reportes o de cuentas incorrectas por parte de residentes y/o del municipio. Es posible que muchos camioneros no paguen su «impuesto» y prefieran evadir esta documentación, especialmente porque los oficiales municipales creen que los niveles de comercio son relativamente bajos y ese comercio es exclusivamente local. Nota: convertí los impuestos de 50 quetzales por camión de 50 toneladas a dólares. Estos datos están convertidos de acuerdo con las tasas de cambio de 2007, cuando realicé el trabajo de campo; en ese momento 10 quetzales equivalían a 14 pesos, lo cual a su vez equivalía más o menos a 1.30 dólares, dependiendo de las fluctuaciones mensuales. Fuente: Archivos municipales, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala; datos compilados por la autora, quien agradece a Dan Galemba por su ayuda con la gráfica.

La liberalización del campo en México durante las décadas de 1980 y 1990, y especialmente la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, generaron una crisis del maíz en el México rural. Significó que los agricultores perdieran subsidios previos del Estado a la agricultura, así como precios de garantía, y que fueran forzados a competir con maíz más barato importado de los Estados Unidos, el cual retenía subsidios gubernamentales de ese país. México importa más de un tercio de su maíz.³

³ Wise (2011:48).

En la década de 1990, el país dismantló las bodegas de la Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), que anteriormente había garantizado la compra de las cosechas a los campesinos y regulaba cadenas de distribución para proveer de maíz accesible a los consumidores. Sin compradores para sus cultivos, los residentes de la frontera y los productores regionales capitalizaron el ambiente generalizado de descontento social ante las reformas neoliberales de la década de 1990, para organizarse y exigir el derecho a vender maíz de México a Guatemala sin interferencia oficial. Establecieron acuerdos informales con oficiales regionales para que permitieran este comercio. Debido a que no hay una política con mandato nacional en ninguno de los dos países, este comercio es oficialmente ilegal y está sujeto al criterio de agentes estatales particulares. Los agricultores de maíz en esta región fueron afectados negativamente por la doctrina de liberalización de los acuerdos de libre comercio, los cuales los obligaban a competir con importaciones de los Estados Unidos y suspendían garantías y protecciones previas. Fueron simultáneamente excluidos de las oportunidades potenciales del libre comercio para intercambio internacional, las cuales privilegiaban a corporaciones multinacionales. Los acuerdos locales informales que permiten este flujo de maíz es lo que los residentes experimentan como libre comercio.

Quedé desconcertada al observar tanto maíz siendo transportado por esta ruta y al escuchar a los residentes justificarlo como «libre». Estos reconocían que, aunque no fuera legal, este comercio de maíz era «más permitido» por las autoridades. En contraste con otras empresas de contrabando, los funcionarios no pedían sobornos a los contrabandistas de maíz. El maíz se volvió un bien sacrosanto en el contexto de una crisis en la agricultura en una región en la que es el elemento central de la alimentación diaria. Aunque los residentes contrabandean a través de la frontera varios bienes que defienden como legítimos socialmente, solo justifican al maíz como un producto básico libre. Por lo tanto, me refiero a quienes venden maíz como comerciantes o negociantes y no como contrabandistas, aunque reconozco que evaden requisitos legales para el comercio transfronterizo.

El maíz no estuvo siempre libre de intervención oficial. Los residentes me contaron que el comercio de maíz era «más ilegal» antes de mediados de la década de 1990. Las unidades de vigilancia mexicanas solían exigir sobornos o confiscar maíz a los comerciantes. Algunos de ellos incluso fueron arrestados. En Guatemala, en el momento más crítico de la guerra de contrainsurgencia de la década de 1980, el ejército hacía periódicas apariciones cerca de la frontera, lo que dificultaba el comercio. Cuando la guerra terminó en 1996, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala se dio a la tarea de monitorear el contrabando, pero rara vez intervino mientras los residentes fronterizos guatemaltecos y los comerciantes comenzaron a organizarse para facilitar el intercambio de producto. Ahora, de acuerdo con el residente fronterizo Manuel, «los agarramos [a los oficiales] y los ponemos en nuestra cárcel si [nos] molestan». La gente externa a la región, en contraste, o no está enterada de este comercio o asegura que debe ser contrabando, ya que el maíz se está vendiendo del otro lado de la frontera por una vía sin vigilancia.

Los residentes fronterizos monopolizan en general los roles como comerciantes intermediarios, camioneros (o fleteros) y cargadores en el comercio del maíz. Los vendedores mexicanos y sus contrapartes negociantes en Guatemala organizaron, cada uno por su lado, asociaciones para asegurar prácticas laborales justas. Los cargadores en ambos lados formaron asociaciones rotativas para turnarse los días de trabajo en la semana. Los camioneros mexicanos crearon una asociación que incluía a todos los locales, e insistieron en que los camioneros de larga distancia les entregaran los bienes para el transporte transfronterizo.⁴ Ya no permiten a los camioneros de larga distancia llegar directamente a Guatemala. Un camionero explicaba: «quien tiene hambre ese día, va a la bodega a trabajar». La asociación registra el nombre de sus miembros en un cuaderno; cuando un camión de larga distancia llega a entregar maíz a los comerciantes para su transporte a Guatemala, el primer nombre en la lista toma el trabajo. Estas prácticas permiten más oportunidades de trabajo para los residentes, pero excluyen a personas externas.

⁴ El establecimiento de esta asociación es discutido más ampliamente en el Capítulo 6.

El papel fundamental del maíz para la subsistencia se extiende a la ética que gobierna su intercambio transfronterizo. El abrir la asociación de comerciantes de maíz a más miembros disminuye la ganancia de los individuos porque genera más compradores. Sin embargo, los residentes consideran que todas las personas locales con suficiente capital y conexiones deberían tener la oportunidad de entrar en la asociación porque no hay alternativa. Las normas basadas en la residencia que fijan los derechos para involucrarse en el comercio son similares a las tradiciones que gobiernan el acceso comunitario a recursos y tierra, pero los residentes también las aplican a la economía del contrabando. En la década pasada, más individuos comenzaron a acumular el capital de arranque y adquirir camiones con sus ganancias del trabajo como migrantes en los Estados Unidos. En la medida en que más residentes quieren participar, los miembros del grupo reevalúan las normas y cobran entradas a los nuevos miembros.

Este capítulo sigue el comercio del maíz desde la región del canal de irrigación en Trinitaria, Chiapas, hacia las comunidades fronterizas mexicanas y hasta el otro lado de la frontera en Guatemala para ilustrar cómo el maíz se volvió un producto transfronterizo libre. Los residentes de la frontera evalúan lo que es económicamente justo en un contexto en el cual el contrabando del maíz es legítimo socialmente y necesario para la supervivencia, a pesar de ser oficialmente ilegal.⁵ Los puntos de vista críticos de los residentes sobre las políticas de libre comercio, junto con la articulación de sus propias prácticas informales de «libre comercio», ponen en tela de juicio las bases éticas de las políticas comerciales oficiales. El comercio del maíz refleja cómo los residentes fronterizos experimentaron y reinterpretaron las consecuencias de los acuerdos de libre comercio como una posibilidad de vender su maíz al mejor postor, que era Guatemala. Justificaban el contrabando de maíz como una variante más legítima de libre comercio ante las políticas oficiales que los excluían. Al irse organizando para contrabandear maíz a través de la frontera fueron desarrollando el conocimiento

⁵ Véase Edelman (2005); Scott (1976); Abraham y Van Schendel (2005).

y las redes para establecer una variedad de negocios de contrabando fronterizo y reafirmar su control sobre la ruta de la frontera. La trascendencia del maíz, las exclusiones de las políticas de comercio oficiales y la devastación que provocó la liberalización de la agricultura en el campo mexicano generaron el clima para que el contrabando de maíz fuera justificable y libre. Esto también estimuló una mayor aceptación y una confianza más amplia en la región sobre el contrabando de una variedad de productos. Los campesinos no eran meramente empujados a actividades informales e ilegales, sino que las buscaban y las reafirmaban activamente como opciones más justas. Sin embargo, el contrabando como forma de resistencia a la marginación económica es limitado, ya que puede reforzar o simplemente dejar fuera de duda las relaciones clientelares con autoridades estatales corruptas y el subdesarrollo del campo.

Transportando maíz

Ramón (mencionado en el Capítulo 2) reside en Santa Rosa, México, pero nació del otro lado de la frontera, en El Girasol, Guatemala. Es dueño de un pequeño terreno en el que cultiva frijoles y maíz, pero esto es insuficiente para su subsistencia. Ramón ha sido un comerciante de maíz a pequeña escala por casi quince años. Usa sus conexiones familiares en Guatemala para trabajar; su tío Nelson en El Girasol es su socio. Nelson pertenece a un grupo de 30 comisionistas o intermediarios guatemaltecos. Los intermediarios son residentes fronterizos guatemaltecos que colaboran con los comerciantes mexicanos para conectar a los productores mexicanos de maíz con los compradores guatemaltecos a larga distancia. Las redes sociales y las relaciones de parentesco que abarcan la frontera vinculan a los comerciantes mexicanos con los guatemaltecos. Algunos de ellos combinan sus recursos económicos para la compra del maíz, pero los mexicanos usualmente proveen la mayor parte de los fondos. En el caso de Ramón, este frecuentemente tiene escaso capital y depende de la ayuda de su tío. Los comerciantes guatemaltecos de larga

distancia llegan a El Girasol y Nueva Vida, Guatemala, para comprar maíz y distribuirlo. Los comisionistas guatemaltecos son mediadores para este intercambio.

Ramón accedió a dejarme acompañarlo a la región del canal para comprar maíz. Un día de febrero de 2007 llamó a mi celular para asegurarse de que iba en camino. El camión de diez toneladas que rentó a un amigo había llegado, y Ramón estaba impaciente por mostrarme cómo buscar buen maíz en la región del canal de irrigación cerca de Trinitaria (foto 7). Esta región surte la mayor parte del maíz que los comerciantes fronterizos venden a Guatemala. Los canales de irrigación permiten a los agricultores obtener dos cosechas por año, a diferencia de la cosecha única que se logra en otras regiones. Ramón pertenece a la asociación de 22 comerciantes mexicanos fronterizos de maíz, a quienes los residentes a veces llaman «coyotes». Para los residentes, este término usualmente no tiene la connotación peyorativa que se le suele asociar en Mesoamérica para referirse a los contrabandistas de migrantes o intermediarios abusivos.⁶ Sin embargo, los agricultores y otros residentes sí aplican el término «coyote» de modo negativo cuando los comerciantes violan las normas redistributivas del intercambio o cuando los productores sienten que ejercen una influencia excesiva. Cada temporada, miembros de la asociación acuerdan comprar el maíz a un precio fijado por los productores regionales para asegurarse de que nadie manipule el mercado y que todos puedan trabajar. Los comerciantes mexicanos compran maíz por todo Chiapas, en Frontera Comalapa, Tierra Blanca, Guadalupe Grijalva, Chicomuselo y la cercana Trinitaria. Lo entregan a comisionistas guatemaltecos en El Girasol y Nueva Vida, a donde llegan los comerciantes de larga distancia guatemaltecos para comprarlo. Algunos comerciantes mexicanos hacen conexiones con productores mexicanos de larga distancia y con bodegas, quienes entregan maíz a los comerciantes mexicanos en la frontera, para que estos a su vez lo transporten para su venta en Guatemala. Debido a su monopolio sobre el acceso a la ruta fronteriza y sus conexiones con el mercado guatemalteco,

⁶ Fischer y Benson (2006); Watanabe (1992).

los comerciantes fronterizos de maíz insisten en que los camioneros de larga distancia les entreguen el producto para que ellos a su vez puedan administrar la venta a los guatemaltecos. Los residentes fronterizos no permiten que los comerciantes de larga distancia o los camioneros crucen la frontera para establecer acceso directo con el mercado guatemalteco. De otro modo, como explican los comerciantes: «No se dejan entrar. Tienen que hacer el negocio con nosotros. No pueden joder el negocio... y quitar [nuestro] trabajo. Si trabajaran aquí, ¿dónde trabajaríamos nosotros?». Los comerciantes de larga distancia dependen de intermediarios en la frontera, ya que no tienen las conexiones para evadir las inspecciones oficiales en la frontera y para tener acceso al mercado guatemalteco.

En la práctica, cuando surgen nuevas oportunidades de negocio, algunos comerciantes de maíz se saltan las reglas éticas que regulan a la asociación. Aquellos que tienen camiones de diez toneladas ganan más, no solo porque se evitan el gasto de rentar camiones, sino también porque los comerciantes de larga distancia los buscan para transportar diversos bienes sin someterse a las regulaciones oficiales. Ramón pudo comprar una camioneta *pick-up* después de trabajar en Florida, pero es insuficiente para un negocio que depende de varios camiones de diez toneladas. Le convendría tener un transporte de ese tipo y ha considerado la posibilidad de realizar un segundo viaje a los Estados Unidos para reunir los fondos necesarios. «La gente con camiones [de diez toneladas] puede ganar dinero. Yo gano apenas lo suficiente para alimentar a mi familia», se lamentó. En la temporada de maíz de enero a marzo, cuando las ventas son buenas, Ramón puede realizar entre 20 y 25 viajes a la región del canal para comprar maíz y ganar cerca de 2 000 dólares.⁷ Los comerciantes con camiones de diez toneladas pueden juntar cerca de 10 000 dólares, según me dijo.

Leandro es un comerciante de maíz a mayor escala en Santa Rosa. Tanto él como sus dos hijos tienen camiones de diez toneladas. Los

⁷ Este comercio de maíz se lleva a cabo en pesos mexicanos en ambos lados de la frontera. Uso los equivalentes al dólar basada en el tipo de cambio de 2007 para poner los montos en perspectiva.

3. EL MAÍZ ES COMIDA, NO CONTRABANDO



Foto 7. Un comerciante mexicano inspecciona su maíz (fuente: foto de la autora).

guardan en un patio cubierto, contiguo a su casa. Los mayores comerciantes pueden transportar treinta toneladas de maíz por día, mientras que los más moderados logran esto en una semana. Leandro y sus hijos complementan sus ganancias transportando el comercio de otros y rentando los camiones a otros comerciantes. Sus hijos actualmente ganan entre 60 y 70 dólares por cada viaje del camión a la región del canal y de vuelta a la frontera. Leandro también tiene clientes en el norte de México. Le entregan maíz para transportar a Guatemala en los meses de verano, cuando hay poco producto en la región. Los comerciantes mayores como Leandro dependen de préstamos de otros residentes o bancos y se enfrentan a riesgos cuando los precios fluctúan.

En la primavera de 2007, los comerciantes estaban inquietos sobre el negocio del maíz. La demanda global de etanol, la especulación y la acumulación por parte de negocios de agricultura, así como la anticipación de una liberalización completa del sector del maíz mexicano en 2008 ocasionaron desabasto, picos en los precios y una crisis tortillera,



Foto 8. Campos de maíz en la zona de riego (foto de la autora).

lo cual generó protestas a lo largo y ancho del territorio mexicano.⁸ Los residentes fronterizos expresaron preocupación sobre la venta de maíz a Guatemala porque creían que «en México falta maíz», a pesar de que el abasto del producto procedente de México estaba en un nivel récord.⁹ Los comerciantes de la frontera aplazaron sus compras en la primavera de 2007, pues suponían que los precios caerían. Esperaron a que los precios se elevaran en Guatemala para que el intercambio valiera la pena. Debido a la incertidumbre, en febrero de 2007, Ramón estaba nervioso sobre su próxima compra. Visitó cada mañana la bodega de su tío en El Girasol para revisar si la carga previa se había vendido para poder comprar más. Hizo viajes frecuentes a la región del riego para verificar precios. Cuando estaban demasiado altos, regresaba a casa a esperar. Los

⁸ *People's World* (2007). Los precios de la tortilla aumentaron entre 42% y 67% en 2007, esto es, de 6 pesos a 8.50 (De Ita 2007).

⁹ Los agronegocios reportaron grandes desabastos al acaparar las cosechas; de 2006 a 2007 aumentaron los precios a través de la especulación, y obtuvieron grandes ingresos (De Ita 2007).

3. EL MAÍZ ES COMIDA, NO CONTRABANDO



Foto 9. Cargado maíz en camiones para su venta en Guatemala (foto de la autora).

comerciantes más grandes, como Leandro, tenían suficiente capital para seguir comprando y vendiendo el producto.

Un segundo camión en el que viajaban cargadores de Santa Rosa, México, nos siguió hacia la región del canal. Los vehículos se estacionaron en el campo de un agricultor perteneciente a una asociación de 4000 productores de maíz de la zona de riego (foto 8), que empleaba trabajadores locales para llenar y coser los costales que provenían de las bodegas de la ahora desaparecida Conasupo. Los cargadores los trasladaron a los camiones usando una rampa improvisada de madera (foto 9). A cuatro hombres les toma cerca de una hora cargar un camión. Ganan el equivalente a cinco dólares cada uno. La paga es equiparable a lo que se obtiene en una jornada completa de trabajo en el campo, pero la labor puede ser agotadora. Cada costal pesa más de 79 kilos. La temperatura se acerca a los 32°C todo el año. El único alivio en las cálidas y secas llanuras de Frontera Comalapa son las lluvias torrenciales de verano. Algunos comerciantes mexicanos trabajan con cargadores particulares. Los contactan por teléfono cuando llega un camión, lo cual les permite

buscar alternativas de trabajo. Otros cargadores toman turnos en distintos días, esperando en bodegas fronterizas por «lo que caiga» —comentó uno de ellos.

Rogelio es el líder de la asociación de productores de maíz de la zona de riego, que se encarga de asegurar precios justos y negociar con oficiales del Estado, comerciantes de la frontera y organizaciones campesinas regionales. Los comerciantes fronterizos como Ramón deben registrarse en dicha asociación y negociar los precios cada año. Hace poco tiempo los productores bloqueaban las carreteras periódicamente para exigir precios más altos y protestar contra la influencia de los comerciantes de la frontera sobre el negocio del maíz, pero rara vez han logrado incrementos sustanciales en los precios. Con un mercado limitado disponible, reconocen el valor del acceso de los comerciantes fronterizos a las redes transfronterizas, camiones y compradores guatemaltecos.

Mientras regresábamos a la frontera en los camiones llenos de maíz, Ramón señalaba lugares a lo largo de la carretera en los que la policía previamente monitoreaba el contrabando. Me dijo que no me preocupara: «ahora nadie molesta porque el maíz es libre». Cuando llegamos a la ruta de la frontera, Ramón pagó unos cinco dólares en cada una de las cadenas de las comunidades mexicanas. Aunque esos impuestos reducen su ganancia, Ramón aprecia los beneficios que estos aportan a su comunidad, como un nuevo parque, reparaciones a la escuela y una extensión de los servicios eléctricos y de agua.

El camión se agitaba en su ascenso por la colina hacia un tramo de camino rocoso y sin pavimentar. Los mojones blancos a nuestra derecha e izquierda fueron la única indicación de que entrábamos en Guatemala. Cada una de las comunidades guatemaltecas fronterizas, El Girasol y Nueva Vida, tienen plazas en las que los negociantes de maíz guatemaltecos rentan espacios a la comunidad o a propietarios individuales para construir bodegas. Las bodegas, que son poco más que pequeños cobertizos de lámina de metal, almacenan el maíz hasta que haya compradores disponibles.

Paramos en el depósito de Nelson, el tío de Ramón, en El Girasol. En 2011 había cerca de 30 miembros de la asociación de intermediarios

guatemaltecos, y en agosto de 2014 formaron una asociación civil. Los intermediarios, o comisionistas, reciben un pago fijo de cerca de 20 dólares por la carga de un camión de diez toneladas de parte de los comerciantes mexicanos a cambio de que busquen un comprador guatemalteco. Los comisionistas también recuperan los costales de maíz al final de la cadena de abasto para devolverlos a los productores mexicanos. El maíz se vende en Guatemala por quintal, mientras que en México se empaqueta por costal o bulto con una cantidad distinta de maíz. Más adelante en la línea de abasto el producto se vuelve a empaquetar en quintales para venderse a consumidores guatemaltecos, quienes de otro modo, de acuerdo con un negociante, «no sabrían cuánto hay ahí». La recuperación de los costales mexicanos es fundamental, ya que muchos pertenecen a las viejas bodegas de la Conasupo. Un negociante comentó: «A veces lo costales duran, pero mira lo viejos que están... en muy mal estado. No estoy seguro de qué haremos cuando se acaben o se rompan. A menudo los cosemos de nuevo». Los funcionarios del gobierno en La Democracia, Guatemala, creían que el comercio de maíz era solo regional, pero los negociantes han rastreado los costales incluso hasta la Ciudad de Guatemala. Otros comerciantes relatan haber vendido maíz que llegó hasta El Salvador.

Dado que el transporte en camión es más viable si los camioneros llevan bienes en ambas direcciones, los negociantes guatemaltecos arreglan la venta de bloques de cemento de comerciantes guatemaltecos del interior a agricultores de maíz en la zona de riego mexicana. Previamente, los intermediarios guatemaltecos comerciaban independientemente con negociantes guatemaltecos y ganaban por el intercambio. Algunos de ellos se quejan de la pérdida de control que implican las comisiones fijas, mientras que los comerciantes mexicanos se benefician de la diferencia de precios entre el maíz mexicano y el guatemalteco. Sin embargo, los intermediarios guatemaltecos con recursos mínimos aprecian esta tarifa fija, pues evitan los riesgos financieros de un negocio volátil en el cual fluctúan los precios, las diferencias en el tipo de cambio de las monedas y la tolerancia oficial.

Cuatro cargadores guatemaltecos, quienes pertenecen a una asociación rotativa de unos 80 residentes fronterizos guatemaltecos que toman turnos a lo largo de la semana, esperaron para descargar el camión. Los comisionistas guatemaltecos prefieren tener compradores disponibles para que puedan transferir la carga directamente. De otro modo necesitan pagar a los cargadores varias veces por descargar y volver a cargar los camiones. En una atmósfera de precios fluctuantes, sin embargo, muchas veces descargan, almacenan el maíz y esperan a los compradores.

Ramón me presentó a su tío y a los intermediarios con quienes comparte la bodega en El Girasol. Le dijo a un intermediario: «Ya somos amigos; [ella] come en mi casa... conoce mis niños». Los hombres me preguntaron dónde vivía en los Estados Unidos, dónde estaba viviendo ahí, qué hacía y si el gobierno me pagaba. Ramón bromeaba mientras señalaba a otro hombre, advirtiéndome «ten cuidado con él, es narco».¹⁰ El hombre respondió también en broma: «No él... cuidado, él tiene su casa grande secreta aquí». Ramón le restó importancia: «ella ya sabe que soy gente pobre, ya pasó tiempo en mi casa». Comencé a permanecer más tiempo en las bodegas para entender el ritmo del negocio, ya que implica mucho esperar, bromear y chismear. Se trata de una esfera principalmente masculina, en la que los comerciantes intercambian dinero por trabajo, aguardan a que haya venta, hacen bromas, presumen y juegan a las cartas; en principio me convino ser presentada por una persona como Ramón, con quien tenía confianza. Debido a que muchas bodegas están localizadas en lugares centrales de la comunidad, las mujeres y los niños también ocupan estos espacios y venden comida y bebidas a camioneros, cargadores y comerciantes.

El viaje en camión con Ramón demostró el modo en el que el comercio de maíz refleja los valores éticos que se tienen en la frontera. La cantidad de actores, incluyendo productores, comerciantes, camioneros

¹⁰ La acusación de ser «narco» refleja cómo el negocio de las drogas ha penetrado y sobre lo que los residentes fronterizos sospechan como fortunas mal habidas. Acá, sin embargo, se utiliza para hacerle una broma a Ramón como parte de la atmósfera amistosa en las bodegas.

y cargadores mexicanos, así como comisionistas, cargadores y compradores distantes guatemaltecos no se prestan para la eficiencia económica. Dado que el comercio de maíz carece relativamente de vigilancia en ambas naciones, los múltiples niveles de intermediación no pueden explicarse solamente por la necesidad de dispersar el riesgo y evitar la detección, lo cual es común en otras cadenas de comercio ilegal.¹¹ En cambio, apunta a una prioridad ética de asegurar el sustento de los residentes en una región dependiente del maíz y con pocas opciones restantes. Sería más ventajoso para los comerciantes negociar los precios independientemente de los acuerdos comunitarios, grupales y regionales. Sin embargo, los residentes y los comerciantes fronterizos establecieron protecciones de precios basadas en la ética local, que conectan el derecho a vender maíz a través de la frontera con la tenencia de la tierra y la residencia local. Para evitar competencia en precios con el maíz externo, lo cual es reforzado cuando es necesario con bloqueos de carretera, los residentes fronterizos venden sus cosechas primero a Guatemala, después permiten el maíz regional y, finalmente, que el maíz de otras regiones y estados sea transportado al otro lado de la frontera. Para entender por qué los residentes defienden el derecho a vender maíz, la siguiente sección se enfoca en la importancia regional del maíz y los efectos del TLCAN en su cultivo y cosecha.

¹¹ Véase Naylor (2002). El empleo de cargadores mexicanos o guatemaltecos se explica por la necesidad de cambiar el maíz de camiones en la ruta no monitoreada, para que el maíz mexicano aparezca como guatemalteco al salir a la ruta en un camión guatemalteco. No obstante, la presencia a menudo distante entre camioneros y negociantes mexicanos, la monopolización de los comerciantes fronterizos y camioneros de la ruta de comercio, la presencia de intermediarios mexicanos y guatemaltecos, así como el acuerdo con lo interno de la asociación comercial con la asociación de productores del canal de riego para establecer precios justos para el maíz se prestan a una explicación más compleja. Esta explicación debe tomar en cuenta justificaciones locales de índole moral como que todos los residentes deben tener la oportunidad de trabajar y que el maíz es necesario para la subsistencia de la región.

El maíz como cultura, cultivo y mercancía

Mesoamérica es el centro y origen de la diversidad genética del maíz. Aparte de su importancia como un grano básico necesario para la supervivencia, es un símbolo cultural poderoso y un elemento de identidad regional y nacional pasada y presente. De manera notable, el *Popol Vuh* se refiere a los mesoamericanos como los «hombres del maíz».¹² Sin embargo, el señalamiento del maíz como un símbolo esencialista de la cultura mesoamericana conlleva el riesgo de romantizar a los campesinos y la agricultura del maíz, e ignora el modo en que los campesinos se integran en contextos político-económicos más amplios.¹³ Varios actores utilizan la importancia cultural y material para distintos fines.¹⁴ En México, el Estado invoca históricamente el maíz como un símbolo nacional incluso mientras «la política del Estado continúa asociando la agricultura de maíz con retraso económico e ineficiencia».¹⁵ Elizabeth Fitting subraya el rol central del Estado mexicano en la agricultura, en el cual «el abastecimiento y la política del maíz eran centrales para el corporativismo estatal y las campañas políticas».¹⁶ Desde la década de 1930 hasta la de 1990, el Estado mexicano estuvo involucrado directamente en la agricultura.¹⁷ El establecimiento de la Conasupo en 1965 integró la producción agrícola y la cadena de distribución para regular relaciones entre productores y consumidores, de modo que los consumidores de bajo ingreso pudieran tener acceso a alimentos básicos y los pequeños productores pudieran obtener ganancias.¹⁸ El camino de México a la liberalización agrícola significó alejarse del apoyo estatal al campo. Sin embargo, aunque declinó la capacidad estatal para imponer los precios del maíz, muchos movimientos campesinos siguieron enfocándose en el Estado

¹² Recinos (1991).

¹³ Fitting (2011:114); Villafuerte (2009).

¹⁴ Fitting (2011).

¹⁵ Fitting (2011:14).

¹⁶ Fitting (2011:95).

¹⁷ Yúnez-Naude (2003:1).

¹⁸ Yúnez-Naude (2003:2-3).

para exigir la renovación de apoyos, créditos y mayores precios del producto, lo que condujo a situaciones selectivas de cooptación, concesiones limitadas y represión.¹⁹ Los residentes fronterizos no son la excepción; como defendía un productor: «Cuando el Estado nos ofrezca un precio justo, les venderemos». Diego, un antiguo secretario de Santa Rosa, México, y agricultor de maíz, razonaba que el gobierno mexicano necesitaba mejorar sus precios para comprar sus productos a un «precio justo... entonces no lo venderíamos a Guatemala». Debido a su importancia cultural, económica y nacional, el maíz ha sido el centro de muchas protestas campesinas en contra de las políticas neoliberales en México desde la década de 1980.²⁰ El declive del sector no solo amenazó la subsistencia de los campesinos, sino también su esencia.²¹

El cargador de maíz, Emilio, me enseñó cómo distinguir el que proviene de los Estados Unidos, el cual llamó «maíz para 'cochis' [cerdos]» y el regional «de buena calidad».²² Como una novata, no reconocí la diferencia. Me mostró la parte inferior de la mazorca para explicar: «Mira, [en Estados Unidos] le quitan parte del núcleo... lo que llamamos el corazón, para usarlo para el etanol. Luego nos mandan la basura. El maíz estadounidense es más barato, pero no es lo mismo. Llega sin los mismos nutrientes, o como decimos nosotros, sin corazón». El comentario de Emilio ilustra cómo los acuerdos de libre comercio y las políticas que los acompañan en relación con el maíz ponen en riesgo la subsistencia económica de los residentes y también ensanchan las desigualdades entre México, Guatemala y los Estados Unidos. Los profundos lazos culturales de la

¹⁹ Bartra y Otero (2005); De Ita (1997). Sin embargo, movimientos sociales más amplios, incluyendo el zapatista, la Vía Campesina, En Defensa del Maíz y Movimiento el Campo no Aguanta Más (MCAM), van más allá del Estado e invocan al maíz como un símbolo cultural y el derecho a la soberanía alimentaria para protestar contra la liberalización del comercio de maíz y la introducción de maíz genéticamente modificado, así como al modelo neoliberal en sí (Bartra y Otero 2005; Edelman 2005; Fitting 2011).

²⁰ De Ita (1997); Hewitt (1992).

²¹ Bartra (2003).

²² También podría estarse refiriendo al hecho de que la mayor parte del maíz exportado de los Estados Unidos es maíz amarillo, generalmente usado en México y Guatemala para alimentar animales. En estos países el maíz blanco es preferido para consumo humano.

región llevaron a que estas amenazas a los medios de subsistencia de los campesinos se manifestaran en experiencias corpóreas.

Los residentes de la frontera se apoyan en la importancia simbólica y material del maíz para servir a varios fines: defender su derecho a la subsistencia, protestar por la liberalización de la agricultura y afirmar su derecho a vender maíz a través de la frontera. En ambos lados es el principal cultivo y la fuente de sustento. El suelo seco de esta región inhibe el crecimiento de otros productos que se cultivan en las tierras altas de Chiapas y Guatemala. A pesar de los obstáculos al cultivo del maíz de subsistencia y el rol creciente del comercio, los residentes fronterizos aún se identifican principalmente como campesinos. Uno de ellos se preguntaba: «si no hubiera maíz, moriríamos, ¿qué comeríamos si no hubiera tortillas...?, ¿cómo viviríamos?».

El contrabando de maíz tiene una larga historia regional que ambas naciones han vigilado en distintos momentos con intensidad variable. A lo largo del siglo veinte, los campesinos lo intercambiaban en pequeñas cantidades a través de la frontera en burros. Los chiapanecos descubrieron mejores precios en Guatemala hace mucho tiempo. El maíz mexicano mitigaba los picos en el precio durante los frecuentes desabastos en Guatemala, especialmente en Huehuetenango.²³ Los departamentos guatemaltecos fronterizos, Huehuetenango y San Marcos, son consumidores netos de maíz.²⁴ Aunque el primero produce maíz, frijoles y frutas, y se ha diversificado para otros cultivos como papas, ejotes y brócoli dirigidos a los mercados centroamericanos y estadounidenses, es uno de los departamentos con mayor inseguridad alimentaria.²⁵ Los habitantes de Huehuetenango han reconocido por largo tiempo que no pueden depender únicamente de la agricultura de maíz de subsistencia.²⁶ Era común que el contrabando subsanara los desabastos: «Las zonas fronterizas se

²³ De Ita (1997); Fuentes et al. (2005).

²⁴ Fuentes et al. (2005).

²⁵ Camus (2012:75).

²⁶ Véase Watanabe (1992). Algunos residentes fronterizos guatemaltecos trabajan cerca de plantaciones de café, pero debido a su cercanía con la frontera muchos complementan o remplazan la agricultura con comercio, transporte o carga de camiones (véase Guzmán 2004).

encuentran en muchos casos más cercanas a los mercados o zonas de producción en el extranjero [México] que a los nacionales». ²⁷ Los residentes fronterizos de Guatemala están acostumbrados a comprar o sembrar maíz de México.

La mayor parte del maíz mexicano en esa región, sin embargo, era producido para autoconsumo o para su venta a la Conasupo, que ofrecía precios de garantía y apoyos, hasta que esta fue gradualmente desmantelada y clausurada a finales de la década de 1990. El contrabando de maíz a Guatemala se volvió vital para los habitantes fronterizos mexicanos y para los agricultores regionales después de que las reformas agrícolas los dejaron sin compradores para sus cosechas. El productor Rogelio relataba que «La gente siempre vendía maíz a Guatemala... pero ahora casi 100 por ciento». En 2006, los comerciantes mexicanos me dijeron que el precio de una tonelada de maíz era de alrededor de 300 dólares, y que podían venderlo 25% más caro en Guatemala. Sin embargo, el principal problema era la falta de compradores mexicanos. Diego aclaraba: «bueno, ese sería [el precio] si México comprara nuestro maíz». Me señalaba que todavía existían las bodegas, pero «están vacías. México no está comprando el maíz. [Las empresas] compran de los Estados Unidos». Después del cierre de la Conasupo, las compañías de molienda transnacionales se convirtieron en las únicas opciones de los productores, a pesar de ser también los líderes en importación y exportación de maíz estadounidense. ²⁸ Rogelio agregó que compañías multinacionales de harina de maíz y tortillas como Maseca, una marca global de Grupo Gruma, y Minsa no compraban de su asociación, sino de productores más grandes del norte de México. La desaparición de opciones para los agricultores y los efectos locales del TLCAN en el sector del maíz contextualizan las reinterpretaciones locales del libre comercio.

²⁷ Fuentes et al. (2005:78).

²⁸ De Ita (2007).

Libre comercio en tierras fronterizas

Por meses me pregunté por qué el maíz podía ser vendido de manera tan fluida en este camino fronterizo. Leandro subrayaba: «trabajamos a la luz del día, como puedes ver... no nos escondemos». Al principio pensé que tal vez el comercio era legal. ¿Acaso el maíz era inspeccionado en otro lugar con un permiso dado para su transporte a este punto por conveniencia? Yo sabía que el comercio transfronterizo debía ser inspeccionado y documentado en puntos oficiales de entrada. No entendía a qué se referían los residentes cuando me decían repetidamente que este comercio de maíz era «libre». Preguntando más sobre el significado de este término, aprendí que muchos consideraban que era libre por el TLCAN. Héctor, el campesino mexicano mencionado en los capítulos 1 y 2, incluso citaba al expresidente mexicano Salinas de Gortari (1988-1994) para legitimar este comercio. La conexión resulta irónica, ya que muchos mexicanos critican a Salinas como el arquitecto de las políticas neoliberales económicas y agrarias que contribuyeron a la devastación de la agricultura campesina. Héctor comenzó: «la gente empezó a escuchar que [la venta de maíz] era libre... Salinas anunció por el radio cuando firmó el tratado [de libre comercio con Estados Unidos]... los precios cayeron aquí [y]... quitó las bodegas. Salinas dijo que nosotros campesinos éramos libres de vender el maíz dondequiera... donde podíamos sacar un buen precio».

A pesar de que el recuento del TLCAN de Héctor no corresponde a la política oficial, su explicación ilustra el modo en que los campesinos de la frontera experimentaron y vernaculizaron,²⁹ o tradujeron el acuerdo a su contexto cultural. De muchos modos, Héctor verdaderamente entendió la dinámica política y económica. Demostró su conocimiento al explicar las repercusiones del fin de la reforma agraria, la privatiza-

²⁹ Merry (2006) usa el término «vernacularización» para describir cómo la gente interpreta y traduce los discursos globales sobre los derechos humanos de las mujeres en contextos culturales específicos. En este caso, la forma de vernacularización recae en el análisis de Merry (2006:44), en el que «el nombre y referente transnacional son retenidos pero el contenido de las ideas y la estructura de la organización son cambiados dramáticamente».

ción a gran escala y el final de los subsidios y los precios de garantía para el maíz. Otro residente mexicano de la frontera señaló el desgastado edificio desocupado donde alguna vez estuvo la bodega de Conasupo a la que vendía sus cosechas y me dijo: «Mira, [los almacenes] siguen ahí. ¡Podrían reabrirlos y traerlos de vuelta!». Desde finales de la década de 1980 y a lo largo de la década de 1990, Conasupo fue bajando consistentemente sus precios y disminuyendo compras. De acuerdo con June Nash:

Conasupo proveyó algún tiempo un servicio esencial a productores que tenían poco acceso a mercados alternativos y quienes carecían de instalaciones de almacenamiento... para el año 2000, la debilitada Conasupo había dejado de funcionar y los cerca de 450 000 agricultores de cosechas de subsistencia experimentaron la peor crisis de su historia.³⁰

En México, la liberalización agrícola, la caída en los precios y el retiro del apoyo estatal para la agricultura habían comenzado a ocurrir en la década de 1980, en línea con las políticas de ajuste estructural definidas por el FMI ante la crisis de la deuda. Sin embargo, para los agricultores «las reformas agrícolas que el Tratado institucionaliza y pretende hacer irreversibles, significaron la destrucción de la protección a la agricultura y del sistema de comercialización estatal de los productos básicos vigente desde 1936».³¹ A pesar de que los agricultores protestaron sobre la inclusión de los granos básicos en el TLCAN, estos entraron en el acuerdo.³² Conforme México comenzó a permitir el flujo de maíz más barato, subsidiado en los Estados Unidos, se volvió cada vez más difícil para los campesinos ganarse la vida. Desde principios de la década de 1990, las exportaciones de maíz de los Estados Unidos a México han aumentado más de 400%.³³ Al maíz se le asignó un estatus especial bajo el TLCAN como una necesidad para la subsistencia; mas, a pesar del perio-

³⁰ Nash (2001:86).

³¹ De Ita (1997:2).

³² Harvey (1998).

³³ Wise (2011:47).

do de quince años asignado para reducir gradualmente la tasa del arancel, México no ejerció las protecciones y comprimió el periodo de ajuste a menos de tres años para reducir precios y combatir la inflación.³⁴ Los Estados Unidos exportaron maíz a precios «por debajo del costo de producción» violando las reglas contra el *antidumping* de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual deprimió los precios para los productores de México al caer 66% el precio del maíz.³⁵ Timothy Wise estima que los precios del *dumping* de los Estados Unidos y la incapacidad de México para ejercer la cuota de aranceles al maíz mexicano generaron un costo a los productores de 700 millones de dólares por año desde el inicio de la década de 1990 hasta 2007.³⁶ En medio de la devaluación del peso en 1994 (que provocó el encarecimiento de la producción agrícola), el distanciamiento del Estado respecto de la agricultura, la inflación, los costos crecientes de fertilizantes y la eliminación de créditos de subsidio y apoyos para precios, los pequeños agricultores tenían poco apoyo para hacer una transición hacia el periodo de liberalización.³⁷ Neil Harvey señala los funestos efectos en productores a pequeña y mediana escala que dependían del maíz para su ingreso: «67% de la producción de maíz en el sector social de Chiapas se vende solo en el mercado, mientras que el 33% se destina al consumo doméstico»;³⁸ «[...] los bajos precios del maíz habrían tenido entonces un efecto directo en miles de productores que hasta 1994 dependían de los precios garantizados».³⁹

Desde el inicio del TLCAN, 2.3 millones de personas abandonaron el sector agrícola, pero Timothy Wise argumenta que esto de hecho subestima los efectos; «desde 1991, aproximadamente 5 millones de miembros de familias campesinas dejaron de depender de los ingresos

³⁴ King (2006:9); Nadal (2000).

³⁵ Wise (2011:47).

³⁶ Wise (2011:47) calcula las pérdidas mirando cómo el *dumping* afectaba los precios en relación con lo que de otra manera recibirían. Véase también Wise (2010:169).

³⁷ Harvey (1998); King (2006:6-7).

³⁸ SARH-CEPAL (1992:92), citado por Harvey (1998:182-183).

³⁹ Harvey (1998:182-183).

de sus fincas, de acuerdo con el censo agrícola de 2007». ⁴⁰ Según datos proporcionados por el Banco Mundial, el empleo en la agricultura cayó de 26.8% del empleo total en 1991 a poco más de 13% en 2011. ⁴¹ Los aumentos en trabajos en el sector de maquilas, servicios formales y los sectores de exportación y agricultura de temporada no compensaron esta caída en la agricultura, lo cual afectó en particular a los pequeños agricultores. ⁴²

A pesar de que se suponía que la liberalización agrícola eliminaría gradualmente la agricultura a pequeña escala, la producción de maíz en realidad creció 50%, lo que ilustra la carencia de alternativas, ya que muchos campesinos intensificaron la agricultura de subsistencia, migraron al norte o se pasaron a la economía informal en la década de 1990. ⁴³ Sin una salida para vender sus cosechas, los residentes fronterizos asumieron que la lógica neoliberal implicaba un libre comercio literal, el «vender sus productos al mejor postor». A pesar de que Salinas de Gortari nunca mencionó a Guatemala, era obviamente el mejor comprador en la región. Diego también atribuía el permiso al presidente anterior: «Porque todos siembran y consumen maíz... entonces se hizo posible vender dondequiera... Fue una orden de Salinas». El estudio de Amanda King sobre la influencia del TLCAN entre los agricultores de Veracruz reveló aplicaciones de la lógica de la economía neoliberal similares, lo cual expone sus inconsistencias. ⁴⁴ Como preguntaba Roberto Russ, de la Unión de Maiceros (Sindicato de Productores de Maíz), en el estudio de King: «¿Si México no tiene ventajas comparativas para la producción de maíz, entonces en cuál producto las tiene?». ⁴⁵

Algunos residentes de la frontera, como Héctor, afirman que el comercio del maíz es libre debido al tratado de libre comercio oficial,

⁴⁰ Wise (2011:48). Alrededor de tres millones de personas se movilizan al trabajo agrícola de temporada, y eso disimuló los efectos a largo plazo de la deserción de los 2.3 millones de agricultores (Timothy A. Wise, comunicación personal, agosto 10, 2016).

⁴¹ Banco Mundial (2015).

⁴² Zepeda, Wise y Gallagher (2009:10, 12-13).

⁴³ Wise (2011:47); De Ita (2007); *People's World* (2007).

⁴⁴ King (2006).

⁴⁵ King (2006:43).

fusionando perfectamente el acuerdo oficial con sus prácticas locales, pero otros ofrecen interpretaciones más críticas. Saben que este comercio de maíz no se apega a los acuerdos comerciales oficiales. Diego explicaba:

El libre comercio debe ser transportado a través de los puestos de inspección oficiales, pero los campesinos no tienen la orientación para participar. Necesitamos entrenamiento técnico. Queríamos que el gobierno nos enseñara y nos diera la oportunidad de beneficiarnos del libre comercio. No capacitan a los campesinos o a los pequeños productores sobre los [controles] de calidad para la exportación. No podemos competir. . . solo las grandes empresas.

Al igual que Diego, muchos residentes reconocen la diferencia entre las dos interpretaciones del libre comercio, pero afirman su versión como la más equitativa y libre, a pesar de su estatus oficial de ilegal. El hijo de Leandro etiquetó el comercio como «ilegal porque no hay control, pero es permitido». Después de escuchar a otro comerciante de maíz explicar que «el maíz es libre porque México [firmó] el tratado de libre comercio», clarifiqué: «Yo pensaba que [este tratado] fue con los Estados Unidos [y Canadá]». «Sí —sonrió a medias— y con El Nance también». Su experiencia en libre comercio se refería a los acuerdos informales a los que llegaron los residentes fronterizos, productores, comerciantes y las autoridades locales a mediados de la década de 1990 para permitir el comercio transfronterizo de maíz. Excluido de las variantes oficiales, este comercio extralegal, sancionado informalmente, es el libre comercio relevante en la frontera. Para los campesinos, las regulaciones y los procesos burocráticos para registrarse en el libre comercio «oficial» lo hacen cada vez más excluyente y para nada libre.

Agustín, el presidente de la comunidad Santa Rosa hacia finales de la década de 1990, reflexionó sobre el desmantelamiento de la Conasupo al conocer información inconsistente sobre el libre comercio:

[Después de que Conasupo cerró] la gente buscaba un lugar para vender su maíz. Nos reunimos con el presidente municipal. Nos informó sobre el libre comercio. Hicimos un acuerdo [para vender maíz a Guatemala] ya que no

había ningún lugar donde venderlo. Ahora el maíz viene de todo el municipio y a veces más lejos. Hay acuerdos de que nadie debe molestar por esto. Esto se llama libre comercio.

Profundicé con Agustín sobre las razones por las cuales consideraba libre el comercio de maíz: «Para nosotros es libre comercio porque diario pasa. Si fuera contrabando, [el gobierno] no lo dejaría pasar y sí lo deja. También, no hace ningún daño... Es producto de primera necesidad».

Los residentes de la frontera tienen poco acceso a información sobre los acuerdos de comercio oficiales y están social y geográficamente alejados de las protestas en su contra en ciudades de Chiapas como San Cristóbal y Tapachula. La mayoría de la gente escuchaba sobre el libre comercio de la radio y las autoridades municipales. El productor Rogelio calificaba las fuentes de información:

Mucha gente malinterpretó el libre comercio. No estamos involucrados en el comercio, así que no conocemos los requisitos. El presidente municipal a menudo sabe menos que la gente como yo sobre lo que es el libre comercio. Muchos dieron mala información. El libre comercio no significa que no haya impuestos. Todavía hay requisitos.

Diego concordaba: «La gente no entiende lo que es [el libre comercio]. Creen que todo el comercio ilícito que pasa por aquí es libre, pero no. Libre comercio se refiere a lo que cruza la línea oficial legalmente». Pocas personas tenían conocimiento detallado sobre los acuerdos de libre comercio o del modo en que podían participar. Los residentes frecuentemente confundían el TLCAN, el CAFTA y acuerdos de libre comercio entre México y Guatemala como «libre comercio» sin entender distinciones o procesos.

Aun así, cuando productores y residentes conocían los requisitos, se encontraban con dificultades burocráticas. Un desacuerdo entre dos agentes fiscales guatemaltecos en La Mesilla, Guatemala, reveló la carencia de información sobre el libre comercio y los obstáculos para la comercialización. Cuando pregunté sobre los aranceles para el maíz de

México a Guatemala, los agentes en La Mesilla discutieron sobre qué era el arancel y cómo las estipulaciones del libre comercio afectaban las tasas. Pronto me di cuenta de que la confusión no venía simplemente de una falta de conocimiento acerca del acuerdo o de la tasa del arancel. ¡Se debía a que nunca habían aplicado el arancel! Dados los trámites burocráticos que restringen el comercio en el puesto oficial de aduana en Ciudad Cuauhtémoc, México, nunca habían visto más que una cosecha individual pasar a través de su oficina en La Mesilla. El comercio de maíz, admitían, ocurría por rutas sin monitoreo. De acuerdo con documentos de la agencia de administración de impuestos de Guatemala, el SAT, el maíz blanco importado está sujeto a un arancel de 20% y está excluido del acuerdo de libre comercio entre México y Guatemala.⁴⁶

Ya que muchos habitantes de la frontera aprendieron sobre el libre comercio a través de los medios de comunicación, vale la pena mencionar que una gran cantidad de residentes guatemaltecos de la frontera reciben servicio de televisión y radio de México. Muchos de ellos tienen familia en el lado mexicano, donde han trabajado o rentado tierra por generaciones, y en general sabían más sobre los sucesos en México que sobre lo que implicaba el CAFTA para Guatemala. Debido a que el CAFTA no entró en efecto sino hasta julio de 2006, entre 2006 y 2007 los residentes apenas comenzaban a vislumbrar su impacto. Utilizaban la experiencia del campo mexicano con el TLCAN para inferir un pronóstico lúgubre. Los residentes de la frontera guatemalteca pensaban que el CAFTA tendría un impacto limitado en este comercio de maíz porque su lejanía de los circuitos de distribución nacional hacía que el acceso al maíz fuera más barato y más fácil desde México que desde otras partes de Guatemala. Aun así, la existencia de un acuerdo oficial daba credibilidad a las explicaciones locales de que el comercio de maíz era legítimo debido al libre comercio.

Juan Carlos Velasco, asistente de investigación en El Colegio de la Frontera Sur, explicaba que las poblaciones fronterizas han participado

⁴⁶ Guatemala tiene una cuota de 150 000 toneladas métricas de maíz amarillo de México que puede entrar libre de gravámenes (OMC 2015:34). El impuesto es 15% sobre la cuota permitida (SAT 2015:70).

por largo tiempo en sus propias formas de libre comercio.⁴⁷ Me dijo: «Los acuerdos no cambiaron nada, ya que no se aplicaban a ellos». A medida que se difundían los discursos alternativos de libre comercio, las autoridades municipales y comunitarias hacían circular definiciones erróneas. Mientras que los campesinos persuadían a los oficiales estatales de acatar sus exigencias de vender maíz a través de la frontera, las variantes informales del libre comercio se movían del reino de la desinformación a la realidad. El comercio transfronterizo de maíz no era libre solo porque los residentes pensaran que debía serlo o porque estuvieran desinformados sobre los acuerdos oficiales. Lo era porque los oficiales ya no interferían, ni pedían sobornos ni confiscaban el maíz. Era libre y abierto.

Cómo se liberó el maíz

Los productores de maíz habían comenzado a movilizarse para obtener los mejores precios en México desde la liberalización de la década de 1980, pero los esfuerzos llegaron a un pico entre 1983 y 1987 y resurgieron con vigor a partir de que se aprobó el TLCAN.⁴⁸ Una fuerte caída en los precios y el hecho de que la Conasupo no fuera capaz de pagar las tarifas esperadas ocasionó protestas en Chiapas entre 1996 y 1997.⁴⁹ El Estado respondió con una mezcla de represiones, concesiones selectivas y cooptación de liderazgos campesinos al aparato político.⁵⁰ A pesar de que estas movilizaciones inspiraron a algunas personas en la región, los residentes fronterizos y los productores locales afirman su independencia. Sus luchas por vender maíz a Guatemala fueron una respuesta al

⁴⁷ Hizo notar cómo la gente en Tapachula y Tecún Umán se han referido desde hace mucho al contrabando por el río como una forma de libre comercio. Véase Staudt (1998; 2001); Mathews y Vega (2012); Gauthier (2007).

⁴⁸ Bartra y Otero (2005); De Ita (1997); Hernández (1992); Hewitt de Alcantará (1992).

⁴⁹ De Ita (1997).

⁵⁰ Hacia finales de la década de 1990, el Estado vio a los antiguos líderes de las movilizaciones por el maíz de la década de 1980 como aliados clave en los esfuerzos por reconstituir el poder estatal y contener a los zapatistas. Véase De Ita (1997); Pérez (2004).

fracaso de movilizaciones mayores en su intento por lograr una solución para la mayoría de los campesinos.

A mediados de la década de 1990, las comunidades fronterizas bloquearon repetidamente la ruta fronteriza hasta expulsar a los agentes corruptos que antes pedían sobornos o confiscaban mercancías. Estas movilizaciones se detallan en el Capítulo 4, pero el deseo de encontrar una salida para sus cosechas de maíz fue el principal motor que motivó a los residentes a organizarse. Estos consideran que el llamado moral del «derecho al maíz» como forma de subsistencia en medio de la crisis económica y agraria, junto con su gran habilidad para organizarse, fueron responsables de abrir la frontera al comercio de maíz. En contraste, Rogelio y los productores del canal afirman que los esfuerzos de su organización facilitaron el comercio de maíz. Rogelio cuestionó las llamadas de los residentes fronterizos al libre comercio, recordando que al principio muchos de ellos, en el interés de mantener el control único del comercio, llegaron a oponerse a la destitución de autoridades estatales incluso si ello significaba seguir pagando sobornos.

Rogelio contó la historia desde su perspectiva. La crisis del maíz se volvió más grave en 1995, cuando la Conasupo local cerró y no pagó a los agricultores por su cosecha. Decía:

Hubo protestas en toda la región. Los productores bloquearon las carreteras para que nadie pudiera pasar. Luego algunos fuimos a Tuxtla y tomamos como rehén al representante de la Conasupo hasta que pagara el dinero que nos debía. Fuimos a ver al gobernador en Tuxtla. Le pedimos que sacara a los oficiales de la frontera y que no interfiriera en nuestras ventas de maíz. Accedió a retirarlos. Pero, por supuesto, no firmó nada. Eso no funcionaría para el gobierno. Pero el acuerdo se mantiene.

Más de mil productores de la zona del canal fueron a la capital del estado para convencer al gobernador Julio César Ruiz Ferro de que les permitieran vender maíz a Guatemala o, como Rogelio argumenta, a «abrir otras puertas, sacar las policías... hubo muchas reuniones en este momento. Tal vez 100 en esta región».

Muchos residentes fronterizos se acreditan la expulsión de los agentes estatales que patrullaban la frontera; otros dijeron no recordar por qué las autoridades cesaron de intervenir. Los comerciantes fronterizos con mayor experiencia, como Leandro, sostienen que los productores del canal se encontraron con el gobernador en Tuxtla, mientras que los comerciantes y residentes de la frontera estuvieron más involucrados en organizarse dentro de la ruta y con las luchas con unidades de vigilancia estatal. Según Leandro, «Antes no teníamos mucha comunicación con [los productores del canal], pero ellos querían vender su producto a través de la ruta fronteriza». Un buen número de residentes de la frontera se enteraron del acuerdo informal con el gobernador solamente cuando los productores del canal llegaron a intentar usar la ruta fronteriza para transportar maíz a Guatemala. Los residentes se quejaron de que los productores estaban intentando evitar a los locales y «ser libres y no pagar la cadena [o una comisión a nuestros comerciantes]. No quisieron pagar la pasada [para usar el camino]. Pero se resolvió que, si no pagaran, quién iba a mantener el camino... Se resolvió que solo tenían que pagar cadenas [pero ningún otro impuesto]». Un secretario de la oficina del gobernador, junto con productores de la región del canal, fue a las comunidades mexicanas de la frontera para resolver estas disputas y para establecer que no se cobrarían impuestos sobre el maíz. Sin embargo, debido a que los residentes de la frontera controlaban el acceso a la ruta y a que el peaje se requería para dar mantenimiento al camino, los comerciantes seguían cobrando cuotas a otros que lo utilizaban, y establecieron de ese modo su rol de intermediarios. Debido a que eran dueños de la tierra de la cual dependía el comercio, los residentes interpretaron el control del comercio del maíz como un derecho de subsistencia a falta de otros medios de sustento. Leandro explicaba:

Llegamos a un acuerdo para transportar el producto a Guatemala. Los guatemaltecos no pueden entrar aquí. Sólo los productores de la región del canal pueden venir aquí, pero [normalmente transportamos el maíz a Guatemala]. Tenemos que ser nosotros. Como estamos en la frontera, [la gente empezó] a dedicarse al transporte. [Otros] necesitan hablar con nosotros

para no arruinar el negocio y quitarnos el trabajo. Tienen que cumplir las reglas.

Los acuerdos estipulaban que los comerciantes mexicanos de la frontera transportarían todo el maíz. Cualquier camión que llevara maíz a la frontera debía descargarlo y entregarlo a los comerciantes de la frontera para su venta en Guatemala.

El productor Rogelio se burlaba de las manipulaciones de los intermediarios de la frontera, pero admitía su necesidad: «No sé mucho de comercio, pero es de lo que viven [los comerciantes de la frontera]». Lo más importante para Rogelio era «recibir un buen precio [para nuestro maíz]». Debido a que las compañías de molido no la compran a su asociación y algunas pequeñas bodegas particulares en México pagan a los productores solo unos 270 dólares por tonelada, prefieren venderlo a los comerciantes de la frontera, quienes la pagan a 320 dólares. Sin embargo, saben que los guatemaltecos compran el maíz a cerca de 360 dólares por tonelada. Rogelio culpaba a los negociantes guatemaltecos de impedir el acceso directo a los compradores, ya que creía que «son los que más se aprovechan, ya que no hacen nada». Pero, como mencionó: «Muchos de nosotros [los productores] no conocemos a los guatemaltecos. No conocemos los pagos, los pesos [en Guatemala]. Preferimos pasar por los coyotes mexicanos, ya que ellos conocen y trabajan con los comisionistas y comerciantes guatemaltecos».

Cuando la asociación de Rogelio intentó eludir a los comerciantes fronterizos para vender directamente en Guatemala falló debido a su falta de conexiones con oficiales estatales, compradores guatemaltecos y acceso a transporte. Intentaron limpiar una brecha en terreno fronterizo y crear un nuevo camino para transportar por ahí su maíz. Rogelio argumentaba sobre el problema: «puedo intentar [vender maíz] directamente [a los guatemaltecos], pero no funciona porque son como una mafia... el coyote y el comisionista... Se conocen desde hace mucho tiempo... No podemos evitarlos porque trabajan juntos». Después de negociaciones a finales de la década de 1990, los comerciantes fronterizos hicieron una excepción para permitir a los productores del canal transportar su

propio maíz directamente (sin participación de intermediarios de la frontera) a Guatemala, siempre y cuando pagaran las cadenas comunitarias. Sin embargo, el crecimiento del comercio exigió sustituir las camionetas estilo *pick-up* por camiones de diez toneladas, y pocos productores podían costear tal inversión, lo cual llevó a que los comerciantes fronterizos monopolizaran el comercio y el transporte.

Los residentes fronterizos con menos involucramiento en el comercio están al tanto de un acuerdo tácito que permite que el maíz cruce libremente la frontera, pero pocos comprenden su legalidad o cómo surgió. Los intermediarios guatemaltecos y los comerciantes mexicanos colaboraron y discutieron la situación en sus lados respectivos de la frontera, pero negociaron de forma separada con sus oficiales estatales para habilitar el intercambio. Héctor, campesino mexicano, subrayó férreamente que se suponía que los acuerdos que permitían a los campesinos mexicanos vender sus cosechas a Guatemala aplicaban solo para la cosecha de cada individuo y no para aquellos que hacían negocio: «esto es lo que es libre... para que yo venda mi cosecha a Guatemala. Es mi cosecha; no un negocio». Pero las líneas entre la cosecha de un agricultor y un negocio, y entre comercio informal legítimo y un negocio ilegal, se volvieron borrosas en la medida en que la gente que solía vender su propio maíz a Guatemala empezó a vender las cosechas de otros. Diego explicó: «aquí el negocio es el maíz... El negocio creció a medida que los productores buscaban un lugar para vender». Diego continuó comentando que algunos empezaron a decir: «Si no quieres transportar [tu cosecha], lo haré yo. Así es como este comercio creció. Todavía es una cosecha. Es de un productor de México. Por ejemplo, [los productores] de Tierra Blanca, del riego, no quieren llevar... se lo venden a los comerciantes de aquí. [Ellos] van allá para comprar el de ellos».

Los residentes fronterizos, comerciantes, intermediarios y productores de maíz se benefician mutuamente del comercio y están de acuerdo en que los oficiales no deberían interferir porque «el maíz es libre». Sin embargo, ideas divergentes sobre los derechos de subsistencia y las prácticas y consecuencias del libre comercio emergieron a medida que el comercio de maíz pasaba de responder a una necesidad de subsistencia

a convertirse en un negocio transfronterizo en una región con pocas alternativas económicas. Pese a sus diferencias, comerciantes y residentes fronterizos, junto con productores, coinciden en que las disposiciones de los tratados de libre comercio oficiales los excluyen, ponen en entredicho su derecho a la subsistencia y no son libres en modo alguno.

Las autoridades se ciegan

Los residentes fronterizos mexicanos subrayaban el hecho de que los oficiales respetaban los acuerdos informales para vender maíz a través de la frontera. Pero ¿qué mantenía a los oficiales en línea con un acuerdo no escrito? Jaime, un político de Frontera Comalapa, no recordaba detalles de por qué el maíz se podía transportar a través de la frontera, pero reconocía que «se hacen ciegas las autoridades. Calientan su mano y no hace nada porque está ganando». Cuando le pregunté al productor Rogelio sobre cómo los productores y los comerciantes de la frontera eran capaces de convencer a la policía de cumplir el acuerdo, él respondió: «Todavía [los policías] estaban molestándonos, pero nos organizamos para que ya no nos molesten. Si molestan a los productores les preguntamos: ¿ese es su trabajo, molestar? Si traen una orden, muéstrénosla, y si no la tienen no hay razón para molestar». «Pero ¿aceptan esto?», pregunté con incredulidad. «Ellos tienen que entenderlo —argumentó Rogelio— si no, la gente puede echarles fuego, quemar sus carros... esto ha pasado en varias partes de Chiapas. Es un juego que se da. Si [las autoridades] no entendieran, todo el estado de Chiapas se podría desestabilizar».

Entre mis conversaciones con Rogelio y residentes de la frontera me quedó claro que los pactos informales detrás del comercio de maíz no surgieron porque los campesinos lucharan contra el Estado o lo desafiaran por medio de prácticas ilegales. En vez de esto, la tolerancia oficial de este comercio de maíz va en línea con el patrón de respuesta de México a los conflictos sociales en Chiapas. Ahí el Estado emplea una mezcla de coerción selectiva, acoso, aplacamiento y concesiones

para cooptar a los disidentes y mantener el *statu quo* político y económico.⁵¹ Por mucho tiempo, México ha confiado en el clientelismo, o el intercambio de limitados beneficios sociales, políticos o materiales a cambio de lealtad y apoyo político.⁵² El clientelismo ha mediado la interdependencia de los actores informales y el Estado, mientras este último lucha por balancear su compromiso con la ley, con la necesidad de tolerar hasta cierto grado la informalidad de una población numerosa carente de empoderamiento y marginada.⁵³ En el contexto de levantamientos sociales (por ejemplo, de los zapatistas), crisis económica y revelaciones de corrupción generalizada en México durante la década de 1990, la tolerancia del comercio de maíz fue un medio de bajo riesgo para que el Estado mitigara el descontento rural, distrajera la atención respecto de la corrupción política persistente y la falta de inversión estatal en el campo, para dirigir recursos policiacos a asuntos más visibles y urgentes. El gobernador Ruiz Ferro, a quien los residentes citan como el autor del acuerdo informal, renunció en 1998 entre acusaciones de «ignorar muchas señales de advertencia de la tensión en la región», tras la masacre por paramilitares de pobladores indígenas en Acteal, Chiapas (véase Capítulo 4).⁵⁴ Cuando Ruiz asumió el cargo en 1995, era el quinto gobernador del estado desde 1993. En vista del descontento popular y la creciente protesta social, se vuelve comprensible que haya decidido aplacar a los productores de maíz y comerciantes fronterizos.

El Estado mexicano también de vez en cuando da muestras de su autoridad a los residentes fronterizos y a los productores, mediante la suspensión o la alteración de las reglas. En vez de aparecer como un Estado «frustrado» —término que Centeno y Portes⁵⁵ utilizan para describir a Estados caracterizados por una proliferación de regulaciones combinada con una capacidad limitada para aplicarlas—,

⁵¹ Véase Hernández Castillo (2001); Pérez (2004).

⁵² Sabet (2015:508), también basándose en Fox (1994).

⁵³ Cross (1998); Sabet (2015:509); Davis (2012).

⁵⁴ Preston (1998).

⁵⁵ Centeno y Portes (2006:28).

este es un ejemplo de las apariciones fugaces del «Estado fantasma».⁵⁶ Específicamente, la presencia y la autoridad del Estado se siente en las vidas de los residentes fronterizos en medio de su usual ausencia o negligencia, lo que les recuerda que el fantasma siempre acecha entre las sombras.⁵⁷ Un comerciante mexicano de maíz se quejaba en marzo de 2007 de la base militar cercana: «el ejército está chingón... empezando a cobrarnos otra vez [pedir sobornos por el comercio de maíz]. Quiere su regalo». Pregunté, «¿qué hay del acuerdo?». «Sí, hay un convenio de maíz, pero ahora también hay escasez de maíz en México y están vigilando más que no salga». Profundizó: «están diciéndole a todos en la asociación que tendremos que pagar un dinero... mil pesos cada uno al ejército. No sé por qué [están pidiendo]». Pensaba que era porque el ejército quería un transformador para sus luces; «un regalo, nos dicen... una ayuda... Pero es para dejarnos trabajar. Si no, no nos dejan pasar... Nos amenazan». En esta región los oficiales comenzaban a culpar al contrabando de maíz como fuente del desabasto en México y del aumento de los precios, lo cual distraía la atención de las demandas globales por el etanol, la especulación y la acumulación transnacional que generaban la crisis. Los productores de Rogelio también eran señalados. Rogelio me contó:

Los militares detuvieron uno de mis camiones hoy. Envié a uno de los míos a hablar con ellos para que los dejen en paz. No hay razón para detenernos. Este no es su trabajo. No tienen ninguna orden de detención. No estamos transportando ninguna droga. No quieren que vendamos nuestro maíz a Guatemala, pero este no es su trabajo. Nosotros decimos que solo deberían revisar [para ver si no hay] drogas, armas...⁵⁸ Es un comercio legal, el maíz. No hay problemas.

⁵⁶ Véase Goldstein (2012).

⁵⁷ Goldstein (2012); Das (2007); Aretxaga (2003).

⁵⁸ Tanto residentes como productores creen que el trabajo de los militares debería ser solamente asegurar que no se transporte nada ilegal o peligroso, como drogas.

Los residentes y productores apuntan al hecho de que los mexicanos deberían ser libres de transportar bienes dentro de México, por lo que no hay razón para que el ejército los detenga en carreteras mexicanas. Rogelio se mantuvo firme: «no hay por qué pagar... La genta se está organizado para enfrentar los problemas si hay. No deben meterse con nuestro producto. No es su trabajo».

A través de la organización local y de negociaciones con oficiales, productores y comerciantes regresaron a su *statu quo* de tolerancia oficial ante la venta de maíz. Sin embargo, estas periódicas pero impredecibles manifestaciones de desaprobación oficial les recuerdan que su comercio depende del poder del Estado, y de hecho lo refuerza más que desafiarlo. Ya sea que se manifieste mediante redadas o petición de sobornos, la presencia del Estado es palpable en encuentros fugaces, demostraciones dramáticas o mediante rumores. El comerciante Leandro discutía la necesidad de hablar con oficiales del Estado para que «entiendan... saben que no hay otras fuentes de empleo así... Puede que sea contrabando de un modo, porque va por otro camino, pero no es malo». Sin embargo, también reconocía que «dejarnos trabajar depende de la voluntad de las autoridades». Los residentes y los comerciantes de la frontera han aprovechado el ambiente social tenso de Chiapas a su favor, a pesar de que sus beneficios constituyen concesiones menores en el contexto de la inseguridad continua en el campo. Un negociante guatemalteco relataba: «El maíz no vale mucho; no se puede ganar mucho. A veces los comerciantes no tienen ganancias. Si el precio sube en México y es el mismo en Guatemala, hay un riesgo si no se sabe». Después de pagar alquiler de camiones, cargadores, peajes y gasolina, y de contabilizar los precios volátiles y las pequeñas ganancias, el negocio del maíz a veces puede conllevar más riesgos que ganancias.

Rogelio describe el comercio de maíz acertadamente: «Un poco legal, un poco ilegal... No vamos a decir tan legal... Legal legal, no, casi legal... permitido, entendido... pero no del todo legal». En relación con el comercio de maíz transfronterizo no hay necesariamente un choque entre lo que Abraham y Van Schendel llaman lo ilegal (políticamente

inaceptable) y lo lícito (socialmente aceptable).⁵⁹ Las definiciones sociales extralegales que gobiernan el comercio del maíz son aceptadas entre productores, comerciantes, residentes y oficiales del Estado en una región donde las leyes y las políticas oficiales tienen poca relevancia. Lo legal y lo ilegal no están necesariamente opuestos, sino que coexisten dentro del dominio del poder estatal.⁶⁰ Como escriben Comaroff y Comaroff en *Law and Disorder in the Postcolony* (Ley y desorden en la poscolonia), «Remuneraciones vastamente lucrativas... son inherentes en zonas que activamente sostienen una ambigüedad entre la presencia y la ausencia de la ley».⁶¹ La capacidad del Estado para declarar una excepción para el flujo extralegal del maíz aumenta su poder para establecer las reglas, retirarlas a voluntad y manipular la incertidumbre de sus decisiones.⁶²

Legalizando el maíz

Los comerciantes afirmaban que, a pesar de los acuerdos informales en México, los principales impedimentos estaban en Guatemala, donde la entrada desregulada del maíz lo convierte en contrabando. Los residentes mexicanos posicionan el comercio del maíz como algo ilegal pero permitido, aunque muchos residentes de Guatemala afirmaban que era legal. El cargador guatemalteco Emilio me aseguró que «el maíz en Guatemala no está prohibido. Es comida. Si no tuviéramos maíz, toda Guatemala moriría de hambre. La gente está unida para asegurar que el maíz de México sea libre. Si no, nos organizaremos y haremos una huelga contra el gobierno».

Huehuetenango, Guatemala, sufre de desabasto histórico de maíz, lo cual se ha subsanado frecuentemente con producto mexicano. A finales

⁵⁹ Abraham y Van Schendel (2005:4).

⁶⁰ Véase Taussig (1998) y Comaroff y Comaroff (2006:5), sobre cómo lo legal y lo ilegal, la transgresión y la norma se definen y se redefinen entre sí.

⁶¹ Comaroff y Comaroff (2006:5).

⁶² Véase Agamben (2005), sobre la excepción del Estado. Penglase (2009) demuestra cómo los traficantes de droga en Brasil manipulaban la incertidumbre sobre si respetarían las reglas para generar miedo y poder en las favelas.

de la década de 1990 y principios de 2000, Guatemala registró desabastos de maíz críticos debido a daños por un huracán. Las protestas por todo Huehuetenango en 1998, junto con los efectos devastadores del huracán Mitch sobre las cosechas locales, convencieron al alcalde —quien proclamaba autoridad directa sobre el municipio (basado en las reformas democráticas de la posguerra que apoyaban más autonomía municipal)—⁶³ de que se reuniera con residentes fronterizos guatemaltecos, el gobernador de Huehuetenango y oficiales aduanales guatemaltecos (SAT).

Los residentes de la frontera, el gobernador, el alcalde y los comerciantes de maíz firmaron un documento para autorizar la entrada de maíz mexicano. El documento estaba en el edificio principal de La Democracia.⁶⁴ El municipio declaró el acuerdo válido solo en este cruce fronterizo y solo para maíz. Como contraprestación por el pago de un impuesto de unos 50 quetzales (alrededor de siete dólares de entonces) por camión de diez toneladas de maíz al municipio de La Democracia administrado por una mujer en El Girasol, los camioneros reciben arbitrios (tasas o recibos) que los protegen de la intrusión policiaca.⁶⁵ Los comerciantes consideran estas cuotas mínimas. A pesar de que los oficiales aduanales estuvieron en desacuerdo sobre la tarifa apropiada para el maíz, un comisionista guatemalteco creía que la tasa en La Mesilla sería de casi lo equivalente a 650 dólares en aranceles por cada camión de diez toneladas de maíz blanco. Los obstáculos para la comercialización legal, además del reconocimiento de que el desabasto de maíz incrementó el precio para los consumidores guatemaltecos, motivaron al municipio a permitir y documentar el flujo del maíz, con cierta apariencia de legalidad. Los oficiales aduaneros denunciaron el acuerdo como ilegal y se negaron a firmar, pero las declaraciones del alcalde y el gobernador

⁶³ John Watanabe (2000) ilustra cómo las afirmaciones de autonomía municipal en Guatemala tienen raíces históricas en el siglo XIX.

⁶⁴ Sin embargo, el documento no era fácilmente accesible. A los asistentes del alcalde les llevó algún tiempo encontrarlo. Funcionarios y residentes insinuaron que el acuerdo no se hizo público porque indignaría a los productores guatemaltecos que podrían competir por este mercado.

⁶⁵ Véase la figura 3.1 para los impuestos anuales recolectados por La Democracia desde 1998.

tuvieron efecto. Un negociante explicó la indignación del alcalde: «¿No soy un representante del gobierno? Hasta que se firme otro acuerdo, este es válido. Si no, entonces yo no soy válido como autoridad del gobierno. Si no fuera por el maíz de México, no podríamos comer... aquí 100 por ciento de maíz proviene de México». El comercio de maíz es considerado más legal del lado guatemalteco, admitido por el alcalde y amparado por recibos y documentación municipal. La falta de una política a nivel nacional, sin embargo, hace que los residentes fronterizos se encuentren vulnerables a las inclinaciones de oficiales particulares. Al cambiar los oficiales, la policía ha detenido a intermediarios, pero los comisionistas guatemaltecos se unen con comerciantes de sitios lejanos y miembros de la comunidad para bloquear carreteras e incluso para retener a agentes de la policía como rehenes hasta que el acuerdo se respete y los negociantes sean liberados.

Guatemala ha retirado los aranceles periódicamente o ha incrementado las importaciones para mitigar la escasez y controlar los aumentos de precio, pero los desabastos regionales de maíz, los obstáculos para su comercialización y distribución en Guatemala y la influencia de los comerciantes organizados permiten que el comercio se mantenga a pesar de las protestas crecientes de la sociedad civil contra el contrabando y la corrupción.⁶⁶ Guatemala admitió temporalmente la entrada de maíz sin impuestos para compensar desabastos en 2011, pero el contrabando aumentó debido a que pocos productores estaban preparados para participar.⁶⁷ Los oficiales guatemaltecos, al igual que en México, manipulan el apoyo al comercio de maíz a su conveniencia, ya que también entienden que una oposición poderosa de comerciantes puede amenazar sus posiciones y la estabilidad regional. Cuando el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) hizo su primera campaña para el cargo en 2006, en La Democracia los residentes dijeron que él ofreció regularizar este comercio de maíz. Esto nunca sucedió. En 2011 la policía empezó una campaña renovada de detención de comerciantes a pesar del

⁶⁶ Bolaños y Castillo (2010); Radio en Línea (2011).

⁶⁷ Coyoy (2011); Ministerio de la Economía (2011).

acuerdo. Una vez más, negociantes y comerciantes se movilizaron para defender el derecho a transportar maíz.

Comercialización de maíz de los Estados Unidos

Los esfuerzos enfocados en el contrabando del maíz no solo acentúan la vulnerabilidad de los campesinos con respecto a la voluntad de los oficiales estatales, sino que también ocultan las causas de sus aflicciones: la dominación de los grandes negocios agroindustriales, la falta de reformas en el sector de agricultura y la ausencia de alternativas económicas.⁶⁸ Daniel Villafuerte enfatiza en la persistencia de los problemas estructurales que plagan el desarrollo de Chiapas: la dependencia de un sector primario ineficiente, la falta de inversión e industrialización, la deforestación, la devastación del sector agrícola, el conflicto por la tierra, una delicada situación sociopolítica, la pobreza, la incapacidad para atraer inversiones extranjeras y el rápido aumento de la población.⁶⁹ Los residentes fronterizos no se han unido a coaliciones que en todo México se movilizan para exigir la renegociación de acuerdos de libre comercio e inversión en el campo o para luchar por la soberanía alimentaria,⁷⁰ sino que permanecen política, social y geográficamente alejados de estos esfuerzos. En Guatemala, los acuerdos temporales para satisfacer la escasez de maíz no abordan los problemas estructurales que afectan al sector agrícola: pobreza, falta de inversión estatal, riesgos para la seguridad alimentaria, fragmentación del sector maíz, falta de crédito formal para la comercialización, altos costos e ineficiencia de la comercialización interna.⁷¹

Los residentes y los comerciantes más perspicaces criticaron las exclusiones de las políticas oficiales de libre comercio y la liberalización de la agricultura. Comprendían cómo estas políticas disminuían su capacidad para ganarse la vida como agricultores, al ponerlos en competencia

⁶⁸ Véase Fitting (2011); Villafuerte (2009).

⁶⁹ Villafuerte (2009:79).

⁷⁰ Véase Edelman (2005); Fitting (2011).

⁷¹ Véase Van Etten y Fuentes (2004:54).

con el maíz estadounidense más barato y excluirlos de oportunidades de participación en formas legales de comercio transfronterizo. Sin embargo, el contrabando de maíz no ofrece una forma alternativa de libre comercio de base o desde abajo.⁷² Este comercio está inserto dentro de la misma cadena mercantil neoliberal que desplaza a los agricultores fronterizos. Cada verano, cuando el maíz regional es escaso, llegan remolques a los depósitos de Santa Rosa, México, cargados de producto desde el norte de México y de los Estados Unidos. Este maíz es fácil de identificar. No viene en costales con etiquetas de los desaparecidos almacenes Conasupo, sino que se desborda de los remolques. Los cargadores utilizan máquinas para canalizarlo en costales y ganan más del doble de lo que reciben cargando maíz regional previamente empacado. Los comerciantes con conexiones de negocios como Leandro trabajan con los comerciantes de larga distancia. Leandro recibe una llamada sobre un envío que llegará a Santa Rosa. Entonces lo transfiere a sus camiones para llevarlo a vender a Guatemala. Los residentes fronterizos prohíben la entrada de este maíz hasta después de que se venda el de producción local y regional, para proteger los precios. Sin embargo, esto no siempre se logra, y los productores regionales no pueden competir. Facilitar la venta de maíz traído de lejos amplía las desigualdades entre los comerciantes más grandes y los más pobres, como Ramón, que carecen de tales conexiones y están sin trabajo en esta época del año. Además, este flujo de maíz alimenta la misma dinámica económica que dejó a los campesinos fronterizos sin trabajo en primer lugar: la afluencia de maíz barato con subsidios de los Estados Unidos.

El coyote es quien más se beneficia

Así como este comercio de maíz no necesariamente proporciona una alternativa a la cadena mercantil neoliberal de maíz, también es engañoso asumir que proporciona una alternativa económica más viable y

⁷² Véase Mathews y Vega (2012); Ribeiro (2012).

equitativa. El comercio del maíz genera un efecto dominó a través de la frontera al emplear comerciantes, intermediarios, camioneros y estibadores, al tiempo que proporciona a los productores una salida para sus cosechas. Un comerciante explicó: «Aquí vivimos y comemos de maíz [y del comercio de maíz]... Gracias a los comerciantes hay trabajo aquí... Dan trabajo para ser cargadores, camioneros, dan empleo a los de aquí, comen en las casas». Pequeñas tiendas y vendedores ambulantes aparecen alrededor de los depósitos para atender a comerciantes y cargadores. El comercio trae beneficios más amplios porque los camioneros pagan peaje a las comunidades a través de las cadenas, y los residentes pueden vender sus cosechas en Guatemala. En comparación con otras empresas de contrabando, los costos de entrada al mercado de maíz son bajos. Comprar maíz es menos costoso que adquirir azúcar y café, y los comerciantes de maíz no pagan sobornos a los funcionarios. Sin embargo, el político mexicano Jaime opinó que los coyotes (comerciantes) son los que más se benefician: «El coyote se beneficia más... todavía paga a los productores barato y gana de venderlo a los compradores guatemaltecos». Jaime dio un paso atrás para precisar que, sin embargo, no es simplemente una historia de explotación. Dijo: «Pero no es malo [porque] están trabajando su tierra... Nadie, ni las autoridades, tiene interés en parar el flujo del maíz. Se beneficia a la mayoría y se entiende que los productores necesitan sacar su cosecha».

Aunque proporciona trabajo, el comercio del maíz ofrece pocas oportunidades para la movilidad económica. Yolanda, quien vive en Nueva Vida, Guatemala, está casada con un comisionista de maíz, Máximo, quien trabaja para el comerciante mexicano Leandro. Ella declaró: «Leandro es su patrón. Él entrega el maíz a Máximo, quien luego busca a alguien que lo compre. Es maíz [de Leandro]. Los de aquí [los comisionistas] generalmente no ganan tanto como los del lado mexicano. [Los mexicanos] ganan más porque saben dónde comprarlo y ponen el precio».

Algunos exrefugiados en Nueva Vida, como Máximo, están bien posicionados para entrar en el negocio. Después de vivir más de una década en México como refugiados, mantuvieron contactos mexicanos mientras

se establecían nuevamente en Guatemala, en la década de 1990. Algunos conservaron conexiones en el interior de Guatemala. Pero los antiguos refugiados a menudo carecen de los recursos económicos y la experiencia empresarial para convertirse en intermediarios o comerciantes porque han vivido gran parte de su vida en el campo. En 2007 solo había tres intermediarios en Nueva Vida (pero muchos cargadores); la mayoría de los comisionistas viven en El Girasol. De manera similar, en la nueva comunidad de La Maravilla, México, debido a su condición de indígenas exguatemaltecos y a la falta de recursos económicos, solo un residente es comerciante de maíz. Los comerciantes de éxito tienden a ser residentes de larga data con conexiones transfronterizas más profundas y mayores recursos económicos.

Pocos cargadores ganan lo suficiente para convertirse en intermediarios o comerciantes. Máximo solía ser cargador; y solo pudo convertirse en comisionista gracias a un préstamo de 30 millones de quetzales de los hermanos de su esposa que viven en Estados Unidos. Conoció a clientes en Guatemala por medio de la carga de camiones. «Para empezar, se necesita dinero —subrayó Yolanda—. Hay más negociantes en El Girasol... hay bastantes... pero [pocos] aquí. [Nueva Vida] es una comunidad nueva. También otros no piensan en [el negocio]. Necesitas la capacidad. También eres responsable. Si pierdes algo, tienes que pagar por esto. Siempre cuesta». Muchos comerciantes, debido a la fluctuación de los precios y al valor relativamente bajo del maíz, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Yolanda complementa los ingresos de su familia vendiendo comida a comerciantes y cargadores.

Algunos productores resienten la influencia de los intermediarios, y algunos comisionistas guatemaltecos desean roles más activos con los comerciantes mexicanos. Sin embargo, en lugar de desarrollar diferentes posiciones de clase, la dinámica del comercio a menudo refleja lo que Liliana Goldín llama un efecto de «sube y baja»: quién está «arriba» o «abajo» varía según las circunstancias.⁷³ La acumulación en el comercio del maíz es pequeña debido a las fluctuaciones en los precios, el precio relativamente bajo del maíz y los costos de transporte. Los comercian-

⁷³ Goldín (2011).

tes piden, a quienes piensan que ellos obtienen grandes ganancias, que recuerden que el comercio del maíz es estacional, de enero a marzo. Muchos se convirtieron en comerciantes en primer lugar porque sus tierras no alcanzaban para cultivar suficiente maíz para la subsistencia. Los comerciantes más pobres como Ramón creen que los productores de riego, quizás, pueden tener una ventaja porque cosechan dos veces al año, mientras que él solo una. La mayoría de los comerciantes fronterizos continúan identificándose principalmente como agricultores de maíz, incluso si apenas cultivan. En el contexto de una crisis rural del maíz, los productores y los comerciantes mexicanos, tanto como los intermediarios guatemaltecos, dependen mutuamente del comercio y concuerdan en que no podrían sobrevivir si los funcionarios intervinieran.

¿Libre comercio alternativo?

A primera vista, este comercio de maíz parece ser una forma de resistencia a la liberalización del campo mexicano y guatemalteco y a la exclusión de los campesinos. Sin embargo, las prácticas de los residentes no necesariamente cuestionan las políticas neoliberales de libre comercio, sino que reconfiguran las relaciones con la economía neoliberal y el Estado de manera compleja y a menudo contradictoria. Las movilizaciones locales en torno al derecho a vender maíz a través de la frontera motivaron —ya que también fueron posibilitadas por— cambios políticos, sociales y económicos regionales y nacionales más amplios que crearon oportunidades para el contrabando y demandas de control fronterizo local. Los discursos de libre comercio que los residentes escucharon por la radio, las autoridades municipales y los rumores, así como el aumento de la migración a los Estados Unidos en la década de 1990, coincidieron con el retiro de los funcionarios estatales que antes vigilaban esta ruta. En este contexto, la confusión-convergencia sobre el libre comercio se vuelve comprensible. El siguiente capítulo detalla cómo los residentes expulsaron a los agentes estatales del cruce en el contexto de la crisis política y económica.

4. Gravando la frontera

Durante una calurosa y polvorienta tarde de abril de 2007, me senté con Alonso, un maestro de primaria, afuera de la cadena de Santa Rosa. La caseta de peaje era una pequeña cabaña de madera al borde del territorio de la comunidad. Más importante era la cadena, que se extendía a través de la carretera, sujeta a un poste de metal. Marca la línea donde cada camión que transporta comercio a través de la frontera debe detenerse para pagar por el paso. Los residentes llaman *cadena* a las casetas de peaje, pues cada comunidad las usa para delimitar su territorio y regular la entrada. En las cadenas, los residentes cobran lo que ellos llaman «impuestos» a los camioneros que utilizan su ruta para contrabandear mercancías a través de la frontera. Esto es considerado contrabando debido a la evasión de inspecciones, impuestos y documentación oficiales, y este sistema de cobro de peaje convierte este contrabando en un comercio local regularizado.¹ Las comunidades fronterizas utilizan las ganancias para el mantenimiento de las carreteras y para proyectos de desarrollo local, lo que incluye un parque, una cancha de baloncesto techada y la ampliación de los servicios de agua y electricidad. El parque y la cancha de baloncesto de Santa Rosa son la envidia de otras comunidades rurales. El Nance comenzó a trabajar en los suyos en 2007, y Nueva Vida en 2014.

¹ Véanse paralelismos en Flynn (1997).

Los precios están escritos con un marcador en una cartulina colocada en la pared de la cabañita: 50 pesos (alrededor de cinco dólares)² por un camión de diez toneladas, 30 pesos (alrededor de tres dólares) por una camioneta de tres toneladas y 15 pesos (alrededor de \$1.50 dólares) por una camioneta *pick-up*. Dos miembros de la comunidad están siempre presentes para mantener la responsabilidad y minimizar el robo. Cada pareja hace un turno de 12 horas, y la cadena es patrullada las 24 horas del día. En cada reunión mensual de la asamblea, el presidente de la comunidad anuncia cuánto dinero recaudó cada pareja, lo cual da a conocer las ganancias de la comunidad y los esfuerzos de cada equipo de recolección. Cuando se sospecha de robo, Santa Rosa coteja su libro de contabilidad con El Nance. Los patrullajes pueden ser monótonos e incluso agotadores cuando las temperaturas alcanzan los 38 °C en abril y cuando las lluvias torrenciales llegan todas las tardes entre junio y septiembre. Cuando expresé mi interés de trabajar en un turno, los residentes se quedaron un poco atónitos; «¿Por qué querías hacer eso? ¿Te está obligando [tu casero] a cumplir con su turno? No debería hacer eso». Al igual que las otras obligaciones comunales del ejido (actuales y pasadas), cada cabeza de familia es responsable de un turno por mes, lo que se conoce como prestar «servicio» en la cadena. Los residentes ven la cadena como un benefactor de la comunidad, como un servicio y beneficio a la comunidad. Como dijo una mujer de Santa Rosa: «El ejido vive de este impuesto que gana la cadena». En la práctica, sin embargo, rara vez vi a los residentes más ricos o a los contrabandistas locales patrullándola. Por lo general, pagan a los residentes más pobres para que presten sus servicios. Para algunos residentes este ingreso es una forma de sustento. Una vez patrullé en Santa Rosa un turno de doce horas con Julia, una viuda que trabaja en la cadena varios días a la semana para mantenerse. Ella es una de las pocas mujeres que patrullan, porque generalmente se considera una responsabilidad del jefe masculino de la familia. Julia reflejaba el profundo conocimiento de los flujos fronterizos

² El peso mexicano ha caído dramáticamente contra el dólar estadounidense en años recientes, pero en ese momento la conversión era aproximadamente de 10.7 pesos por dólar; yo uso la razón de 10 pesos por dólar en este libro. Véase Index Mundi (2016).

que adquieren los residentes al servir en la cadena. No solo conocía a la mayoría de los camioneros porque, como dijo, muchos pasaban semanalmente, sino que también sabía lo que cada uno estaba transportando: le bastaba con mirar cuán bajo andaba el vehículo. Me señaló cuáles llevaban maíz, bloques de cemento o mangos.

Hay cuatro casetas (cadenas) administradas por las comunidades en esta ruta fronteriza que siguen operaciones similares. Durante mi trabajo de campo, entre 2006 y 2007, Alonso estuvo a cargo de llevar los registros de la cadena de Santa Rosa. Basado en sus libros de contabilidad, Santa Rosa recaudó aproximadamente el equivalente a 60 000 dólares en 2006. Multiplicado por cuatro comunidades fronterizas que reciben peajes similares, estas sumas son sustanciales en las comunidades rurales donde el salario promedio por un día en el campo es de seis dólares. Siguiendo el consejo de Alonso, Santa Rosa abrió una cuenta bancaria en el municipio de Frontera Comalapa y comenzó a subir los precios para los camiones de Guatemala (que a menudo son más grandes y se considera que causan más desgaste en el camino).

Los camiones de diez toneladas pasaban a toda velocidad, removiendo el polvo y los gases del escape mientras navegaban por una carretera que alternaba tramos de terracería y otros pavimentados. Cada camionero sabía que debía detenerse en la cadena (foto 10). Los residentes pueden levantarla para bloquear a los funcionarios o contrabandistas que no respetan el alto, pero esto es raro. Los camioneros saben que hay que parar y pagar. Perpleja sobre por qué los contrabandistas, que suelen ser más ricos y poderosos que los campesinos, se han conformado con los impuestos, le pregunté a Alonso: «¿Por qué pagan? ¿Hay camioneros que no respetan la cadena [y no paran]?». Él respondió, «Generalmente conocemos a la gente que pasa... [y] ellos nos conocen y saben las reglas aquí».³ Ellos saben que es la ley de la ruta.

³ Véase Galemba (2012b). Algunas partes de este capítulo aparecen en Rebecca B. Galemba, 2012b, «Remapping the Border: Taxation, Territory y (Trans) National Identity at the Mexico-Guatemala Border». *Environment y Planning D: Society & Space* 30(5), pp. 822-841.



Foto 10. Mujer colectando dinero de un camionero en la cadena (fuente: foto de la autora).

Los residentes argumentan que, debido a que la frontera internacional atraviesa sus tierras por una carretera que ellos mismos construyeron en gran parte, tienen derecho a cobrar peajes y a hacer negocios que dependan de su carretera. Desde este punto de vista, la propiedad de la tierra, junto con la construcción y el mantenimiento de carreteras, les da derecho, como repitieron muchas personas, a «hacer la ley» dentro de la ruta.⁴ Como dijo un residente:

La policía necesita nuestro permiso para entrar ya que esta tierra es nuestra. El gobierno no tiene derecho a entrar porque no ha hecho nada por nosotros. No ha habido programas para mantener la carretera... no hay apoyos... Fuimos nosotros los que abrimos el camino [que cruza la frontera]... era monte... Entonces, ¿con qué derecho viene el gobierno a meterse aquí?

⁴ La recolección de impuestos regionalmente tiene una larga historia en ambos lados de la frontera, desde el impuesto de la «alcabala» durante el dominio español (Wallace Wilkie, Meyer y Monzón 1976). Estos impuestos, sin embargo, eran usualmente colectados por la elite regional o por hombres poderosos, y no por las comunidades locales.

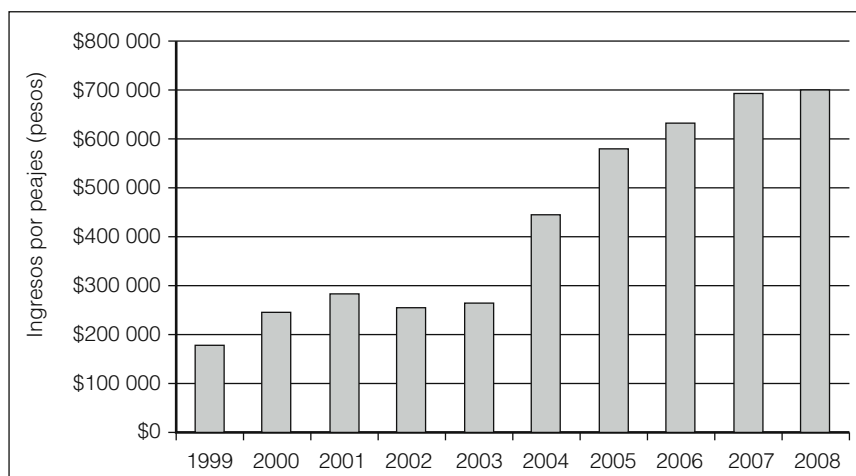
El sistema de cadena institucionaliza el control local sobre esta ruta. Las cadenas proporcionan fondos comunitarios, otorgan autoridad local sobre la ruta y proporcionan una visión alternativa de la frontera y el papel del Estado. Sin embargo, en la práctica el control local es parcial y se negocia con actores regionales más poderosos, incluidos contrabandistas de larga distancia y agentes estatales. Las cadenas ejemplifican la ambivalencia de los residentes frente a la economía del contrabando, que concentra en forma desproporcionada los recursos en manos de contrabandistas, funcionarios corruptos del gobierno y empresas formales que se benefician de esa práctica, y aunque los habitantes reconocen los beneficios económicos que reciben sus comunidades, también experimentan una desigualdad y una inseguridad crecientes.

La ruta fronteriza no siempre estuvo bajo control local. Según Diego, exsecretario de Santa Rosa, «Hacia 1978 [comenzó a haber] más problemas... Era más controlado aquí por el Estado por interés en la mordida. Antes [los funcionarios] se molestaban por el negocio, pero ya no, después de [aproximadamente] 1994 [refiriéndose al año de la rebelión zapatista]». Fue difícil recopilar información fiable sobre la historia de la acción policiaca en las fronteras. No había registros oficiales de las inconsistencias en la regulación estatal y las comunidades solo mantenían registros en papel en sus agencias/comisarías comunitarias (edificios de reunión de la comunidad), que detallaban con mayor frecuencia cosas como la venta de tierras y ganado. Me basé en la triangulación de las entrevistas y conversaciones con los residentes en grupos focales para discernir cuándo se produjeron cambios en la vigilancia fronteriza. Hice preguntas centradas en los principales eventos familiares, incluidos matrimonios, nacimientos, bautismos y compras de tierras, para fijar mejor las fechas y los recuerdos. Hablé con los residentes mayores y busqué a los expresidentes de la comunidad para recolectar sus reflexiones. En lugar de encontrar fechas firmes, hubo un consenso general en cuanto a que la frontera comenzó a cambiar a mediados de la década de 1990. Sin embargo, la forma en que se contaba la historia se veía afectada por la experiencia de cada individuo, así como por la posición pasada y presente de cada uno en la comunidad y su relación con la economía del

comercio y el contrabando. La localización de información era a menudo, como en gran parte del trabajo de campo etnográfico, resultado de la serendipia, la paciencia y la perseverancia.

Alonso compartió conmigo los registros de la cadena en su cuaderno de los últimos dos años, pero no podía recordar cuándo fue que la comunidad comenzó a cobrar peajes. Algunos residentes dijeron que había sido una década atrás, otros que hacía quince años, y otros que más cerca de veinte años. Diego dijo que la comunidad comenzó a registrar en 1998, pero que comenzó a coleccionar, aunque de una manera menos organizada, unos años antes. Buscar los registros para ver cómo han cambiado los movimientos a lo largo del tiempo parecía ser un callejón sin salida. Nadie sabía quién los tenía. Juan, el vicepresidente de la comunidad de Santa Rosa, me llevó al archivo comunitario dentro de la agencia comunitaria para buscar. Él no sabía a ciencia cierta cómo abrir el archivo cerrado, cuya llave parecía haber desaparecido. Al principio, no estaba segura si la llave no estaba realmente en ninguna parte o si me estaban dando vueltas. Como insistí, Juan sugirió encontrar a alguien que lo abriera. No sé si finalmente se abrió o si la llave apareció por arte de magia, pero Juan me invitó a examinar el contenido unos días después. Apilada hasta la cintura de registros de ventas de tierras, nacimientos, registros de asistencia a asambleas y ventas de ganado, apenas pude descifrar la información escrita con tenues marcas de lápiz. Luego, un día, una estudiante de mis clases de inglés que enseñaba a los jóvenes locales me invitó a almorzar a la casa de sus abuelos. Mientras hablábamos, me enteré de que su abuelo, Esaúl, fue el primer responsable de la cadena de Santa Rosa.

Como muchos residentes fronterizos mexicanos mayores, Esaúl nació en Guatemala, pero cruzó la frontera con su madre cuando era un niño pequeño. Me dijo que se convirtió en presidente de la cadena en 1996, pero la comunidad comenzó a cobrar peajes en 1993. Cuando mencioné que estaba buscando los registros, Esaúl dejó de hablar, se levantó de su silla en el patio y entró en su casa. Miré a mi alrededor perpleja. Cuando regresó, me dio un montón de cuadernos polvorientos. En el interior estaban todos los registros escritos a mano de la cadena desde

Figura 4.1. Ingresos por impuestos de la cadena de Santa Rosa entre 1998 y 2006.

Las cantidades fueron originalmente calculadas en dólares estadounidenses y para ponerla en pesos se utilizó la conversión del dólar de 2007 (10.7 pesos por dólar, dependiendo de las fluctuaciones mensuales). Fuente: Archivos de la comunidad, Santa Rosa, México. Compilado por la autora con proyecciones de Dan Galemba.

mediados de 1998 hasta el comienzo del cuaderno de Alonso. Los cuadernos habían estado bajo su cama durante años. Vi que los precios de peaje por camión se habían mantenido relativamente constantes, pero el número de camiones y la cantidad de comercio habían crecido notablemente en los últimos años (figura 4.1).

Establecimiento de la cadena

Santa Rosa y El Nance comenzaron a cobrar peajes más o menos al mismo tiempo, pero los residentes de ambas comunidades admiten que fue idea de un hombre en El Nance: Manuel. Según Manuel, a mediados de la década de 1980, un recaudador de impuestos, o fiscal, de Frontera Comalapa fue asignado para patrullar la ruta fronteriza, característica de la históricamente vacilante vigilancia fronteriza. El fiscal alquiló una habitación en la casa de Manuel, porque él era el presidente de la comunidad en ese momento y no había una oficina oficial. Manuel vio al fiscal

cobrando a los vehículos que pasaban y pensó: «Si puede cobrar y poner dinero en su bolsillo, ¿por qué no deberíamos cobrar también? Nosotros somos los que vivimos aquí, somos dueños de la tierra y mantenemos el camino». Poco después, Manuel instaló un puesto fuera de su casa y comenzó a recaudar impuestos junto al fiscal. Las comunidades fronterizas vecinas pronto siguieron y comenzaron a organizarse para expulsar a los oficiales de la ruta. En un contexto en el que la vigilancia estatal ha sido históricamente desordenada y corrupta, fueron las acciones del recaudador de impuestos, y no las de Manuel, las que parecieron arbitrarias.⁵

Los residentes fronterizos argumentan que pueden patrullar la frontera y recaudar impuestos porque el comercio transita por su territorio. Los residentes de ambos lados de la frontera no solo colaboraron en la construcción de la carretera en la década de 1980, sino que también la han mantenido. El mantenimiento de las carreteras es una tarea difícil cuando hasta 100 camiones de diez toneladas pueden llegar a transitar por ellas cada día. Argumentan que su camino no es una carretera federal; no ven ninguna contradicción con los funcionarios estatales que patrullan las carreteras federales y los puestos de inspección oficiales. El Nance señala que se trata de una comunidad de propietarios privados, donde cada uno de ellos cedió una porción de terreno para construir la carretera. La identificación de Santa Rosa como ejido revela múltiples interpretaciones de la autonomía y los derechos de propiedad de la tierra. Los residentes afirman que pagan impuestos ejidales al gobierno y reconocen que las tierras ejidales fueron otorgadas por el Estado. Sin embargo, la historia de control corporativista de México dio a los ejidos un alto grado de autonomía *de facto*, ya que este sistema vinculó verticalmente a las elites locales y sus comunidades al sistema de clientelismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).⁶ Al defender su derecho a

⁵ Claudio Lomnitz (1995:42) relata el reto de México de crear una burocracia profesional y una esfera pública. En la era colonial los funcionarios tenían que ganar dinero de sus posiciones (Elliot 1984:195, 299, citado en Lomnitz 1995:23). México continúa experimentando una mezcla de «burocracia racional» con «caciquismo», refiriéndose a la gobernanza basada en las relaciones de patronazgo entre las elites locales y sus comunidades (Lomnitz 1995:25).

⁶ Sieder (2002) y Nash (2001), basados en Nugent y Alonso (1994:229).

la cadena, los residentes de Santa Rosa afirman que «porque el ejido es autónomo, pone sus leyes». Reevalúan críticamente esta interpretación de las leyes del ejido mexicano para afirmar que sus comunidades son autónomas para promulgar sus leyes dentro de su territorio.⁷ Esta autonomía local, por supuesto, nunca fue concebida para aplicarse al comercio internacional. Las reivindicaciones de autonomía también se basan en una larga historia en Chiapas, donde la presencia del gobierno federal se sintió muy poco. Después de la independencia de España en 1821, la elite de Chiapas buscó la anexión a México en 1824, creyendo que la distancia respecto de la Ciudad de México permitiría una mayor autonomía y que unirse a México significaría más estabilidad y prosperidad que unirse a Centroamérica; de hecho, Chiapas es el estado en el que la oligarquía se resistió más intensamente a las reformas de la Revolución mexicana.⁸ La población local temía que si el Estado pavimentaba toda la carretera fronteriza, los funcionarios tendrían la justificación para ejercer una mayor vigilancia. El deseo de una carretera pavimentada, combinado con la desconfianza en el Estado, provocó que el camino se convirtiera literalmente en un mosaico de la autoridad del Estado y la comunidad. Los tramos de la carretera se componen de pavimento nuevo, que se adhieren a partes de pavimento más gastado y a terracería y piedras.

Los habitantes construyeron la carretera fronteriza de una manera que refleja su visión de la frontera, que prevalece a una definición oficial más explícita. Héctor explicó que hasta que la Comisión Internacional de Límites y Agua aclaró cuál era la frontera con monumentos adicionales, mucha gente pensaba que la frontera iba en la otra dirección. Dibujó una línea en mi cuaderno y marcó el límite oficial perpendicular a la primera línea. Según los entendimientos locales, en la década de 1980 las comunidades construyeron la carretera fronteriza perpendicular a los monumentos blancos que delimitan la división oficial entre México y Guatemala, y que los atraviesa. La mayoría de los residentes y comerciantes no experimentan la frontera en la línea oficial, especialmente

⁷ Véase Nuijten (2003); Harvey (1998).

⁸ Lewis (2005:4-5).

porque los oficiales rara vez entran en la ruta. En cambio, las cadenas son lugares de encuentros fronterizos cotidianos, donde cada comunidad marca su territorio y cobra peajes. En consecuencia, los residentes perciben las relaciones sociales y económicas de acuerdo con la dirección de la carretera fronteriza donde ellos han puesto las cadenas. En contraste con la geografía norte-sur que implica la frontera oficial internacional, el comercio se representa como subiendo (debido a la colina) a Guatemala y bajando a México.

Los residentes afirman moralmente que ellos no solo son las autoridades fronterizas legítimas, sino también más benévolos que los funcionarios estatales, a quienes ridiculizan por extorsionar. Razonan que «no les pertenece cobrar aquí, solo en su oficina»; pueden cobrar donde tienen salarios y sus jurisdicciones apropiadas. Creen que si los funcionarios vienen a monitorear su camino fronterizo están actuando fuera de sus mandatos, lo que constituye corrupción. Diego destacó la ética de la tributación local: «Solo cobramos a la gente que está... haciendo negocios. Si ganas dinero tienes que cooperar. Si es solo la cosecha de un individuo, lo entendemos. Apreciamos si contribuyen, pero no los forzamos». De hecho, los residentes de El Girasol, Guatemala, enfatizan que el pago de sus peajes, incluso para los contrabandistas, es una contribución voluntaria. Los residentes dan crédito a sus propios esfuerzos por establecer un control local sobre la frontera. Sin embargo, sus movilizaciones se produjeron en un contexto más amplio de movimientos sociales, crisis económica y política, levantamientos campesinos y protestas contra la corrupción oficial, que llegó a su apogeo en ambos lados de la frontera a mediados y finales de la década de 1990.

Crisis de gobernanza y movimientos sociales

Desde la década de 1960 hasta la de 1990, los empleados de migración y aduanas, los soldados y otros funcionarios estatales estuvieron estacionados intermitentemente a ambos lados de esta ruta fronteriza. Los residentes mayores mencionan que de 1955 a 1972 había una pequeña

aduana mexicana en la ruta, pero que posteriormente fue quitada. Algunas personas insinuaron que fue El Nance el que los echó, porque los funcionarios estaban alquilando tierras de los terratenientes locales. Durante la guerra de Guatemala en la década de 1980, soldados guatemaltecos patrullaron la línea internacional. Su presencia generalmente duraba unos días o semanas, y luego la frontera volvía a estar sin patrullar. Había un pequeño puesto aduanero en El Girasol hasta que se creó la Policía Nacional Civil (PNC), en 1997. El gobernador de Huehuetenango dijo que se quitó el puesto debido a «muchos problemas y corrupción»; ahora la policía está a cargo de lidiar con el contrabando. Anteriormente, una oficina de aduana estaba ubicada en la carretera mexicana inmediatamente fuera de la ruta fronteriza, pero esta fue removida alrededor de 1991 durante un periodo de reforma fiscal mexicana. La razón era que tener inspectores de impuestos estacionados en toda la vasta región fronteriza con un alto grado de autonomía no solo era un desperdicio de recursos, sino que también fomentaba la corrupción y el abuso. La única presencia visible del Estado cerca del cruce es una base militar mexicana a pocos kilómetros de la ruta en la carretera mexicana. A finales de la década de 1980 y en la de 1990, las inspecciones móviles periódicas por parte de la policía estatal, la policía federal, el ejército, la policía de carreteras, la aduana y la migración se hicieron más frecuentes en el lado mexicano.

A mediados de la década de 1990 y principios de la de 2000, los residentes fronterizos aprovecharon el clima regional de movimientos sociales, la crisis económica y las crisis de gobernabilidad en México para expulsar a los agentes estatales y afirmar su control sobre la ruta fronteriza.⁹ Diego se refiere a esto como el periodo en que «la gente se despertó, peleando sus derechos. Aquí es nuestra tierra y estamos encargados aquí». De manera similar, Jan Rus y sus coautores se refieren a la década de 1990 como un periodo de despertar en Chiapas, cuando los

⁹ A pesar de que el fin de la guerra también despertó movilizaciones locales en el lado guatemalteco de la frontera, los residentes de ambos lados tienden a enfocarse más en los cambios en México, que ha impuesto históricamente más vigilancia fronteriza.

campesinos rurales descubrieron una nueva «autoconciencia política» para responder a la crisis económica y política.¹⁰

Durante la mayor parte del siglo xx, México se apoyó en un sistema político de corporativismo, dominado por el PRI, que mantuvo el poder durante setenta y un años, hasta el año 2000. La política corporativa era un sistema por el cual el Estado mexicano cultivaba el apoyo de campesinos, trabajadores y organizaciones populares, y contenía el descontento a través del patrocinio estatal. Las instituciones patrocinadas por el Estado proporcionaron acceso a la tierra, a créditos y recursos estatales a cambio de lealtad al partido y votos.¹¹ Las críticas a la corrupción del gobierno y a una crisis de gobernabilidad se han ido acumulando en México desde finales de la década de 1960. Esto llegó a su punto culminante cuando soldados masacraron brutalmente a estudiantes que se manifestaban en el complejo de viviendas de Tlatelolco en la Ciudad de México en 1968. El gobierno no investigó y, en el contexto de la Guerra Fría, desvió la culpa hacia «extremistas y agitadores comunistas».¹² El gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) intentó mitigar las protestas por medio de políticas clientelistas que utilizaban la distribución de la tierra y un ambicioso programa de gasto público respaldado por préstamos externos alentados por las expectativas en torno a los altos precios del petróleo.¹³ Sin embargo, la crisis de la deuda de principios de la década de 1980 puso de manifiesto las contradicciones y las deficiencias del sistema corporativista mexicano.¹⁴ Los problemas se agudizaron a medida que el Estado tenía menos recursos para aplacar y cooptar a la disidencia tras la crisis de la deuda, el incumplimiento y la crisis económica de 1982. Los problemas se vieron agravados por el mal manejo del terremoto de 1985 por parte del Estado. En la década de 1990, el colapso del peso en 1995 (cuando el peso perdió la mitad de su valor) y las crecientes revelaciones

¹⁰ Rus, Hernández Castillo y Mattiace (2003:7).

¹¹ Rus, Hernández Castillo y Mattiace (2003:9).

¹² Véase Doyle (2003), sobre la investigación en la Guerra Sucia de México (1968-1982) y las desapariciones forzadas por parte del gobierno. Véase también Gutmann (2002).

¹³ Nash (2001:79).

¹⁴ Nash (2001:79).

de corrupción gubernamental disminuyeron aún más la confianza en el Estado mexicano. En un contexto de crisis económica y política, las organizaciones independientes no afiliadas al Estado: campesinas, indígenas y obreras comenzaron a atraer mayor apoyo a medida que la gente veía la disminución de la utilidad de afiliarse a un aparato estatal en declive y en crisis económica.¹⁵ El sistema de corporativismo estatal practicado por el PRI en México comenzó a deshacerse en las décadas de 1980 y 1990 para revelar crisis más amplias de gobernabilidad. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se hizo ampliamente conocido no solo por institucionalizar el modelo neoliberal en México y sus efectos devastadores sobre los campesinos y los pobres, sino también por su revelación de una extensa corrupción en el PRI. La rebelión zapatista, que comenzó el 1 de enero de 1994 en coordinación con el día en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor, no solo reveló la incapacidad del Estado mexicano para responder a las necesidades de sus ciudadanos, sino que también demostró cómo contrarrestaron la disidencia del Estado con represión.

Los zapatistas emergieron de las selvas de Chiapas el 1 de enero de 1994 para exigir el derecho a la tierra y al sustento, el respeto por los derechos y la autonomía de los indígenas, el fin de la corrupción y los abusos del gobierno, y una revisión de las políticas neoliberales encarnadas en el TLCAN que amenazaban la supervivencia de los campesinos. Para contener el conflicto, el gobierno mexicano empleó estratégicamente una mezcla de cooptación (incluida la provisión de beneficios y programas sociales a organizaciones y comunidades amigas del Estado), represión selectiva y militarización.¹⁶ Rosalva Aída Hernández Castillo ha denominado a esta estrategia la «política de dos caras» del gobierno: la ayuda económica y la paramilitarización, que pretendía «dividir al movimiento indígena y campesino».¹⁷

¹⁵ Rus, Hernández Castillo y Mattiace (2003:11). El Congreso Nacional Indígena (CNI) de 1974, organizado por el Obispo Samuel Ruiz, ayudó a reactivar la difusión de organizaciones independientes (Nash 2001:95).

¹⁶ Hernández Castillo (2001); Pérez (2004).

¹⁷ Hernández Castillo (2001:224, 225).

El Estado mezcló la militarización y la represión selectiva con concesiones estratégicas para enviar a los campesinos de regreso al redil estatal. A medida que México militarizaba el estado de Chiapas a finales de la década de 1990, los temores de que más individuos se unieran a los zapatistas también hicieron que algunos funcionarios estuvieran más dispuestos a negociar con las demandas locales y a cultivar vínculos clientelistas. A pesar de que la rebelión zapatista mostró al gobierno que ya no podía ignorar las demandas de los marginados, también destacó cómo la protesta tendría sus límites militarizados.¹⁸ La masacre de Acteal en Chiapas en 1997, cuando grupos de vigilantes armados y apoyados por el PRI asesinaron a cuarenta y cinco residentes, en su mayoría mujeres y niños, en el poblado indígena de las tierras altas de Acteal, reveló la complicidad y la violencia del Estado para reprimir la potencial disidencia.¹⁹ La inestabilidad y las crisis en la gobernabilidad llevaron a Chiapas a tener cinco gobernadores en cinco años a finales de la década de 1990, con las comunidades divididas entre aceptar o no la ayuda del gobierno, volver a caer en políticas clientelistas o unirse a la rebelión.²⁰

Jan Rus y sus coautores describen cómo la crisis económica, agravada por una crisis de gobernabilidad, llevó a los campesinos de Chiapas a organizarse:

Ante la profundización de la crisis económica, con un gobierno que solo había empeorado las cosas eliminando los programas de ayuda y poniendo fin a la reforma agraria, y que luego satisfizo las demandas de los indígenas de resolver su propio problema a través de organizaciones y cooperativas independientes a las cuales posteriormente reprimió, a principios de la década de 1990 los pueblos indígenas de Chiapas estaban cada vez más enojados con el gobierno y dispuestos a desafiarlo.²¹

¹⁸ Véase Gutmann (2002:151); Stephen (1999).

¹⁹ El grupo armado responsable de las atrocidades pasó por el puesto fronterizo y fueron revisados por fuerzas de seguridad estatales en el puesto de revisión bajo el mandato de un general del ejército en la cercanía (Rus, Hernández Castillo y Mattiace 2003:18-20). También véase Gutmann (2002).

²⁰ Rus, Hernández Castillo y Mattiace (2003:18).

²¹ Rus, Hernández Castillo y Mattiace (2003:15).

Fue en ese contexto que los residentes fronterizos, a pesar de estar en una región al margen de la lucha zapatista, se unieron para expulsar a los oficiales que patrullaban la ruta fronteriza. El conflicto zapatista tuvo múltiples efectos indirectos en esta región con menos partidarios zapatistas. Como Jan Rus y sus colegas afirman, «Incluso para las comunidades que no participaron directamente en la rebelión, la vida después del 1 de enero de 1994 cambió dramáticamente».²² Los zapatistas proporcionaron a los campesinos un discurso para alimentar sus luchas contra la corrupción oficial, distrajeron la atención oficial de la frontera debido a las mayores preocupaciones en los Altos y la Selva, donde había más partidarios zapatistas, e hicieron que algunos funcionarios estuvieran más dispuestos a negociar con las demandas locales debido al creciente temor respecto de un campesinado rebelde. Como señaló Héctor, residente fronterizo mexicano, «ya no tenía miedo la gente después de los zapatistas». La gente se dio cuenta de que podía luchar por sus derechos y que las autoridades no podían aprovecharse de ellos. Diego situó la movilización local en este contexto del surgimiento de fuertes organizaciones campesinas en Chiapas en la década de 1990 y la rebelión zapatista en 1994:

[En los años setenta] no se formó ninguna organización aquí. Ahora hay muchas que nacieron del movimiento zapatista, organizaciones nacidas a partir de los ejidos aquí y de influencias zapatistas de los problemas... en la década de 1990. Desde 1978 comenzaron las influencias zapatistas... y llegaron a su punto álgido en San Cristóbal en 1994, cuando el problema se hizo más fuerte. Las raíces eran inconformidades con las autoridades y el gobierno. La gente estaba enfadada por las actitudes y comportamiento de los funcionarios. Aquí no pasó mucho, solo un poco de temor, pero [hubo] guerra en San Cristóbal. Pero las organizaciones se difundieron aquí en esa época... como los sitios de taxi... todas entraron en organizaciones. Como OCEZ [Organización Campesina Emiliano Zapata].²³ El zapatismo se difun-

²² Rus, Hernández Castillo y Mattiace (2003:15).

²³ Formado en 1982 por campesinos que habían roto vínculos con la Confederación de Campesinos (CNC), avalada por el Estado, y que demandan derechos a la tierra (Nash 2001:95).

dió por todo el estado. Algunas personas fueron a los altos, a la selva, aprendieron de allá y acá... También los mensajes y las organizaciones difundieron por radio para estimular organizaciones aquí... Y entonces la gente también se organizó aquí y se unió a organizaciones... [Ahora bien] que si en un momento la policía fiscal o federal no nos deja vender [nuestras mercancías] a Guatemala, se vuelve conflicto entre los campesinos y los federales. Pero [los funcionarios] ya saben, por miedo, que entrarán conflictos si nos molestan.

La mayoría de los residentes fronterizos no tuvieron contacto directo con los zapatistas, pero escucharon sus mensajes a través de la radio y de afiliaciones locales con organizaciones campesinas independientes. Sin embargo, la región fronteriza cambió después de 1994. El gobierno comenzó a ofrecer selectivamente programas y ayuda a las comunidades campesinas para obtener su apoyo. Por ejemplo, les empezó a repartir fertilizantes, aunque según Diego no les daban mucho: «tal vez cuatro o cinco bolsas cada uno, pero ahora no todo el mundo [las recibe]». Diego reflexionó que después de 1994 los funcionarios del Estado:

Ya no perjudicaban mucho, entendieron a los productores. Hubo presión [a las autoridades] por la gente aquí para dejar a la gente trabajar [en el contrabando]. El pueblo ya estaba cansado de que las autoridades se aprovecharan y los molestaran, estaban cansados de cómo las autoridades actuaban como todopoderosas. Entonces, cuando la policía llegaba [a la frontera], la gente los atrapaba, los amarraba y los carros daban la vuelta con miedo. Cambió porque se despertó la gente... ahora estamos luchando.

El movimiento zapatista resonó con los residentes fronterizos en algunos temas más que en otros; se tomaron en serio sus demandas de tierra, sustento y respeto por el campesinado, que no necesitaba a los zapatistas para reconocer la corrupción oficial; pero los zapatistas sí sentaron un precedente en el sentido de que la gente marginada podía impugnar los abusos corruptos de las autoridades. Este mensaje fue efectivo porque a menudo los funcionarios lo escuchaban cuando desconfiaban de algún campesinado organizado. Por ejemplo, Jan Rus y Diego Vigil tomaron

nota sobre la respuesta estatal a las invasiones de tierras indígenas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, después de 1994, escribiendo: «El Estado, después de un intento inicial fallido de la policía por retomar las tierras invadidas, aparentemente temía que una respuesta más violenta llevaría a los invasores a unirse a los zapatistas... El Estado esencialmente se mantuvo al margen».²⁴ Esta dinámica resonó en la frontera. Dos funcionarios de aduanas contaron que una vez los locales enojados prendieron fuego a un puesto de migración, con los agentes dentro.

Los residentes se aprovecharon de un clima que revelaba la corrupción generalizada de los funcionarios. Se dieron cuenta de que cuando los funcionarios los detenían en la ruta fronteriza por contrabando y les pedían un pago, no estaban recaudando impuestos, sino sobornos que colocaban en sus propios bolsillos. Según un residente de la frontera guatemalteca, «Pues no es pago de aduana. Estos no son pagos fijos. Son mordidas cuando [la policía] te descubre» y exige un pago después de detener a un comerciante. Otros comentaron: «Los funcionarios solo vienen aquí para extorsionar a la gente... solo vienen para conseguir sus mordidas. Si ven un bulto [que estás vendiendo], se lo llevan y se llevan el dinero. Mordida [de] ellos. [Son los] más corruptos». Virgilio, un contrabandista de cacahuates a pequeña escala, relató cómo creció la conciencia local y los residentes comenzaron a rechazar las demandas oficiales:

Dejamos de pagar. [Nos dimos cuenta de] que nunca fue realmente un impuesto, ya que las autoridades aduaneras solo entraban en sus vehículos. Esta no era su oficina, y no estaban informando [lo que estaban recaudando]. Lo estaban poniendo en sus bolsillos. Si yo pasara por Comitán o Ciudad Cuauhtémoc, pagaría un impuesto directamente al gobierno. Pero eran puros sobornos. Eran pagos ilícitos... no impuestos, sino mordidas.

Virgilio se refirió a las consecuencias del resentimiento local: «Ahora [los funcionarios de aduanas] ya no entran [por aquí] tampoco. Tienen miedo de entrar aquí. Saben que si entran aquí serán tratados como

²⁴ Rus y Vigil (2007:163-164).

asaltantes». Indagué más con Diego: «Pero, ¿qué pasa si los oficiales entran?» Él sonrió:

Si los oficiales vienen a abusar de nosotros, correremos tras ellos. Llamamos a toda la gente por el micrófono, y luego todos se reunirán con palos y machetes. Ya hemos hecho esto antes, así que ahora [los funcionarios] saben mejor y no nos molestan. Ahora somos amigos y nos respetan.

Los residentes narran con orgullo historias de la comunidad que se une para expulsar a las autoridades corruptas, o «ratas», término utilizado para referirse a los delincuentes con el que a menudo etiquetan a los funcionarios. Carlos, estudiante universitario, recordó un encuentro formativo cuando tenía doce años:

Una vez el gobierno entró aquí y atrapó a alguien... que solo traía una bolsa de azúcar de Guatemala. Ni siquiera era un negocio... solo para su consumo, pero lo atraparon. Así que llamamos a toda la gente, y vinieron con piedras y palos que pusieron en el camino para que [los funcionarios] no pudieran salir. Ahora el gobierno nos tiene miedo. La gente de aquí capturó a uno de los oficiales de policía y se asustó. Lo metimos en nuestra cárcel [comunitaria]... y lo mantuvimos durante muchas horas. La gente lo despojó de sus armas y algunos hablaron de prenderle fuego, pero en realidad solo querían asustarlo. La otra policía vino por él, y el comandante vino, y llegamos a un acuerdo.

Después de que la gente liberó al agente, la policía accedió a no entrar más en la comunidad. Ya no interferirían en lo que los residentes argumentaban que eran «negocios».

En otro incidente, un residente de Santa Rosa recordó cómo El Nance rodeó en su cadena a autoridades que pretendían arrestar a un miembro de la comunidad por contrabando. Los oficiales tenían dar la vuelta y salir por la ruta para encontrarse con la comunidad de Santa Rosa después de haber estado cercados por El Nance. En vez de eso, se fueron por la frontera no vigilada hacia Guatemala y dieron un rodeo para volver por la carretera oficial a México. Se salieron kilómetros de su camino

y entraron en Guatemala para evitar encontrarse a Santa Rosa con sus palos. Me pregunté cómo explicaron los oficiales su reingreso a México en el puesto oficial. Los habitantes de la frontera guatemalteca seguían tácticas similares. Al subrayar su fuerte organización, también subrayan su benevolencia para diferenciarse de los funcionarios: «Cuando atrapamos a los funcionarios aquí [que intentaron arrestar a los contrabandistas de maíz] fuimos buenos con ellos, y mientras, los mantuvimos unas siete horas, pacíficamente, no en la cárcel, hasta que su jefe vino [a negociar]. No les hicimos daño. Los tratamos bien. Les dimos comida y bebida».

Algunos residentes de la frontera guatemalteca se enteraron de los zapatistas a través de sus vecinos mexicanos, pero otros se dieron cuenta de que las comunidades organizadas podían impugnar la corrupción oficial como un efecto secundario del conflicto de contrainsurgencia guatemalteca. Con el fin de la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, los residentes guatemaltecos tenían grandes esperanzas de democratización. Se desilusionaron cuando la impunidad, la desigualdad y la violencia se agudizaron en el periodo de posguerra. En particular, los exrefugiados de Nueva Vida aprendieron habilidades organizativas críticas durante la guerra y la posguerra, unos porque se involucraron directamente con las guerrillas, organizaron a sus compañeros en los campos de refugiados mexicanos y en el movimiento de retorno, y otros porque participaron en talleres de derechos humanos cuando se reasentaron en Guatemala. Durante mucho tiempo habían estado luchando contra la corrupción y la violencia oficiales y forjando sus propias alternativas, incluso mientras experimentaban los riesgos de organizarse. Algunos miembros de Nueva Vida fueron amenazados directamente por los militares como presuntos guerrilleros en las tierras altas de Guatemala durante la guerra. En El Girasol, haber servido en las patrullas civiles ordenadas por el ejército también enseñó a algunos residentes lecciones críticas sobre el gobierno, aunque muchos apoyaron a los militares durante la guerra. Como relató el expresidente de la comunidad de El Girasol, Roberto:

No tuvo mucho que ver con los Acuerdos de Paz, pero la gente empezó a perder el miedo cuando la guerra terminó. La gente comenzó a valorarse

más, y la comunidad comenzó a levantarse. La influencia [de la guerra] fue en gran medida que muchos de nosotros habíamos estado en el ejército. Nos dimos cuenta de que teníamos derechos como comunidad y como pueblo, ya que el ejército no daba ningún valor a nuestros derechos. Fue una reacción a lo que vimos en el ejército. Hubo malos momentos en los que el ejército mató a mucha gente. Vimos que las únicas personas en el ejército que fueron entrenadas fueron los oficiales. La mayoría de los soldados no tenían educación. Aprendimos [y vimos] cosas locas. Vimos cómo esos soldados [sin educación] actuaban como si tuvieran valor y la influencia que tenían sobre las cosas. Se sentían como si tenía valor y respeto, pero en la base era la ignorancia. No estaba de acuerdo con el ejército y no veía ninguna razón para seguir sus órdenes. La gente los respetaba a pesar de que no tenían razón para hacerlo. No tenían ninguna base para dar órdenes

Aunque estaban en lados opuestos del conflicto, los habitantes de El Girasol y Nueva Vida se dieron cuenta de que los campesinos se habían convertido en peones de un conflicto que servía a la elite militar y devastaba las comunidades. Lamentaron el impacto que la guerra tuvo en la solidaridad comunitaria, especialmente las patrullas civiles ordenadas por el ejército. Ninguna de las dos comunidades estaba dispuesta a tolerar el abuso de los funcionarios o simplemente a seguir órdenes. En la medida en que las comunidades se organizaban, la policía comenzó a aceptar. Según Roberto:

Si la policía viene a hacer vigilancia, está bien, pero no dejamos que entren a molestarnos. Si nos molestan y se llevan nuestro dinero, les prenderemos fuego. La gente comenzó a darse cuenta de que [la policía] no debe hacer esto. [La policía] fue abusiva, y somos un pueblo humilde. Fuimos a la base militar de La Democracia y pedimos una reunión con los comandantes de la PNC para hacerles saber que si la policía... actúa como ladrones y no escucha... les prenderemos fuego.

Roberto me dijo que el alcalde de La Democracia apoyó el razonamiento de El Girasol de mantener la cadena porque el municipio carecía de los fondos para proporcionar proyectos como los que apoyaban

los peajes. Roberto ahora llama a la policía sus amigos y añade: «Tienen miedo de la gente. Así que si [la policía] necesita llevar a cabo una vigilancia o alguien los llama para resolver una disputa personal, la [policía] me llamará antes de venir para escoltarlos. Tienen miedo de venir aquí solos». Sin embargo, Roberto admite que cada vez que los funcionarios cambian o rotan, tienen que renegociar sus acuerdos, lo cual puede llevar a una situación impredecible para los residentes fronterizos. De manera similar, en Chiapas los residentes fronterizos renegocian cuando los oficiales rotan, aunque los comandantes, o jefes de cada unidad policial, a menudo transmiten información a sus relevos sobre cómo funciona la región. Diego me explicó que:

A veces hay problemas con [los funcionarios] que no saben [cómo funcionan las cosas]. Hace unas dos semanas, los militares atraparon a alguien que transportaba maíz en la carretera. Un grupo de comerciantes de maíz fue a ver al comandante [en la base militar] para asegurarse de que estaba de acuerdo. Se resolvió, y fue liberado. Los soldados que lo atraparon eran nuevos y no lo sabían.

Los problemas suelen resolverse rápidamente; como me dijo otro residente: «No les conviene a ellos denunciar nada». Los jefes de las unidades locales también avisarán a los contrabandistas si vienen policías más lejanos. Entonces todo movimiento se detiene repentinamente.

Límites del control

En el lapso de 2006 a 2007 vi vehículos oficiales circulando por la ruta no vigilada, incluidos vehículos militares, policía local y estatal, autoridades aduanales o de migración y representantes de inspecciones agrícolas, sanitarias y de salud. Pocos se detuvieron. Los residentes insistieron en que solo andaban echando un vistazo. Otros me dijeron que los funcionarios eran bienvenidos solo para «hacer su trabajo» que, según los residentes, era garantizar la seguridad y rastrear a más traficantes ilícitos o violentos que transportaran armas, narcóticos y migrantes

indocumentados. Los funcionarios no eran bienvenidos si interferían en lo que los residentes consideraban negocios, o el contrabando de productos básicos como maíz, café, azúcar, ropa, frutas y vegetales, productos enlatados y refrescos, plantas y gasolina. También fui testigo de algunos camiones pasando por la cadena a toda velocidad y sin pagar. Las narrativas comunitarias sobre el poder de la organización local desmienten la versión de que el control local sea, en el mejor de los casos, parcial, disputado y contingente.

En primer lugar, el hecho de que los funcionarios ya no entren en la ruta para capturar a los contrabandistas y exigir sobornos no significa que no haya sobornos por contrabandear mercancías a través de la frontera. Para los miembros de la comunidad que no están involucrados en el contrabando, el comercio parece legal y, como muchos dicen, «libre», porque no son testigos directos de la intervención de los funcionarios como lo fueron en el pasado. Una mujer razonó que si el comercio fuera ilegal, ocurriría de noche y en secreto, en lugar de durante el día, abiertamente. Sin embargo, todos los contrabandistas (con la excepción de los dedicados al maíz) realizan pagos bimensuales a múltiples unidades para que les permitan trabajar. El recuento total es ahora de once para algunas empresas como el contrabando de gasolina. Los contrabandistas prefieren este arreglo a las detenciones improvisadas porque no son llevados a la cárcel, pueden negociar la cantidad y los arreglos son relativamente predecibles. Los contrabandistas pagan al jefe de cada unidad en su oficina, y me enteré de que a veces la razón por la que los vehículos de la policía entraban en la ruta era para venir a tomar refrescos con los contrabandistas y cobrar los pagos en sus casas. Una vez, cuando le pregunté a Diego por qué vi más policías cuando pensé que no entraban en la ruta, él respondió con indiferencia: «Sólo vienen a recoger sus mordidas. No están molestando a nadie». Aunque los contrabandistas siguen pagando sobornos, prefieren el método preestablecido. Según Alonso, «la persona que más importa es el policía federal de caminos. Él ve todos los vehículos y el comercio. Si puedes [entrar] con él, el resto [de las unidades de policía] estará bien... [puedes dar menos]. Puedes negociar un precio justo porque puedes decir, si pago tanto, no puedo trabajar...

para que lo entienda. Pero [tienes que pagar] más a él, y él dirá a quién más pagar». Los pagos regulares generalmente eran menores (que los exigidos si eran capturados en el acto de contrabando) y más predecibles porque según Alonso:

Antes [las autoridades] no venían todos los días, pero cuando lo hacían, era una gran multa. Sólo decían, dame esto, o te llevaban y no tenías más remedio que pagar. Ahora hablamos y arreglamos los pagos para que no nos molesten. Puedes negociar un precio justo. Puedes decir, bueno, si pago tanto no puedo trabajar... para hacerle entender. Antes teníamos que hacer lo que exigían.

La ruta fronteriza se deja sin patrullar solo en la medida en que las autoridades reciben sobornos y los contrabandistas y los funcionarios mantienen relaciones amistosas. En contraste con las relaciones de abuso del pasado, ahora se caracterizan por el respeto y la camaradería. Los agentes estatales y los contrabandistas fronterizos comen en sus casas, juegan fútbol juntos y comparten bebidas. Sin embargo, los funcionarios conservan el poder de renegar de los acuerdos, o de alterarlos de manera impredecible, lo que significa que los contrabandistas fronterizos siguen dependiendo del Estado y de sus agentes, incluso cuando subvierten la ley.

La mayoría de los camioneros respetan los peajes. Aprecian que las comunidades fronterizas mantengan la carretera y garanticen un paso seguro, pero el pago también es práctico. Les saldría más caro si pasaran por los puestos oficiales, o se arriesgarían a atravesar caminos más peligrosos. Esta ruta fronteriza es conocida por sus bajos niveles de violencia, mientras que los residentes relatan historias de robos y asaltos en otros corredores clandestinos. En 2007, un grupo de narcotraficantes asesinaron a trabajadores de un rancho en un cruce fronterizo no vigilado y poco poblado cerca de Chamic. En contraste, los residentes y contrabandistas creen que las comunidades organizadas hacen su ruta más segura. El hecho de que las comunidades cobren peajes de acuerdo con el tamaño del camión, en lugar de un porcentaje del valor de la mercancía (como lo haría la aduana), hace que el comercio sea más

rápido y eficiente para contrabandistas y residentes. De esta manera, los residentes también pueden mantener una apariencia de no saber qué están transportando los camiones, aunque la mayoría se han convertido en expertos. Y a los camioneros no les conviene eludir el pago del peaje porque casi todos ellos usan el camino regularmente, y ninguno desea enfrentar el enojo de los residentes a su regreso.

A pesar de las amenazas de bloquear la carretera, el control de los residentes fronterizos se ve limitado por la realidad de vivir en una ruta no vigilada de alto tránsito. Un día, cuando estaba en la cadena de El Nance hablando con unos cuantos hombres, una camioneta que transportaba tambos de gasolina mexicana a Guatemala pasó a toda velocidad por la cadena sin parar. Ronaldo, de seis años, gritó apenas pasó la camioneta que iba a buscar su pistola. Los hombres se rieron mientras uno comentaba:

Muchas personas tienen pistolas en sus casas. Tenemos un altavoz junto a la cadena para llamar a la gente si hay algún problema. Pero no hay ningún problema. Ronaldo es solo un niño. No lo sabe. Vivimos en una frontera, así que nos damos cuenta de las cosas malas y la gente puede venir de lejos. El camionero debería pagar, pero normalmente no hacemos nada. Generalmente, la misma gente viaja aquí y conoce las reglas.

Después del incidente, los hombres levantaron la cadena.

Otro hombre compartió una historia desafortunada. Su auto fue robado mientras asistía a un baile en Frontera Comalapa. Y entonces, él casi no pudo creerlo, pero lo vio «pasando ilegalmente por aquí [pasando de prisa por la cadena] hacia Guatemala. Pasó tan rápido que, para cuando nos dimos cuenta, ya no podíamos hacer nada». Para garantizar su seguridad y autoridad moral, las comunidades cobran peajes solo a los vehículos que transportan mercancías que no se consideran ilícitas por sí mismas (por ejemplo, alimentos, gasolina, ropa), pero que adquieren ilegalidad porque evaden los impuestos, la inspección y la documentación oficiales transfronterizos.²⁵ No cobran peajes

²⁵ Véase Andreas (1999); Abraham y Van Schendel (2005).

por lo que consideran contrabando ilícito de drogas, armas y migrantes indocumentados. Además del peligro inherente que los locales atribuyen a las drogas y las armas, saben que el gobierno ahora criminaliza altamente el tráfico de drogas, armas y migrantes. Una mayor criminalización no implica necesariamente una mejor vigilancia policial, pero sí significa mayores riesgos, competencia con los actores criminales y mayores sobornos.²⁶ Un hombre me explicó que si alguien le ofrece dinero en la cadena y está transportando drogas o migrantes, «es para ti... para tu refresco... No cobres en la cadena ni lo ingreses. No se nota porque no se meten cosas ilícitas en la cadena... Lo que pasa ilícito no lo metemos». Al cerrar los ojos a las actividades que consideran ilícitas, los residentes permiten estos flujos mientras que pueden seguir afirmando moralmente que los peajes proporcionan lo que ellos llaman un «fondo limpio y legítimo para la comunidad». Mientras tanto, las comunidades minimizan los encuentros arriesgados con actores potencialmente armados. Aunque reconocían el peligro potencial, algunos residentes me dijeron que les gustaba cuando los traficantes de drogas cruzaban la ruta porque les compraban refrescos o les daban dinero, y les decían que arreglaran bien el camino.

Las distinciones locales entre comercio legítimo e ilícito mantienen la seguridad de la comunidad y permiten a los residentes fronterizos aprovechar los beneficios de la frontera incluso cuando estos flujos se fusionan. Sin embargo, las cadenas no benefician a todos los residentes por igual, y algunas personas cuestionan el valor del sistema de peaje al ser testigos de una creciente desigualdad e inseguridad. Al debatir las compensaciones entre la seguridad proporcionada por una mejor vigilancia estatal frente a los beneficios económicos del negocio fronterizo, la mayoría de los residentes prefieren este último en un contexto en el que la presencia del gobierno se ha asociado más con la corrupción que con la seguridad. Como me dijo un residente guatemalteco: «Aquí las policías son a menudo las sucias».

²⁶ Véase Andreas (1999; 2010).

¿Seguridad o negocios?

En el lado mexicano de la frontera, los agentes estatales han consentido por mucho tiempo las cadenas, pero un residente me comentó: «Cuando las autoridades acordaron permitirnos tener la cadena, dijeron que no esperaríamos que nos ayudaran con nada». El residente mexicano Héctor me dijo que a finales de la década de 1990 el gobierno del estado se ofreció a pavimentar la carretera fronteriza a cambio de remover las cadenas. La mayoría de los residentes aprobaron y deseaban más ayuda estatal, pero se impuso la influencia de los negociantes más poderosos, que temían que el apoyo del Estado permitiera a los funcionarios y a la policía intervenir en el contrabando y otros asuntos fronterizos. La oferta fue rechazada. Los residentes son ambivalentes sobre las tensiones entre la seguridad y los beneficios del contrabando. Un hombre relató:

Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a diez personas como yo que no somos comerciantes te dirán [que es] mejor que esté vigilado por seguridad. Pero si le preguntas a alguien en comercio, por supuesto te dirá que sería malo. Sí, el negocio beneficia a otros [en la comunidad] como los cargadores, los choferes, pero lo mínimo.

Sin embargo, la disyuntiva era falsa porque a menudo no había otra opción. Las oportunidades de negocio que brinda la frontera ofrecen más posibilidades de las que hay disponibles en pueblos cercanos sin esta condición.

Gregorio, un comerciante y camionero mexicano, argumentó que la economía del contrabando podría prevenir la adicción a las drogas y la delincuencia. Comentó:

Los negocios siempre ayudan aquí. No solo los comerciantes. También genera empleo para los que cargan la carga. La cadena beneficia... a toda la gente de aquí y genera empleo con la misma gente de aquí. Como hay una fuente de empleo, no hay delincuencia, así que la gente no se involucra en trabajos sucios. Trabajamos a la luz del día... no nos escondemos. Se puede trabajar correctamente. Como no nos metemos en negocios sucios, las autoridades

nos ayudan para que podamos trabajar bien. Siempre hablamos con las autoridades y los respetamos a ellos y ellos a nosotros. Si las [autoridades] quieren revisar mi carga para ver que no hay nada sucio, está bien para mí. [Las autoridades] saben que vivimos en una situación económica [precaria], pero estamos trabajando derecho.

Los residentes que no estaban involucrados con la economía del contrabando, o que tenían una conexión más tangencial con ella, relataron que, aunque proporcionaba oportunidades de trabajo, los comerciantes eran los que más se beneficiaban. Diana, una viuda en Santa Rosa, expresó, preocupada por los posibles riesgos para la juventud: «Sería bueno tener vigilancia [para evitar] la drogadicción y ese tipo de problemas. Para mí, esto sería bueno... si las autoridades llegaran a controlar las drogas, a combatir la delincuencia... especialmente por el bien de mis hijos».

Le pregunté si pensaba que las autoridades interferirían en los negocios de contrabando locales y respondió:

Depende del tipo de negocio. Si es un negocio sucio, como las drogas o las armas que deben combatir, es bueno... que las autoridades vengan y controlen esto para que nosotros y nuestros hijos no seamos víctimas. Pero no deben meterse en los buenos negocios en los que trabajamos. Lo que realmente es contrabando son las drogas. Eso es lo que las autoridades deben atacar.

Diana se preocupaba por esos riesgos y se quejaba de que ahora había más robos y asaltos que antes. Pero mientras hablábamos, dio un paso atrás para recordarme que la comunidad todavía estaba tranquila. Los residentes temen la influencia de las drogas y la delincuencia, pero estos problemas fueron menores en sus comunidades en 2006-2007 a pesar de que algunos jóvenes usaron drogas y se vistieron en un estilo que los residentes asociaron con jóvenes de pandillas, aunque no había pruebas al respecto. Cuando se les preguntó si preferirían la vigilancia o la cadena, aun los residentes más preocupados por los riesgos que plantea una frontera no vigilada eligieron la cadena. Diana afirmó que sería

bueno tener vigilancia porque «es camino de todo... es bueno cuando [las autoridades] se mantengan vigilantes siempre y cuando no interfieran con la cadena... La cadena ayuda al ejido».

Mientras hablaba con Diana, su vecina Sara pasó por ahí. Sara comenzó a relatar la historia de una niña que fue asesinada en La Mesilla, Guatemala. Aunque describió su comunidad fronteriza como tranquila, estaba llena de historias que escuchaba por la radio y la televisión sobre otras regiones fronterizas en que la gente es robada y asesinada. Describió gráficamente un incidente en la La Mesilla: «Una muchacha fue encontrada muerta. Alguien la había matado. Escuché que le comieron los ojos y la tiraron en el basurero. Debido a que es una frontera, muchas cosas pasan, muchas personas, también la marihuana, los coches robados. Hay grandes pandillas, maras... Algunos matan solo por el placer. Gracias a dios que no están aquí». Admitió que a veces tenía miedo porque cualquier cosa puede pasar a través de esta frontera en vista de que «no hay vigilancia ni autoridades [migratorias]». Agregó que algunas personas querían poner un puesto de inmigración aquí, y «pensé que esto era algo bueno, pero la gente no lo quería». Sara había escuchado en Cuauhtémoc que el gobierno estaba hablando de poner un puesto de inspección en el camino sin monitoreo. Diana no lo sabía y le preocupaba de que esto pudiera interferir con la cadena. «No —aclaró Sara—, ellos dicen que solo para [vigilar] drogas, carros robados», pero ninguna de las mujeres estaba segura de si esto le gustaría a la gente. Sara añadió: «A algunas personas les gustan las cosas que pasan [por aquí]. Ellos ganan dinero... los involucrados. Algunos no quieren eso [un puesto], no les conviene... [Pero] no se van a meter en el comercio», a lo que Diana asintió con la cabeza aprobando: «Aun así permitirán las cadenas».

Además de los proyectos financiados por la comunidad, hasta hace poco los miembros enfermos o pobres podían pedir fondos prestados de la cadena. En 2007, Santa Rosa comenzó a imponer más restricciones sobre los préstamos debido a las deudas no pagadas y a una comunidad en expansión. En El Nance cada familia recibe una parte de las ganancias anuales después de que la comunidad paga las obras comunitarias y el mantenimiento de los caminos. En ausencia de apoyo estatal y de

opciones de subsistencia, la comunidad, a través de la cadena, se mantiene a sí misma y mantiene a sus familias. Por lo tanto, incluso ante el riesgo de prescindir de la protección del Estado, carecer de seguridad oficial y ver la creciente desigualdad generada por la economía del contrabando, la cadena sigue siendo el benefactor comunitario más confiable. Como muchos me decían: «La cadena... siempre ayuda... [Es un fondo] para la comunidad» donde hay muy poco más. Debido a circunstancias como la desconfianza en la policía, la marginación económica y la corrupción oficial, al igual en que otras comunidades de México y Guatemala que experimentan una policía y un sistema legal ausentes, violentos o corruptos, han tomado hasta cierto punto la seguridad, la justicia y la legislación en sus propias manos.²⁷ Aunque en otros lugares esto se ha traducido en linchamientos comunitarios de presuntos delincuentes o comunidades que justifican la violencia para preservar la seguridad de la comunidad, el control fronterizo local ha sido relativamente no violento, aunque las autoridades pueden referirse a los residentes locales como propensos a respuestas violentas.²⁸ El camino puede parecer abandonado por el Estado, y los residentes parecen evitar activamente la incorporación del Estado y los intentos de hacerlo accesible,²⁹ pero es engañoso ver esta ruta fronteriza como fuera del control del Estado y caracterizar las estrategias de los residentes como una forma de resistencia. El control local no es necesariamente un rechazo al Estado, sino una expresión y una manifestación de cómo los residentes fronterizos se relacionan y a menudo buscan relacionarse con el Estado.³⁰

Para algunas autoridades municipales, las cadenas sirven de pretexto para ignorar las necesidades de las comunidades fronterizas. Sin embargo,

²⁷ Véase Burrell (2013); Godoy (2004; 2006); Goldstein (2004; 2005; 2010).

²⁸ Burrell (2013); Godoy (2004; 2006); Goldstein (2010).

²⁹ Véase el trabajo de Scott (2009), en contraste, de cómo las poblaciones en las montañas del sureste asiático se han resistido a incorporarse al Estado. Los reclamos de los residentes fronterizos a la autonomía deben ser situados dentro de la relación simbiótica con el control estatal y su deseo ambivalente de incorporación al Estado y ser evadidos por este.

³⁰ Véase Goldstein (2004), acerca de una discusión sobre los linchamientos como medios performativos de enfrentarse al Estado.

la influencia de los contrabandistas locales puede a veces atraer la atención de la municipalidad debido a las contribuciones a campañas y a los sobornos que los negociantes proporcionan a los políticos y autoridades locales. A veces el flujo de caja es influyente en sí mismo. Cuando el municipio de Frontera Comalapa inició la construcción de una porción del pavimento que le prometió a El Nance, la obra se detuvo a mitad del camino porque el municipio se quedó sin dinero para pagar a los contratistas. Tras reanudarse repentinamente los trabajos unos meses después, me enteré de que El Nance le había prestado al municipio 30 000 dólares de su cuenta de cadena para cubrir los gastos.

La mayoría de los residentes aplaudían cuando las autoridades estatales cumplían con su mandato de proporcionar seguridad contra el tráfico de drogas, armas y migrantes. Los residentes afirmaban que para estas actividades ilícitas no se puede sobornar al ejército. Sin embargo, también admitían que los traficantes saben cuándo el ejército se va. Cuando reciben notificación de funcionarios a quienes pagan, los contrabandistas proceden a traficar con autos robados y drogas a través de la frontera. Otros sabían que los militares a menudo estaban directamente involucrados. Como explicó un residente: «Muchos [traficantes] están con los meros jefes militares. Llamen al jefe y les dicen que no pueden pasar porque el ejército [está allí]. Entonces llaman a sus muchachos para que salgan o los dejen pasar. Para que todo siga pasando». Me dijo también que un político mexicano desacreditó más cualquier asociación entre la vigilancia oficial y la seguridad. Se refería al plan del entonces presidente Calderón de aumentar la presencia militar en la frontera, lo que explica la presencia de soldados que mencioné en la Introducción: «El programa de seguridad de México [es para] enviar más unidades de vigilancia a la frontera aquí. Pero es de la misma complicidad que sucede aquí... sí... muchos son pagados [por los traficantes]. Es [una situación] delicada». La elección entre la seguridad como presencia oficial del Estado y la cadena se hace evidente en un contexto en el que la seguridad oficial ha sido vista como corrupta, arbitraria o en colusión directa con actores ilícitos.

Autonomía ambivalente

Los residentes defienden su derecho a las cadenas de acuerdo con las leyes internas de sus comunidades. Según Edwin, expresidente de la comunidad de El Nance, quien también negocia maíz, ropa y gasolina, «No necesitamos permiso [del gobierno] para la cadena. Es de aquí... un reglamento interno». Él creía que una mayor vigilancia estatal podría generar más problemas. En su opinión, los contrabandistas respetaban la autoridad de las comunidades fronterizas más que la del gobierno, y la gente hacía un mejor trabajo en materia de seguridad. Edwin debatió las consecuencias de los rumores de que el gobierno mexicano regularizara este cruce, incluida la instalación de puestos aduaneros y de inmigración: «No podemos hacer nada si [el gobierno regulariza este cruce]... No van a consultarnos... No, no [sería] seguridad. Es injusto... [es] contra las leyes de nosotros [como comunidad]. No nos beneficia para nada».

Incité a algunos informantes con un artículo que encontré que mencionaba la regularización de esta ruta. Habían oído esto muchas veces antes. Dudaban de la sinceridad o la capacidad del gobierno para hacerlo. Algunos temían que la oficialización del cruce llevara a la eliminación de las cadenas, mientras que otros no veían ninguna contradicción en perseguir su esquema de recaudación de impuestos junto con la regulación gubernamental. Un hombre en Santa Rosa afirmó:

Si esto sucede, el ejido es autónomo y luchará para mantener la cadena. [Tenemos] derecho a mantenerla, aunque [el gobierno] ponga un puesto de aduanas. El ejido vive de este impuesto que gana de la cadena. El gobierno no nos ayuda mucho, así que la cadena sí. Nos costó mucho trabajo aquí... mantener la carretera, la construcción de la comisaría [edificio comunitario]. Gastamos mucho tiempo y esfuerzo intentando que el gobierno nos ayudara, pero nada. Así que pensamos que es mejor hacer proyectos de [los fondos de] la cadena.

Otros señalaron la ineficacia de regularizar el cruce de fronteras para lograr la seguridad y detener el flujo ilícito. Un hombre relató:

«Hemos estado escuchando que [el gobierno] cerrará esta frontera durante años, y nunca pasa nada. Y si cierran la frontera por aquí, iremos por allá», señalando un proverbial y práctico «allá», indicando el vasto terreno geográfico de las tierras fronterizas.

Algunos residentes creían que podían luchar contra la regularización oficial y evitar que las autoridades interfirieran. Sin embargo, la mayoría reconoció que, aunque tenían el poder de unirse para impugnar a los funcionarios locales y regionales, tenían poco poder si el gobierno federal intervenía. Se dieron cuenta de su limitada capacidad de negociación. De hecho, mientras protestaban contra la corrupción oficial y la interferencia en la ruta fronteriza, los residentes mantenían el respeto por la autoridad general, o la idea del Estado. Muchos residentes criticaron a los zapatistas por carecer de este respeto. Edwin señaló: «La autonomía puede ser buena... ahora tienen más estudios la gente de las comunidades. Pero también puede ser malo declarar que hagas lo que quieras. También tienes que respetar al gobierno».

Las interpretaciones de los residentes sobre la soberanía territorial y la autonomía local no socavan, en efecto, la lógica estatal de control basada en la jurisdicción sobre un territorio demarcado, donde los «límites de la competencia territorial [también] definen la soberanía del Estado».³¹ Aunque amenazan con asumir las funciones estatales regulando la entrada en la frontera y gravando el comercio, lo hacen interpretando literalmente las lógicas estatales que basan la soberanía en la territorialidad. Razonan que, debido a que la ruta fue construida a través de la tierra de los residentes fronterizos, ellos deberían controlarla. Las conceptualizaciones locales sobre la territorialidad permiten a las comunidades fronterizas atribuirse los mismos derechos que el Estado sobre tierras federales; generalmente apoyan el derecho del Estado a patrullar la frontera en puestos oficialmente sancionados. Estas percepciones sobre territorialidad influyen en la forma en que los habitantes de las zonas fronterizas ven la dinámica de la autoridad compartida, aunque impugnada, en la frontera. Edwin argumentaba: «La gente

³¹ Sahlins (1989:3). Véase también Nevins (2002); Sack (1986:33); M. Reeves (2014).

que usa nuestro camino respeta más aquí a la gente que al gobierno... La gente misma vigila mejor... está controlada. Nosotros hacemos reglas... ponemos leyes de tráfico nosotros. Funciona aquí porque [estamos] muy unidos». Sin embargo, admitió:

Nosotros mandamos algunas cosas, pero no todo. El gobierno también [controla algunas cosas y hace algunas reglas] como las escuelas, las carreteras... En partes manda el gobierno; en partes nosotros. Es lo mejor de los dos porque hay apoyo del gobierno y de la comunidad.

Los residentes consideran que la línea geopolítica internacional, donde se erigen los monumentos blancos, es territorio federal. Sin embargo, los residentes fronterizos controlan el camino de acceso. Cualquiera debe atravesar el territorio local para acercarse a ambos lados de la línea divisoria internacional. La comprensión de los residentes del control fronterizo ilustra la necesidad de entender las fronteras más allá de las líneas divisorias como regiones más grandes de interacción social en las que se entrecruzan múltiples lógicas de territorialidad, pertenencia y autoridad.³² Sus interpretaciones revelan el principio de soberanía territorial como una construcción sociopolítica disputada con inconsistencias internas e interpretaciones multivalentes, más que como una verdad universal. Como sostiene Madeleine Reeves, la soberanía territorial es un proceso inacabado y controvertido que se trabaja y reelabora constantemente, «no un hecho *a priori*».³³

La *reterritorialización* de la frontera por parte de sus residentes no es nueva. En cambio, refleja un patrón más amplio de dispersión, reproducción y pluralización³⁴ del control fronterizo y la autoridad reguladora desde los cruces oficiales hasta lugares interiores seleccionados, ya sean controlados por las comunidades, los cárteles de la droga, las organizaciones independientes de campesinos y trabajadores o el Estado. Así como los residentes de la frontera instalaron cadenas para controlar el acceso al te-

³² Véase Sahlins (1989:4); Nevins (2002).

³³ M. Reeves (2014:180).

³⁴ Sobre la pluralización de las autoridades regulatorias véase Roitman (2005; 2006).

territorio y hacer reclamos de vigilancia, las unidades estatales de migración, aduanas, inspecciones sanitarias y agrícolas y militares también erigen puestos de control temporales y semipermanentes en todo el interior de México. No es raro en Chiapas que los puestos de control oficiales y las cabinas de peaje de las autopistas sean usurpados periódicamente por campesinos y organizaciones independientes reclamando su parte de las ganancias, al ver cómo solo benefician las arcas de la elite y los intereses de las empresas privadas. El grupo criminal de los Zetas opera para recaudar un «piso», o un impuesto criminal de quienes se dedican a actividades ilegales dentro de sus áreas de control.³⁵

Aunque desafía su autoridad soberana sobre la frontera, el control local de los residentes representa una interacción estratégica con el Estado, a la vez que ilustra cómo se reproducen la integridad territorial y la soberanía del Estado a través de sus propias perturbaciones.³⁶ A pesar de su crítica a la corrupción oficial, la capacidad de los residentes de controlar los flujos fronterizos depende de mantener buenas relaciones con los funcionarios. A medida que los residentes buscan la aprobación oficial o la ceguera estratégica ante su control local, refuerzan la «idea del Estado» y su autoridad unitaria, al tiempo que ocultan su conjunto cotidiano de prácticas heterogéneas, inconsistencias y disputas.³⁷ Según Monique Nuijten, las comunidades campesinas históricamente consideraban al Estado mexicano como una espada de doble filo, como protector y represor de sus comunidades, por lo que la gente se siente orgullosa de ser parte del Estado-nación y lamenta su corrupción.³⁸ Nuijten calificó a esta dinámica de «máquina generadora de esperanza», por la cual la burocracia tiene la capacidad de:

³⁵ Dudley (2011). Los Zetas fueron fuerzas especiales del ejército mexicano que desertaron a finales de la década de 1990 para trabajar como el brazo ejecutor del cártel del Golfo. Se dividieron para formar su propia organización violenta y criminal en 2010. En la década de 1990 recibieron entrenamiento de los Estados Unidos en operaciones de contrainsurgencia y antinarcóticos (Paley 2014: 120).

³⁶ Véase Das y Poole (2004); M. Reeves (2014).

³⁷ Nuijten (2003:15). Véanse descripciones de la «noción de Estado» como lo articulan Abrams (1988 [1977]); Alonso (1994); Mitchell (1999); M. Reeves (2014).

³⁸ Nuijten (2003:196).

En ciertos momentos y circunstancias, para superar el escepticismo de la gente y, de hecho, para atraerlos a que empiecen a fantasear con nuevos proyectos, reanudando así un ciclo interminable de altas expectativas seguidas de desilusión y risas irónicas.³⁹

La creciente crisis económica, incluida la devaluación del peso en 1994, una crisis política por la escalada de revelaciones de corrupción, y la incapacidad del Estado mexicano para sostener económicamente el sistema de clientelismo corporativista, hicieron tambalear el poder del PRI en la década de 1990. Cuando el PRI perdió el control de la presidencia mexicana en el año 2000 con la elección del candidato Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), los mexicanos tenían grandes esperanzas en la democracia. Sin embargo, las elecciones subsiguientes de los candidatos conservadores del PAN en 2000 y 2006 no han mejorado la democracia ni la movilidad socioeconómica en México. Las protestas sociales estallaron en todo el país, ya que muchas personas afirmaron que las elecciones se habían visto empañadas por el fraude y la corrupción. Desde el año 2000, el compromiso de México con el proyecto neoliberal y sus beneficiarios de elite se ha afianzado aún más. El colapso del PRI parece haber dejado intacta la «máquina generadora de esperanza», dando otro ejemplo de cómo las afirmaciones de disociación con un régimen anterior se anuncian como una esperanza de cambio sin reconocer profundas continuidades con el pasado.⁴⁰ El resurgimiento del PRI con la elección de Enrique Peña Nieto en 2012 prometía un nuevo tipo de PRI, pero su administración se vio comprometida con una privatización aún más completa y también ha sido acusada de corrupción y de limitar de manera represiva la libertad de expresión, disidencia y reunión.⁴¹

³⁹ Nuijten (2003:197).

⁴⁰ Nuijten (2003:197). En contraste con el clima de cooptación y ciclos de miedo, esperanza y contestación que permeó en gran parte de Chiapas, los zapatistas han optado conscientemente por salir del sistema mediante la creación de comunidades autónomas que rechazan cualquier asociación con el gobierno e incluso su reconocimiento.

⁴¹ Ackerman (2016); Paley (2014).

Viva el mal gobierno

Mi primera noche en la frontera, el 15 de septiembre de 2006, la víspera del Día de la Independencia de México, ilustró la ambivalencia a través de la cual los residentes fronterizos que viven en los márgenes experimentan subjetivamente el Estado. Santa Rosa fue anfitrión de una fiesta de la víspera de la Independencia y decoró su cancha de baloncesto con banderas rojas, verdes y blancas. El presidente de la asamblea, Víctor, dio la bienvenida a todos mientras hablaba sobre el orgullo de México, la Revolución y la Independencia. Después de los bailes de los escolares, Víctor terminó la noche con una voz estruendosa al micrófono, «viva», con la multitud animando y repitiendo cada viva después de gritar, «¡Viva la patria, viva la independencia, viva Hidalgo,⁴² viva México! Luego añadió: «Viva el mal gobierno». El silencio era palpable mientras se tomaba a la gente por sorpresa. Entonces Víctor rápidamente gritó «Viva México», y resonaron los aplausos.

Víctor comentaba sobre la atmósfera de fraude, descontento y resignación que se respiraba en Chiapas cuando llegué en septiembre de 2006. En agosto de ese año, el candidato conservador del PAN, Felipe Calderón, fue declarado, por un estrecho margen, presidente de México por encima del populista liberal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. Los críticos denunciaron corrupción y exigieron un recuento completo. Para octubre, la frustración había disminuido en gran parte de Chiapas. Este irónico sentimiento inicial de «Viva el mal gobierno» caracterizó cómo los residentes fronterizos (y mucha gente en México) se relacionan con el Estado y lo experimentan como algo que critican, de lo que se

⁴² El cura Miguel Hidalgo instigó el primer levantamiento para derrocar a los españoles y empezar la revolución de Independencia, a través del «Grito de Dolores» en 1810. Tuvo un rol integral en liderar la lucha por la independencia hasta que fue ejecutado en 1811. Muchos mexicanos se refieren a él como «el padre de la patria» (México) y del movimiento independentista.

enorgullecen, y a lo que se resignan al mismo tiempo que expresan esperanza por un futuro mejor.⁴³

Los residentes fronterizos son ambivalentes con respecto al Estado. Aunque parezcan resignados a sus problemas, también se esfuerzan por encontrar alternativas. Los residentes enfatizan su respeto por el gobierno al mismo tiempo que forjan caminos que cruzan líneas legales e ilegales para evadir las regulaciones estatales y llenar sus vacíos de exclusión. A través de las cadenas, los residentes equilibran la práctica cotidiana de la autonomía con la seguridad al margen del Estado. Sin embargo, la autonomía depende de la evolución del paisaje fronterizo y está en tensión con el deseo simultáneo de los residentes de que haya formas más significativas de inclusión estatal.

⁴³ Véase Gutmann (2002); Gledhill (2004); Nuijten (2003); sobre el ritual como una forma de «expresión política... y de resolución de conflictos» en México, véase Lomnitz (1995:35) .

5. Comercio fantasma

La brecha entre la autoridad del Estado para generar leyes de prohibición y su habilidad para hacer cumplir tales leyes es el espacio donde tiene lugar el contrabando.

PETER ANDREAS, «BORDER GAMES» (2000:22)

Cuando le pregunté a Félix, un inspector fiscal mexicano que ha trabajado en cuarenta de los cuarenta y nueve puestos aduanales mexicanos, ¿qué ha distinguido su trabajo en esta región?, él respondió:

La ilegalidad distingue. No es tanto el contrabando lo que sobresale, sino que las autoridades están presentes y no aplican la ley como deberían. Aprendemos cómo es [y] no queremos conflictos. Todos se dan cuenta de que aquí, en práctica somos más flexibles [que otras aduanas] gracias a la gente aquí en la región. Esto no sucedería en otras aduanas.

El contrabando persiste en la intersección de una región fronteriza cada vez más comprometida en facilitar el comercio internacional, así como en recortar el flujo hacia el norte de migrantes indocumentados y bienes ilícitos. Los acuerdos transnacionales de comercio han abierto la frontera para grandes negocios y compañías transnacionales, pero los campesinos comunes y pequeños comerciantes han encontrado más obstáculos pese a la importancia histórica del comercio fronterizo. Aunque el contrabando contribuye a la evasión de impuestos, también puede ser integral para el funcionamiento de la economía regional y la

supervivencia de la población local. El comercio entre México y Guatemala se aproxima a los cinco mil millones de dólares; «provoca un mercado de trabajo natural» fuera de los canales legales en el que «70 por ciento de ese intercambio es vía contrabando».¹

La existencia de flujos paralelos de comercio no regulado, a menudo a plena vista de autoridades oficiales, parece contradecir el compromiso de México con una frontera segura. A medida que México y Guatemala adoptan una agenda de seguridad para combatir los flujos transnacionales ilícitos, las actividades de contrabando y sus protagonistas se encapsulan cada vez más en este contexto. Asimismo, las autoridades ignoran, y algunas incluso promueven el contrabando porque puede beneficiar a una selecta elite regional, negocios, unidades de policía y políticos, y les aporta una válvula de seguridad para calmar las dislocaciones económicas y el descontento forjados por políticas comerciales exclusivistas y de ajuste estructural.² Simultáneamente, criminalizar el contrabando e ignorarlo en la práctica contribuye a que el Estado pueda dar la apariencia de una frontera ordenada que conduce el flujo de capital y turismo, mientras permite que redes de agentes estatales, personajes ilícitos, poblaciones locales y negocios formales se beneficien de las intersecciones entre el comercio legal y el ilegal.³ Un enfoque etnográfico de la frontera revela cómo las economías formal e informal, legal e ilegal pueden encontrarse mutuamente constituidas y ser mutuamente dependientes, en vez de estar separadas o ser esferas necesariamente antagónicas.⁴ Este capítulo se enfoca en las experiencias y las perspectivas de empleados aduanales que patrullan las líneas fronterizas para demostrar cómo se desenvuelven las tensiones entre ley y práctica, y entre seguridad y comercio.

El contrabando no es libre de contradicciones. Permite que pequeños contrabandistas y habitantes locales sobrevivan y tengan acceso a productos básicos, completa los bolsillos de algunos oficiales, ayuda a

¹ *El Orbe* (2015).

² Andreas (1999; 2002).

³ Véase Andreas (2002); Heyman y Cambell (2007).

⁴ Véase Clot (2013:14); Clot también cita a Adler-Lomnitz (2013:136).

justificar la agenda de seguridad fronteriza y contribuye a la economía regional. Sin embargo, al mismo tiempo perjudica la transparencia, la recaudación de impuestos, los esfuerzos para un cambio político democrático y a empresas que respetan la ley. Aun así, el desdén hacia el contrabando con poco contexto adicional contribuye a la criminalización de los campesinos regionales, quienes no son más que peones de la economía extralegal. Los gobiernos son hostiles al contrabando por sus implícitas (aunque frecuentemente no probadas) conexiones con el crimen organizado y por considerarlo una potencial amenaza a los intereses del sector privado y transnacional, frecuentemente presentados como asuntos de seguridad pública.⁵ De acuerdo con *El Financiero* de México, en diciembre de 2014 grupos de interés del sector privado pidieron al gobierno mexicano combatir la economía ilegal como un «elemento fundamental en la estrategia nacional contra la inseguridad pública y el crimen organizado... porque esa actividad genera pérdidas por más de 950 000 millones de pesos a la economía formal y al fisco».⁶ Los flujos ilícitos y la pérdida de recaudación de impuestos afectan negativamente la inversión pública y el desarrollo nacional, pues disminuyen la capacidad de una adecuada recaudación de impuestos. Pero el contrabando es una amenaza para el sector privado y los intereses estatales, excepto cuando no lo es. Como lo señala Diane Davis, es necesario analizar cuándo, bajo qué circunstancias y para quién es problemática o beneficiosa la economía informal.⁷ Debido a que la informalidad y la ilegalidad se definen en contraposición a la economía formal y legal, es necesario desglosar las maneras específicas en las que se afectan mutuamente.⁸

Encasillar el contrabando como una amenaza puede restarle valor al descubrimiento de problemas más grandes que disminuyen los ingresos fiscales. Por ejemplo, en Guatemala, pese a tasas corporativas e

⁵ Paley (2014); Goldstein (2010).

⁶ Becerril (2014).

⁷ Davis (2002:14).

⁸ Davis (2002:13); Goldstein (2016:23). Véase también Meagher (2014), sobre la necesidad de estudios empíricos.

individuales de impuestos sobre el ingreso de 31%, la recolección es lamentablemente baja; los ingresos fiscales están dentro de los más bajos en Latinoamérica, y la corrupción, excepciones y ambigüedades legales favorecen la evasión de impuestos por parte de la elite.⁹ En lugar de enfocarse en el contrabando como una vía de entrada al crimen organizado y una amenaza a la seguridad pública y al sector privado, en Guatemala es necesario examinar cómo instituciones estatales débiles y pobremente financiadas, usualmente debilitadas por intereses económicos de la elite, contribuyen a la corrupción, la inseguridad y la falta de confianza en el Estado.¹⁰ Kedron Thomas documenta de modo similar cómo la piratería, o gente que reproduce bienes de marca sin autorización, en Guatemala son culpados por pérdidas fiscales y dificultades económicas, sin tomar en cuenta los modos en que las reformas neoliberales disminuyen la inversión y los servicios públicos, mientras que proveen de «zonas libres de aranceles e impuestos para corporaciones multinacionales, medios de comunicación, servidores públicos y negocios internacionales».¹¹

El comercio extralegal es una parte constitutiva de la economía global. De acuerdo con Carolyn Nordstrom, 90% de todo el comercio en algún punto pasa a través de redes extralegales y dos tercios de todo el comercio funciona fuera del control del Estado.¹² En México, el INEGI estimó en 2012 que la economía informal genera 25% del PIB y emplea entre 30% y 60% de la población.¹³ Guatemala tiene la tasa más alta de empleo informal en Latinoamérica con más de 70%, de acuerdo con un reporte de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo.¹⁴ En Chiapas, la informalidad se acerca a niveles similares a los de Guatemala.¹⁵ Separar el contrabando de narcóticos ilícitos, armas y piedras preciosas,

⁹ Gagne (2016); Schneider (2012:172).

¹⁰ Gagne (2016); Schneider (2012).

¹¹ Thomas (2013:147).

¹² Nordstrom (2007:162).

¹³ Chávez (2014); OIT (2014).

¹⁴ González (2015b); OIT (2014).

¹⁵ Clot (2013:10), citando a INEGI (2013).

del contrabando de productos básicos, así como el de empresas formales que omiten la declaración de bienes, malinterpreta cómo funciona en realidad la economía.¹⁶ Al centrarse la atención tanto de la política como de la opinión pública en el comercio ilícito de alto perfil, como el de estupefacientes y joyas, por ejemplo, impide ver cómo el contrabando de bienes comunes —como gasolina, comida y ropa— genera una porción más sustancial de la economía total.¹⁷ La habilidad de controlar el sustento de poblaciones locales puede ganar más poder y lucro en la medida en que pueda influir en el desarrollo nacional y regional.¹⁸

Este capítulo ilustra cómo las economías legal e ilegal se intersecan a través del concepto de «comercio fantasma», el cual es oficialmente invisible, pero genera un impacto tangible. La economía extralegal persigue y se burla de la economía formal y de las medidas de seguridad para, en apariencia, reducir el flujo ilegal en favor del comercio ordenado. En la frontera no es la sombra de la economía o su lado oscuro, sino que es la economía en sí.

Exclusivamente turismo

A primera vista los puestos oficiales en Ciudad Cuauhtémoc y Las Champas, en México, y La Mesilla, en Guatemala, cubren las expectativas de una frontera moderna. Los inspectores fiscales en Las Champas están a cargo de procesar productos importados; a unos pocos minutos, el agente aduanal en Ciudad Cuauhtémoc procesa exportaciones. Existe una oficina aduanal en el lado de Guatemala, en La Mesilla, a cargo de importaciones y exportaciones. México modernizó este puesto durante la administración del expresidente Vicente Fox (2000-2006): lo equiparon con edificios de oficinas modernos, vehículos de inspección, un banco para procesar tarifas vehiculares, puertas mecánicas y semáforos. Si el

¹⁶ Nordstrom (2007:21).

¹⁷ Nordstrom (2007:40).

¹⁸ Nordstrom (2007:40).



Foto 11. Aduana fronteriza oficial en Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla (fuente: foto de la autora).

semáforo señala rojo, el inspector puede revisar el vehículo. Si es verde, el vehículo sigue su camino.

México designa este puesto aduanal como un punto para el turismo. Si llevan más de mil dólares de mercancía, los comerciantes necesitan contratar a un agente aduanal en Ciudad Hidalgo o Ciudad de México para obtener autorización. El comercio debe ser procesado en el cruce comercial de Ciudad Hidalgo, México, que está a más de tres horas en coche hacia el sur. Después de concluirse el puente y la autopista en Ciudad Hidalgo en 2002 y en Tecún Umán, Guatemala, Ciudad Hidalgo se convirtió en el destino principal para el comercio entre México y Centroamérica. Ciudad Cuauhtémoc es considerada una subsección de Ciudad Hidalgo. Aun así, esta región fronteriza es y ha sido históricamente un centro de actividad comercial fronteriza. Han crecido negocios en ambos lados de la frontera, y gente de todo México y Guatemala acuden a hacer compras. Conciliar el hecho de que este puesto se restringe

en gran medida al turismo con la realidad de la sinergia comercial fronteriza hace que la conclusión sea obvia. Los agentes fronterizos afirman que esta no es una zona comercial importante. Poco comercio logra atravesar pese a que esta es la región histórica del comercio entre México y Centroamérica.¹⁹ El comercio no es importante porque México no permite oficialmente que se genere en esta región, y así lo vuelve invisible. Todo lo que uno debe hacer para entender cómo funciona la economía regional es tomar un viaje corto y observar los pasos y caminos montañosos que cruzan la frontera cerca de las oficinas oficiales.

Previamente, David, un agente aduanal mexicano, me dijo que Ciudad Cuauhtémoc estaba autorizada para conducir inspecciones. Desde inicios de la primera década de 2000, sin embargo, el comercio requiere ser aprobado e inspeccionado en Ciudad Hidalgo, o autorizado por un agente aduanal contratado. David explica:

No tengo autoridad para hacer los trámites aquí. Estoy aquí principalmente para verificar que [los comerciantes] entren con los [papeles apropiados] y que no entren cosas restringidas. Este es el último lugar [en la cadena de sitios de inspección], así que espero que si [los comerciantes] pasan por aquí, ya hayan pasado por los otros [puntos de inspección]. Así que solo estoy revisando los permisos... Aquí es pura supervisión, no puede obtener permiso aquí.

Los agentes en Cuauhtémoc y Las Champas, México, no pueden dar autorización, pero están comisionados para verificar que los comerciantes hayan cumplido previamente con las inspecciones requeridas, documentación y pago de impuestos. Cuando los automóviles cruzan, una luz automatizada enciende en verde o rojo; solamente cuando la luz se enciende en rojo David puede inspeccionar.

Las limitaciones de la marginalización de Ciudad Cuauhtémoc como aduana comercial se observan en La Mesilla, Guatemala. De acuerdo con un agente en La Mesilla, las limitaciones de México reflejan su dominio sobre la frontera. «No entra mucho por aquí porque la aduana

¹⁹ Castillo, Ribot y Olivera (2006).

mexicana no lo autoriza [el comercio] a pasar aquí... Solamente por Tecún-Umán-Hidalgo. Es parte de la política de México». La Mesilla está autorizada para inspeccionar, documentar y procesar impuestos sobre bienes, pero esto se torna irrelevante ante las restricciones de México. El agente guatemalteco cree que México tiene más poder porque «Guatemala consume más de México. Es más pobre la producción de Guatemala. Algunos productos van en la otra dirección, pero la mayor parte de las cosas van a Guatemala de México. Casi todos los productos en Guatemala son de México».²⁰ Cuando lo interrogué sobre la relación entre las oficinas aduanales de México y de Guatemala, me dijo: «México se siente superior». México, alineado con un objetivo de seguridad hemisférico a escala (véase Introducción), ejerce mayor influencia que Guatemala sobre aspectos de seguridad fronteriza.

Reformas aduanales

Las reformas aduanales mexicanas, en línea con un objetivo neoliberal de eficiencia y modernización, también reestructuraron la vigilancia fronteriza en la década de 1990 y la primera de 2000. Umberto, un agente aduanal establecido en la Ciudad de México, quien también había trabajado en Ciudad Hidalgo, explica que las reformas fiscales de la década de 1990 se dirigían a frenar la corrupción mediante la modernización y centralización de las inspecciones fronterizas. Esto involucró el cierre de muchos puestos aduanales pequeños antes dispersos en el paisaje fronterizo, incluidos dos en la entrada y la salida de la ruta no supervisada en 1991. Según Umberto, «Quitaron [los puestos extra] ya que el dinero nunca llegaba a la aduana... sino que solo iba a parar a los bolsillos de la policía». Me dijo que antes de las reformas los agentes aduanales eran llamados «celadores» y luego esto cambió a policía fiscal

²⁰ Desde 2012, México es el quinto destino más importante para exportaciones guatemaltecas y el segundo para importaciones en general, mientras que Guatemala es solo el doceavo destino para las exportaciones mexicanas y el número veintiséis para las importaciones en general (OMC 2015:8).

a inicios de la década de 1990. Ahora son llamados inspectores fiscales. Félix, un inspector fiscal en Las Champas, expresó contundentemente acerca de los cambios: «La misma gata, pero revolcada. Antes usábamos azul claro y ahora azul oscuro... Las funciones son básicamente las mismas... aunque seguimos un manual diferente». Anteriormente más agentes aduanales y de migración se encontraban establecidos en la región, pero eran removidos por cargos de corrupción. Aunque el sistema viejo llevó a hacer sentir al personal, como lo describe Félix, «todopoderoso», el nuevo arreglo no representó un control más efectivo. Compuesto de menos personal y con menor apoyo gubernamental y entrenamiento, la aduana se vio limitada para ejercer su trabajo. De manera similar, el establecimiento de reformas políticas en México desde la década de 1990 había instituido reestructuraciones significativas de la policía federal, estatal y municipal con casi cada nueva administración. De acuerdo con Daniel Sabet, «Mientras que nuevos nombres, nuevos uniformes y nuevos logos intentaban simbolizar una ruptura con el pasado, a menudo hay sustancia insuficiente en estas reformas».²¹

México ordenaba rotaciones frecuentes de agentes para prevenir la corrupción, pero, en efecto, la rotación usualmente significaba que los oficiales tenían más que perder al aplicar la ley en una región donde observaban a la gente tan organizada y carente de otras oportunidades de ingresos.²² Esteban era el agente aduanal de Ciudad Cuauhtémoc cuando lo entrevisté en enero de 2007, pero para la primavera de ese año David estaba a cargo. México intentaba seguir una táctica parecida para combatir la corrupción mediante reformas en la Procuraduría General de la República (PGR) desde la década de 1990. La PGR reubicó personal,

²¹ Sabet (2010:266).

²² Friman (2009b:54, 57) plantea razones por las que los políticos podrían no estar dispuestos a aplicar la ley desde una perspectiva más macro, demostrando que los mandatos políticos se anidan en «sistemas de más alto nivel» como la seguridad o el comercio internacional, ya que también necesitan lidiar con cómo estas políticas están enmarcadas en «expectativas [sociales] concernientes al legítimo uso del poder del Estado». En la frontera México-Guatemala, los funcionarios maniobran entre aplicar los mandatos para reforzar la seguridad con compromisos para facilitar el comercio y el descontento social de la región.

despidió a grupos de funcionarios corruptos, eliminó unidades completas, modificó la geografía de la aplicación de la ley para disminuir la centralización, y acortó los periodos de los funcionarios por medio de rotaciones constantes de policías y funcionarios civiles.²³ Estas reformas fallaron porque desestabilizaron las relaciones entre el Estado y organizaciones de narcotráfico, mientras que «el panorama del cambio de cargo rápido llevó a funcionarios corruptos a extraer tanto como fuera posible de transacciones simples, por lo tanto privilegiando la extorsión intencionada por encima de la construcción de instituciones de protección».²⁴ Esta táctica en relación con la reforma policial ha sido frecuentemente llamada el «modelo de discrecionalidad limitada», el cual buscó reducir la corrupción al limitar el poder discrecional de la policía a través de rotaciones frecuentes, «la movilización de grupos grandes... restringió el acceso a información y redujo la autoridad».²⁵ Aun así estas reformas no se fueron directamente a las raíces de la corrupción y, al contrario, frecuentemente llevaban a policías a trabajar en casos o en regiones de las que conocían poco, lo que les hizo cada vez más inefectivos a la vez que se restringían sus capacidades.²⁶ Era evidente que algunos funcionarios aduanales, quienes por lo general no son nativos de la frontera, buscaron juntar lo más que pudieron de negocios particulares. Al negociar con la gente, ellos podían mantener la estabilidad regional y protegerse a sí mismos de comunidades regionales organizadas y personajes potencialmente peligrosos.

En la frontera, modernizar las aduanas implicó la apertura y el cierre de puestos aduanales específicos. Brenda Chalfin, en su trabajo sobre los servicios aduanales en Ghana, apunta al hecho de que «el proyecto neoliberal de aparente coordinación política provee oportunidades inusitadas para la supervivencia de algunas instituciones gubernamentales y mandato expandido para algunos empleados del Estado».²⁷ A pesar de la

²³ Snyder y Durán-Martínez (2009:263-264).

²⁴ Snyder y Durán-Martínez (2009:263).

²⁵ Sabet (2012:37).

²⁶ Sabet (2012:37-38).

²⁷ Chalfin (2010:9).

instalación de puntos de control internos improvisados, importación de tecnología de vigilancia de los Estados Unidos y entrenamiento para mejorar la seguridad de la frontera sur de México, en noviembre de 2013 el gobierno mexicano cerró doce puntos de control en cuatro estados fronterizos para modernizar las inspecciones y facilitar el comercio.²⁸ El objetivo, de acuerdo con Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, era la «modernización de la infraestructura aduanera a través de la implementación de una ventanilla única, un nuevo esquema de empresas certificadas, fortaleciendo y formando al personal aduanal para combatir la ilegalidad».²⁹ Mientras tanto, el programa de modernización aduanal (2007-2012) incluyó la instalación de tres nuevos puntos de inspección integrados en Chiapas. Los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) instituidos en Chiapas, en Huixtla, La Trinitaria y Playas de Catazajá entre 2013 y 2015, con puntos adicionales abiertos entre 2016 y 2017 en Palenque y Tabasco, ahora coordinan múltiples agencias del gobierno en cruces carreteros críticos.³⁰ En 2014, México anunció que comprometería 9300 millones de pesos en los siguientes cuatro años para modernizar las aduanas.³¹ Aunque estos esfuerzos están alineados con el Programa de la Frontera Sur, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014, México había estado desarrollando iniciativas de desarrollo regional e integración de seguridad que conducían hacia esto.³² Los resultados en la frontera han sido el incremento de la polarización, incluidas mayor securitización, movilidad restringida, imprevisibilidad para pequeños comerciantes y campesinos y facilitación del comercio a negocios grandes registrados para generar comercio fronterizo. La racionalización o el recorte de algunas funciones del Estado, al tiempo que se refuerzan otras, sirve al interés del neolibe-

²⁸ *Animal Político* (2013).

²⁹ *Animal Político* (2013).

³⁰ Isacson, Meyer y Morales (2014); Isacson, Meyer y Smith (2015).

³¹ Muciño (2014).

³² Véase Isacson, Meyer y Smith (2015:32); sobre la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (2005-2009) para profundizar la seguridad y la integración regional entre los Estados Unidos, México y Canadá, véase Pickard (2005) .

ralismo securitizado, por el que las iniciativas de seguridad aseguran los intereses de las inversiones multinacionales y de las elites.³³ Algunos de estos intereses incluyen Puerto Chiapas en Tapachula, y el antes llamado San Benito, conocido también como Puerto Madero, que fue optimizado en 2005 para recibir cruceros y también fue el sitio designado para una nueva Zona Económica Especial, aprobada por México en 2016, para atraer capital extranjero al ofrecer privilegios e iniciativas especiales.³⁴ El neoliberalismo securitizado con frecuencia tiende a deslegitimar y criminalizar alternativas económicas extralegales. Pueden ser simultáneamente castigadas y toleradas, lo que sirve para revitalizar conexiones clientelistas entre campesinos y funcionarios y reforzar la discrecionalidad de agentes estatales para defender, ignorar o burlar las reglas.

Umberto afirmó que las reformas fiscales de México hicieron el comercio más «rápido y ágil». Él está acostumbrado a lidiar con grandes corporaciones como Nestlé. Relató que los requisitos para entrar en el comercio fronterizo se mantienen similares, pero las reformas redujeron la cantidad de documentación. Los acuerdos de libre comercio simplificaron y liberalizaron la estructura fiscal, pero no todos los impuestos desaparecieron.³⁵ Él me dijo que muchos productos ahora solo requerían 15% del IVA mexicano [impuesto al valor agregado], pero muchos bienes y productos agrarios considerados sensibles aún cargan con impuestos. Los negocios asimismo deben pagar por los documentos y coordinar los servicios con el agente aduanal.³⁶

Aun así, las regulaciones de impuestos documentadas son para Ciudad Hidalgo, que está certificada para procesar comercio, y no para Ciudad Cuauhtémoc. Umberto explicó que los impuestos son más altos para individuos y negocios que no estén registrados para el libre comercio

³³ Véase Paley (2014); véase también Goldstein (2010; 2012); Jusionyte (2015).

³⁴ Dorset Chiapas Solidarity (2016).

³⁵ Para finales de 2015, México y Guatemala habían liberalizado entre 96% y 98% de sus líneas tarifarias; «solo 216 líneas tarifarias para México (1.8%) debían permanecer sujetas a impuestos... [y] solamente 3.2% de las líneas tarifarias de Guatemala [eran] objeto de impuestos» (OMC 2016:33).

³⁶ Los pequeños negocios por debajo de los mil dólares por día no necesitan un agente de aduanas.

con Guatemala. De acuerdo con Umberto, las compañías más grandes están registradas, pero para otros «no hay incentivo para pasar legal». Explicó: «Si alguien en México importa de alguien en Guatemala que no esté registrado [para libre comercio], conviene contrabando porque [de otra manera] se debe pagar 20% sobre el valor [del producto, al no ser elegibles para impuestos reducidos o libres de cargo]. Entonces es mejor pagar 10% de mordida». Él enfatizó la necesidad de registro de los negocios en Guatemala para recibir los beneficios de la liberación del comercio, pero relató que «muchos no quieren o no saben [registrar]... [Ellos] no quieren ser registrados... quizás por no pagar otros impuestos también». Umberto describió esto como «una cultura de contrabando» en la cual: «La gente cree [que el contrabando] es más barato que hacerlo [el comercio] bien. Pero no siempre es [más barato]. A veces sí, la mordida será más que lo que se hubiera pagado por el trámite. La mordida a veces es más... Lo ideal sería que todo el comercio se registre y se organice».

La declaración de Umberto pasa por alto, y sin embargo refleja, las exclusiones en los acuerdos comerciales oficiales, así como la forma en que la liberalización del comercio facilitó las corrientes comerciales legales y extralegales. Algunos residentes de la frontera y pequeños comerciantes desconocen los requerimientos o los evitan para proteger sus ganancias, pero para la mayoría de los campesinos y pequeños comerciantes no existe un camino comercial legal. Además, persisten impuestos y restricciones para muchos bienes que se contrabandean, como maíz blanco, azúcar y café. Rogelio, el líder de la asociación de productores de maíz, cerca de Trinitaria, Chiapas, relata sus frustraciones cuando se encontró con funcionarios regionales en un intento por vender su maíz de manera legal en Guatemala: «[Ciudad Cuauhtémoc es] solo un trampolín. Aquí no hay autorización, ningún lugar para obtener autorización. Hidalgo es donde se deben hacer los pagos, requisitos... Yo luchaba por eso [hablé con funcionarios] para comercializar [el maíz] a través de la ley, pero ningún gobierno lo ha permitido».

Algunos pequeños contrabandistas, campesinos, y comerciantes señalan que, si se les proporcionara orientación y oportunidad para

integrarse en el comercio legal, pagarían menos, dado el creciente número de agentes estatales a quienes deben dar sobornos bimensuales para contrabandear bienes.

Para entender la omnipresencia del contrabando pese a la existencia de acuerdos comerciales es necesario explicar cómo estos acuerdos excluyeron a los campesinos mientras facilitaron el comercio para grandes negocios. El objetivo de los acuerdos es evidente para los residentes de la frontera. Un residente guatemalteco resumió los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA): «El libre comercio es solo para los académicos y las empresas grandes... La gente se va a volver más pobre». En lugar de simplificar el comercio, los habitantes experimentaron las prohibiciones del libre comercio como opacas y excluyentes.

Específicamente, los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fueron negociados para beneficiar negocios de la elite e intereses financieros privados en los Estados Unidos, México y Canadá. El TLCAN intentó abrir e integrar mercados y comercio, pero asimismo se realizó con intención de expandir las oportunidades de inversión privada, facilitar el movimiento de capital y convertir las pérdidas de la crisis de la deuda de la década de 1980 en oportunidades financieras. Los intereses representados fueron los de banqueros, corporaciones, políticos y cabilderos, y fueron excluidos aquellos de los negocios pequeños, sindicatos, sociedad civil y pequeños agricultores.³⁷ Fernández-Kelly y Massey concluyen:

Los objetivos declarados del TLCAN (desarrollo económico en México y crecimiento balanceado en toda América del Norte) fueron desde el comienzo lo opuesto a lo que realmente se implementó, que sirvieron a estrechos intereses económicos y políticos en lugar del bienestar de mexicanos o estadounidenses ordinarios.³⁸

³⁷ Fernández-Kelly y Massey (2007:102). Oportunidades para abrir las inversiones se vieron como clave para proteger los intereses de los inversionistas y asegurar que México fuera digno de créditos, una inversión segura.

³⁸ Fernández-Kelly y Massey (2007:106).

México tiene doce tratados de libre comercio que involucran a más de 40 países, lo que lo hace uno de los socios más entusiastas en libre comercio y el país latinoamericano en el que es más fácil realizar negocios.³⁹ El expresidente mexicano Zedillo (1994-2000) caracterizó el enfoque mexicano hacia el desarrollo como «mientras más [acuerdos de libre comercio], mejor».⁴⁰ Estos acuerdos le dan mayor capacidad a corporaciones transnacionales de obtener acceso al mercado mexicano, aunque hacen poco para que pequeños negocios y campesinos lo aprovechen. El TLCAN y DR-CAFTA incluso contienen cláusulas que protegen los intereses del capital multinacional, lo cual tiene un efecto paralizante en los esfuerzos de regulación del Estado. Si una acción de un país es vista como una amenaza a los intereses de inversión, las compañías pueden demandar al gobierno bajo los procedimientos de disputa inversionista-Estado establecidos en el capítulo 11 del TLCAN, y existen previsiones similares en el capítulo 10 del DR-CAFTA. Los residentes y campesinos de la frontera generalmente carecen de experiencia en negocios, capital y entrenamiento para el registro. Por ejemplo, para importar bienes en México uno debe registrarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin acceso a la participación en el libre comercio, las actividades económicas alternativas son etiquetadas como comercio informal o criminalizadas como contrabando.⁴¹

Los sentimientos de los campesinos con respecto a no haber sido informados o capacitados para participar en el libre comercio no son un tema de ignorancia, sino que reflejan las exclusiones establecidas en los acuerdos. Liza Grandia revela que la falta de información diseminada acerca del DR-CAFTA es muestra de que «el DR-CAFTA no es un acuerdo

³⁹ Díaz (2001); Villarreal (2012); Figueroa, Lee y Van Schoik (2011); Grupo Banco Mundial (2015).

⁴⁰ Díaz (2001).

⁴¹ Ieva Jusionyte (2013; 2015) documenta exclusiones y privilegios similares alrededor del tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), un bloque político y económico subregional establecido entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil en 1991, con países socios adicionales. La membresía de Venezuela fue suspendida en 2016. A medida que los países entraban oficialmente en la integración comercial a través del MERCOSUR se fueron restringiendo y criminalizando las formas locales de comercio tradicional (2013:234).

de libre comercio, sino más bien un acuerdo de comercio 'corporativo' que transforma la inversión extranjera de un privilegio a un derecho inalienable». ⁴² De acuerdo con dicha autora, a causa de que la administración de George W. Bush ejerció presión en «las negociaciones del DR-CAFTA en menos de un año... ninguno de los delegados Centroamericanos tuvo opción de leer el documento completo en español hasta que este fue finalizado» y persistieron textos secretos hasta que las negociaciones se dieron por concluidas para que ni las organizaciones civiles estadounidenses ni las centroamericanas pudieran opinar. ⁴³ El propósito de un comercio más eficiente parece ser mera retórica debido a numerosos «acuerdos anexos» que protegen privilegios particulares de la elite. ⁴⁴ Grandia argumenta que lo que logra el DR-CAFTA es empujar los intereses de las corporaciones transnacionales al presionar a gobiernos centroamericanos a privatizar sectores clave, «transformando leyes de propiedad intelectual... y socavando cualquier ley ambiental o social» que amenace la construcción de un ambiente favorable para la inversión transnacional. ⁴⁵ Incluso en regiones centrales (en contraste con regiones fronterizas) de Guatemala en las que la gente está más enterada de las prohibiciones del DR-CAFTA fue pronto evidente que el acuerdo no estaba destinado a pequeños comerciantes y campesinos. ⁴⁶

México y Guatemala también entraron en un acuerdo de libre comercio como parte del Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte en 2000-2001. Sin embargo, el acuerdo no fue bien publicitado y se enfocó en el comercio en Ciudad Hidalgo, México, y Tecún Umán, Guatemala. El estudio de Marco Antonio Aguilar señaló la falta de información; muchos comercios y empresas en el suroeste de Guatemala sabían poco a nada acerca del acuerdo. ⁴⁷ Las inconsistencias en las relaciones de comercio entre México y los países centroamerica-

⁴² Grandia (2012:187).

⁴³ Grandia (2012:187).

⁴⁴ Grandia (2012:187).

⁴⁵ Grandia (2012:187).

⁴⁶ Little (2013).

⁴⁷ Aguilar (2003:4).

nos llevaron a un nuevo tratado de libre comercio para armonizar el comercio regional, el cual entró en vigencia en 2013.⁴⁸

Mientras que los burócratas exaltan los beneficios del libre comercio, el contrabando y el comercio informal son estigmatizados pese a una larga historia regional de comercio fronterizo informal. Los funcionarios fluctúan entre tolerar paternalistamente a los pequeños comerciantes y verlos como amenazas potenciales al ambiente de negocios. Una señal en la aduana en Ciudad Cuauhtémoc advierte «La introducción ilegal de mercancías puede robar tu empleo. No permitas que entre a tu trabajo». La ironía en esta región, así como en buena parte de la frontera sur, es que el contrabando ocurre abiertamente, no en secreto. Añadido a su rol histórico de conectar poblaciones a través de la frontera, llegó a ser vital frente a reformas neoliberales y agrarias que encarecieron los bienes básicos y erosionaron modos de vida tradicionales.

México oficialmente promocionó la modernización y la centralización de las inspecciones para combatir ostensiblemente la corrupción, la cual era endémica debido a la autonomía de agentes fiscales individuales situados en el terreno fronterizo. Estos cambios encajan bien dentro de los parámetros del TLCAN y el involucramiento de los Estados Unidos en asuntos de comercio mexicanos, haciendo más fácil su monitoreo.⁴⁹ Mientras tanto, los campesinos y los pequeños comerciantes que quieren establecerse en el comercio fronterizo tienen pocas opciones. Alejandro Grimson nota maniobras similares en la frontera Brasil-Argentina, de modo que «acuerdos regionales como MERCOSUR permiten solo un tipo de circulación considerada 'legal' por los Estados, mientras que olvidan o prohíben el clásico intercambio local de las poblaciones fronterizas».⁵⁰

La penalización y la prohibición son fundamentales para legitimar las exclusiones y disposiciones de los acuerdos oficiales como beneficiosas y legales, al mismo tiempo que se devalúan los modos de comercio competidores como amenazas al orden político-económico.⁵¹

⁴⁸ Azurdiá (2013); OMC (2016).

⁴⁹ Carmen Fernández Casanueva, comunicación personal, agosto 2014.

⁵⁰ Grimson (2002:167). Véase también Jusionyte (2013:236).

⁵¹ Véase Gallant (1999); Heyman y Smart (1999).

Sin embargo, los funcionarios toleran e incluso facilitan el contrabando. Kirsten Endres, basándose en las «zonas de excepción neoliberal» de Ai-wha Ong, se refiere a las zonas de libre comercio fronterizo como áreas donde personajes particulares ganan privilegios económicos a costa de la exclusión de otros.⁵² Endres usa el término *excepción corrupta* para examinar regiones donde la corrupción y la ilegalidad están normalizadas y adquieren apariencia de ley.⁵³ La «excepción corrupta» funciona para incluir a comerciantes extralegales en relaciones rutinarias implicadas con las autoridades a través de sobornos, mientras los excluye de la protección legal y los somete a la amenaza perpetua de aplicación predatoria.⁵⁴ En la frontera México-Guatemala, los funcionarios instan a los residentes a que participen legalmente en el comercio, aunque reconocen que las exclusiones de las zonas de comercio neoliberal estimulan una forma de comercio extralegal normalizada y complementaria que también beneficia económicamente a los funcionarios y a intereses privados. Los pequeños comerciantes y los residentes se enfrentan a los riesgos impredecibles de la aplicación de la ley.

La historia no oficial

Me tomó varios intentos obtener entrevistas con agentes aduanales. Las primeras veces que lo intenté con inspectores fiscales en Las Champas me dirigieron a Esteban, el agente aduanal de la oficina de Ciudad Cuauhtémoc. Era un muchacho de veintitantos años, de pelo corto, originario de la Ciudad de México. Cuando lo conocí él llevaba solamente tres semanas en la localidad. Había trabajado previamente en puestos cerca de Tapachula y en Talismán. Al pedirle permiso para entrevistar a otros inspectores fiscales, me explicó que todos los agentes trabajan independientemente: «No tengo control sobre ellos». Ellos no reportaban entre sí; todos lo hacían directamente a la oficina central en Ciudad

⁵² Endres (2014:3); Ong (2006:5), citado en Endres (2014:3).

⁵³ Endres (2014:12).

⁵⁴ Endres (2014:3); véase también Goldstein (2012).

Hidalgo. Tuve mucha suerte simplemente al entrar en una oficina en la que un funcionario no tenía mucho que hacer. Después de decidir qué clase de preguntas haría, la mayor parte de los agentes se mostraron dispuestos a hablar, pero me pidieron que tomara notas escritas y no grabaciones. Si bien esperaba la explicación oficial, sorpresivamente obtuve lo contrario. Los agentes dijeron que no podían comentar oficialmente, pero sí compartir sus opiniones. Esta sección se enfoca en las experiencias de burócratas fronterizos. Es por medio de sus puntos de vista y representaciones de la frontera y sus habitantes que podemos ver cómo el control de la frontera no está exclusivamente marcado por tensiones entre comercio y seguridad, sino que también se logra a través de negociaciones diarias y de las percepciones sobre raza, clase y diferencias regionales. Los agentes se relajaron cuando comprendieron que yo entendía cómo funcionaba la región. Un agente aduanal declaró: «Se maneja aquí en esta zona de una forma de dar a la gente lo que quiere... darles ciertas libertades. Si no, [la gente] reprimiría a las autoridades».

Al igual que los residentes, los agentes notaron cambios desde la rebelión zapatista en 1994. De acuerdo con el inspector fiscal Félix:

Antes, el gobierno solo enviaba a los militares. No escuchaban a la gente. Las autoridades mexicanas solían tener más poder ya que el gobierno los apoyaba. Ahora las autoridades no tienen protección. ¿Qué haría yo si alguien quisiera pasar algo ilícito y cargara un arma? En México no puedo disparar a menos que me disparen primero. Hay muchas autoridades federales, pero ganan muy poco... por eso decidieron ganarse a la gente. Después del conflicto [zapatista], el gobierno comenzó a poner más atención a la gente, especialmente en esta región, ya que llevaba como cincuenta años de retraso. Mucha gente ni siquiera hablaba español. Los líderes regionales comenzaron a orientar a la gente, y la gente comenzó a adquirir más educación y a exigir sus derechos.

Félix enfatizó que México es ahora democrático, pero al decir «democrático» hizo una seña de comillas con los dedos:

[El gobierno] sabe que debe comprar votos o dar cosas [a la gente]. Antes conocías de antemano quien sería elegido. Ahora [México] todavía no es «democrático» pero es menos un hecho dado ser elegido sin apoyo y voto de la gente [el cual los políticos] compran. Es corrupto y [todo puede ser] comprado. [La democracia] es un proceso largo.

Félix observó que la rebelión zapatista logró que el gobierno fuera más sensible hacia la gente, pero en formas que generaron patrones duraderos de patronazgo-clientelismo y corrupción. «Ha despertado la gente... que ellos importan y [el gobierno] ha respondido. Pero los medios para hacerlo son corruptos». Félix lamentaba cómo las comunidades rurales utilizaron momentos de crisis para tomar la ley por sus propias manos.⁵⁵

Las comunidades imponen sus propias reglas. Las autoridades no [se] meten para evitar los conflictos sociales. En la práctica, la gente hace casi lo que quiere. Los ejidos tienen mucho control y no permiten [que entren las autoridades] a revisar dentro en los ejidos. Es su terreno. No nos permiten entrar... Tenemos que pedir permiso con la gente [y a las autoridades locales] incluso para entrar a echar un vistazo. Antes del 2000 pudimos entrar, ahora no. Después de 1994, poco a poco, las comunidades empezaron a negarnos la entrada. Así que pueden transportar su contrabando... y cobrarse a sí mismos. No le conviene a la autoridad entrar, no conviene [tener] problemas... La gente se uniría y lo amarraría.

Continuó: «Aquí cerquita, yo sé que hay una brecha conocida donde supuestamente pasan [bienes] pero no se mete nadie». «¿Por qué no?» —pregunté. Él respondió:

Está controlado por mafiosos que cuidan sus trabajos y van cuidando sus familias. No [nos] queremos meter ya que no queremos problemas. Si el ejército ni siquiera entra y está más equipado, ¿por qué alguien como nosotros se arriesgaría a entrar? No arriesgaría a mi gente de esa manera.

⁵⁵ Véanse paralelismos en Goldstein (2004).

Un oficial mexicano de la Policía Estatal Fronteriza (PEF), una dependencia del gobierno estatal formada en 2007 para mejorar la seguridad de la región,⁵⁶ relató:

La gente aquí no respeta tanto a la policía como antes. Había algunas malas experiencias con ellos... especialmente cuando yo estaba en los Altos. La gente ni siquiera le daría [a un oficial] un vaso de agua. O les avientan basura y esperan que nosotros la recojamos. Sí, la gente se ha vuelto más agitada, pero es demasiado... Ya no respetan. Echan basura en vez de saludar. Pero nosotros debemos mantener relaciones... si se reúne la gente, no hay mucho que se pueda hacer.

Otros agentes atribuyeron el crecimiento en la movilización de campesinos, en sus palabras, a «su retraso». El agente aduanal David dio su opinión:

Un compañero mío que ocupó este puesto antes que yo fue amarrado hace aproximadamente diez años... La gente [aquí] es salvaje, así. Me duele decirlo, pero es así. Yo tuve algunos problemas cuando recién llegué... Recientemente, unos comerciantes de Comalapa vinieron a mi puesto y querían amarrarme... [Los comerciantes] me amenazaron que solo querían pagar cinco por ciento en lugar del quince impuesto para tener sus mercancías de Guatemala. Pero yo no podía hacer esto. No soy el presidente. Cincuenta personas vinieron y me amenazaron, pero pedí ayuda al ejército, el sectorial, y entonces al presidente municipal ayudó a solucionarlo. Pero usted puede ver la forma que tiene la gente de aquí de reaccionar. Muchos son ignorantes y no saben las leyes... ni un diálogo... En lugar, para llamar la atención cierran carreteras, marchas... [o] vienen armados con machetes. Quizá por la influencia de organizaciones [que dan información sobre] los derechos, o por la misma ignorancia de las personas.

⁵⁶ Los residentes fronterizos malinterpretaron esta fuerza como si viniera directamente de órdenes del presidente Calderón, porque encajaba con su retórica respecto a la frontera, aunque fuera una iniciativa estatal a cargo de Juan Sabines Guerrero (Basail 2016, comunicación personal).

Aunque David lamentó la etiqueta de «salvajes» que daban a los habitantes de la frontera, esos términos contribuyen a su criminalización sin investigar las razones por las que la gente evade la ley, a la vez que revela cómo los funcionarios toleran distintos grados de la ilegalidad o participan en la construcción de ello.

Algunos funcionarios cosificaban a los residentes como atrasados, sin educación y enojados, mientras que otros también entendían que el contrabando continúa porque es una de las pocas opciones de los campesinos. Al preguntarle al inspector fiscal Félix, quien ha trabajado para aduanas por quince años en múltiples puestos aduanales a lo largo del país, sobre lo que ha aprendido de esta región, respondió:

Lo que aprendí más [de aquí] es que la gente está *brava* [enojada]. Aquí no se puede poner su autoridad. Cuando yo me encontraba [asignado] a Ciudad Carmen [se rio], cada quien se rascaba con sus propias uñas. No va a tener a toda la comunidad juntada como lo hacen aquí. No van a juntar la gente allá. Son más unidos aquí, y en este sentido, continúa la ilegalidad... En otras partes las autoridades aplican la ley y la gente cumple, paga lo que debe, y procede. Aquí la gente se junta, como zoo. La costumbre es que la gente es muy firme.

Félix admitió que trabajar en esta región requiere oficiales que flexibilicen las reglas. Me dijo que los funcionarios mantienen su autoridad, pero no la ejercen totalmente. Y él a veces facilita pequeñas operaciones de comercio a través del puesto aduanal fronterizo oficial, pese a las restricciones:

Intentamos dar prioridad a la gente local, exponen ellos sus necesidades... como si los de aquí necesitan un producto por consumo... sabemos que son pobres, explican. No están tratando de esconderlo de nosotros y eludirnos como la mayoría hacen. [Entonces] nosotros seremos más flexibles con la gente y solo los dejaremos. Esto no pasa en otras aduanas. Ahí pagan y [los agentes] no son flexibles como esta. Aquí, si no ayudas a la gente ellos no te ayudarán. Nos correrían a todos si no los ayudamos... Aquí la gente es muy pobre y brava. Hay acuerdos, se dice, bajo el agua, no realmente legal, [pero]

local, internos... para que la gente esté contenta. Entonces, sí, a menudo no ejercemos nuestras funciones como deberíamos... Es lo mismo con todas las dependencias [otras unidades policiales] aquí. Si no, la gente puede quitar la autoridad de alguna manera.

Una mañana intenté entrevistar al inspector fiscal de Ciudad Cuauhtémoc. El edificio de oficinas estaba cubierto de grafitis que decían «Alto a las reformas estructurales... comercio libre para todos... ¡Fuera Felipe Calderón!». Félix había contado cómo los manifestantes los mantuvieron secuestrados en la oficina por siete horas. Con 200 personas afuera, él preguntó «¿Cómo podríamos haber hecho algo?». Los manifestantes incluso pintaron consignas en los vehículos personales de los agentes aduanales. Félix se señaló a sí mismo y a su colega demostrando su impotencia para enfrentarse a una multitud grande y organizada. «Sólo somos dos. Si la gente viene con machetes». «No —sonrió su colega— palos, pero muchos... Vienen con sus palos pintando por siete horas... fuera de la legalidad. ¿Qué tan fácil crees que sería para ellos quitarnos?» —me preguntó.

Al separar las políticas de ajuste estructural de las demandas por un mercado libre que sea inclusivo para campesinos y pequeños comerciantes, los fronterizos critican las versiones elitistas del libre comercio corporativo. Sin embargo, los inspectores interpretaron el incidente como que organizaciones independientes manipularon a los campesinos. Félix continuó:

La gente a menudo no sabe de dónde vienen sus líderes, pero [organizaciones y partidos políticos] vienen con sus ideologías. Ellos le dicen a la gente que se organice, y los amenazan a algunos... si no [se unen a ellos], les quitarán sus programas. Y puede ver en mi carro [ellos pintaron con aerosol], dice PPP [Plan Puebla-Panamá] ¿Usted cree que la mayoría de la gente en las comunidades sabe qué es? Muchas veces [las organizaciones] manipulan a la gente para que los sigan.

Algunos agentes intentan ser más comprensivos y otros ceden por miedo o necesidad, pero la narrativa de los funcionarios usualmente

oscila entre burla y paternalismo, mientras perpetúan una visualización de la gente de la frontera como salvaje, poco educada u obstinada, etiquetas que atribuyen a la cultura. Como lo explica Félix, «La cultura de la gente aquí es manifestar [y] con presión obtiene lo que quiere». Históricamente, las elites mexicana y guatemalteca han actuado bajo argumentos racistas y clasistas para justificar la marginación de los campesinos y de las poblaciones indígenas. En México, las jerarquías sociales regionales colocan a los mexicanos del norte en una posición social y racial privilegiada, en contraste con las percepciones del sur rural pobre e indígena.⁵⁷ El agente aduanal David, originario del norte de México, establece las diferencias entre norte y sur:

Por la frontera sur y la frontera norte la ley es la misma, pero la vida es muy diferente. Ese es el problema: las costumbres... la cultura es muy diferente. Aquí la gente en la pura frontera a veces ni saben si son mexicanos o guatemaltecos. No es su costumbre parar la mercancía y el flujo y [tener] policías, aduanas. Ellos no diferencian ni cosas ni leyes. No ven ningún problema de llevar maíz [que puede] llevar moscas e infectar lugares por problemas de plaga.

David ilustró cómo las narrativas oficiales comenzaron a relacionar el pequeño contrabando con preocupaciones fronterizas por el crimen transnacional, drogas y violencia, al concluir que «la gente busca lo más fácil. Yo no creo que debemos facilitarlos porque cuando se facilitan más cosas, más margen de maniobra. La gente se aprovecha y abre más vías... busca más maneras de evadir... más salida para todo... una cosa lleva a la otra». En tales líneas de pensamiento, las acciones de los campesinos y sus desgracias son atribuidas a su carácter y cultura, y esto desplaza la atención de las razones por las que participan en actividades extralegales, incluida una atmósfera generalizada de corrupción, políticas de comercio poco transparentes y exclusivistas, crisis agrícola y

⁵⁷ Ante los ojos de los mexicanos, el sur de México es a menudo asociado con suposiciones denigrantes y estereotipos de indigenismo y retraso (véase Vila 1999; Stephen 1999). Muchos agentes aduanales estacionados en Chiapas son del norte o han sido capacitados en instituciones que perpetúan estos estereotipos.

falta de opciones de vida. Los funcionarios reconocen estos problemas, pero simultáneamente culpan a la cultura y a los habitantes locales. Félix explicó: «Para hacer las cosas mejor, la gente necesita valorarse más... Necesitan más empleos, apoyos en el campo, pero realmente aplicados... Por costumbre [aquí] la gente no tiene aspiraciones. No tiene cultura ni educación».

Agentes aduanales e inspectores fiscales repetidamente aclararon que no pueden hablar como representantes del gobierno, solo como individuos. Puede ser que trabajen para el gobierno, pero sus motivaciones e identidades, diversas y frecuentemente contradictorias, revelan un punto de vista más complejo de las instituciones estatales y sus agentes.⁵⁸ Para muchos, la etiqueta de oficial de Estado o agente no los definía. Los empleados del Estado fueron también víctimas de la reestructuración neoliberal que perjudicó a los residentes rurales fronterizos. En la década de 1990, México recortó el gasto público 9.8%, lo cual representó una disminución en salarios reales y en poder adquisitivo, un aumento en el desempleo y recortes en puestos gubernamentales.⁵⁹ El compromiso con la privatización significó reducir el sector público, que previamente proveía una vía de ascenso a la clase media y empleaba a muchas personas entre la clase trabajadora en varios países latinoamericanos.⁶⁰ Desde que entró al TLCAN, México ha sufrido un déficit de trabajos formales con una alza concomitante de la informalidad; el porcentaje de la población que trabaja en el sector informal se elevó de 52% a 57% entre 1992 y 2004.⁶¹ De acuerdo con Zepeda y sus coautores, «El valor real del salario mínimo cayó 25% desde el TLCAN», lo que es una «referencia al generar ajustes salariales en un rango amplio de actividades».⁶² Por lo tanto es crítico para el establecimiento de términos de

⁵⁸ Véase también Heyman (1995); Chalfin (2010); M. Reeves (2014).

⁵⁹ Nash (2001:85).

⁶⁰ Centeno y Portes (2006:38).

⁶¹ Zepeda, Wise y Gallagher (2009:12-13).

⁶² Zepeda, Wise y Gallagher (2009:14). Estos autores citan datos del CONSAMI (s.f.); Fairris, Popli y Zepeda (2008).

contratos, salarios gubernamentales y beneficios para trabajadores.⁶³ Un agente migratorio me comentó que no se le ofrecen pensiones a los empleados nuevos como a sus predecesores, del mismo modo que «la mitad de los nuevos trabajos creados en el sector formal entre 1993 y 2004 no ofrecieron los beneficios básicos (seguridad social, bono anual y dos semanas de vacaciones) como determina la ley mexicana».⁶⁴ Bajo los ajustes estructurales, las características de la informalidad, tales como falta de protección del Estado, poca paga e inseguridad también comenzaron a permear en trabajos del sector formal.⁶⁵

Algunos residentes fronterizos, como Paco, soñaban con convertirse en agentes migratorios como un paso hacia la clase media. Sin embargo, muchos migrantes y agentes aduanales concebían los puestos gubernamentales como temporales. Ya no era el camino a la movilidad de clase como había sido para generaciones previas. Muchos agentes, como Félix, simpatizaban con las razones por las cuales la gente entra en el contrabando. Él está consciente del hecho de que si el comercio informal cesara, la gente no tendría medios para mantenerse. Razonaba que la gente no se está enriqueciendo de esto, sino tratando de sobrevivir. «En muchas formas, no hay de otra», mencionó. Situaba el contrabando en un contexto de empleo insuficiente, lo que a su vez le permitía explicar su propia situación laboral: «Por eso trabajo en la aduana, lejos de mi familia. [Para ellos], por la misma razón, para mantenerse. Falta empleo, no hay de otra». Esteban estudió ingeniería y algo de inglés. Planeaba ganar algo de dinero como agente aduanal para poder estudiar un grado avanzado en diseño mecánico en Canadá. El inspector fiscal Uriel decidió trabajar para la aduana cuando tenía 25 años para «superarme. Ser un profesional, [es] mejor». Ahora tenía dudas. Quería iniciar un negocio para tener mayor autonomía. Yo le pregunté si había beneficios por trabajar para el gobierno, tales como pensiones. Él respondió que ya no tenía este derecho. «Antes había pensiones, pero ya no... Solo para los viejitos que fueron contratados antes. Ahora ya no hay muchos

⁶³ Zepeda, Wise y Gallagher (2009:14).

⁶⁴ Zepeda, Wise y Gallagher (2009:14).

⁶⁵ Centeno y Portes (2006:40); Basail (2016).

beneficios. Cuando yo entré [a trabajar en aduana] [el dinero] alcanzaba. Ahora es más difícil». Mencionó que durante la administración de Salinas de Gortari (1988-1994), el Estado no solo recortó empleos, sino también muchos de sus beneficios. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial, algunos de los desafíos a los que se enfrentaba la reforma anticorrupción y los objetivos de reformas en el sector público en México eran la falta (con excepción de unas pocas instituciones) de generación de carreras en el servicio civil y fallas en la implementación de instituciones administrativas basadas en desempeño y resultados.⁶⁶

Muchos empleados aduanales opinaron que su trabajo los aislaba. Los agentes mexicanos trabajaban 24 horas con las siguientes 24 horas libres. Esteban dijo que él trabajaba los fines de semana, días festivos y no tenía vacaciones. Creía que poca gente querría trabajar con tales horarios. Cuando les pregunté a inspectores fiscales dónde vivían, señalaron una habitación en el edificio de oficinas. Esteban explicó que «Cada mes hay una rotación de personal. Un mes en cada lugar. Cambio de lugar en el momento en que me lo dicen. A mí no me molesta, ya que no tengo familia. Me gusta conocer nuevos lugares, pero para otros esto es difícil». Uriel compartía la habitación con otros tres inspectores en la oficina. Él estaría ubicado ahí por un mes y luego sería enviado a otro puesto. Su esposa e hijos viven en Tapachula. Los ve una vez al mes cuando regresa a Hidalgo, posteriormente es redirigido a otro lugar.

Cuando le pregunté a Uriel sobre sus responsabilidades como inspector fiscal, explicó que cada puesto tenía su propia jurisdicción. Aunque otros inspectores, que también reportan a Ciudad Hidalgo, están a cargo de inspecciones en autopistas, no se comunican para reportarse entre ellos. Cada uno reporta a Hidalgo. Me dijo que existen solamente otros tres inspectores fiscales de autopista en Chiapas. Félix añadió que cada puesto aduanal tiene cuatro inspectores y cuatro inspectores móviles con tan solo diez vehículos para todos ellos. Cuando inquirí acerca de cómo se lleva a cabo la vigilancia, sentí que me encaminaba a un callejón sin salida. Sus respuestas seguían terminando

⁶⁶ Giugale, Lafourcade y Nguyen (2001:730).

en «No puedo decirle» o «No estoy a cargo de eso. Solo me encargo de la línea aquí [o esta oficina]». Me di cuenta de que, en lugar de estar intentando no divulgar información, Uriel me explicaba las realidades del mosaico de puestos de vigilancia y del hecho de que, con un territorio grande y recursos limitados, los oficiales enfrentan una batalla perdida. La vigilancia completa era un espejismo; cada oficial se encontraba limitado a lo que podía hacer u observar con base en su jurisdicción. Félix podía viajar fuera de su zona, pero se cuestionaba: «¿Entonces quién cuida aquí?». Y dado que el patrullaje de autopistas o cruces no monitoreados está fuera de la jurisdicción de los inspectores, ellos ven poco o nulo comercio.

Los mosaicos de jurisdicción y las responsabilidades separadas de presentación de informes permiten la (in)visibilidad selectiva del contrabando. Puede simultáneamente ser deplorado y selectivamente ignorado. Continuó: «Mire aquí —mientras señalaba a través de su ventana los monumentos blancos marcando la frontera que parecía escalar a través de las montañas hacia el cielo abierto—, somos tan pocos [agentes] aquí», como para mostrarme lo obvio que era que la frontera no podía estar completamente vigilada. «La gente que cruza la frontera en las montañas bajo su propio riesgo. Solo somos cuatro aquí. En todo Chiapas solo hay treinta elementos de aduana de inspección fiscal. De todo el estado, que es un estado grande. Mira otra vez el tamaño de los montes. Con solo treinta, ¿qué vamos a hacer?» Félix añadió que a veces la gente les avisa de alguien que está realizando contrabando porque les afecta. Aunque ellos puedan atrapar a alguien en la autopista, dijo Félix: «Yo nunca lo he visto, y qué bueno. [...] Porque ellos no están realmente haciendo cosas malas. Hacen esto para mantenerse. Para ganarse la vida. No hay de otra».

Le pregunté a Uriel si hubo más puestos de inspección en el pasado. «Sí... pero [el gobierno] los recortó... igual que al personal. Hubo una reducción de casi 50 a 60 por ciento de personal». Y al preguntarle por qué no agregan más personal respondió: «Como servidor público no tengo derecho a opinar sobre esto, pero usted puede. ¿Qué opina *usted* que no está vigilado?», me instó a reflexionar. «Pero sí... se necesita más

personal. Imagínese las dimensiones del estado de Chiapas», Uriel gesticuló de nuevo hacia la ventana, donde pasa el contrabando sobre una carretera paralela a la oficial. Este comercio es visible desde su ventana. Un día cuando estaba en la oficina migratoria de Ciudad Cuauhtémoc vi a un grupo de migrantes corriendo a través de las montañas sobre nosotros. Un agente migratorio señaló sonriendo: «¡Ahí van!».

Muchos agentes vieron su trabajo como algo temporal, una necesidad en el ambiente económico actual, o temían por su propia seguridad si intentaban aplicar la ley. Como Esteban, ellos se frustraban de ser agrupados con los demás agentes estatales. A menudo criticaban al gobierno mientras ensayaban un balance entre el cumplimiento del deber y su propia seguridad, con temor de un campesinado organizado y su propio entendimiento de muchas necesidades de la población local. Félix se lamentaba en respuesta al grafiti en su oficina y vehículo:

Aquí habrá protestas... y la gente lo descarga en [nosotros] ya que ellos nos ven como representantes de un gobierno que no les gusta. Pero nosotros no hacemos las políticas. Incluso podría no haber votado por el PAN, pero como empleado del gobierno debo realizar mi trabajo. Pero la gente [nos] ve como símbolos accesibles del gobierno.

A río revuelto, ganancia de pescadores

«Hay una falta de trabajo y poco más», Uriel me decía mientras monitoreaba el comercio no regulado que podía ver desde la ventana de su oficina. Explicaba que este comercio informal ha contribuido al crecimiento de la ciudad, las comunidades, y que mucha gente ha reinvertido este dinero en otros negocios. Los empleados aduanales repetidamente me decían: «Este no es un punto fronterizo importante aquí» y «pasa muy poco comercio». En contraste, los agentes estatales, políticos, y residentes, todos atribuían mucho del crecimiento reciente en la región al incremento del comercio, especialmente con Guatemala. El alza en el comercio regional y fronterizo llevó a Frontera Comalapa a ser recientemente designada como ciudad. Aunque Chiapas es predominantemente

agrícola, el comercio representa una parte importante de la economía de Frontera Comalapa. Los pueblos pequeños de esta frontera se han desarrollado como «regiones de comercio» debido al flujo regional de migración interna y a través de la frontera.⁶⁷ Me preguntaba: ¿Cómo podría beneficiarse la región del mayor comercio internacional cuando oficialmente no existía? Ciudad Cuauhtémoc era un puesto turístico.

Cuando pregunté acerca del rol de los inspectores móviles, el agente aduanal Esteban respondió: «Lo que están haciendo es revisar camiones [para asegurarse de] que todo es correcto —hizo una pausa—. Se supone. Eso es su función. Existen camiones que pasan a través de las colinas... por otros caminos». Hizo distinción entre lo que se supone que pasa y lo que pasa realmente.

Alonso, de Santa Rosa, México, me puso en contacto con Jaime, un político de Frontera Comalapa. Jaime entendía cómo funcionaba la región. Me comentó que las autoridades estaban menos preocupadas por el contrabando de bienes básicos que por el de drogas. Cuando le pregunté si esto se debía al valor de los bienes, respondió: «Más valor económico, más interés tienen las autoridades [de lidiar con la situación]». «¿Esto es por los impuestos?», pregunté. «No se puede hablar de impuestos, es todo estratégico. Nada genera impuestos aquí... en la ruta extralegal». Luego hizo pausa para señalar que, aunque el contrabando no genera impuestos, sí produce ganancias, debido a lo que él llamaba «los convenios [que los contrabandistas tienen] con las autoridades... convenios todos ilegales». Las cuotas de contrabandistas, o sobornos, son mayores por bienes de mayor valor.

Acerca del crecimiento de Frontera Comalapa mencionó que obedecía a que más gente migraba a la región debido a flujos de refugiados en las décadas de 1980 y 1990, así como a daños por huracanes en la sierra durante la primera década de 2000. Se ha convertido en un punto comercial clave en la región, lo cual incluye comercio en bienes de abarrotes, negocios locales y regionales y comercio con Guatemala. Primero, explicó cómo se supone que funciona esto: «la gente de Guatemala

⁶⁷ Fábregas y González Ponciano (2014:17).

viene a comprar cosas acá... pero sí, ellos tienen que pagar un impuesto en la línea». Y continuó: «pero existen muy pocas autoridades para lo que se comercializa en la línea... La mayoría del comercio no pasa [por el puesto oficial]... muy poco... La mayoría a través de los extravíos. Pero este comercio ayuda a la economía de Comalapa». Específicamente, el colapso del peso mexicano en 1994 aportó una explosión económica para Frontera Comalapa al generar un incentivo para el comercio fronterizo tanto legal como irregular. Los guatemaltecos aprovechaban la ventaja de comprar bienes más baratos en México para venderlos en Guatemala.⁶⁸ Jaime explicó los efectos del colapso del peso:

Antes el dólar estaba a 3 pesos y luego subió, el peso cayó, y ya que la moneda de Guatemala... está muy vinculada al dólar americano, también incrementó en valor. Esto ayudó al comercio en Guatemala... Esto permitió a los guatemaltecos comprar aquí, podían comprar aquí barato. Antes no podían pagarlo. Esto ayudó a la economía aquí (en Comalapa) y fue una ventaja para Guatemala.

Dadas las restricciones comerciales en Cuauhtémoc y la falta de espacio para camiones grandes, Jaime admitió que la mayor parte del comercio fronterizo ocurría extralegalmente a través de «extravíos». Esto no era un secreto, sino obvio para cualquiera que haya estado en Ciudad Cuauhtémoc. «Como puede ver —dijo el agente aduanal Esteban—, [los camiones] no pueden pasar. Mire qué concurrido está». El angosto camino entre Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla se encuentra de viernes a sábado lleno de vendedores y puestos con toldos coloridos, donde los vendedores ofrecen lo que sea, desde ropa pirateada hasta celulares, equipos de sonido, medicamentos y sartenes. La Mesilla tiene uno de los mercados de pulgas más grandes en Centroamérica (foto 12).⁶⁹ La gente acude desde distintos puntos del sur de México y Guatemala para hacer compras. Antes de 1983, era una aldea pequeña, ahora provee un enlace crítico hacia Comitán, donde «grandes cadenas de centros comerciales

⁶⁸ Guzmán (2004).

⁶⁹ QuimiNet.com (2006).



Foto 12. Día de mercado en La Mesilla, Guatemala (fuente: foto de la autora).

con capital internacional se han establecido, lo que alienta un flujo diario de gente... a través de la frontera».70 Le pregunté cómo los flujos comerciales afectaban al municipio de Comalapa. ¿Perdía o se beneficiaba? De acuerdo con Jaime, «El municipio no se beneficia de esto, pero los individuos sí. Es lamentable, pero es una realidad. Hay personas cada vez más ricas y otras cada vez más pobres».

Ciro, un empleado que trabaja para la Secretaría de Hacienda en Frontera Comalapa, que está a cargo de la recolección municipal de impuestos, también habló del crecimiento de Comalapa en la última década. Comentó que se ha vuelto un destino popular para gente que busca hacer compras en la región fronteriza. Las compañías que han establecido puntos en Comalapa incluyen Elektra, tiendas de muebles, Ceramat, Pepsi, Superior y Bodega Aurrerá, la cual es propiedad de Walmart. Abastecen a una población transmigratoria creciente de Centroamérica, y el municipio es ahora hogar de «agencias turísticas»; en casi todas las

⁷⁰ Fábregas y González Ponciano (2014:17).

esquinas se anuncian viajes a ciudades fronterizas entre México y los Estados Unidos, así como moteles, cantinas y restaurantes.

Cuando le pregunté a Ciro acerca del crecimiento municipal en la última década, me dijo que Comalapa ha crecido 100%:

Es uno de los municipios que ha experimentado el mayor crecimiento en [la última década]. El único [en Chiapas] con el que puedo comparar tal clase de crecimiento es Tuxtla, pero eso es porque [Tuxtla] es una ciudad grande. Pero como es un municipio chico, se destaca... Ha crecido mucho, como [el número de] empresas y la recaudación de ingresos. Creció por mucho el flujo de dinero, mucha producción... Mucha gente también se fue a Estados Unidos debido a las pocas posibilidades aquí... y entonces mandó dinero... entonces la gente usaba el dinero para invertir en negocios o para comprar más aquí.

Le pregunté a Ciro cómo era que el contrabando afectaba la economía: «No creo que el contrabando beneficie a Comalapa. Aunque sí contribuyó a algo del crecimiento. Pero también perjudica [a Comalapa] porque es un mercado negro». Explicó la estructura fiscal de Frontera Comalapa, en la que la gente solía no declarar impuestos, pero el gobierno mejoró los protocolos. Cuando se colectan impuestos de negocios locales, el municipio no distingue «qué es nacional o internacional... solo lo que ingresa, las cantidades. No importa de dónde viene. Pero tiene que comprobar donde compraron». Explicó que muchos negocios tienden a no declarar compras. Y resumió: «declaran lo que les conviene». Consideraba que cuando los negocios compraban productos de Guatemala de manera extralegal dañaban la economía local. «Sin embargo, si los guatemaltecos vienen aquí a comprar cosas, beneficia a aquellos que les venden y no hacen los recibos».

Relató que «el contrabando beneficia a las empresas de esta manera, pero es un beneficio fantasma. La venta no es para necesidades del estado sino para otras de otro país. Benefician a los particulares que venden. La comunidad no se beneficia si no se declara». Aun así, admitió algunos de los beneficios más amplios derivados de este comercio fantasma que no existe oficialmente, pero impacta la economía regional:

Pero esto contribuye y se relaciona con los flujos del comercio legal, ya que existe más fluidez. La gente comienza a poner ojo a Comalapa y ve más dinero y movimiento. [Se dan cuenta de que] allá puede vender, entonces viene aquí. Los dos [juntos]... legal e ilegal... Uno crece y el otro también [lo hace] debido a más dinero, más flujos. La economía bajo el agua hace crecer con la economía declarada... y eso beneficia aquí.

Estos son los beneficios fantasmas del contrabando: las ganancias y sus efectos periféricos parecen salir a relucir de la noche a la mañana. Con impedimentos oficiales al comercio, no existe método legítimo para explicar cómo emergen estos efectos. Los beneficios se entregan como si se tratara de un fantasma o de un espíritu que, sin embargo, acecha a la región, ya que los residentes exaltan el crecimiento de la zona y critican el aumento de la inseguridad y la desigualdad. Dada la prevalencia de la informalidad y su permeabilidad hacia la economía formal, quizás esta última sea el verdadero fantasma. El contrabando simultáneamente impulsa y socava a la economía formal.

Ciro mencionó la relación entre las economías formal e informal como «a río revuelto, ganancia de pescadores», un proverbio que hace referencia a quienes se aprovechan del desorden para enriquecerse; significa literalmente que uno puede atrapar más peces en aguas turbias. En tales condiciones, los peces no pueden ver los peligros o simplemente salen a la superficie, lo que los hace presas más fáciles. Mencionó una dinámica similar dada una creciente influencia de los traficantes de drogas y migrantes en Frontera Comalapa donde «estas mismas personas invierten dinero en los negocios en la comunidad, invierten aquí mismo».⁷¹ [Desde inicios de 2000] la economía aquí se ha impulsado por [contrabandistas de migrantes] y traficantes». El desorden puede atraer la acumulación de capital transferida entre las economías legal e ilegal, mientras que simultáneamente puede utilizarse para justificar la necesidad de ampliar y hacer punitiva la aplicación de la ley en la frontera para erradicar la economía extralegal.⁷² Las actividades ilegales proveen una jus-

⁷¹ Véase Muehlmann (2014:155), sobre la integración de lo legal y lo ilegal en relación con el tráfico de drogas.

⁷² Véase Andreas (1999; 2010); Comaroff y Comaroff (2006).

tificación para expandir la infraestructura de seguridad fronteriza, aun cuando los oficiales y expertos admiten que el aumento de regulaciones puede estimular más contrabando para evadirlos.⁷³

El comercio extralegal no es necesariamente la contraparte de la economía, sino que las economías legal y extralegal proceden mano a mano, mientras que reformas políticas y económicas para facilitar la liberalización del comercio también ayudan a los comerciantes extralegales y a la fusión de los flujos legal e ilegal. Los contrabandistas también se benefician de aspectos de la integración económica, incluida la mejora en las tecnologías de comunicaciones e infraestructura, y la privatización y liberalización financiera. Estas medidas no solo permiten a actores extralegales disfrazar sus bienes como legales, sino que también permiten a negocios legales desvanecer las líneas de la legalidad, usualmente con efectos mayores.⁷⁴ Aun así, los primeros reciben más atención de las autoridades, las políticas y el público. Como lo argumenta Carolyn Nordstrom:

Ya que... las prácticas de negocios de gran capital [por ejemplo, cuentas bancarias extranjeras, bienes no declarados] recaen en el movimiento de dinero y mercancía fuera de la detección legal y de responsabilidades a través de las mismas vías que usan organizaciones terroristas y extraestatales, es menos probable que se implementen las medidas para controlarlas.⁷⁵

Umberto, el agente aduanal establecido en la Ciudad de México, me contó cómo el libre comercio oficial expandía el comercio regular e irregular. Los agentes aduanales usualmente castigaban a los campesinos y pequeños comerciantes por involucrarse en el contrabando y no entender las reglas, pero Umberto reveló: «aprovechan más las grandes empresas. Hay muchos intereses de la gente, políticos también... Ninguna aduana interferirá... no van a controlarlo. Le beneficia a alguien. Un regalo». Explicó los efectos del libre comercio en el estímulo de flujos no regulados:

⁷³ Andreas (1999); Díaz (2015).

⁷⁴ Nordstrom (2007); Naylor (2002:10).

⁷⁵ Nordstrom (2007:179).

El contrabando va casi en parejo siempre al comercio formal. Pero el contrabando no es una actividad estandarizada. Las grandes empresas también lo hacen... más con sus facturas. [Por ejemplo,] ellos compran en mil [pero] facturan en cien. Ellos sub o sobrestiman... También existe un tipo de contrabando documentado con pedimentos falsos. No es posible verificar desde ningún lado. No hay una base de datos de precios.

La mayor apertura comercial y el aumento del comercio que trajo consigo el TLCAN provocaron un incremento en la subestimación de precios o su declaración, lo cual contribuye significativamente a los flujos ilícitos.⁷⁶ De acuerdo con un reporte de Integridad Global Financiera (GFI, por sus siglas en inglés), de 1994 a 2010 el TLCAN «facilitó los flujos ilícitos por un total de al menos \$561 mil millones de dólares americanos, a través de exportaciones subestimadas e importaciones sobrestimadas».⁷⁷ Los flujos ilícitos de México aumentaron exponencialmente de un millón de dólares en 1970 a 68500 millones de dólares en 2010, lo que representa 3.8% del PIB anual en la década de 1970 y 6.1% anual en la primera década de 2000, mientras que las «transferencias transfronterizas de capital ilícito sobrepasaron el crecimiento económico».⁷⁸ Los números serían sustancialmente más altos si se incluyera el tráfico de drogas y de personas.⁷⁹ La declaración errónea de precios significó 80% de flujos ilegales desde México en las décadas de 1990 y 2000.⁸⁰ La privatización y la desregulación no solo hicieron más fácil tomar parte en estas prácticas y enviar las ganancias al extranjero, sino que también disminuyeron las regulaciones y las protecciones en un mercado laboral de por sí desigual, y asimismo ocasionaron que trabajos del sector formal llegaran a parecerse más a los informales.⁸¹ Los negocios favorecieron la contratación de trabajadores temporales e informales y la subcontratación

⁷⁶ Kar (2012:33).

⁷⁷ Kar (2012:33).

⁷⁸ Kar (2012:19).

⁷⁹ Kar (2012:5).

⁸⁰ Kar (2012:5).

⁸¹ Centeno y Portes (2006:38-40).

por encima de los anteriores empleos protegidos, lo que desvaneció más la línea entre lo legal e ilegal, entre lo formal e informal.⁸²

En la investigación de Carolyn Nordstrom en puertos desde Ciudad del Cabo hasta Los Ángeles y Rotterdam, se ilustra el espejismo de las inspecciones fronterizas.⁸³ La autora sostiene que 95% de la carga pasa sin ser inspeccionada, pues la mayor amenaza sería la «paralización» del comercio mundial que puede ocasionar incluso la inspección del 5% restante.⁸⁴ Como fue explicado por un agente aduanal en Ciudad del Cabo a Nordstrom: «si permites que no se inspeccione 95 por ciento, ¿por qué no 96% o 97%? ¿Cuál es la mayor amenaza? ¿Eso o el embotellamiento?».⁸⁵ El agente aduanal David estaría de acuerdo con el informante de Nordstrom: «Es imposible inspeccionar todo. [En Veracruz], 100% pasa a través de rayos gamma y luego de eso revisamos 10%... Pero aquí, no. Aquí el volumen [de comercio] es casi nada. Porque no es un puerto fronterizo importante aquí». Umberto explicó la situación en términos de recursos, ya que no resulta costable agregar nuevos puestos aduanales: «Si cuesta un millón y [el puesto] solo recolecta \$300 000 cada mes, [parece] mejor permitir el contrabando. Es más barato para el gobierno».⁸⁶ Según las consideraciones de Umberto con respecto a que imponer más seguridad frenaría todo el comercio, y a que tanto las compañías formales como los residentes dependen del comercio informal y extralegal, cobraría sentido una imagen de frontera moderna sin comercio, aun cuando la realidad es clara. Aun así, un estudio del SAT en Guatemala y de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) estimó que el contrabando en la frontera sur cuesta 200 millones de pesos en evasión fiscal al año, un monto que alcanza 22% de la recolección total que la aduana hace en la región.⁸⁷ El estudio mostraba cómo la falta de

⁸² Centeno y Portes (2006:38).

⁸³ Nordstrom (2007).

⁸⁴ Nordstrom (2007:119).

⁸⁵ Nordstrom (2007:119).

⁸⁶ Véase Scott (2009), sobre los costos de los espacios de gobierno distantes del control estatal.

⁸⁷ *El Orbe* (2015).

infraestructura desincentiva la integración económica legal y el desarrollo en la frontera sur.⁸⁸

Las autoridades portuarias explicaron a Nordstrom que ellos usan evaluaciones digitalizadas para seleccionar ciertos embarques por riesgo. Aun así es difícil conciliar esto con el hecho de que los datos de Nordstrom, junto a aquellos ofrecidos por agentes en la frontera México-Guatemala, demostraron que compañías de buena reputación eran a menudo los mayores violadores y «que los artículos más comúnmente contrabandeados pasan por rutas ‘limpias’ de corporaciones».⁸⁹ Agentes de embarco le confirmaron a Nordstrom, como reconoce Umberto, que por lo menos 90% de «todos los productos embarcados son subdeclarados o no declarados», y no hay manera de verificarlo sin interrumpir el flujo entero de la economía global.⁹⁰

No solamente los comerciantes pequeños y negociantes fronterizos usaban rutas no monitoreadas. Regularmente vi camiones de compañías de comida y bebidas atravesar las rutas libres. A veces usaban sus propios camiones y conductores, pero también sabía que residentes de la frontera eran contratados por comisión para arreglar estos intercambios y hacer los fletes. Como explicó Ciro, los beneficios reales del contrabando fantasma no pertenecen a los comerciantes pequeños y campesinos, quienes se encuentran más usualmente en riesgo de ser interceptados, más bien contribuyen a una creciente elite regional, que va desde contrabandistas de migrantes y traficantes hasta dueños de negocios y políticos, quienes han incrementado su poder en asuntos regionales. Umberto mencionó que los políticos se beneficiaban de esta atmósfera debido a que hay menos problemas con la gente. El aparato de control fronterizo se beneficia de una visión de una cultura de la ilegalidad, lo cual justifica el aumento de financiamiento a las unidades para controlar la frontera, incluso cuando la realidad socava estos mandatos. En el contexto de ajuste estructural y recortes estatales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha donado 24 millones de dólares en equipo

⁸⁸ *El Orbe* (2015).

⁸⁹ Nordstrom (2007:195).

⁹⁰ Nordstrom (2007:120).

y entrenamiento y está dirigiendo por lo menos 75 millones de dólares más para ayudar a asegurar la frontera sur de México, bajo el pilar 3 de la Iniciativa Mérida.⁹¹ Ciro añadió: «La policía está involucrada y se beneficia. Antes había más vigilancia... Ahora lo que ha cambiado es que hay más dinero y el dinero llama».

Un insólito ejemplo reciente de vínculos entre la ilegalidad, los intereses corporativos transnacionales y la elite política y económica es la corrupción sindical que envolvió a la administración de Otto Pérez Molina de Guatemala. La Línea, una red de funcionarios políticos de alto nivel incluidos miembros de la administración presidencial, funcionarios aduanales del SAT e incluso su director, y otros funcionarios como abogados, importadores y un agente de inteligencia se coludieron para recortar impuestos a compañías extranjeras con interés de importar a Guatemala a cambio de millones de dólares en sobornos.⁹² No fue sorprendente que miembros de la elite estuvieran involucrados en tal corrupción; lo inesperado fue que no se salieran con la suya. Los esfuerzos por mejorar el sistema de justicia en Guatemala instituido por CICIG y las crecientes protestas y frustraciones de la sociedad civil llevaron a la renuncia y el arresto de Pérez Molina y de la vicepresidente Roxana Baldetti por corrupción en el otoño de 2015.

Neoliberalismo securitizado

Ya fuera que preguntara a agentes fiscales, políticos locales o residentes fronterizos qué porcentaje del comercio en la región era extralegal, todos estimaban que entre 90% y 100%. Si la mayoría del comercio en la región ocurre de forma extralegal, ¿por qué las políticas se enfocan en modernizar los puntos oficiales de entrada? De acuerdo con Ciro: «Hay vigilancia... pero la realidad es otra cosa». Uriel señaló que era más que una deficiencia de recursos. Sugirió cuestionar la imagen de seguridad:

⁹¹ Seelke y Finklea (2017:11).

⁹² Daugherty (2015).

Lo que más quiere el gobierno es mostrar una imagen de que está controlando las cosas, pero, por supuesto, en la práctica... si realmente lo ves... sabes que no es cierto. Los líderes nunca vienen a estos lugares. [Están interesados] más en la imagen.

El público puede querer creer en ilusiones de seguridad y proclamaciones políticas, pero Carolyn Nordstrom llama la atención a cómo «la seguridad se forja [por]... la gente... que constantemente navega la delgada línea entre balancear la seguridad con las necesidades del comercio». Los agentes en estos puertos son los que «lo entienden». Para ellos, esto no es una ilusión, sino la realidad mundana del trabajo al frente de la seguridad y el comercio internacional.⁹³

Detuve a Uriel para asegurarme de que no le importara que siguiera tomando notas. Mis prejuicios sobre la seguridad me hicieron sentirme insegura de que lo que me estaba relatando le pudiera causar problemas. Uriel descartó mis preocupaciones porque:

No es nada que no puedas ver por ti misma... mira por la ventana. Al gobierno le gustan las imágenes de control, pero realmente tenerlo implica costos que a menudo el gobierno no está dispuesto ni es capaz de gastar. Sólo le gusta la imagen. Sí, hay una presencia [de seguridad]... [pero] no ejerce [la fuerza] como debe, ya que no quieren conflictos con la gente. Podrían enviar más patrullas, como cuando el gobierno envió a la PEF este año, pero es lo mismo. Podrían enviar diez más y sería lo mismo. Solamente la imagen [contra] lo que ves que están haciendo.

Uriel sabe que las realidades de la seguridad son obvias para quien sea que abra los ojos.

Las exigencias de liberalización del mercado combinadas con la securitización parecen producir un misterio en las fronteras.⁹⁴ Aun así, la seguridad y el libre comercio no son opuestos, más bien este ayuda a asegurar que aquella proceda de manera conducente a los intereses de

⁹³ Nordstrom (2007:202).

⁹⁴ Andreas (2002:39).

los inversionistas, la extracción de recursos y el capital transnacional.⁹⁵ La criminalización del contrabando y el confundirlo con una definición amorfa de crimen organizado protege las prácticas económicas de elites transnacionales y corporativas, mientras que perpetúa y asegura la inequidad en términos de quién participa en el comercio y compra bienes.⁹⁶ Mientras tanto, los funcionarios toleran el comercio informal para mantener la estabilidad,⁹⁷ al tiempo que la informalidad también impregna el ambiente «legítimo» de negocios. En la práctica, las relaciones entre las actividades económicas extralegales e informales, el comercio formal y la seguridad son inestables y se desenvuelven a través de negociaciones contingentes entre personajes locales según cambian las dinámicas políticas y económicas.

¿Seguridad de quién?

Las discusiones sobre seguridad obligan a cuestionar los derechos de quienes están siendo protegidos y valorados a costa de la exclusión y criminalización de otros.⁹⁸ En los intersticios criminalizados, pero tolerados, de la seguridad, el comercio y el contrabando en la frontera México-Guatemala, los residentes fronterizos y los pequeños comerciantes encuentran espacios para ejercer sus actividades, aunque estas brechas también los sujetan a los caprichos de agentes estatales individuales que usan una lógica influenciada por el racismo para, de manera impredecible, permitir, ignorar o desmantelar el contrabando. Mientras tanto, el discurso de la seguridad fronteriza y la agenda de la guerra contra las drogas elevan los riesgos, al relacionar cada vez más el contrabando con la amenaza de otra serie de actividades ilegales que justifican la militarización de la vigilancia fronteriza y la criminalización de poblaciones locales. Las ganancias que llenan los bolsillos de oficiales y se filtran hacia

⁹⁵ Paley (2014); Goldstein (2010; 2012); Jusionyte (2015).

⁹⁶ Véase Thomas (2013).

⁹⁷ Cross (2011).

⁹⁸ Goldstein (2010; 2012).

el comercio formal, que a su vez usa estas brechas para flexibilizar las reglas y obtener ganancias, causan poca preocupación, y menos aún si representan potencialmente un mayor impacto político y económico (versus la afanosa preocupación legal frente al narcotráfico) en las economías regional y nacional y en la confianza en la ley.⁹⁹ Las prácticas extralegales de los residentes ofrecen opciones de sustento en medio de una más amplia informalización y evaporación del trabajo. Sin embargo, estas prácticas también contribuyen a un sistema económico que favorece los intereses transnacionales y de las elites sobre los medios de vida locales. Frecuentemente los residentes contrabandean bienes para negocios legítimos asumiendo los riesgos. El siguiente capítulo entra en detalle sobre los roles que los residentes fronterizos juegan en la intersección entre el comercio legal e ilegal y los efectos en sus comunidades y familias.

⁹⁹ Nordstrom (2007) y Naylor (2002:33-34) argumentan que es la prohibición la que fuerza la elevación de los precios en el mercado de las drogas y que el tamaño del mercado es muchas veces exagerado a partir de estimados politizados y sin fundamento (véase Andreas 2010). Naylor asegura que «la verdadera amenaza a la moralidad económica viene del intento de algunos tipos de negocios aparentemente legítimos de ver qué tanto pueden torcer las reglas antes de tener que pagar a los políticos para que sea reescrita» (2002:10).

6. Heredando la frontera

Por lo mismo [que es] uno fronterizo, la gente se hace comerciante. Conoce ambos lados. Vivimos en la frontera... Aquí aprendimos a negociar viviendo aquí y unos enseñaron a otros.

RESIDENTE FRONTERIZO MEXICANO

Tito nació en El Nance, México, en una familia pobre con pocas tierras para cultivar. Creció cruzando la frontera para visitar a su familia e intercambiar bienes. Ahora tiene dos casas: una vieja de bloque de cemento y la nueva de dos plantas con ventanas acrílicas, pilares, porches y pisos de baldosas, así como un baño interior con una rara ducha de agua caliente. Tito se ve a sí mismo primero como campesino y luego como hombre de negocios. Se enorgullece tanto de ayudar a los demás que muchas personas a ambos lados de la frontera lo llaman tío Tito. Su historia pone de relieve el desarrollo y los dilemas éticos relacionados con los «negocios» o el contrabando como forma de ganarse la vida en la frontera.

De joven, Tito trabajó duro para ir poco a poco haciéndose de tierras. Migraba por temporadas para trabajar en las fincas de café en el sur de Chiapas. Ahorró para comprar animales de carga, los cuales luego vendió para adquirir uno de los primeros carros que hubo en la frontera a mediados de la década de 1970 para transportar (o contrabandear) maíz a Guatemala. Se convirtió en el primer taxista local, al llevar pasajeros y mercancías a ciudades cercanas de ambos lados de la frontera.

Comenzó en el negocio vendiendo maíz mexicano a los guatemaltecos, ya que como agricultor conocía bien este producto. Poco a poco se familiarizó con otras mercancías y entró en empresas más rentables y diversas. Tanto el Estado mexicano como el guatemalteco consideran que sus negocios son contrabando ilegal, porque usan el camino no vigilado para vender mercancías a través de la frontera, en lugar de los cruces oficiales. Para Tito, y para muchos residentes fronterizos, sin embargo, tales prácticas constituyen negocios en una región donde, a pesar de las políticas de libre comercio, es difícil para los campesinos participar en el comercio transfronterizo.

Tito reconoce que sus negocios son oficialmente ilegales, pero cree que son legítimos. Los dirige de la manera en que hay que hacerlo, dadas las limitadas oportunidades económicas y los obstáculos burocráticos para participar legalmente en el comercio transfronterizo. Los sobornos son necesarios para trabajar y desempeñan una función similar a la de los procedimientos requeridos para manejar sus negocios legales (tiene una tienda de abarrotes en su casa), incluidos la adquisición de permisos, licencias y contactos sociales y políticos. De hecho, los sobornos pueden ser más predecibles y transparentes que los impuestos formales y la obtención de documentos oficiales.

Aunque no es necesariamente un cuento de alguien que pasa de pobre a rico, los residentes narran la historia de Tito como un ejemplo de éxito. De una crianza precaria, luchó por proporcionar una buena vida a su familia en una región donde una de las pocas alternativas es la migración indocumentada a los Estados Unidos. Su historia pone de relieve el modo en que los negocios se desarrollaron como una forma de vida y trabajo en la frontera. Según Javier, sobrino de Tito y estudiante universitario en el norte de México:

Tito trabajó y ahorró a través de años. Hizo muchos negocios poco a poco... Su familia lo hizo bien. Fueron ellos los que empezaron y siguen trabajando en los negocios del café y el azúcar. Tuvieron éxito porque eran los primeros, inteligentes, y conocían las oportunidades de negocio. Tito ganó dinero porque trabajó duro. Antes era pobre, también la gente aquí [era pobre], y ahora mejor.

Él recordaba el tiempo en que trabajó con Tito en sus campos cuando era pequeño y «poco a poco Tito empezó a ganar un poco en el negocio; maíz, creo... primero». Cuando la gente vio que el negocio del maíz era bueno, empezó a trabajar también. Me miró para asegurarse de que entendía: «El negocio es importante aquí. Es el modo de trabajo para la gente aquí. [La] fuente principal de trabajo». ¹

Los intermediarios transfronterizos, los contrabandistas y los residentes más tangencialmente involucrados en estas empresas luchan por ganarse la vida y justificar sus decisiones en una economía local en la que el contrabando es una faceta importante de la vida cotidiana. Las prácticas de trabajo de los contrabandistas desafían las ideas preconcebidas de lo que constituye un trabajo legítimo, ético y digno, ya que se refieren al contrabando como «negocio». ² Sin embargo, la economía del contrabando no necesariamente abre nuevos caminos económicos. En cambio, puede continuar y exacerbar las distinciones de clase y las políticas clientelistas existentes en la región. Los intermediarios fronterizos también ayudan a sostener la economía regional y a generar ganancias para los funcionarios y las empresas formales a través de sobornos y el contrabando de productos más baratos. De hecho, estos intermediarios pueden ser peones en patrones regionales de acumulación más amplios, en los que contrabandistas, negocios y funcionarios de mayor escala se benefician mientras que los residentes corren el riesgo de ser arrestados, asaltados y sufrir accidentes. Estigmatizar y criminalizar a los intermediarios fronterizos oculta las ganancias que generan para los negocios y funcionarios formales. También se suele olvidar cómo las políticas de libre comercio han excluido a los habitantes fronterizos de las vías comerciales legales. Debido a que las principales responsabilidades del intermediario contrabandista son organizar el transporte y sobornar a los funcionarios, las oportunidades que ofrece la residencia en la frontera pueden convertirse rápidamente en riesgos.

¹ Segmentos anteriores también aparecieron en Rebecca B. Galemba (2012c) «Taking Contraband Seriously: Practicing 'Legitimate Work' at the Mexico-Guatemala Border.» *The Anthropology of Work Review*, 33(1): 3-14.

² Véase también Basail (2016b:13).

Ética empresarial

La población local rara vez utiliza el término «contrabando» —en su mayoría prefieren llamarlo «negocio»— para caracterizar sus actividades económicas legítimas a las cuales los agentes e instituciones estatales etiquetan como «contrabando». El negocio se refiere a las prácticas de trabajo que rodean la venta transfronteriza de mercancías como maíz, café, azúcar y ropa, y que evitan la regulación oficial, la documentación y los impuestos.³ El negocio implica el comercio de productos que no se consideran ilícitos o peligrosos en sí mismos, sino que se convierten en ilegales solo porque se transportan a través del cruce sin control. Los negocios no solo se refieren al acto de contrabando, sino que también abarcan un conjunto más amplio de prácticas, personas e ideas. Entre los involucrados se encuentran empresas legales, familias, productores agrícolas, camioneros, cargadores, agentes estatales y actores criminales, quienes habitan un «espacio gris» que hace que las distinciones entre lo legal y lo ilegal y lo lícito e ilícito sean problemáticas.⁴

Utilizo los términos «negociantes» e «intermediarios» porque el contrabando es en gran medida una esfera masculina. Sin embargo, las mujeres desempeñan un papel fundamental, aunque menos visible, al utilizar estratégicamente las diferencias fronterizas. Las mujeres abastecen tiendas en Guatemala con productos mexicanos más baratos, y algunas venden alimentos, ropa y bebidas al otro lado de la frontera a cargadores y camioneros. Ellas ayudan a sus maridos y padres con la contabilidad financiera y las certificaciones. Una joven, a su regreso de los Estados Unidos comenzó a pasar gasolina de contrabando. Se trata de Karina, una excepción a la dominación masculina del sector de contrabando. Esta mujer guatemalteca colabora con comerciantes mexicanos para vender maíz y cacahuate mexicano a comerciantes guatemaltecos. También tiene un pequeño restaurante. Ella cree que «cada quien [sus clientes] y su galera [puesto para vender]. [La gente] no prefiere comprar a

³ Véase Galemba (2012c).

⁴ Véase Reeves (2013), basado en Yiftachel (2009).

hombres o mujeres. Solo depende de si el producto es bueno». Ella y su esposo se mudaron a la frontera desde el interior de Guatemala hace diez años, en busca de oportunidades de negocio. Explicó: «Creo que entré en el negocio porque es mi herencia; a todos nos gusta [el negocio]», porque sus padres eran originarios de la frontera y su madre era vendedora ambulante de alimentos.

Los residentes fronterizos defienden su derecho a hacer negocios, y para Javier, sobrino de Tito, este derecho es sacrosanto en una región donde quedan pocas formas de sustento. Me recordó que el negocio es lo que la gente tiene para trabajar. Como expresó una mujer: «Hay ventajas de vivir aquí en la frontera...que hay esta oportunidad [para trabajar en el negocio]». Los residentes separan el negocio del contrabando de productos cotidianos como maíz, azúcar y café de lo que definen como empresas ilícitas, incluido el contrabando de migrantes, drogas y armas. Establecen la distinción argumentando que tales bienes son necesarios para la supervivencia y que carecen de acceso a mecanismos legales para participar en el comercio transfronterizo. Los residentes reconocen que el tráfico ilícito de migrantes, narcóticos y armas se ha vuelto más peligroso debido no solo a la creciente vigilancia del Estado, sino también de las pandillas y los cárteles.

Las líneas, sin embargo, no siempre son claras. En una conversación los residentes podían indistintamente hacer referencia a una misma empresa como contrabando o como negocio cuando sus juicios éticos cambiaban de acuerdo con su propia posición social, los empresarios involucrados y sus prácticas laborales, la dirección del comercio y la fluctuación de la vigilancia del Estado. Las organizaciones sociales y económicas de las empresas son complejas, se entrelazan con empresas transnacionales legales e ilegales, y son dependientes de la ética, la confianza y las relaciones personales de la comunidad y el parentesco. Al igual que los camioneros del norte de México en el estudio de R. Alvarez Jr., camioneros, intermediarios y contrabandistas en la frontera también «utilizan recursos culturales de patrocinio, confianza, lazos familiares y compadrazgo» para manejar negocios caracterizados

por la competencia y el riesgo.⁵ Utilizan su historia de residencia en la frontera y sus vínculos familiares, sociales y económicos como recursos transfronterizos para sostener su derecho a actuar como intermediarios fronterizos. Sin embargo, a medida que se intensifica la vigilancia fronteriza y la presencia de redes delictivas transnacionales, y comienzan a manifestarse los celos locales, las afirmaciones de que llevan a cabo negocios honestos se vuelven cada vez más sospechosas. Frontera Comalapa no solo es un destino para el café y el azúcar, sino que también se ha convertido en un centro regional en el comercio de cocaína.⁶ Aunque algunos camioneros se refieren a sí mismos como fleteros o transportistas, en el panorama del narcotráfico, a los centroamericanos que mueven drogas para ese tipo de organizaciones también se les llama «transportistas».⁷ Estos «transportistas» son, según Steven Dudley, a menudo «ladrones o expertos en contrabando» que conocen rutas importantes, tienen conexiones con funcionarios y pueden poseer doble nacionalidad, pero es importante notar que ellos no son los que manejan los flujos.⁸ Aunque se esfuerzan por separar su negocio de los flujos más ilícitos, muchos residentes ahora ven con recelo el comercio destinado a Frontera Comalapa. En 2013, Frontera Comalapa fue escenario de una ola de asesinatos, y abundan los rumores de que los líderes de los cárteles la utilizan como nodo operativo.⁹ Las ciudades cercanas de Camojá, La Mesilla y La Democracia, en Guatemala, también son áreas operativas clave para las redes de narcotraficantes con sede en Huehuetenango que colaboran con el cártel de Sinaloa.¹⁰

⁵ Alvarez (2005:44). Camioneros, intermediarios y contrabandistas están cada vez más integrados en mercados transnacionales legales e ilegales, aunque permanecen enmarcados en sus comunidades pequeñas, colectivas y parentales.

⁶ Martín (2006).

⁷ Dudley (2010:69). También actúan como distribuidores locales.

⁸ Dudley (2010:69)

⁹ Isacson, Meyer y Smith (2015:31).

¹⁰ Estos grupos trabajan supuestamente con el cártel de Sinaloa; para mantener su poder territorial han asesinado a miembros de los Zetas que han buscado establecer influencia en la región desde 2008 (*Los Chapincitos* 2013).

A medida que más residentes se involucraron en la economía del contrabando en la década de 1990 e inicios de la de 2000, formaron asociaciones para administrar los precios y las reglas de participación. Destacaron que todas las personas que viven a lo largo de esta ruta fronteriza tienen derecho a trabajar en empresas que dependen de ella. Los negocios se distribuyen entre familiares y amigos cercanos, o se organizan como asociaciones rotatorias, como sucede con los comerciantes de maíz, de modo que los miembros se turnan para transportar la mercancía y obtener ingresos. Los contrabandistas locales justifican la economía del contrabando en términos de sus beneficios comunitarios.¹¹ Las acciones que redistribuyen ganancias ayudan a aumentar la legitimidad local para los contrabandistas. Sin embargo, algunos negocios, como el café y el azúcar, se han convertido en monopolios familiares debido a la mayor cantidad de capital y a las conexiones más estrechas con los funcionarios que se requieren para hacer negocios. Cuando las empresas se apartan de las normas redistributivas de la comunidad, levantan sospechas y celos.

Debido a que muchos residentes entraron en la economía del contrabando cuando ya no tenían tierras ni recursos suficientes para sostener la agricultura en un contexto de crisis agrícola, los locales ven la residencia fronteriza como su derecho histórico de subsistencia y recurso para la supervivencia, lo que ellos llaman «su herencia». Han intercambiado bienes a través de la frontera durante toda su vida, desde una bolsa de maíz hasta, ahora, un camión de diez toneladas de refrescos. Como dijo un residente: «[Mucha gente] aprendió a negociar desde su herencia... Ya que somos de la frontera, y la misma frontera nos ofrece esto [la oportunidad de negociar]». Tito recordó a su padre entregando maíz a sus amigos en Guatemala en su burro. En un mercado volátil y arriesgado, el conocimiento de los negocios no es la única habilidad requerida. También hay

¹¹ Alvarez (2005: 64) atribuye la organización corporativa de camioneros en el sureste mexicano a varios factores, incluyendo el deterioro de la economía, después de la década de 1980, que limitaba las opciones de empleo comercial además del hecho de que los camioneros usualmente maniobran entre las demandas de los negocios y la agricultura. Como Tito, aunque pasen la mayor parte de su tiempo haciendo negocios, los camioneros en el estudio de Alvarez continúan identificándose primariamente como agricultores (Alvarez, 2005: 64).

que cultivar la cautela, la paciencia y las relaciones con los agentes estatales, con otros residentes y con los productores, compradores y vendedores de ambos lados. Se debe estar familiarizado con las carreteras, las fluctuaciones monetarias, los diferentes productos y los patrones policiales a ambos lados de la frontera. Los negociantes pueden ganar grandes sumas, perder dinero en otros momentos o esperar meses con poco trabajo debido a la estacionalidad de gran parte de su comercio (por ejemplo, de café y de maíz). Los contrabandistas exitosos suelen llevar un teléfono celular mexicano y uno guatemalteco, porque saben dónde fluctúan las fronteras del servicio.

Los residentes fronterizos, a partir de sus historias de vida vadeando la frontera, utilizan su capital cultural para hacer negocios. La mayoría tiene parientes transfronterizos y comparte estrechos vínculos de esa índole a través de acontecimientos sociales y relaciones económicas. Tito jugaba fútbol en el lado guatemalteco cuando era niño y las mujeres guatemaltecas solían ir al lado mexicano a moler su maíz. El padre de Tito vendió bultos de maíz a amigos guatemaltecos y luego enseñó a sus hijos sobre los negocios. Roberto, el expresidente de la comunidad de El Girasol, Guatemala, se rio cuando le pregunté cómo conoció a sus socios en El Nance, México, «Casi crecimos juntos. Alrededor de 90% de El Nance es familia mía». Otras comunidades rurales pueden tener recursos tales como suelos ricos, pero para los residentes fronterizos, su herencia se basa en una historia de estrechas relaciones transfronterizas y conocimientos que les permiten realizar negocios.

Muchos negociantes afirman que su trabajo ofrece una alternativa a la migración hacia los Estados Unidos en una región en la que los flujos migratorios hacia el norte aumentaron en la década de 1990 tras las reformas agrícolas y el colapso de los precios internacionales del café. Sin embargo, la migración desempeña un papel integral en la promoción y el mantenimiento de los emprendimientos. Las ganancias o remesas de los migrantes pueden utilizarse para adquirir un camión, iniciar un negocio de contrabando mediante la compra de bienes y pagar una cuota de entrada a una asociación local de negociantes o camioneros para trabajar. Anteriormente, para iniciar un negocio así, los residentes recurrían

a la venta de tierras o ganado, o gestionaban préstamos con altas tasas de interés de los bancos locales o de otros residentes. Cuando visité Santa Rosa (México) en 2011 había un nuevo cibercafé, llamado LaGrange en recuerdo del pueblo de Georgia donde el dueño, Ernesto, pasó muchos años. Hizo énfasis en el recuento de las múltiples estrategias críticas que lo han conducido al éxito, incluido el contrabando de una variedad de productos, el transporte, su tienda y las ganancias obtenidas en los Estados Unidos. Aunque es difícil evaluar la veracidad, afirmó que durante el año previo ganó aproximadamente \$100 000 dólares de sus diversas empresas.¹² Las conexiones estadounidenses no solo proporcionaron el capital necesario para iniciar un negocio, sino que muchos negociantes y fleteros trajeron sus camionetas a la frontera directamente desde aquel país del norte. Otros conocieron a futuros socios comerciales en los Estados Unidos. Cuando los residentes fronterizos mexicanos comenzaron a emigrar en la década de 1990, siguieron a los guatemaltecos desde la región fronteriza a los mismos destinos en Florida, Alabama, Georgia y Carolina del Norte.

Sin embargo, las conexiones y los recursos de migración no garantizan el éxito. Muchos se ven excluidos de las asociaciones empresariales fronterizas a su regreso debido a la creciente competencia. Cuando visité la zona en 2011, Graciela, de 21 años, me dio una palmadita en el hombro en un partido de fútbol en El Nance después de oír que hablaba inglés. Quería practicar. Había vivido en Carolina del Norte durante diez años antes de regresar en 2008. Su padre perdió su trabajo en una fábrica durante la recesión económica. Los inmigrantes no autorizados no pueden adquirir licencias de conducir en Carolina del Norte y esto limitó su búsqueda de trabajo. Decidieron volver a casa. Quería continuar su educación en México, pero le resultó difícil revalidar sus estudios. Un pariente le prometió conseguirle un empleo en un hotel en Playa del

¹² No conocía a este individuo lo suficiente para convalidar su afirmación. No obstante, su posición ilustra las percepciones de grandeza y orgullo que usualmente rodean a la economía de contrabando en contraste con otras opciones de empleo. Aunque muchos negociantes simulan tener menos fortuna para desviar la atención y el escrutinio, otros se jactan de ella.

Carmen, pero después de tener a su hija ya no pudo seguir con esta opción. Ella dijo que las tiendas en Frontera Comalapa no ofrecían muchos trabajos. Lo que había que hacer aquí, sin embargo, «era negocio». Su padre compró un camión de tres toneladas para trabajar en el comercio del maíz. Aunque tenía dinero y un camión, carecía de experiencia en los negocios y perdió dinero después de comprar maíz a un precio alto en México cuando los precios bajaron en Guatemala. Graciela decidió entrar en el negocio del contrabando de gasolina para ayudar a su familia. Era la única mujer y se encontró con cierta resistencia, pero era uno de los pocos trabajos viables que tenía a su alcance y que también era compatible con llevar a su bebé con ella.

Algunos contrabandistas se especializan en los productos y cadenas comerciales que conocen mejor, como café, azúcar o maíz. Los contrabandistas y los camioneros más exitosos son expertos en comercializar múltiples productos para compensar las fluctuaciones de precios y la estacionalidad. Los camiones y los negocios no son rentables si transportan mercancías en una sola dirección. Los camiones mexicanos de maíz suelen regresar con bloques de cemento guatemaltecos, y cuando terminan las cosechas de maíz y café, aquellos con más recursos y conexiones transportan otras mercancías. Un contrabandista mexicano hizo notar:

A algunos negociantes les va mejor que a otros... Realmente solo se gana dinero si se diversifica... el maíz, la mandarina, las cebollas, los refrescos, el café. [Muchos productos] son de temporada. [La gente] que tiene una visión más amplia [tiene éxito]. Mejor si tienes camiones... Empiezas a conocer los mercados, las personas, haces conexiones y también vendes otras cosas.

Intermediarios contrabandistas

Los residentes fronterizos, por medio de su control de la ruta fronteriza, desarrollaron un nicho como intermediarios. La experiencia en el comercio transfronterizo de maíz facilitó otros negocios de contrabando y transporte. Los comerciantes de maíz, a menudo llamados *coyotes*, defienden sus roles:

Decidimos que si la gente quiere traer maíz desde lejos [para vender a Guatemala], necesitan vender a un intermediario de aquí para traerlo a Guatemala. Nos dimos cuenta de que [el trabajo] estaba siendo quitado por aquellos de lejos... Por el maíz, tienen que dar trabajo a los de aquí. Ahora todos saben que tiene que vender a nosotros. No pueden pasar [por aquí] directamente... Cuando [los de afuera] pasaron directo, los que aquí quedaron sin trabajo... Es importante dar trabajo a la gente de aquí.

El término coyote se refiere generalmente a los abusos de los contrabandistas de migrantes o intermediarios comerciantes que se aprovechan de la falta de acceso de los pequeños productores a los mercados y al transporte, ya que compran sus mercancías a bajo precio y a granel para transportarlas a almacenes, empresas y otros compradores.¹³ Algunos intermediarios fronterizos rechazan el término coyote y prefieren que se les llame «negociantes», «camioneros» o «fleteros», pero otros adoptan el término sin estigmas. Los productores son ambivalentes. Reconocen que los intermediarios proporcionan un acceso crítico a los mercados, pero también creen que explotan la falta de acceso al mercado de los productores y obtienen beneficios de sus productos.

Muchos responsables de formular políticas y muchos académicos asumen que los intermediarios necesariamente explotan la vulnerabilidad de otros. Algunos residentes y productores argumentan que los contrabandistas de café explotan a los productores, deprimen los precios al productor, monopolizan el mercado y ganan grandes sumas de dinero. Esto puede ser cierto, pero también oculta cómo los intermediarios fronterizos son peones de las grandes empresas del sector formal, así como de los funcionarios que se benefician de la economía subterránea. Muchos contrabandistas de menor escala luchan por mantener a sus familias en un contexto de poco empleo y ganancias impredecibles.

El caso del café ilustra el complejo papel que desempeñan los contrabandistas de este producto en la economía legal y extralegal transnacional en el contexto de la crisis económica. La desregulación del mercado internacional del café y el desmantelamiento del Instituto Mexicano

¹³ Véase Watanabe (1992); Fischer y Benson (2006); Goldín (2011); Renard (2011).

del Café (Inmecafé) en 1989 condujeron al colapso de los precios del café y a una crisis que fue particularmente aguda en Chiapas. Según Marie-Christine Renard, «La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Cafetaleros estimó que los productores perdieron 65% de sus ingresos en los primeros 15 años de la crisis».¹⁴ Estos factores, combinados con un acceso reducido al crédito y a los apoyos del Estado, llevaron a unas pocas empresas transnacionales a dominar la economía cafetalera.¹⁵ Al ser fuertes industrias nacionales, tanto en México como en Guatemala, las industrias del café y el azúcar tienen altos aranceles o prohibiciones de venta transfronteriza. El café se encuentra entre las mayores exportaciones de México y Guatemala, y 6% de la población económicamente activa de México y 31% de la población guatemalteca depende de ese producto.¹⁶ El café y la caña de azúcar están excluidos de los acuerdos de libre comercio entre México y Guatemala, y todavía llevan aranceles.¹⁷ Debido a estas restricciones, las personas que contrabandean café y azúcar necesitan más capital y conexiones para comprarlos y sobornar a los funcionarios.

Los locales consideran que los negocios de contrabando de café y azúcar son más conflictivos y arriesgados que el maíz, que es un producto de menor valor. El residente fronterizo Rigo, que ha trabajado para migración en todo México, explicó:

La diferencia [entre el café y el maíz] es el valor. Vale más el café y el impuesto [evitado] es mayor. ¿Pero el café te hace daño? No. ¿Las tortillas? No. Sí, exactamente, los dos son más o menos iguales. La única diferencia es el precio... Sí, la gente dirá que el maíz está permitido porque vale menos, y el café no porque necesitas pagar un impuesto más alto... Lo que tiene más valor es más ilícito, [así es] como piensa la gente.

¹⁴ Renard (2011:153); Celis (2005), citado en Renard (2011).

¹⁵ Véase Navarro (2004); Renard (2011).

¹⁶ Navarro (2004).

¹⁷ SAT (2015).

Los productos de mayor valor estructuran un acercamiento diferente al contrabando: uno que requiere más capital, más conexiones con agentes del Estado y más discreción —y por lo tanto, menor apertura a un mayor número de participantes—. La legalidad surge como una escala ética móvil, más que como una evaluación en blanco y negro, en un contexto en el que las grandes empresas tienen un acceso privilegiado al comercio transfronterizo, mientras que los habitantes más pobres de la región se enfrentan a restricciones insuperables y directrices opacas. Luis Hernández Navarro (2004) critica además la ética de un sistema cafetalero que margina a la población rural y deprime los precios que reciben por sus cosechas en beneficio de comerciantes y tostadores transnacionales:

Irónicamente, el café es uno de los productos en los que los agricultores mexicanos y centroamericanos deberían ser rentables según la teoría de las ventajas comparativas. Pero en lugar de una bonanza, el cultivo del café en las condiciones actuales ha condenado a los agricultores a la pobreza, el exilio, la muerte o la caridad. Mientras tanto, los comerciantes transnacionales y los fondos de inversión internacionales acumulan enormes fortunas.¹⁸

El contrabando de café, que muchos residentes consideran un negocio relativamente lucrativo, plantea riesgos ya que simultáneamente se cruza con la economía regional formal. Tito y sus hijos, junto con algunas otras familias, controlan la mayor parte del negocio a lo largo de esta ruta. El café es contrabandeadado en ambas direcciones, dependiendo del año, los precios, los diferenciales de divisas y la demanda de variedades específicas. Los almacenes para los que contrabandea el café lo distribuyen por todo México e incluso lo exportan a los Estados Unidos y Europa.

El empleo que proporciona el negocio de café de Tito abarca parte de su familia extendida y su comunidad. Sin Tito, los camioneros y cargadores a quienes da trabajo estarían desempleados (foto 13). Paga una comisión a su suegra por usar su tierra como uno de los depósitos para

¹⁸ Navarro (2004).

el intercambio de carga de los camiones, y así le proporciona su única fuente de ingresos. Su cuñada vende comida y bebidas a cargadores y camioneros. A través de su amistad con el presidente municipal, Tito recibe certificados que documentan que el café que transporta de Guatemala a México se produce en comunidades mexicanas. Su hija Nanci rellena los formularios en la tienda de su casa. Tito distribuye los certificados a otros camioneros, quienes trabajan con él o bien deben obtener su permiso para trabajar a fin de recibir los documentos y la tolerancia oficial. Algunas personas pueden verlo como un monopolio del negocio, pero la mayoría lo miran como un patrón benévolo que cumple con obligaciones que unen a los residentes más ricos y los más pobres. Es difícil y costoso establecer relaciones con clientes y agentes estatales. Tito ayuda a otros prestando su nombre y sobrellevando los riesgos. Los certificados confirman que el café es mexicano, proporcionan acceso al mercado y protegen a los camioneros de los agentes estatales. Ellos están con don Tito.

Otro residente de la frontera me recordó que, más que un contrabandista o un negociante, quienes hacen lo que hace Tito son «comisionistas», lo que significa que normalmente no compran ni venden café. En cambio, trabajan por comisión para almacenes, especuladores individuales e incluso almacenes regionales de corporaciones como AMSA (Agroindustrias Unidas de México), que es la firma de comercialización más fuerte de México.¹⁹ AMSA pertenece a ECOM Industrial Agroindustrial Corp., «una compañía global de mercancías y gestión sostenible de la cadena de suministro»,²⁰ que financia a intermediarios coyotes que compran café de pequeños productores a precios bajos.²¹ Algunos coyotes, como Tito, extienden estas prácticas a través de la frontera. Ayudan a las empresas a complementar sus inventarios para la exportación y a adquirir variedades diferentes o más baratas del otro lado de la frontera, al tiempo que evaden impuestos, documentación e inspección. ECOM es responsable de casi 70% de las exportaciones de café de México, y AMSA

¹⁹ Renard (2011:154).

²⁰ Véase descripción en <www.ecomtrading.com/>.

²¹ Renard (2011).



Foto 13. Cargador de café esperando que haya trabajo. (Fuente: Foto de la autora).

sola contribuye con la mitad de las exportaciones de café de México.²² La búsqueda del café al precio más bajo se complementa, y se imita, con estrategias extralegales en las que los coyotes bajan los precios de los productores rurales y contribuyen a las ganancias corporativas. Las corporaciones cafetaleras, a través de sus relaciones con los contrabandistas e intermediarios fronterizos, también tejen entre las líneas legales e ilegales en la frontera, pero pueden fácilmente distanciarse de la rendición de cuentas o del conocimiento de estas prácticas.²³

Como comisionista, Tito se dedica a la venta de café a través de la frontera y organiza el transporte y la colusión oficial. Algunos «comisionistas» se convierten en negociantes cuando adquieren más recursos, pero la mayoría siguen siendo comisionistas porque sus riesgos y

²² Renard (2011), basándose en Pérez et al. (2002:50).

²³ No sé hasta qué grado las compañías estaban al tanto de estas prácticas, pero los residentes fronterizos insinuaron que sabían, las facilitaban directamente o al menos se beneficiaban al hacerse de la vista gorda.

vulnerabilidades a las fluctuaciones de precios y demanda son menores. Puede parecer que los comisionistas como Tito controlan los flujos fronterizos locales, pero su trabajo está íntimamente relacionado con compañías y funcionarios más grandes que obtienen beneficios más sustanciales y enfrentan pocos riesgos.

Los intermediarios fronterizos están atados a los acuerdos prevalentes del poder estatal y comercial, incluso cuando tratan de subvertirlos a través del contrabando. Además de los sobornos, Tito y otros comisionistas de café, como Fernando, ayudan a financiar a los políticos locales y a comprar los votos de sus vecinos. A cambio, los funcionarios facilitan el contrabando, ayudan a falsificar permisos y reembolsan a los contrabandistas el doble después de las elecciones. Las comunidades pueden beneficiarse cuando los residentes más ricos animan a la municipalidad a ofrecer proyectos. Sin embargo, en otros casos, a cambio de hacerse de la vista gorda ante el contrabando, algunos funcionarios ignoran las necesidades de la comunidad. El municipio de Frontera Comalapa, México, ha sido en gran medida un bastión del PRI conocido por su conservadurismo y acusaciones de corrupción oficial. En marzo de 2016, Jorge Antonio Aguilar Lucas, presidente municipal del PRI, fue destituido y arrestado por su presunta implicación en el asesinato del concejal y excandidato presidencial municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)²⁴ Jesús Alaín Anzueto Roblero.²⁵ Otros empleados municipales coludidos fueron arrestados mientras intentaban usar esta ruta fronteriza para escapar a Guatemala. Aguilar Lucas fue declarado inocente y restablecido en septiembre de 2016. La colusión entre residentes y funcionarios desanima el deseo de cambio en este contexto. Un candidato de la oposición que vino a El Nance para hacer campaña invitó a las mujeres a una reunión sobre cómo resistir la corrupción. Cuando la

²⁴ Previamente fue presidente municipal de 1991 a 1995, pero como miembro del PRI. El PVEM ha intentado ganar las elecciones en los municipios usando a antiguos representantes del PRI (José Luis Escalona, comunicación personal, septiembre 2, 2016).

²⁵ *Cuarto Poder* (2016). Al ser detenido, muchos habitantes se movilizaron para exigir su liberación (*Gaceta Mexicana* 2016).

esposa de Fernando vio a su hermana que volvía de esa reunión, preguntó en broma: «¿Estás traicionando a Fernando?».

Hombres como Fernando y Tito pueden proporcionar capital social, político (en términos de votos y apoyo local) y económico a los funcionarios del Estado, pero también ocupan la posición más vulnerable en estas relaciones clientelares. Hace unos diez años, Fernando fue arrestado por contrabando, y cada año su negocio depende de la voluntad de cooperar de los funcionarios. Su esposa admitía que estos le permitieron trabajar, pero que siempre hay más gente a la que tienen que pagar. Según otro residente, «En los últimos meses [las autoridades] han cobrado más, *fregando* más al café. Las autoridades piensan que sus ganancias [de los negociantes] son muchas y que el comercio lo hace rico de la noche a la mañana... Y casi utilidad no hay, porque están pagando tanta mordida». Muchos contrabandistas e intermediarios reinvierten las ganancias directamente en el negocio. Algunos apenas ganan lo suficiente para cubrir la mensualidad del préstamo bancario y los sobornos. Muchos pierden dinero. Debido a la exclusión de los campesinos fronterizos de los lugares de comercio formal, como se especifica en el Capítulo 5, algunos suponen que podría ser menos costoso realizar negocios, si pudieran, legalmente.

En esta interpretación, algunos contrabandistas locales simplemente se las arreglan (y también se aprovechan) en un sistema comercial más amplio que los margina junto con los productores a los que supuestamente explotan. Los contrabandistas ayudan a mantener los medios de subsistencia de los funcionarios mal pagados mediante sobornos, al tiempo que contribuyen a la expansión del aparato policial para combatir el contrabando. Otros señalan que los residentes tienen trabajo porque las empresas quieren evitar los impuestos y las prohibiciones. Otro residente comentó sobre las posiciones de los comisionistas como Tito:

Si las compañías que compran y venden [el café] pagaran impuestos, no necesitarían a [los comisionistas como Tito]. Él es comisionista, no maneja el dinero para comprar café ya que es solo el comisionista, [pero] saben que lo vende... y vienen a [buscarlo] para negociar con él... Preguntaría cuánto

vas a pagar de comisión, de flete, cadena, todos hacen sus cuentas para ver si pueden hacer comercio. Algunos negocian con bodegas, empresas, otros con acopiadores particulares... poquiteros... bodegas particulares de los ricos que acopian y ya tiene con el gobierno permisos para exportar al extranjero.

Explicó que las exportaciones deben llenar una cuota, y para cubrir-la se utiliza el café que se obtiene ilegalmente como complemento. Tito afirma su importante papel:

Si [compradores y vendedores en] Guatemala o México quieren café, no pueden intercambiar directamente ya que la plaza de trabajo [intercambio] es aquí [porque el camino no está vigilado]. No quieren pasar por la frontera oficial. Nos necesitan en el medio. La gente viene a buscar aquí porque es frontera y la carretera no está vigilada.

Le pregunté por qué no pueden pasar por la frontera oficial en Ciudad Cuauhtémoc. Me respondió: «No quieren. Allí muy caro. Vienen conmigo si quieren [café y] yo busco».

Otro residente resumió los beneficios y la ausencia de riesgos para las empresas cafetaleras, así como los procesos económicos más amplios en los que están inmersos los intermediarios fronterizos: «[A las empresas] no les importa de dónde proviene el café. Ya saben... Solo les importa que [el café] sea de buena calidad. No están averiguando de dónde son [las bolsas]. No importa... Simplemente lo marcarán como de Comalapa». De esta manera, los almacenes y las empresas se benefician de los contrabandistas que eluden regulaciones e impuestos para complementar las cuotas. De manera similar, Carolyn Nordstrom resalta cómo se entrelazan los aspectos legales y extralegales a medida que las compañías se benefician de las prácticas extralegales mientras mantienen una negación probable sobre cómo se obtienen los contratos y los bienes.²⁶ Como le dijo un director financiero de una compañía multinacional a Carolyn Nordstrom:

²⁶ Nordstrom (2007).

Supongo que sabemos cómo funciona. Pero no. Porque todo esto funciona al no hacer preguntas. No le preguntamos al gerente del sitio cómo hemos puesto en marcha un sistema. Lo hace, o no lo hace. Pedimos los informes formales. Sabemos que no hay que preguntar, ah, los detalles.²⁷

Tales estrategias extralegales no amenazan a la economía formal, sino que encajan con la ética prevaleciente de la acumulación y las prácticas empresariales en la economía legal.²⁸ Según Marie-Christine Renard, la sobreproducción, que condujo a la disminución de los precios para los agricultores y al aumento de los beneficios para tostadores, promotores y exportadores, se debe a estrategias corporativas globales específicas por las cuales:

Las empresas... ahorran materias primas al sustituir el café de una región por el de otra sin alterar el sabor del producto final. Por ejemplo, Procter & Gamble sustituyó las 500 000 bolsas de café suave lavado de México por café robusta de Vietnam.²⁹

La elaboración por parte de Tito de certificados que etiquetan al café guatemalteco como mexicano y las tácticas de los almacenes para complementar sus inventarios con café de contrabando más barato del otro lado de la frontera imitan y complementan esta estrategia corporativa legítima.

Ser camionero como forma de vida

Virgilio, hermano de Tito, me dijo: «Ahora mi machete es mi camioneta». A la luz de la falta de opciones para el cultivo de maíz, su camioneta es esencial para ganarse la vida contrabandeando maíz, frijol y cacahuate. Los residentes creen que los negocios les permiten emigrar a los Estados Unidos con menos frecuencia que a otros en el campo. Muchos

²⁷ Nordstrom (2007:111).

²⁸ Véase las éticas de la ilegalidad en Roitman (2006).

²⁹ Renard (2011:153).

residentes capitalizaron las remesas o ganancias de los migrantes en los Estados Unidos para comprar camiones y camionetas, pero creen que, cuando hay negocios en la frontera, «podemos quedarnos aquí con nuestras familias y hay trabajo». Ser dueño de un camión permite que alguien pueda entrar en la economía del contrabando para transportar mercancías. Convertirse en camionero requiere menos capital y conexiones oficiales que volverse un intermediario o en un negociante. Los residentes consideran la propiedad de camiones con orgullo y como una vía para la movilidad económica.

R. Alvarez Jr. observa el aura de orgullo masculino que rodea al transporte por carretera en México:

En todo México, los camioneros participan de la imagen y la reputación del héroe folclórico macho de la carretera... El camionero parece comandar la carretera, desdeñando el peligro por el que son notorias las carreteras mexicanas, y saboreando la aventura, la espontaneidad, las mujeres y el tequila, sacrificándose al mismo tiempo por el bien de la familia que mantiene y apoya.³⁰

En la frontera, el Día de la Virgen de Guadalupe, los camioneros encabezan el desfile. Adornan sus vehículos con globos rojos, blancos y verdes (los colores de la bandera mexicana) y pancartas guadalupanas. Algunos conductores colocan altavoces en sus camiones para poner música y rezar. Los camioneros orgullosamente rotulan en sus camiones los nombres de sus hijos o lemas como «El coyote solitario» o «Todo por no estudiar». El transporte por carretera es una especialidad de los residentes fronterizos. El estacionamiento de los camioneros establecido en 2011 hace cumplir el reclamo de la frontera como herencia de los camioneros, o su medio de vida históricamente dado.

Cuando regresé en 2011, noté que el depósito de carga cerca de donde la carretera fronteriza no vigilada se une con la ruta mexicana se había modificado notoriamente; ya no estaba ocupado por unos pocos camiones y remolques que intercambiaban carga. Lo convirtieron en un estacionamiento para casi 100 camiones de diez toneladas, todos ellos

³⁰ Alvarez (2005:39).

propiedad de residentes del lado mexicano. Dos mujeres habían montado una tienda para vender bocadillos y bebidas, y los camioneros habían construido un patio techado, con mesas y dos retretes y duchas. En una estancia previa, en 2008, pude ver cómo algunos camioneros estacionaban sus unidades en la entrada para aprovechar más rápidamente las oportunidades de negocio que se les presentaban, pero la magnitud del nuevo estacionamiento fue sorprendente.

La reciente represión de México contra la inseguridad fronteriza y los cárteles de la droga, que empezaba a sentirse cuando realicé mi trabajo sobre el terreno en 2006 y 2007, contrastaba fuertemente con lo que seguían experimentando los residentes de la frontera. Mientras medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, responsables de formular políticas, académicos y defensores de los derechos humanos documentaban los crecientes enfrentamientos entre el ejército, la policía y los cárteles de la droga mexicanos, así como los abusos y las deportaciones de migrantes centroamericanos en pueblos y municipalidades cercanas, este cruce parecía más abierto que nunca, al menos para los residentes.

El estacionamiento de los camioneros mostraba físicamente la monopolización local del comercio fronterizo. En 2008, los camioneros se estaban organizando en una asociación para controlar esta ruta y defenderse de la competencia de una asociación de camioneros en Comitán.³¹ Los transportistas fronterizos percibieron esta competencia como una amenaza a sus medios de vida. Un camionero explicó: «Nosotros somos los intermediarios y negociantes [que trabajamos] aquí... Los camioneros se turnan para [descargar] cualquier carga que caiga aquí... Los camioneros tienen que descargar con nosotros [y entregarnos la carga para transportarla a través de la frontera]». Ahora organizados en una asociación de camioneros, afirman visiblemente su derecho

³¹ En el sureste mexicano, Álvarez argumenta que formar una asociación o sindicato les permite a los camioneros adquirir licencias para operar, o monopolizar, rutas particulares. Los sindicatos de camioneros de Chiapas están comúnmente insertados en las políticas clientelares del PRI porque dependen de funcionarios estatales para los permisos (Álvarez 2005:65, 69).

como intermediarios en el comercio transfronterizo. Ya no permiten a los camioneros de larga distancia transportar mercancías directamente a Guatemala. Deben transferir la carga a los camioneros locales y a sus cargadores.

Si los residentes son dueños de varios camiones, como es el caso de Samuel y Gerardo, hijos de Tito, se convierten en *fleteros*. Los fleteros son personas que poseen camiones, organizan transportes y alquilan sus vehículos a negociantes y contrabandistas. Ser un fletero es un negocio cada vez más lucrativo y a menudo menos riesgoso económicamente que ser un negociante. Sin embargo, las evaluaciones de riesgo están cambiando a medida que los residentes suponen que los narcotraficantes buscan camioneros locales para transportar mercancías. Samuel y Gerardo tienen cada uno dos camiones, y pueden conducirlos ellos mismos, alquilarlos o emplear a otros residentes como choferes para entregar la mercancía. Se distinguen como fleteros, en lugar de negociantes, con el argumento de que, a pesar de las apariencias, no tienen suficiente dinero para ser negociantes de pleno derecho. Los residentes más pobres ven poca diferencia entre los dos. Samuel gana entre 80 y 100 dólares por cada transporte de café entre la frontera y Frontera Comalapa. Cuando emplea a un conductor, le paga de 10 a 20 dólares. Los fleteros con varios camiones ganan una comisión de parte de los contrabandistas y organizan el transporte sin correr los riesgos asociados con el transporte, incluidos el de ser interceptados por parte de los funcionarios o sufrir asaltos o accidentes, porque muchos camiones son viejos y se encuentran en mal estado. Ellos ganan comisiones independientemente de las fluctuaciones en los precios de los productos básicos a los que se enfrentan los negociantes. Los choferes suelen ser sobrinos y primos más jóvenes y residentes más pobres. La esposa de Samuel está nerviosa cuando su marido conduce, porque hace unos años su camión volcó cerca de una montaña. En otra ocasión, el sobrino de Tito, de diecinueve años, se fue en un transporte desde su comunidad a Tapachula, que está a unas cuatro horas de viaje. La madre del joven esperó ansiosamente junto al teléfono durante horas con su hermana, la esposa de Tito, hasta que ella confirmó su llegada. Los negociantes afirman que el dueño del producto

y del camión son responsables de los riesgos y de sobornar a los funcionarios, pero no están en primera línea.³² Los choferes me aseguraron que, si se encontraban con funcionarios, podrían llamar al negociante y al dueño del camión para que los ayudaran. Sin embargo, un ejemplo ilustró la jerarquía de la vulnerabilidad.

En un año, además de las visitas de seguimiento, escuché muy pocos casos de violencia en una zona propicia a los flujos ilícitos, a pesar de que Frontera Comalapa (México) y las cercanas Camojá y La Democracia (Guatemala) se han vuelto más peligrosas en los últimos años. Muchos contrabandistas y camioneros tienen armas para protegerse, y a veces los oí tarde en la noche salir de fiestas de borrachos mientras los hombres disparaban sus armas al cielo nocturno. En general, sin embargo, la violencia es mala para los negocios. Justo antes de la Navidad de 2006, mis vecinos en Santa Rosa estaban discutiendo algunos de los aspectos negativos de vivir en la frontera. Me hablaron de un vecino, Darinel, un chofer que trabajaba para Pedro, un residente fronterizo que posee cuatro camiones de diez toneladas y una gran tienda de abarrotes y que es uno de los mayores comerciantes de maíz. Darinel recibió un disparo en el ojo mientras conducía uno de los camiones de Pedro que llevaba maíz a Guatemala. Unos días después visité a la familia de Darinel.

Darinel perdió el ojo, pero se preparaba para volver al transporte. Su familia no estaba preocupada. Creyeron que esto era algo raro, algo que nunca imaginaron que pudiera ocurrir. No tenían miedo porque, como decía su madre: «No le debemos nada a nadie». Pensaron que lo habían confundido con otra persona. La mayoría de los residentes creen que tal violencia ocurre cuando hay celos o una deuda pendiente. Algunos pensaron que fue confundido con el dueño del camión, Pedro. La familia no podía permitirse un médico, pero estaban agradecidos con Pedro, su patrón, por hacerse cargo de los gastos. Al igual que otros residentes, la familia de Darinel cree que el dueño del camión o del producto es responsable de cualquier accidente o problema. La esposa de Darinel razonaba:

³² Esta suposición es paralela a las normas en el comercio legal donde los comerciantes son quienes «tienen la mayor responsabilidad en todas las tareas asociadas con la distribución y el mercadeo» incluido el transporte (Alvarez 2005:46).

«Normalmente hay más peligro para ellos [negociantes] y no para los choferes, porque ellos son los que tienen dinero, así que normalmente son los objetivos». Sin embargo, Darinel sufrió los costos físicos.

Vulnerabilidad y explotación

Las narrativas de la explotación también son demasiado simplistas para describir las relaciones entre los residentes más exitosos y sus contrapartes más pobres. La mayoría de los residentes comparten parentesco, clientela y relaciones emocionales estrechas con los contrabandistas locales. La familia de Darinel continuó respetando y trabajando para Pedro, porque este cumplió con sus obligaciones como buen patrón. Darinel tiene trabajo, y Pedro mantuvo su rentable empresa y el respeto. El caso de Paco, por otro lado, ilustra cómo la economía del contrabando agudiza y normaliza las diferencias de clase, aunque la desigualdad, incluso entre parientes, no impide que haya relaciones afectuosas y económicamente vitales. Paco tiene muchos primos y tíos que son negociantes. Tito es uno de sus tíos. Pero el padre de Paco es un campesino sin tierra que trabaja como peón de campo y cargador de café para Tito.

Empresarios como Tito ayudan a los miembros más pobres de la familia y proporcionan empleo. La mayoría de los beneficios se quedan dentro de la familia nuclear (a medida que se asignan otros recursos familiares). Un residente mexicano relató: «Los negociantes dan empleo... a los choferes, cargadores... Pero la mayoría del dinero es para ellos mismos». Los hijos de los negociantes están preparados para tener más éxito no solo en la economía extralegal, sino también en el sector formal. Tito ayudó a sus hijos a comprar camiones, les proporcionó clientes iniciales y les dio dinero para construir sus casas, lo que les permitió convertirse en negociantes y camioneros de pleno derecho. Ninguno de ellos se sintió económicamente obligado a emigrar a los Estados Unidos. Tito compró una casa para sus otros hijos en la capital de Tuxtla Gutiérrez, para que pudieran estudiar en una universidad privada. Asiste a sus sobrinos y hermanos de diferentes maneras que reflejan las relaciones

existentes de patrocinio entre los miembros más poderosos de la comunidad con los vecinos y los parientes más pobres. Las jerarquías de la comunidad, de parentesco y entre patrón-cliente, se extienden al sector del contrabando. Así como los negociantes emplean a su familia extendida como peones de campo y cuidadores de ganado, también los contratan como cargadores y conductores de camiones. Tienen el empleo necesario que de otro modo les faltaría, pero del tipo que ofrece menos oportunidades de ascenso. Los cargadores ganan el equivalente a cinco dólares por camión, que es lo mismo que el salario de un día completo de trabajo de campo. Ellos pueden cargar varios camiones cada día, pero también hay días y estaciones en los que hay poco o ningún comercio. Como se mencionó en el Capítulo 3, el trabajo puede ser gravoso. Una chica me dijo que su padre se lastimó el hombro cargando maíz. No pudo cargar ni trabajar en su milpa durante más de un mes. El ser camionero o cargador permite que los residentes se las arreglen, pero los ingresos no son suficientes para comprar un camión o convertirse en un negociante.

Paco no cuestionó estas desigualdades y defendió el trabajo duro y la generosidad de sus familiares, pero su experiencia al crecer en la frontera agudizó sus críticas sobre la economía del contrabando. Decidió obtener un título en contabilidad en lugar de conducir un camión o cargar mercancías como muchos de sus compañeros. Vio la ilusión de las ganancias que dejaban los negocios. Y aunque muchos pregonan las historias de éxito, recordó los riesgos y a aquellos que fracasaban (especialmente sin padres negociantes que los ayudaran). Paco mostró ambivalencia sobre la economía del contrabando en un contexto de empleo limitado. Su experiencia demuestra cómo los individuos negocian la economía legal e ilegal y sus beneficios y riesgos.

Paco reprobó la escuela dos veces, pero perseveró para asistir a la escuela vocacional de contabilidad en Comitán. Espera encontrar un empleo cerca, aunque hay pocos, para poder vivir en el campo. Según Paco:

Siempre me ha gustado aquí y [quiero] estar con mi familia. Tal vez podría trabajar en el campo de vez en cuando o quizás aprenderé a conducir un camión. Me gustaría conseguir una carrera si puedo conseguir algo cerca de aquí. Cuando tienes [una carrera], es más fácil obtener un préstamo del gobierno... para construir mi propia casa aquí.

Paco pensó que era preferible y más estable seguir una carrera, pero, incluso para tener la opción de entrar en el negocio, me dijo: «Necesitas dinero y camiones».

Paco no podía permitirse asistir a las mejores escuelas secundarias y universidades de la capital, como sus primos y amigos cuyos padres eran negociantes. La casa de la madre de Paco estaba tan inundada por las lluvias de verano, que buscaron refugio bajo el techo de un pariente migrante. Una tarde de agosto nos juntamos todos en un rincón del patio inundado para hablar. Su madre, que una vez estuvo temerosa de que Paco intentara emigrar a los Estados Unidos, estaba orgullosa y, al igual que Paco, creía que habría trabajo si él perseveraba. Al mismo tiempo, él y su madre reconocieron la realidad de que, para muchos residentes fronterizos, el ser camioneros complementaba los salarios de los profesionales mal pagados. Las relaciones patrón-cliente con vecinos y parientes más ricos podrían ayudar. Paco reflexionó:

Algunas personas piensan que el negocio es más fácil y rápido y [puedes] ganar más dinero, pero en realidad no es tan confiable. A veces se gana mucho, pero a veces se pierde... y también, tienes que pagar a las autoridades... Es mejor tener una carrera, entonces adquieres habilidades y preparación para un trabajo... y puedes eventualmente conseguir un buen empleo. Pero mucha gente no siempre piensa así y quiere lo que parece más rápido o más fácil. Pero también quisiera aprender a conducir un camión para tener esa posibilidad. Aquí al menos hay otra opción.

La economía del contrabando entreteje las vidas de los residentes que participan en actividades extralegales de menor escala, intermedios fronterizos, migrantes, contrabandistas de mayor escala y sus familias y vecinos. Tales interconexiones vuelven problemática cualquier

simple distinción entre ilegal/legal, explotación/generosidad, y ético/no ético, aunque también ayudan a explicar por qué los residentes apoyan sin cuestionar y al mismo tiempo expresan dudas con respecto a la economía del contrabando.

La economía (extra)legal

Cierto día particularmente caluroso iba caminando cuesta arriba por el lado guatemalteco de la frontera, y vi a una mujer que me saludaba y me hacía señas para que viniera a tomar una limonada.³³ Este fue mi primer encuentro con Francisca, una mujer locuaz con un gran corazón. Además de sus ocho hijos biológicos, adoptó a dos hijos de mujeres migrantes que iban de Centroamérica a los Estados Unidos: ella, como partera, atendió el nacimiento de ambos bebés, y cuando las madres se negaron a llevarlos en su viaje hacia el norte, Francisca decidió adoptarlos, y los trató como si fueran propios. En las siguientes semanas me crucé varias veces con Francisca, que vendía bebidas en los partidos de fútbol, y luego otra vez en la casa de mi vecino en Santa Rosa, en el lado mexicano. Ahí fue donde me enteré de que Francisca vende ropa usada. Sin embargo, su negocio es técnicamente extralegal, porque toma ventaja de los diferenciales de precio y moneda al comprar la ropa en la frontera en La Mesilla, Guatemala, y pasarla por el cruce sin control para revender en el lado mexicano.

Las oposiciones entre lo legal/ilegal o entre una economía socialmente arraigada versus una economía de mercado son demasiado restrictivas para explicar cómo el comercio fronterizo está enraizado en las relaciones sociales, de parentesco y comunitarias, así como de qué forma se entrecruzan fluidamente con los emprendimientos económicos formales. Tito y su familia contrabandean café de Guatemala a México, y luego las compañías exportan legalmente este café a Europa y a los Estados Unidos como café mexicano. Sin la frontera internacional, la mayoría de

³³ Algunas partes de esta sección aparecen en Galemba (2012c).

estos negocios de contrabando fronterizo serían legales. Francisca vende ropa de puerta en puerta como muchas mujeres en todo el mundo, excepto que trabajar en la frontera internacional hace que su trabajo sea técnicamente ilegal, y a la vez más rentable. Una actitud más permisiva hacia el contrabando como resultado de las movilizaciones locales a finales de la década de 1990 le dio a Francisca lo que ella llama «la libertad de trabajar». Su caso ilustra además cómo las empresas transfronterizas se enlazan entre ellas y con las redes sociales y familiares transfronterizas. Su situación detalla cómo, en medio de la intensificación de las desigualdades y la presencia del narcotráfico en la región, algunos residentes están empezando a sospechar que los negociantes más ricos están coludidos con actores más ilícitos.

Francisca es una negociante astuta. Elige trabajar en pesos mexicanos o en quetzales guatemaltecos, dependiendo de las fluctuaciones de la moneda y del poder adquisitivo. Hacer negocios era difícil antes de finales de la década de 1990, cuando las patrullas civiles guatemaltecas y los militares se quedaban estacionados en la frontera y varios agentes estatales vigilaban el lado mexicano. Francisca relató que durante los últimos diez o quince años ha sido más libre para trabajar. Los recientes acuerdos informales entre los residentes fronterizos y los agentes estatales regionales protegen la libre circulación de los residentes fronterizos, de ambos lados, dentro de la ruta fronteriza hasta la carretera federal mexicana por un lado y la carretera guatemalteca por el otro. Anteriormente, Francisca necesitaba una tarjeta para cruzar la frontera —que solo podía obtenerse en el cruce oficial de una zona limitada— o corría el riesgo de ser detenida. Debido a estos cambios, la experiencia fronteriza de Francisca pasó de los mojones blancos que marcaban la frontera geopolítica a la intersección de la carretera fronteriza con la carretera federal mexicana. Para ambos gobiernos nacionales, el negocio de Francisca está fuera de la ley porque cruza una frontera sin control para comprar y vender bienes; evita la inspección, los impuestos y la documentación. Pero ella se ve a sí misma como una vendedora que atiende a sus vecinos. Sin embargo, antes de que los funcionarios fueran removidos, ella se mostró renuente a involucrarse en un comercio considerado «más ilegal».

Cuando vende ropa en México, Francisca compra sus bienes de consumo doméstico con los pesos ganados para evitar ser engañada en el intercambio. Su esposo tiene experiencia en construcción, pero también trabaja como cargador de maíz. Debido a que él gana solo unos cinco dólares por cada camión y carecen de tierra cultivable, los ingresos de ella son vitales. A través del trabajo de construcción de su esposo y el acarreo de carga, las remesas de sus dos hijos mayores desde los Estados Unidos, sus ventas de ropa y una pequeña tienda en su casa, la familia de Francisca lucha para llegar al fin de mes. Compra productos para su tienda en ambos lados de la frontera, dependiendo de las diferencias de divisas, precios y disponibilidad de los productos. Ganarse la vida en la frontera implica amalgamar múltiples estrategias de trabajo que cruzan las líneas legales e ilegales.

Uno de los hijos de Francisca trabaja para su primo, un contrabandista de azúcar. Carga azúcar de Guatemala en camiones mexicanos para su venta en México. En el negocio del azúcar, se dice, uno puede ganar más. Los negociantes azucareros la compran en almacenes en Camojá, La Democracia y Huehuetenango; la transportan a sus casas en sus camiones y la vuelven a empaquetar en bolsas de las compañías azucareras mexicanas.³⁴ Algunos, como Emanuel, un exitoso negociante azucarero guatemalteco, operan principalmente con una compañía guatemalteca; él trabaja con una empresa en Huehuetenango y con varios compradores en México. Fuera de su depósito, que era su antigua y pequeña casa de cemento, Emanuel emplea a adolescentes, incluidos sus sobrinos, para que operen una máquina para cerrar costales de Zucarmex rellenos de azúcar guatemalteca; Zucarmex es una multinacional mexicana y uno de los conglomerados azucareros más grandes de Norteamérica (foto 14).³⁵ Los socios comerciales de la frontera mexicana —su principal socio es Gerardo, el hijo de Tito— recogen el azúcar con sus camiones y la entregan en tiendas y almacenes mexicanos que

³⁴ No obstante, cuando los precios y la demanda cambian, el comercio puede revertir su dirección.

³⁵ Zucarmex fue fundado en México en 1992, luego de la privatización de la industria del azúcar, y tiene cinco ingenios en México. Véase Guzmán (2004).

la venden en todo el país e incluso la envían al extranjero. A lo largo de los años, debido a los lazos familiares, sociales y de negocios, los padres de Tito y Emanuel se hicieron compadres. Ahora sus hijos son socios en los negocios. Emanuel y Gerardo aprendieron negocios de sus padres. Como recuerda el padre de Emanuel: «Vino conmigo a traer maíz por la línea [cuando era niño]... Hizo sus clientes a través de los negocios y a través de mí». Emanuel gestiona las ventas con tiendas mexicanas, y Gerardo está a cargo del flete, o transporte, y arregla los sobornos con funcionarios mexicanos. Aunque Gerardo es más bien un fletero y Emanuel el negociante que arregla las compras y las ventas, ambos construyeron casas de dos pisos y compraron vehículos todo terreno para sus hijos. Emanuel enfrenta riesgos cuando los precios fluctúan, pero intercambia carga con seguridad en su casa. Por el contrario, Gerardo no se ocupa de la volatilidad de los precios, pero es responsable de los riesgos del transporte al trasladar azúcar guatemalteca a México.

Francisca no está segura de cómo estos hombres se han hecho relativamente ricos recientemente: «Antes eran pobres como nosotros... Casi igual ganan de otros negocios. [El azúcar] no puede ser tanto... Saber [no sé] cómo recientemente, han construido grandes casas... Se dice de azúcar. Nadie sabe. Puro azúcar no puede subir así». Se lamentaba de que su primo no la ayudara, y algunos vecinos empezaban a sospechar de la verdadera fuente de sus ingresos. Sin embargo, los negociantes azucareros atribuyen su riqueza reciente a las grandes diferencias de precios entre el azúcar mexicana y guatemalteca y a los impuestos aduaneros evitados. Emanuel insistió en que no fue la riqueza repentina lo que le permitió construir una casa grande. Afirmó: «Cuando yo era niño, [todos vivíamos en] puras casas de paja». Explicó que le costaba mucho avanzar, trabajando duro y ahorrando. Tardó más de tres años para construir su casa nueva. Habló de los riesgos cuando los precios y las demandas fluctuaban. Su esposa insistió en que él invirtiera el dinero sabiamente y gran parte se usó para construir su casa. Muchos negociantes y fleteros minimizan su riqueza para mantener nociones de respetabilidad, argumentando que sus ingresos



Foto 14. Empacando azúcar guatemalteco en costales mexicanos (fuente: foto de la autora).

son estacionales. En 2008, Emanuel explicó sus ganancias de una manera que reflejaba cómo la dinámica del comercio legal afectaba la economía del contrabando:

El negocio del azúcar está bien ahora. El precio subió en México porque no hay mucha azúcar porque la envían a los Estados Unidos. Pero Guatemala tiene muchos ingenios azucareros, y el precio no es tan alto; alrededor de 50 dólares la bolsa en México y 35 dólares en Guatemala ahora.

Debido a que Emanuel, al igual que Tito, ayudó a su familia y a residentes más pobres, escapó de las sospechas impuestas a algunos negociantes, como las que recaen sobre el primo de Francisca, que desafiaron las normas redistributivas de la comunidad. Emanuel mantuvo a la familia de su hermana después de la muerte de su marido.

Promesas ilusorias

La mayoría de los residentes fronterizos creen que el contrabando los beneficia en términos de oportunidades de empleo y de los impuestos que las comunidades recaudan en las cadenas. Sin embargo, muchos comenzaron a dudar de los efectos positivos a medida que se hacía cada vez más difícil establecer negocios legítimos que no se vieran afectados por la competencia de los ilegales. Por ejemplo, la comunidad de Nueva Vida intentó abrir una cooperativa comunitaria. La tienda fracasó; los residentes argumentaron que no podían competir con las tiendas que complementaban sus inventarios con productos de contrabando más baratos provenientes de México. La mayoría de los contrabandistas e intermediarios, como Tito y Emanuel, trabajan en el contrabando para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Incluso los relativamente exitosos suelen tener dificultades. Para la mayoría, esa no era la ocupación que deseaban, ni lo que querían para sus hijos. Tito estaba orgulloso de haber enviado a cuatro de sus seis hijos a la universidad y que dos se convirtieron en maestros; sin embargo, ambos luchan por encontrar empleo, y Samuel, formado como secretario en una escuela vocacional, abandonó la profesión para dedicarse a los negocios más lucrativos del café y el transporte por carretera. Como secretario tenía que desplazarse cada día a un municipio cercano o pagar alquiler para vivir allí. Se dio cuenta de que podía quedarse en casa y ganar más dinero siguiendo a su padre: 150 dólares al mes en su trabajo anterior frente a 500 dólares al mes con los camiones. Emanuel envió a su hijo a la universidad en la Ciudad de Guatemala para estudiar negocios, y esperaba estudiar en los Estados Unidos. Francisca se rio cuando le pregunté sobre los planes del hijo de Emanuel de trabajar en una empresa. Muchos padres esperaban que su trabajo como negociantes e intermediarios pudiera proporcionar un camino para que sus hijos obtuvieran un título y entraran en el sector formal que durante tanto tiempo los había esquivado. Francisca me habló con toda naturalidad sobre la falta de oportunidades en el sector formal: «Por supuesto que regresará y trabajará con su padre porque él tiene mucho [negocio]. Porque [su hijo] estudia negocios, ayudará a que

su negocio funcione mejor». La maestra guatemalteca Fani, a quien conocimos en el Capítulo 2, relató la ilusoria promesa de movilidad:

Wilmer [un expresidente de la comunidad] trabajó duro como comisionista para enviar su hijo a estudiar. Se hizo maestro y entonces y luego [lo dejó] y se convirtió en un cargador. Él se dio cuenta que podía ganar más dinero. Muchos estudian y luego se dan cuenta de que pueden ganar más como cargadores.

A medida que aumentan los beneficios y se presentan más oportunidades de negocio a larga distancia en la frontera es menos probable que los negociantes se atengan a las normas redistributivas y, en cambio, creen monopolios familiares. El cambio en los últimos años de pequeñas casas de cemento a negociantes que construyen casas con piscinas, baños interiores, paredes altas circundantes, pisos de baldosas, dos plantas, e incluso algunas con unidades de aire acondicionado hace que otros sospechen de lo que perciben como ganancias repentinas. Cuando regresé en 2011, un negociante había instalado acceso a internet de banda ancha en su casa. La antigua casa de cemento de dos habitaciones de un comerciante de azúcar se encuentra en marcado contraste con su casa de dos pisos con columnas, donde está contemplando la posibilidad de instalar aire acondicionado. Utiliza la vieja casa como bodega para guardar costales de azúcar. Un residente opinó que no es casualidad que el tráfico de drogas haya aumentado en los mismos tres o cuatro años en que se construyeron estas casas:

Sólo con el azúcar no da así... Yo dudo que estas casas grandes solo sean [financiadas] de café y azúcar... Quizás podrían estar involucrado en transportar otras cosas... [Después de todo], los negocios que van hacia México siguen la misma ruta de la droga hacia norte... es el camino... Tal vez a veces se mezclan.³⁶

Los residentes prefieren no preguntar de dónde viene esta riqueza. Un vecino de Emanuel reitera: «No pienso que puede ganar tanto con

³⁶ Galemba (2012c).

[azúcar]. Tal vez porque también transporta abarrotes. No sé. Quizás es dinero lavado... Pero la gente ayuda porque es lo que da trabajo aquí, vivimos de eso, da vida el contrabando». Otro residente también tenía sus dudas: «¿Saber [no sé] cómo son sus trabajos? Según dice [que es] azúcar. [Pero] mi esposo trabajaba en eso [la industria azucarera] hace muchos años, y sí, parece que puede ganar más, pero es arriesgado, y él perdió mucho cuando el peso cayó. Entonces decidió solo trabajar en maíz». En condiciones de creciente desigualdad y secretismo, y a medida que Frontera Comalapa y Huehuetenango se convierten en lugares centrales de transbordo para el tráfico de drogas,³⁷ la terminología local comienza a cambiar de negocio a contrabando. Shaylih Muehlmann documenta cómo esconder drogas en el comercio legítimo de camiones es un método bien conocido de contrabando en la frontera norte, ya que el TLCAN aumentó el tráfico de camiones a través de la frontera.³⁸ Ella detalla el cálculo del riesgo de un camionero que voluntariamente transportaba drogas debajo de sus remolques mientras llevaba mercancías como vegetales en la parte superior.³⁹ Debido a que el transporte por carretera estaba tan entrelazado con el tráfico de drogas, se sintió más seguro sabiendo lo que estaba contrabandeando y cobrando por ello que arriesgándose a la incertidumbre de ser una «mula ciega», lo que significa que los traficantes esconden drogas en un camión sin el conocimiento del conductor.⁴⁰ En ese momento yo no sabía si los residentes de la frontera lo hacían voluntariamente o corrían el riesgo de ser «mulos ciegos», pero los rumores indicaban que esto podría estar ocurriendo.

Una lucha tensa

Residentes fronterizos como Tito, que una vez trabajaron cosechando maíz y café, en lugar de ser relegados a una vida de desesperación o migración, parecen impugnar el orden económico que excluye a los

³⁷ Dudley (2010).

³⁸ Muehlmann (2014:12).

³⁹ Muehlmann (2014:12).

⁴⁰ Muehlmann (2014:13, 166).

campesinos y a los pobres al plantear el contrabando como una empresa económica legítima. En el contexto de la liberalización económica, la corporativización de la agricultura y la industria, la crisis del campo y las actividades de los contrabandistas fronterizos en pequeña escala nos llevan a cuestionar las denominaciones de trabajo ético y legítimo. Redefinen el contrabando de bienes básicos como negocio y modo de vida, mientras que cuestionan el papel del Estado para definir las actividades legítimas e ilegítimas basadas en fronteras nacionales arbitrariamente impuestas y vigiladas.

Otros académicos argumentan que los comerciantes informales y extralegales pueden encarnar un tipo de resistencia popular a las exclusiones y humillaciones de la economía formal.⁴¹ Gilberto Rosas, en su trabajo con jóvenes en la frontera México-Estados Unidos, argumenta que las conductas violentas de los jóvenes constituyen un acto político de «rechazo delincuente» de las condiciones del neoliberalismo.⁴² Sin embargo, Kathleen Millar, en su trabajo con recicladores, conocidos como *catadores*, en el vertedero Jardim Gramacho en Río de Janeiro, cuestiona las evaluaciones del trabajo informal como una forma reaccionaria de resistencia o como una mera estrategia de supervivencia.⁴³ Destaca las tensiones de los catadores que optan por trabajar en el vertedero como una alternativa a las indignidades de las opciones de trabajo asalariado, ya que reconocen que trabajar en el vertedero es también «puro sufrimiento».⁴⁴ Ella argumenta que sus decisiones no constituyen necesariamente una forma de resistencia, o una «postura de oposición»; en cambio, plantea que las estrategias de los catadores son una forma de «autonomía relacional».⁴⁵ Trabajar en el basurero permite a los recicladores responder a las inseguridades cotidianas de los pobres, así como llevar a cabo otros «proyectos sociales y de vida», que constituyen una forma de liberación, si no de resistencia, a las condiciones de trabajo

⁴¹ MacGaffey y Bazenguissa-Ganga (2000); Ribeiro (2006); Bourgois (1995).

⁴² Rosas (2012:119).

⁴³ Millar (2014:49).

⁴⁴ Millar (2014:39).

⁴⁵ Millar (2014:47, 49).

neoliberal a disposición de los pobres.⁴⁶ En un contexto neoliberal en el que la desregulación y el desmantelamiento del trabajo protegido han llevado al sector formal a asemejarse al sector informal en términos de trabajo inseguro y mal remunerado, el sector informal ya no es un «colchón» para tiempos de dificultades económicas, sino que puede ser una alternativa preferible.⁴⁷

En la frontera, los contrabandistas, que en gran medida se ven a sí mismos como comerciantes, camioneros y negociantes, a veces articulan sus acciones como una forma de resistencia a las exclusiones de la economía formal y las políticas comerciales. Sin embargo, a pesar de su aumento en los dos últimos decenios, el contrabando mantiene una fuerte continuidad con las actividades económicas de las que los residentes fronterizos han dependido para complementar la subsistencia durante generaciones. Al igual que los catadores del estudio de Millar, las condiciones de trabajo más flexibles, así como la integración de este trabajo en sus comunidades, permiten que los contrabandistas se dediquen al negocio al tiempo que cumplen con sus obligaciones familiares y comunitarias. Los contrabandistas pueden participar en otros trabajos o dedicarse a su milpa cuando el negocio está bajo, permanecer en casa con sus familias e incorporar a sus parientes y amigos en los negocios. Los negociantes expresan orgullo por su trabajo, pero también lo ven con cierto grado de ansiedad y ambivalencia.

Ser un contrabandista no constituye necesariamente una forma de política o un rechazo del sistema económico dominante. Tampoco hay que descartar a los contrabandistas como criminales. En cambio, el contrabando es una forma para que los residentes se apropien de una parte de la economía predominante para ellos y sus familias en medio del riesgo y la incertidumbre.⁴⁸ Los empresarios fronterizos pueden cuestionar las estructuras del comercio internacional que los excluyen justificando su propia participación por vías extralegales. Sin embargo, sus acciones no tienden a desestabilizar el negocio tal como es, ni amplifican

⁴⁶ Millar (2014:435-36).

⁴⁷ Centeno y Portes (2006:40); Itzigsohn (2000).

⁴⁸ Véase Mathews y Vega (2012); Roitman (2006).

el espacio para abordar los problemas subyacentes de exclusión socioeconómica que condicionan sus limitadas opciones. Los riesgos de decomiso y arresto siempre están presentes, incluso cuando los contrabandistas tienen buenas relaciones con los funcionarios. Los negociantes saben que sus actividades no necesariamente socavan la economía formal, ya que a menudo contribuyen a los arreglos prevalecientes de acumulación de capital y poder estatal en la región.⁴⁹ A diferencia de los analistas que argumentan que las actividades extralegales subvierten al Estado y a las instituciones formales,⁵⁰ las actividades extralegales también pueden ser cruciales para el Estado y la economía formal regional, incluso cuando socavan la confianza de la gente en ellos.⁵¹

Tomar en serio el contrabando

Los negociantes fronterizos encarnan posiciones ambivalentes entre la economía formal, la economía extralegal y sus comunidades rurales.⁵² Al pasar contrabando de café a los almacenes corporativos, los residentes contribuyen simultáneamente al empobrecimiento de los productores rurales por bajar aún más sus precios. Algunos intermediarios y camioneros ciertamente explotan a otros, pero también proporcionan oportunidades para aquellos con poco acceso al empleo o al mercado. Los miembros de la comunidad dependen de negociantes como Tito y Emanuel para obtener préstamos con condiciones de pago accesibles y apoyo económico. Al mismo tiempo, la economía del contrabando ofrece escasa movilidad económica. Los residentes con acceso previo a la tierra, remesas de migrantes, conexiones políticas y ganado están mejor posicionados para entrar y tener éxito en la economía del contrabando. Los contrabandistas, como elite local, a menudo vinculan aún más a sus comunidades en relaciones de patrocinio con políticos corruptos que

⁴⁹ Véase Roitman (2006).

⁵⁰ Véase Naím (2005); Arriola (2009).

⁵¹ Véase también Nordstrom (2007); Heyman y Smart (1999); Abraham y Van Schendel (2005).

⁵² Título citado en Galemba (2012c).

ven poco deseo de cambio. Los residentes expresan incertidumbre al ver que la economía del contrabando beneficia a unos más que a otros. Sin embargo, la mayoría de las personas todavía creen que se benefician y mantienen relaciones de parentesco, sociales y económicas cercanas con estos residentes más ricos. Los negociantes son miembros respetados de la comunidad siempre y cuando cumplan con las normas redistributivas locales y las obligaciones de la comunidad y de los parientes.

Tomar en serio el contrabando, o entender las prácticas laborales de los contrabandistas desde sus puntos de vista y dentro de su contexto particular, puede ilustrar cómo la política del neoliberalismo, el libre comercio y la seguridad se unen para criminalizar y excluir a los pobres, ya que las políticas neoliberales también frustran la capacidad del Estado de proporcionar una vigilancia sustantiva y reformas institucionales, así como empleo significativo y seguro.⁵³ Tomar en serio el contrabando implica no solo contextualizar la actividad extralegal, sino también sintonizar con sus efectos en el cambio de subjetividades individuales y relaciones personales. Aun cuando los negociantes exhiben orgullo por su trabajo y expresan esta bravuconería machista, estos mismos sentimientos producen ansiedad, incertidumbre, y a veces miedo, una variante tensa y de doble filo de la lucha por subsistir.

Los intermediarios fronterizos no suelen ser los ganadores, sino que sus prácticas terminan por contribuir a las formas existentes de acumulación de capital, despojo rural e inseguridad en la región. Satanizar a los intermediarios puede cegarnos en cuanto a quién actúa, o incluso tira de los hilos, en ambos lados. En la frontera, las designaciones de legalidad e ilegalidad comúnmente sirven como un noble discurso, mientras que el desarrollo de configuraciones de poder y ganancias puede beneficiarse de que se desdibujen.

Recientemente, los residentes han facilitado directa e indirectamente la creciente penetración de las empresas ilícitas mediante la colusión ya sea directamente con los traficantes de drogas para transportar sus bienes o indirectamente haciéndose de la vista gorda y cerrando ojos y oídos preocupados por su propia seguridad. Los residentes rara vez

⁵³ Centeno y Portes (2006).

hablaban directamente sobre el tráfico de drogas, que se relegaba al ámbito de los susurros, chistes y rumores. Surgieron sospechas alrededor de una casa grande con una pista de carreras de caballos y múltiples autos, residentes que asistieron a carreras de caballos y que organizaron peleas de gallos, y otros que parecían haber construido nuevas casas demasiado rápido y sin haber emigrado nunca a los Estados Unidos. Los residentes ocasionalmente usaban el humor para acusar a un amigo de ser un narcotraficante. Ellos captaron la influencia del narcotráfico; como me dijo un residente guatemalteco: «Los narcos pasan por aquí, pero... no nos metemos, no se dice nada, tampoco denunciamos... no preguntamos... Por el miedo no puedes hacer nada... Aquí en Guatemala si denuncias esto ante una autoridad, probablemente ya están vendidos con los que pasan drogas y no quieres que te maten». Un residente de la frontera mexicana agregó: «Si [los narcos] pasan, no los molestamos. No hay para qué averiguar. No revisamos y ellos no nos molestan». Sin embargo, como señala Shaylih Muehlmann en la frontera norte de México, en algunas zonas dominadas por el narcotráfico es más arriesgado abstenerse que participar.⁵⁴ Su posición los deja con pocas opciones.

Intermediarios fronterizos, contrabandistas, camioneros y residentes comunes pueden beneficiarse de este lucrativo cruce, que describen como su derecho de herencia basado en su residencia. Pero también soportan los riesgos, mientras que los actores más grandes, legales (por ejemplo, empresas, funcionarios del Estado) e ilegales (como los traficantes de drogas), obtienen ganancias sin trabas y sin mancha. Es a través de rumores, humor y susurros que los residentes dan sentido a sus ansiedades y ambivalencias acerca de la economía fronteriza en general, lo que puede traer más desigualdad e incertidumbre, pero también acceso a nuevos productos y oportunidades en una región que ha sido descuidada por mucho tiempo.⁵⁵ Al seguir un conflicto por el negocio local de contrabando de gasolina, el Capítulo 7 revela estas dinámicas de poder transnacionales más amplias en las que los residentes están ahora insertos.

⁵⁴ Muehlmann (2014:166).

⁵⁵ Véase Malkin (2001).

7. Descubrimiento de petróleo

A las cinco de la tarde de un día de principios de septiembre de 2007, mientras el calor comenzaba a ceder y el cielo amenazaba con tormenta, Alonso juntó a 40 hombres alrededor de la mesa que habían instalado en el prado adyacente a la cadena de la comunidad de Santa Rosa, donde los residentes cobran impuestos a los comerciantes de paso. Alonso designó cocinero a Félix, quien había trabajado en un restaurante en Georgia (Estados Unidos) y comenzó a preparar café en una gran olla sobre el fuego. El grupo acababa de entrar en el negocio del contrabando de gasolina y usaba la cadena como punto de espera para una carga de camiones guatemaltecos, para socializar y planear estrategias grupales. Cada miembro tomaba un turno para transportar los tambos vacíos a la estación mexicana de Pemex, a unos tres kilómetros por el camino, y llevar la gasolina de vuelta a los guatemaltecos, quienes esperaban en la cadena para distribuirla a proveedores a lo largo de Huehuetenango, Guatemala.

Alonso nunca habría imaginado que negociaría con gasolina. Muchas personas en Santa Rosa lo admiran como un profesor de primaria con educación universitaria y lo consideran exitoso. Sin embargo, al percatarse de la corrupción en el sistema educativo y los sueldos exigüos, rápidamente notó las disparidades económicas y las ironías sobre lo que el Estado considera trabajo legal e ilegal. Ganaba el equivalente de 700 dólares por mes como maestro, pero aprendió que podía ganar unos 1600 dólares al mes en el negocio de la gasolina sin alejarse más que unos pocos kilómetros de casa.

En 2007, un conflicto relacionado con el contrabando de gasolina estalló entre dos grupos de residentes fronterizos contrabandistas y camioneros en competencia. La mayoría de los residentes de la frontera consideran que todos los que viven a lo largo de este camino fronterizo tiene derecho a compartir el trabajo y las ganancias de los negocios de contrabando que dependen de la ruta sin monitoreo. Este conflicto representó una ruptura en los acuerdos localmente aceptados, ya que reveló el balance entre valorar los beneficios comunitarios y las exigencias de ganancia y competencia dentro de una economía limitada. El conflicto comenzó como una disputa local entre fleteros de gasolina que escaló a un conflicto interno en la comunidad. Entonces atrajo una atención regional sin precedentes y reveló los múltiples intereses involucrados en la controversial y lucrativa actividad de la región, donde el contrabando provee beneficios invisibles al crecimiento comercial, las figuras de autoridad se han fragmentado y México y Guatemala han militarizado la seguridad. Esta situación en escalada en relación con el contrabando de gasolina culminó en una intervención militar en 2008.

Este conflicto ilustra las dinámicas en evolución de la gobernanza en la frontera, las cuales son cada vez más complicadas debido a que la seguridad se ha militarizado en forma creciente y los cárteles de drogas, pandillas y grupos criminales ganan influencia regional. Arias y Goldstein utilizan el término «pluralismo violento» para describir la coexistencia de democracia y violencia en Latinoamérica.¹ Argumentan que la violencia es parte integral del mantenimiento de las instituciones del Estado y de la autoridad de la ley, así como de aquellos que intentan socavarla, trabajar en paralelo o desafiarla.² En la frontera, la violencia, los discursos centrados en derechos y la racionalidad para generar leyes se encuentran pluralizadas y son apropiadas por múltiples actores, incluidos oficiales del Estado, residentes fronterizos, contrabandistas y pandillas criminales, para justificar sus modos de

¹ Arias y Goldstein (2010:4).

² Arias y Goldstein (2010:4).

control en formas que incrementan la inseguridad regional.³ Los residentes creen que personifican la ley en esta ruta y, en algunos aspectos, han obstruido la capacidad del Estado para controlar el comercio a través de sus fronteras. Sin embargo, en cuanto la disputa por la gasolina atrajo una mayor atención a nivel regional, quedó claro que las autoridades alternativas de la frontera están involucradas en una simbiosis compleja con el Estado y están cada vez más inmersas en un panorama incierto y cambiante.

Volviendo a Alonso y su grupo, este le pidió a Felipe que encontrara una bandera mexicana para poner en la cadena y sugirió: «quizás llamaremos [a nuestro grupo] La Independencia». Asociaba el cercano día de la Independencia mexicana con la lucha de su grupo por asegurar una posición en el negocio de contrabando de gasolina, el cual, en su opinión, se encontraba monopolizado por hombres de El Nance. Para los miembros de La Independencia, el monopolio viola la ética local que dicta que «todos [los que vivimos aquí] tenemos el derecho a trabajar aquí». Las comunidades fronterizas usualmente no necesitan levantar sus cadenas para bloquear el camino a comerciantes y oficiales que se nieguen a cooperar, porque la mayoría de los negociantes obedecen las reglas de la comunidad. Sin embargo, durante la primera semana de septiembre de 2007, Santa Rosa mantuvo sus cadenas levantadas para bloquear su segmento del camino. Se unieron para impedir los flujos de gasolina contrabandeadas de México a Guatemala y de ropa de Guatemala a México (los cuales muchas veces eran contactos del mismo negocio controlado por un grupo de hombres de El Nance), hasta que El Nance les permitiera participar también en estos negocios. Como respuesta, El Nance bloqueó su segmento del camino para evitar que Santa Rosa trabajara. Dado que El Nance evitó el acceso de Guatemala y Santa Rosa a la carretera mexicana, toda la ruta sin monitoreo se cerró.

³ Véanse paralelismos en Goldstein (2004); Rus y Vigil (2007).

Oleada de combustible

La gasolina y el diésel eran considerablemente más baratos en México que en Guatemala en los años previos al aumento de contrabando del combustible en la frontera entre 2006 y 2007. Los precios guatemaltecos comenzaron a subir en el verano de 2007 para encontrarse entre los más altos de Centroamérica, hasta alcanzar casi el doble que los precios mexicanos, en paralelo a las preocupaciones globales de 2007 con respecto al incremento en los precios del crudo.⁴ De acuerdo con *El Periódico*, en mayo de 2007 los guatemaltecos alcanzaron los precios de gasolina más altos en su historia.⁵ El precio por litro de gasolina en Guatemala subió 3.02% entre julio y agosto de 2007,⁶ lo cual hizo cada vez más rentable para los guatemaltecos contrabandearla desde México. Cuando las diferencias de precio crecieron, los sobornos a las autoridades mexicanas también aumentaron de 900 a 1400 dólares cada quincena, pero el comercio siguió siendo lucrativo. Incluso cuando las diferencias de precio entre la gasolina mexicana y la guatemalteca eran modestas, el contrabando era redituable. Un fletero de gasolina en El Nance me explicó que incluso cuando la diferencia de precio no es mucha, los guatemaltecos prefieren comprarla a los fleteros mexicanos y aún pueden ganar debido al tipo de cambio entre el peso y el quetzal. Además, explicó:

Las gasolineras de Guatemala no son de confianza. Cobran más y a menudo ni siquiera llenan el tanque completo. Añaden agua o aire. Hay una alianza

⁴ La demanda mundial de petróleo estuvo al alza por muchos años, con un pico de 86 millones de barriles diarios en 2007. El mismo declinó durante la recesión de 2008, pero comenzó a aumentar y recuperarse (véase *Gas Prices Explained* s.f.). Incluso cuando los precios del crudo cayeron en 2008, los precios en Guatemala se mantuvieron altos. En contraste, el gobierno mexicano estableció los precios de combustible y comúnmente mantuvo los del gas y el diésel artificialmente bajos y la gasolina subsidiada para sofocar el descontento (Plante y Jordan 2013). En junio de 2007, un litro de gasolina costaba 6.88 pesos en México y el equivalente a 10 pesos mexicanos en Guatemala.

⁵ Un galón de gasolina regular costaba 27.79 quetzales (aproximadamente 3.45 dólares), y a los choferes, llenar sus tanques les cuesta 20 quetzales más que la semana anterior. Véase Quinto (24/05/2007).

⁶ Véase *El Fronterizo* (04/09/2007).

entre el gobierno guatemalteco y las compañías de gasolina. La gente tampoco confía.

Pregunté, «¿y los contrabandistas también inflan los precios?». Él respondió, «No. En Guatemala, el gobierno y las empresas son los ladrones. La gente prefiere comprar a los [contrabandistas] en su lugar». Según él, la gente puede obtener gasolina de mejor calidad a un mejor precio cuando compra gasolina de los mexicanos. A pesar de que este hombre quería defender su negocio, también hablaba desde un extendido sentimiento de que los negocios legítimos de las tierras fronterizas sufren de corrupción y sirven a intereses elitistas. Si los contrabandistas no entregaran gasolina de calidad, perderían su negocio.

Previamente, el contrabando de gasolina era un negocio ocasional a pequeña escala. Cuando las diferencias de precio entre las gasolinas mexicana y guatemalteca aumentaron, un grupo de residentes de la frontera vio una oportunidad para aprovechar este negocio. De acuerdo con un empleado de Pemex, una estación de gasolina comenzó a recibir entregas de dos a tres camiones petroleros por día, cada uno con 35 000 litros. Durante el año previo recibieron solamente una o dos cargas a la semana. El grupo amplió su campo de acción de trabajar con una estación a hacerlo con tres. En la cadena de contrabando, los comerciantes guatemaltecos entregaban tambos vacíos de 200 litros a los mexicanos en su bodega comunitaria oculta en la ruta sin vigilancia. Entonces, los miembros del grupo en El Nance cargaban los tambos en sus camionetas *pick-up* y manejaban hacia la estación de Pemex, la cual se encontraba en la intersección del camino fronterizo con la carretera mexicana. Un camión mexicano que carga gasolina es sujeto a menos escrutinio que uno guatemalteco, para el cual se tendrían que verificar los permisos correctos para estar en territorio mexicano. La carga de gasolina gradual en camionetas *pick-up* disminuía la visibilidad de este creciente negocio. Los hombres entonces colaboraban para transferir los contenedores llenos a los guatemaltecos en la bodega del grupo en El Nance. El intercambio en la ruta no supervisada brindó el sigilo necesario para este negocio de contrabando, ya que la gasolina mexicana entraría

en Guatemala en camionetas guatemaltecas. Parecía que los guatemaltecos estaban sencillamente llevando comercio nacional. Dentro del grupo, los hombres de El Nance seguían la ética comunitaria para distribuir el trabajo de manera pareja en un sistema de rotación y para colaborar al pago quincenal de sobornos a los líderes de cada unidad policiaca, once en total.

En cuanto el negocio se volvió más lucrativo, los comerciantes guatemaltecos dejaron de traer solo camionetas tipo *pick-up* y comenzaron a llegar en camiones de diez toneladas, los cuales podían transportar entre ochenta y noventa tambos de gasolina, además de llenar sus propios tanques de donde podían extraer algo más de combustible. Ninguno de los hombres del grupo de El Nance tenía un camión de diez toneladas, así es que pagaban una comisión a otro miembro de la comunidad por usar sus camiones. Ya que este arreglo les restaba ganancias, negociaron con los oficiales mexicanos regionales coludidos para que permitieran que los camiones de diez toneladas guatemaltecos pasaran directamente a la estación de gasolina, bajo la condición de que un miembro del grupo los acompañara. Este cambio rápidamente incrementó la visibilidad del creciente volumen del negocio.

El cambio en la estructura de transporte también comenzó a generar debate y celos entre otros residentes de la frontera quienes deseaban formar parte del negocio. Sin embargo, el grupo se negaba a extender su membresía, argumentando que no había suficiente negocio ni suficiente dinero. Muchos residentes dudaban de esta explicación. Veían el negocio crecer de ser conducido mediante *pick-ups* a camiones de diez toneladas y cada vez esperaban en líneas más largas en la gasolinera para llenar los tanques de sus automóviles personales, detrás de los camiones de diez toneladas que llenaban ochenta o noventa contenedores. El punto de quiebre para muchos fue el hecho de que el grupo ya ni siquiera usaba sus propios vehículos. Los residentes generalmente respetan el hecho de que no pueden entrar en un negocio si no tienen los contactos, los recursos o el transporte requerido, pero ahora veían que estos hombres ni siquiera estaban aportando el transporte. Como algunos decían, «solo van por un *ride* [aventón] o están

siguiendo». Se dieron cuenta de que cualquiera puede hacer eso. Estos debates comenzaron a denotar las ideas divergentes acerca del «derecho a trabajar» y los beneficios comunitarios del contrabando que los residentes suelen valorar.

Ir de ride

Los problemas empezaron cuando los camioneros en Santa Rosa quisieron entrar en el negocio de la gasolina. Dada la migración a los Estados Unidos y las remesas, había más residentes de la frontera que ya tenían vehículos grandes, especialmente camionetas *pick-up*, y ellos deseaban tener la oportunidad de entrar al negocio. Los conductores de ese tipo de camionetas en Santa Rosa consideraban injusto que se monopolizara el negocio en una región en la que había pocas opciones. Alonso subrayaba: «Los de El Nance se están comiendo todo el pastel y es injusto». El grupo de Alonso se movilizó para exigir un sitio en el negocio de gasolina y ropa. Como camioneros y residentes, consideraban que merecían tener parte de estos negocios, dado que el comercio atravesaba su segmento del camino fronterizo. En contraste con otros negocios, estas actividades no implicaban la venta o compra de productos ni la negociación de precios. El único trabajo involucrado era el soborno a oficiales y la organización del transporte. De acuerdo con los hombres excluidos: «no es un negocio sino un flete» y les pagan para «acompañarlos por el *ride*» y su negativa a compartir el trabajo no era ética.

Los dos grupos tuvieron tres reuniones para discutir los problemas. A pesar de que algunos en El Nance estaban abiertos a compartir el negocio, los miembros más ruidosos protestaron. Según ellos, no tiene sentido entregar su negocio. Ellos han establecido los clientes y conexiones con los oficiales estatales. No querían que el otro grupo se llevara a sus clientes; «no era suficiente trabajo». Creían que si más hombres entraban, esto destruiría su negocio. A medida que más residentes adquirieron el capital para involucrarse en el transporte, muchos temieron la saturación del mercado del contrabando, el cual de por sí podría

contraerse con facilidad debido a los precios fluctuantes, las tendencias en los mercados legales de bienes, la oferta y la demanda y la tolerancia oficial.⁷ En contraste, los hombres de Santa Rosa argumentaban: «queremos igualdad; todos tenemos derecho a trabajar». Subrayando los beneficios comunitarios del contrabando, aducían que era preferible que más personas se beneficiaran un poco a que unos pocos se beneficiaran mucho. Circulaban rumores en Santa Rosa de que El Nance estaba monopolizando el trabajo y en El Nance de que Santa Rosa solo quería entrar al negocio sin la obligación correspondiente de pagar sobornos a los oficiales e iban a quitarles su trabajo.

En los inicios de la disputa las opiniones dentro de las comunidades variaban. Sin embargo, el grupo en Santa Rosa rápidamente acudió a discursos de lealtad comunitaria para unir a los miembros de la comunidad en torno a su postura. En un principio el presidente comunitario de Santa Rosa se encontraba dudoso de involucrarse, pero dado que los miembros de La Independencia etiquetaron este tema como comunitario, las autoridades locales decidieron que esto debería resolverse en la asamblea comunitaria mensual.

Representantes del grupo de La Independencia presentaron un documento para que se leyera en la asamblea comunitaria, en el cual se pedía apoyo y permiso para levantar la cadena y así bloquear todo el comercio si el grupo de El Nance se negaba a compartir los fletes del negocio. La decisión de parar el comercio depende de la comunidad, ya que es la beneficiaria de las ganancias de la cadena. Para convencer a sus compañeros residentes, los representantes de La Independencia asociaban la lucha de su grupo con las nociones populares de comunidad, derechos, justicia económica y familia. Era un discurso particularmente atractivo en Santa Rosa, ya que tiene estructura de ejido. Muchos aún conciben las obligaciones comunitarias (tales como servir en la cadena) como responsabilidades colectivas. Por lo tanto, consideran que el comercio y el transporte deben ser asociaciones que distribuyan los beneficios de la economía del contrabando tanto como sea posible.

⁷ Las estructuras de mercado para contrabandear usualmente se refieren a restricciones al comercio, demandas y suministros en el mercado legal (véase Andreas 1999).

Al inicio de la reunión se puso de manifiesto que varios miembros de la comunidad desconocían cuántos de ellos estaban involucrados en el conflicto. Cuando se les llamó, los miembros de La Independencia gradualmente levantaron las manos y entonces, uno por uno, como si subrayaran su solidaridad en masa, se levantaron y caminaron al frente de la asamblea; como resultado, 30 hombres se colocaron frente a la comunidad. Un hombre afirmaba: «trabajamos juntos [para la comunidad]» y que el negocio «beneficia al ejido». Argumentaba que: «al dejarnos trabajar, afecta a los intereses económicos del ejido. Invitamos al [grupo] de El Nance a venir aquí como en dos o tres ocasiones, pero ellos no quieren un acuerdo». Otro hombre continuó:

Somos [las personas] que viven aquí. Durante muchos años nosotros, y la gente de El Nance, trabajamos en [construir] la carretera [fronteriza]. También tenemos el derecho de beneficiarnos. No deberían ser los únicos que se benefician. [La construcción de la carretera] nos costó mucho, y otros se están beneficiando. Estamos solicitando trabajo y su ayuda [de la comunidad] para entrar [en este negocio]. No estamos organizando para participar en el vandalismo o algo malo... sino para trabajar... apoyo para poder trabajar. Queremos unirnos al grupo de El Nance, pero ellos no quieren [que lo hagamos]... Queremos compartir. Ellos allá y nosotros acá... ya que es nuestra tierra. Queremos un acuerdo. Pedimos el consejo de la gente más preparada [de la comunidad], y nos informaron que estamos en nuestro derecho de trabajar... Preferimos diálogo, no queremos que haya conflicto... No debemos tener miedo ya que tenemos derechos. Nuestro grupo está abierto a que cualquier persona de aquí se inscriba. Es tiempo ya [de] seguir adelante... Hablaremos y ellos [El Nance] lo entenderán. Sólo queremos la mitad del flete... no queremos involucrarnos en el negocio de nada. Solicitamos apoyo de la asamblea para que, si [El Nance] no está de acuerdo con nuestro acuerdo mutuo, entonces tenemos el apoyo de la comunidad para proceder por otros medios. [Nuestro grupo está] organizado ahora como ven con un secretario, un tesorero y una junta. Porque [el transporte de gasolina] es una fuente de trabajo y con nuestra fuerza, [muchos de nosotros] compramos camionetas *pick-up*. Y con estas, podemos trabajar... ya no tenemos que ir a los Estados Unidos... Es difícil cuando uno de los padres está en los Estados

Unidos... los niños sufren... Nosotros preferiríamos quedar[nos] aquí con nuestras familias. Pero si no hay ingreso aquí, vamos a los Estados Unidos.

De acuerdo con La Independencia, no querían interferir con los negocios de nadie, sino participar como transportistas, para compartir los fletes. La distinción entre negocio y transporte [los fletes] es importante. Los residentes creen que el negocio le pertenece a alguien que invierte recursos propios para adquirir y revender productos. En contraste, ven el transporte terrestre como un trabajo que no requiere el mismo involucramiento intensivo o el derecho a tenencia única. Los grupos de transportistas en la frontera usualmente se administran como asociaciones rotatorias que distribuyen trabajo y ganancias. Los residentes ven el derecho de participar en el transporte como algo condicionado a tener residencia en la frontera y contar con un vehículo. Sin embargo, muchos, como los detractores de El Nance, dudan de que haya suficiente trabajo para todos. El discurso mencionado arriba, junto con las reacciones de los miembros, ilustra cómo el grupo en Santa Rosa visualizaba la lucha por el «negocio» de la gasolina como (1) un problema comunitario, (2) integral para la solidaridad familiar y comunitaria ante la extendida migración a los Estados Unidos, (3) un modo de empleo para la comunidad, (4) un modo de reafirmar sus derechos como residentes fronterizos y (5) necesario para proteger la seguridad de la comunidad y sus niños debido a los riesgos que constituían los camiones viajando a altas velocidades y transportando una sustancia inflamable.

Ya que todos los miembros de la comunidad patrullan la cadena en turnos y utilizan el camino fronterizo diariamente, los peligros potenciales del comercio de gasolina eran claramente evidentes. La mayoría de las personas preferían que el negocio estuviera en manos de miembros de confianza de la comunidad y no de personas de fuera. Otros afirmaban que el comercio debía abolirse por completo. A pesar de que la mayoría se daba cuenta de las potenciales oportunidades económicas, varios (especialmente aquellos que no estaban involucrados en los negocios del contrabando) creían que no valía la pena tomar riesgos. Como declaraba un residente: «Si El Nance no nos permite [compartir

el negocio], pudiéramos denunciarlo y pararlo... Podríamos ir arriba a [llamar a los oficiales estatales de] Tuxtla, los cuales podrían pararles y agarrarles. Entonces se acaba el negocio». Otros se preocupaban de que el simple bloqueo de la cadena empujaría a El Nance a hacer lo mismo e impediría importantes ganancias para la comunidad. Un miembro de La Independencia respondió a este razonamiento argumentando que, ya que los ingresos de las cuotas eran tan críticos, El Nance se daría cuenta rápidamente de su error y «si tataríamos [la carretera]... ya [habría] un acuerdo [en] cinco minutos». Era imperativo que El Nance se diera cuenta de que no podían monopolizar los beneficios del negocio. La mayoría acordó apoyar al grupo y bloquear la cadena si El Nance no accedía a un acuerdo. La asamblea envió un mensaje a El Nance y esperó su respuesta. Las comunidades habían tenido desacuerdos antes, pero esta era la primera vez que una de ellas amenazaba con bloquear el comercio de la otra. La Independencia dudaba de que el conflicto llegara a este punto y veía el bloqueo del camino como un último recurso. Como Alonso aseguró a muchos: «vamos a intentar hacer un diálogo... Nosotros nunca nos hemos cerrado así y no esperamos [que esto suceda]. Habrá un acuerdo... Pero este tipo de situación [de las comunidades peleando entre ellas] es nueva».

La noche siguiente, cerca de medianoche mientras estaba sentada en la cama escribiendo notas de campo, escuché música fuerte y risas desde mi ventana, que no se encontraba lejos de la bodega de gasolina de El Nance. Salí para ver qué sucedía. Unos 35 hombres estaban reunidos en la cadena de El Nance. Samuel me contó que Santa Rosa había bloqueado su sección del camino en su cadena; en respuesta, hicieron lo mismo. «No les vamos a dejar trabajar. Ya son muchas y no hay suficiente negocio o dinero para dejarlos». Le pregunté qué más iban a hacer y me respondió, riendo: «¡Tomar [cervezas]!» Los hombres convirtieron el bloqueo del camino en una fiesta que duró hasta altas horas de la noche. Samuel se reía: «Ahora necesitarás una visa para pasar por aquí... nadie puede pasar».

Al escalar el conflicto, y con ambos grupos bloqueando sus secciones de camino, hubo un cierre efectivo del comercio. Ambos lados

creían que esto era solo un conflicto local, pero en poco tiempo escaló hacia afuera provocando consternación de los residentes fronterizos de Guatemala. Como hizo notar uno de estos: «Ellos deberían habernos advertido... entonces no hay trabajo aquí ahora por el paro [porque ambos cerraron sus cadenas]. La gente aquí está molesta porque no nos avisaron... y nos afecta también». Algunos residentes mexicanos avisaron a sus contactos de negocios en México que el camino estaría cerrado temporalmente y que el comercio se había detenido, pero no vieron necesidad de informar a sus vecinos guatemaltecos. Como dijo un hombre: «es otro país, no tenemos que decirles».

Sin embargo, la tarde después de que el cierre de la carretera entró en vigor, los líderes de Nueva Vida, Guatemala, manejaron su camioneta *pick-up* para bajar por la colina a Santa Rosa. Enojados por no haber sido notificados sobre los cierres de camino, un hombre declaró: «Sí, somos de otro país, pero somos vecinos y si algo sucede aquí, nos afecta, así como si tapparíamos arriba [nuestro segmento de la carretera], les afectaría a ustedes... con sus ingresos en sus cadenas y el trabajo en sus comunidades».

Recibieron pocas respuestas sobre cuánto duraría el conflicto y los hombres guatemaltecos ofrecieron mediar en la disputa. Alonso relató su perspectiva para justificar el cierre:

Queremos 50% [del flete] porque nosotros hicimos [esta sección] del camino aquí y solo El Nance se está beneficiando. Ya despertamos y nos organizamos. Nos dimos cuenta de que lo que están haciendo no está bien... Tenemos el derecho de cerrar aquí [el camino], porque el ejido es autónomo [para ejercer sus propias leyes]... Deberíamos ser iguales, porque [el comercio de] gasolina no es un negocio, sino un flete.

Otro miembro continuó, «Aún necesitamos un acuerdo. Todos somos una cadenita. Necesitamos unir a las comunidades [de ambos lados] porque el comercio afecta todos nuestros intereses [y]... también necesitamos las comunidades en Guatemala para que la cadena funcione». Durante el conflicto se volvió evidente el modo en que las

comunidades fronterizas de la ruta dependían entre sí sin importar el país al cual pertenecieran.

Escalamiento y «la ley»

Pocos momentos después Félix, un residente de El Nance que también trabaja para el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, se acercó al grupo de Alonso en Santa Rosa con un artículo del periódico local. El artículo incluía una denuncia del contrabando de gasolina que nombraba a las comunidades de Santa Rosa y El Nance. Un hombre expresó sorprendido: «Nosotros [nuestras comunidades] nunca estamos en el periódico. Usualmente son vendidos [se pagan sobornos a los periódicos]». Trataron de averiguar quién los había denunciado. Localmente, se entiende que reportar sobre este tema no se debe a buen periodismo de investigación sino a que se paga a alguien por divulgar o no divulgar información que sirve a intereses particulares. Otro miembro se lamentó, «ahora saben de nosotros; tal vez ahora [el negocio de la gasolina] solo se acabe». Más tarde hablé con los hombres de El Nance sobre el artículo. Sospechaban que la denuncia hubiera provenido de los taxistas regionales, camioneros de otro grupo en Comitán, u otros choferes de transporte rápido, quienes resentían las largas filas en la gasolinera a consecuencia del negocio. Ambos grupos acusaban a gente de fuera, dándose cuenta rápidamente de que lo que veían como un conflicto interno había captado una atención regional indeseada. A pesar de la naturaleza intercomunitaria del conflicto, se daban cuenta de que su pequeña cadena no podía operar en aislamiento.⁸ Muchos temían que el artículo atrajera la atención de oficiales del Estado desde Tuxtla Gutiérrez o incluso desde la Ciudad de México que no estarían familiarizados con el área y las dinámicas entre comerciantes contrabandistas y

⁸ Tal enfoque en aspectos regionales refleja el hecho de que, en el sureste mexicano, el transporte por camiones generalmente ha sido una empresa regional más que nacional (Alvarez 2005).

oficiales. Sin embargo, algunos comerciantes experimentados comentaban irónicamente:

[El gobierno] siempre dice que va a ser más estricto y que van a enviar nuevos operativos. Así es que somos vigilados por unos días y luego los oficiales aceptan nuestro dinero también. Cae con nosotros... Siempre es lo mismo, no hay que preocuparnos... las cosas vuelven a ser lo que eran.

En los días siguientes, mientras que los guatemaltecos de Nueva Vida y El Girasol intentaban mediar en el conflicto, hubo un extraño giro en los sucesos. El Nance decidió ceder todo el negocio de gasolina y ropa a Santa Rosa. En Santa Rosa muchos creyeron que El Nance estaba intentando ponerles una trampa para que los capturaran. Otros conjeturaron que el grupo de El Nance estaba trabajando temporalmente en otra ruta fronteriza. Un miembro del grupo decía con cautela:

Sospechamos de sus motivos... A veces son mentirosos. ¿Por qué nos darían todo a nosotros? Así es que hemos decidido no movemos. [Los comerciantes de El Nance] probablemente saben que hay un operativo [allí] o nos verán moviendo y los llamarán [a las policías] para agarrarnos.

De hecho, los residentes detectaron una mayor presencia de policías, y al parecer estaban colaborando con El Nance, cerca de las estaciones de gasolina.

El jueves siguiente sería la primera vez que La Independencia se haría cargo del negocio de la ropa, que también les fue cedido por El Nance. Cuando llegaron los comerciantes guatemaltecos, los hombres de Santa Rosa estaban aprensivos, pues sospechaban que los de El Nance intentaban engañarlos. Adicionalmente, Alonso y su grupo tenían problema para acordar reuniones con el inspector de aduanas. Alonso me dijo repetidamente que tenía que encontrar lo que llamaba «la ley» antes de que pudieran trabajar, pero tenía poco conocimiento sobre quién personificaba a la autoridad y expresaba frustración ante su incapacidad para localizar a los representantes apropiados. La ley, en este sentido, se refería a diversas autoridades reguladoras en la frontera, lo cual incluye

a la policía estatal, la policía federal, los empleados aduanales, los agentes migratorios, el comandante del ejército, el federal de caminos y la fuerza policíaca fronteriza. La ambigüedad con la cual Alonso utilizaba este término reflejaba el bajo grado de familiaridad en el trato con estas autoridades. El grupo seleccionó a Alonso como uno de los líderes del grupo debido a su inteligencia y su conocimiento en derechos humanos, así como al hecho de que habla articuladamente. Estas habilidades, sin embargo, no se traducían en conocimiento sobre cuáles oficiales eran los que estaban a cargo del acuerdo de sobornos para el «negocio» de la gasolina. Alonso les dijo a los comerciantes de ropa que debían esperar hasta el día siguiente, cuando planeaba hablar con la oficina del agente aduanal, aunque no estaba seguro de si él era la más alta autoridad responsable. Sin embargo, si los comerciantes no transportaban sus bienes esa tarde a tiempo para preparar el mercado del viernes, perderían el equivalente a una semana de negocios. Resolvieron enviar a unas pocas personas a la carretera para verificar la situación. Desde luego, el ejército había montado un bloqueo temporal en el camino y un hombre reportó: «Cuando vi al ejército [en la intersección del camino sin monitoreo con la carretera], ¡también vi a Juan [un fletero de gasolina de El Nance] mirando alrededor! Probablemente estaba mirando para ver si salíamos para informarnos a los empleados... Para asustarnos para que no trabajemos o para meternos en la cárcel». El ejército les permitió pasar, pero a cambio de un soborno más alto que si hubieran negociado un acuerdo previamente.

Tras este incidente se volvió imperativo que el grupo de Alonso encontrara y «hablara con la ley», como él decía, para poder trabajar. Aunque los residentes tomaban la ley en sus manos para algunas cosas, también dependían de los agentes de la ley para su subsistencia, en el sentido de lograr que estos oficiales se hicieran de la vista gorda ante sus actividades o de que estuvieran coludidos directa o indirectamente con ellos. Los residentes podrán considerarse a sí mismos autoridades reguladoras alternativas, pero sus estrategias subrayan la interdependencia de los contrabandistas y el Estado.⁹ Los oficiales no solo reciben sobornos de los

⁹ Véase Andreas (1999); véase también Roitman (2005; 2006).

negociantes, sino que también obtienen beneficios esenciales derivados de sus unidades, incluidos regalos de gasolina. En reciprocidad, los contrabandistas obtienen aprobación para conducir sus negocios y pueden también recibir protección oficial contra sus rivales —por ejemplo, la amenaza de denunciar a otros— u otras unidades policíacas. A través de rituales de buscar a los funcionarios en sus oficinas, buscar a la policía en las autopistas o utilizar las relaciones con los funcionarios locales para mantenerse informados sobre los esfuerzos policiales más distantes, los residentes refuerzan la autoridad del Estado para gobernar y su poder para aplicar, ignorar o flexibilizar las reglas en una región donde, de otro modo, podría parecer que la autoridad se fragmenta cada vez más.¹⁰

La lucha por contrabandear gasolina demuestra cómo la legalidad en la frontera tiene poco que ver con la ley escrita. En cambio, se asocia con las relaciones, con la necesidad económica percibida y con la evolución de configuraciones de poder en una región en la que los funcionarios de México balancean el enfoque de la seguridad con las realidades del comercio, sus propios salarios ínfimos, la falta de personal, el crecimiento de cárteles y grupos criminales, y el entramado regional con el contrabando. Alonso, al ser un maestro con poca relación relativamente con el mundo del contrabando, se mantenía confundido sobre dónde se encontraba la ley para ser comprada y controlada.

Sueño y pesadilla del trabajo de campo

La amistad con Alonso a lo largo de mi trabajo de campo me permitió un acceso único a las luchas del grupo La Independencia. Como maestro, Alonso solía sentirse identificado con mi trabajo y le emocionaba ayudarme a formular y probar preguntas de investigación. También se interesaba en cómo funcionaba el contrabando, tanto como alguien relativamente fuera del «negocio» que quería participar de él para beneficiarse económicamente, como alguien interesado en «el contrabando»

¹⁰ Véase McMurray (2001).

de modo analítico y político. Pasamos muchas tardes hablando durante el conflicto sobre la gasolina, mientras que aprendíamos cómo involucrarnos en el contrabando y sobre los distintos actores. La apertura y los ideales de inclusión de Alonso y su grupo (parte de su atractivo para asegurar apoyo de la comunidad) se extendió a mí en un contexto en el que el «negocio» usualmente es un dominio masculino, lo cual me dificultaba participar plenamente en sus reuniones. Los hombres se encontraban casi todas las tardes en la cadena en una atmósfera festiva de música y comida compartida.

El hecho de ser incluida en su grupo era simultáneamente el sueño de toda antropóloga y una pesadilla de ética. Por un lado, observaba el funcionamiento interno de las dinámicas de negocios y negociaciones del grupo. Era testigo de cómo discutían ideas de equidad y negociaban entre ellos a medida que se posicionaban, cara a cara, contrabandistas, miembros de la comunidad y funcionarios del Estado. Aprendí desde adentro cómo funcionaba el «negocio» y cómo es que los principiantes comienzan sus negocios y se coluden con agentes del Estado. Hubo, sin embargo, límites para mi participación en un negocio que seguía siendo ilegal y controversial, a pesar de que los miembros del grupo enmarcaban sus esfuerzos en términos de una lucha por sus derechos.¹¹ Adicionalmente, no podía enemistarme con los residentes de El Nance o pensarían que estaba espiándolos ¡o incluso «negociando» con gasolina por mi cuenta! Ya que los grupos concebían el conflicto como de dos caras a pesar de que fuera más complejo, mi participación no podía ser percibida como a favor de alguno de los lados, especialmente porque vivía en El Nance en ese momento.

El grupo La Independencia de Santa Rosa solicitaba mi opinión como una profesional educada (y estadounidense) para ayudarlos a organizarse, a articular sus derechos y a entender a El Nance. De hecho, el reclutarme a su causa puede haber sido una estrategia para fortalecer sus exigencias. A veces parecía muy sencillo ser seducida por su retórica de inclusión o lucha por sus derechos. Sin embargo, no podía

¹¹ Véase Robben (1996); Osburg (2013), sobre la seducción etnográfica.

comprometerme por completo sin poner en riesgo mi investigación, mis amistades personales y mi seguridad. Por lo tanto, intenté entender las perspectivas de ambos grupos. La apertura de Santa Rosa me permitió un mayor acceso a información que El Nance, donde los involucrados en el «negocio» de la gasolina eran más reservados. La manera en la que cada grupo me incorporaba reflejaba cómo Santa Rosa estructuraba el conflicto de forma más inclusiva y comunitaria, mientras que El Nance percibía la disputa como un tema individual y de pequeños grupos de negocios. Generalmente, a lo largo del proceso de la investigación, los residentes de El Nance se mostraron más recelosos a confiar en mí que la gente de Santa Rosa. En contraste con la estructura comunal ejidal de Santa Rosa, El Nance es una comunidad más pequeña de propietarios privados, donde los residentes generalmente consideran las preocupaciones de trabajo (ya sean en el ámbito de la agricultura, la ganadería o el contrabando) como temas individuales a pesar de que en la práctica los residentes más ricos comparten trabajo con sus parientes. Cuando viví en Santa Rosa, durante la primera mitad de mi trabajo de campo, los niños vecinos frecuentemente gritaban en nuestras ventanas sin vidrio (y por lo tanto inútiles) para recordarnos de ir a las reuniones mensuales de asamblea. En contraste, el cultivar suficiente *rapport* para asistir a las reuniones de asamblea de El Nance me tomó meses. Las asambleas en Santa Rosa están abiertas a la comunidad entera, pero solo los hombres adultos están invitados a las reuniones de El Nance (con excepciones: se disculpa a los viejos, y son incluidas viudas y esposas de migrantes). El agente municipal de El Nance durante la primera mitad de mi trabajo de campo estaba emocionado sobre mi investigación y me extendió invitaciones, pero las autoridades comunitarias que lo sucedieron eran más recelosas.

Debido a que el conflicto sobre la gasolina ocurrió hacia el final de mi trabajo de campo, ya había sembrado una sensación de confianza en ambas comunidades, pero reconozco que el modo en que las comunidades y los grupos me percibían, así como al conflicto, puede haber influenciado mi interpretación de los eventos. Por ejemplo, al principio cometí el error de no pensarlo dos veces cuando Alonso

arregló mi fiesta de despedida en la cadena de Santa Rosa durante el conflicto de la gasolina. Ya que pasé un buen tiempo en las comunidades de los dos lados de la frontera, invité a amigos y contactos de ambos lados e ingenuamente asumí que mis relaciones trascenderían la disputa. Sin embargo, fue durante estas semanas que oí a personas de El Nance preguntándome si era miembro de La Independencia, si estaba contrabandeando gasolina o por qué andaba trabajando con ellos. Algunas personas se volvieron cautelosas en nuestras conversaciones, porque sospechaban que pudiera pasar información a Santa Rosa. Una esposa de un negociante de El Nance, Clara, mencionó que los hombres no querían venir a la fiesta porque seguían en disputa contra Santa Rosa. Clara quería ir, pero estaba nerviosa sobre lo que pensarían los demás. Sugirió otra fiesta separada en su casa. Como me dijo:

Las mujeres son diferentes. No tenemos ningún problema con ellas [la gente de Santa Rosa]. Pero ahora no nos llevamos tan bien. Ellos [Santa Rosa se comportan] mal porque nos quitaron el trabajo. No está bien estar trabajando y tener un trabajo y que otros te lo quiten. Ellos no entienden.

Clara asistió, junto con su suegra y sus hijos, sobrinas y sobrinos, pero se quedaron poco tiempo. Lo que parecía disipar estas percepciones (aparte del tiempo y un distanciamiento mayor de La Independencia) fue cuando el comercio atrajo la atención oficial. El conflicto se detuvo cuando ambas partes tuvieron miedo de trabajar.

Nutriendo al poder

El conflicto sobre el «negocio» de la gasolina reveló fisuras en el dicho local de que todos los que viven a través del camino fronterizo «tienen derecho de trabajar». Resultó claro que esta ética ya no caracterizaba muchas prácticas de negocio en un clima de competencia mercantil en aumento. Más ampliamente, el conflicto ilustra las ironías de tratar el contrabando transnacional como un tema local. Los residentes se enfocaban en sus propias interpretaciones de sus derechos, pero no

prestaban atención al hecho de que su comercio estaba entretejido en dinámicas políticas y económicas más amplias, regionales y transnacionales. En este contexto mayor, los residentes suelen ser más peones que figuras de autoridad en el paisaje económico y de poder en evolución en las tierras fronterizas.

¿Había algo en particular sobre la gasolina que motivara un conflicto tan divisivo? Esto era inusual en el reino del contrabando, pese a que pueden esperarse denuncias, luchas internas y manipulaciones de parte de contrabandistas poderosos o funcionarios del Estado. El contrabando de la mayoría de los bienes se mantiene relativamente abierto para los residentes de la frontera, no es problemático y está institucionalizado en la vida diaria. Las disputas y las sospechas que rodeaban al contrabando de gasolina no eran la regla, sino la excepción.

Por lo tanto, es importante examinar el producto «gasolina» en sí mismo para entender lo que significa en la vida diaria y la vida nacional. En primer lugar, en ese momento la industria del petróleo en México se encontraba nacionalizada, y mucho del petróleo de México se origina en estados del sur como Chiapas. En México, la empresa de propiedad estatal, Pemex, dominaba la distribución y la producción de gasolina. Mientras tanto, Guatemala importa la mayor parte de su petróleo, y compañías transnacionales distribuyen la gasolina y el diésel.¹² Muchos mexicanos en la frontera creen firmemente que tienen derecho de distribuir la gasolina como un producto nacional. En contraste, otros se adhieren al argumento nacionalista que condena el tráfico, argumentando que al contrabandear gasolina se ponen en riesgo las reservas de «nuestro producto nacional y que no debemos venderlo así a Guatemala... La gasolina es producto de la nación... El maíz siempre puedo sembrar de nuevo, pero la gasolina se acaba... No se debe sacar... El producto se va a acabar». Se preocupaban de que entonces podría no quedar suficiente gasolina para los mexicanos. Muchas de sus opiniones reflejan debates recientes sobre la privatización de Pemex en el contexto de la creciente ineficiencia del sector del petróleo y el compromiso del presidente Peña

¹² OCR (2006).

Nieto con una privatización más profunda.¹³ En 2013, las reformas energética y financiera del presidente Enrique Peña Nieto pavimentaron el camino a la privatización de Pemex, compañía que contribuía con 40% del ingreso del Estado y 70% del «presupuesto nacional total», en un país con una historia de pésima recaudación de impuestos.¹⁴ Previamente, la Constitución mexicana establecía que «los hidrocarburos son patrimonio de todos los mexicanos».¹⁵ Los críticos argumentan que, aunque la privatización proveerá oportunidades para inversores de petróleo y a compañías privadas de petróleo, las consecuencias pueden ser desastrosas para los trabajadores pobres, y pueden generar impactos económicos, daño ambiental y desplazamiento rural para facilitar y expandir la extracción.¹⁶ A principios de 2017, protestas contra los efectos de la privatización, llamados «el gasolinazo», surgieron por todo México mientras el peso se desplomaba y recortes a los subsidios llevaron a un incremento de 20% en los precios.¹⁷

En 2006-2007 los residentes fronterizos de Guatemala tenían menos conexiones con el negocio de la gasolina, lo percibían como arriesgado y estaban dudosos de involucrarse. En primer lugar, los países tienden a custodiar bienes entrantes más que bienes que salen del país. Logísticamente, los contrabandistas mexicanos tenían que desplazarse solo 3 km a su propia estación gasolinera, mientras que los comerciantes guatemaltecos transportaban la gasolina contrabandeada a largas distancias. Los residentes guatemaltecos veían el contrabando de gasolina como algo reservado para los ricos y poderosos y tal vez incluso ligado a sofisticados grupos criminales y corporaciones multinacionales que empleaban paramilitares u otros agentes corruptos. Algunos sospechaban que

¹³ Desde 2004, la producción de petróleo ha disminuido a medida que ha aumentado la demanda interna (Melgar 2012). Según Lourdes Melgar (2012), 35% de los ingresos del gobierno provienen del sector petrolero, pero «a pesar de ser una de las principales empresas petroleras del mundo, Pemex está técnicamente en bancarrota, lo que reduce drásticamente las posibilidades de crecimiento e inversión».

¹⁴ Paley (2014:100).

¹⁵ Paley (2014:100).

¹⁶ Paley (2014:100); Carlsen (2014).

¹⁷ Okeowo (2017).

las compañías gasolineras contrataban contrabandistas para que estos corrieran los riesgos por ellos para complementar su suministro. Otros creían que las compañías empleaban a individuos poderosos que les harían daño si los atrapaban comerciando gasolina que interfiriera con su negocio. Un artículo de 2007 de *La Prensa* citaba amenazas de muerte contra el alcalde de un municipio local por tratar de investigar el tráfico de gasolina.¹⁸ En contraste, en México los residentes conocían a los propietarios de las gasolineras locales y varios trabajaban en ellas. El dueño le regaló al grupo de El Nance camisetas de Pemex y agradeció el empujón al negocio.

Del lado mexicano, los residentes opinaban que la gasolina era un producto nacional al cual tenían derecho. En contraste, los residentes guatemaltecos no estaban familiarizados con el negocio de la gasolina, el cual temían estuviera ligado a compañías transnacionales, poderosos inversionistas extranjeros o mafias organizadas. El alto valor de la gasolina y la multiplicidad de actores involucrados en su comercio y distribución revelaron que su venta de contrabando no era en absoluto un asunto local, sino transnacional. Su alcance va mucho más allá de los residentes de la frontera. En la medida en que compañías privadas, inversionistas extranjeros, el ejército, bandas criminales y contrabandistas poderosos de larga distancia entraron en la situación, el conflicto por la gasolina ilustra cómo es que el contrabando de pequeña escala se vuelve cada vez más impredecible para los residentes de la frontera.

Una espiral de gobernanza

Para subsistir y prosperar en los intersticios de la economía legal y la extralegal, los residentes dependen de su localización estratégica y sus redes y conocimiento transfronterizo para participar, manipular y beneficiarse de los flujos a través de la frontera. Sin embargo, el conocimiento local y el capital cultural de los residentes, que les permiten ocupar

¹⁸ Castillo (2006).

roles claves en la economía del contrabando, pueden tornarse menos relevantes en la medida en que tales conocimientos y conexiones se vuelven bienes comunes accesibles a actores más allá de las fronteras y se diversifican los agentes de protección y depredación en la frontera. Los transportistas de larga distancia aún colaboran con los residentes de la frontera para acordar conexiones por medio de celulares, pero los roles de los residentes para negociar y hacer conexiones oficiales se han vuelto menos necesarios en un clima de negocio transnacional legal e ilegal. Quizás esta sea la razón por la cual ahora los residentes intentan más vehementemente asegurar su posición bloqueando el camino a los comerciantes externos que no los emplean como camioneros o intermediarios. En este contexto, el control de los residentes sobre la frontera puede pasar rápidamente de ser un recurso a ser un riesgo, dado que están en medio de múltiples actores que buscan beneficiarse de la frontera. En esta coyuntura, un enfoque en ganancias mutuas en una región que depende del contrabando permite a los funcionarios, residentes, cárteles, negocios legítimos y contrabandistas coexistir en relativa paz de manera simbiótica. Sin embargo, conflictos como el que se dio entre los contrabandistas de gasolina resaltan la vulnerabilidad de los residentes fronterizos en una región en la que la autoridad y la violencia se han fragmentado entre varios actores, mientras que el Estado también trabaja por reafirmar su soberanía, a veces de forma violenta. Durante una visita en 2011 me enteré de que un contrabandista fronterizo de gasolina había sido asesinado cerca de Frontera Comalapa. Algunos asociaban el caso con la influencia creciente de los traficantes de drogas y temían que el comercio se volviera cada vez más peligroso. La mayoría, sin embargo, no tenía miedo y creía que este había sido un caso de celos, robo o identidad equivocada o que se había involucrado en alguna otra cosa.

Los acuerdos de los residentes con las autoridades pueden desvanecerse rápida e impredeciblemente, en especial con el cambio de funcionarios. En 2008, supe que los contrabandistas de gasolina fueron sorprendidos en medio de la ruta sin monitoreo en una redada inusual protagonizada por una unidad militar que vino de Comitán, Chiapas. Los militares confiscaron cinco camiones guatemaltecos llenos de

bidones de gasolina y les exigieron un rescate de unos 20 000 dólares. El contrabando de gasolina eventualmente se reanudó y los contrabandistas guatemaltecos de mayor alcance siguieron operando con impunidad.¹⁹ Localmente esto se ha convertido en un negocio más silencioso, monopolizado por unos pocos contrabandistas residentes más ricos con conexiones oficiales más fuertes o por pequeños grupos de personas que contrabandean cantidades pequeñas más rápido (viajes repetidos en camionetas *pick-up* en vez de usar camiones de diez toneladas). Curiosamente, los pocos residentes ricos y poderosos que contrabandeaban gasolina de manera independiente de los grupos escaparon del escrutinio en el conflicto entre los dos grupos, así como de la atención oficial. En gran parte continuaron traficando con gasolina todo el tiempo. A pesar de que algunos integrantes de los grupos se acercaron a estos miembros de la comunidad en busca de consejo sobre contactos y relaciones oficiales, otros creen que quizás ellos fueron quienes los denunciaron ante los militares. El conflicto por la gasolina distrajo la atención en muchos aspectos del hecho de que a pesar de la retórica de los residentes acerca de la inclusión en el contrabando fronterizo, sus riesgos y beneficios se mantienen desiguales, ya que unos pocos obtienen grandes recompensas y aquellos con menores conexiones cargan con los riesgos.

Periódicamente, debido a la continua atención mediática y política, la policía y unidades del ejército llegan a investigar y el tráfico se detiene. Usualmente se hacen de la vista gorda mientras las unidades policíacas y militares reciben subsidios de combustible de los contrabandistas. Después de unos días, el comercio se reanuda debido a los múltiples actores que se benefician. La redada pudo haber sido una interrupción abrupta del orden cotidiano de las cosas, donde los funcionarios generalmente pasan por alto el contrabando porque es rentable para muchas personas en la región. Simultáneamente, estas dramáticas muestras de la autoridad del Estado mantienen el mismo sistema que permite que se lleve a cabo el contrabando, pero el Estado mantiene un firme punto de apoyo para definir su trayectoria y forma a pesar de la importancia

¹⁹ Barrientos (2012).

creciente de formas de gobernanza alternativas. En su etnografía sobre contrabando y migración de Marruecos a España, David McMurray señala cómo los intentos de evadir al Estado pueden fortalecer su legitimidad:

Las tretas y subterfugios [para evadir el control oficial] se pierden... del interesante proceso mediante el cual los dominados frecuentemente se vuelven cómplices de legitimar el poder del Estado... Pueden ser exitosos en lo que están haciendo y simultáneamente confirmar la legitimidad del monopolio del Estado en la ceremonia y la violencia.²⁰

Los residentes fronterizos han ganado cierto control negociando con las autoridades del Estado en vez de solo tratar de evadirlas. Sin embargo, al hacer esto reafirman la legitimidad del Estado y su «derecho a gobernar».²¹ El Estado y sus agentes mantienen una amenaza creíble de ejercer la ley y, por lo tanto, los contrabandistas necesitan comprar el no-ejercicio o el ejercicio selectivo de esta.²² Peter Andreas llama a esto el «impuesto de la corrupción», los precios de la corrupción aumentan a medida que la implementación de la ley se intensifica.²³ Cuando nuevos camioneros quisieron involucrarse en el contrabando de gasolina, salieron a buscar agentes de la ley para comprarlos y subvertirlos, y frecuentemente se quejaban de que no podían encontrar a la ley personificada por agentes que la representaran y la ejercieran en la frontera. Los rituales de evasión al Estado combinados con las periódicas muestras intensas de poder del Estado, por lo tanto, «dramatizan la legitimidad» de la autoridad del Estado y sus efectos sobre el modo en que los individuos se sitúan en relación con esta.²⁴ Las llamadas telefónicas de los contrabandistas a amigos policías que les advierten sobre movimientos policíacos locales (y más distantes también), el posicionamiento de espías (u

²⁰ McMurray (2001:127-128).

²¹ McMurray (2001:130).

²² Snyder y Durán-Martínez (2009:255); Andreas (1999:94).

²³ Andreas (1999:94).

²⁴ McMurray (2001:129). Véase también Andreas (2011); Endres (2014).

«orejas») y los chequeos rutinarios en busca de funcionarios en la carretera constituyen formas de refuerzo para el poder estatal y las relaciones con él. Los contactos oficiales no solo permiten a los contrabandistas operar, sino que también los protegen (y los mantienen advertidos) de otras unidades policiales.²⁵ Los funcionarios y los contrabandistas se benefician de forma simbiótica cuando los oficiales atrapan a grupos rivales.²⁶ Los contrabandistas monopolizan más negocios para sus grupos, mientras que los oficiales pueden obtener ganancias y demostrar su éxito con evidencia de arrestos y confiscaciones. Específicamente, el grupo de Santa Rosa sospechaba de que las relaciones más fuertes que tenía El Nance con la policía serían utilizadas para arrestarlos y proteger el control de El Nance sobre el comercio de la gasolina contrabandada. En este caso, los oficiales pueden administrar y manipular la falta de predictibilidad. El grupo de El Nance confiaba en que la policía los protegería y centraría su atención en el grupo de Santa Rosa, pero en cambio se dieron cuenta de que las unidades policíacas preferían recibir los sobornos adicionales.²⁷ Las unidades locales y regionales también podían hacer poco una vez que las autoridades federales se involucraban. A pesar del *statu quo* en el que los contrabandistas eran aparentemente libres para operar, el dramático arresto militar de los contrabandistas de gasolina les sirvió de recordatorio de por qué necesitan seguir buscando a la ley.

Richard Snyder y Angélica Durán-Martínez discuten que las reformas a la vigilancia mexicana desde la década de 1990, incluida la

²⁵ Véase Andreas (1999); Snyder y Durán-Martínez (2009:255).

²⁶ Andreas (1999); Snyder y Durán-Martínez (2009:255).

²⁷ En su trabajo sobre las extorsiones de protección promovidas por el Estado, Snyder y Durán-Martínez (2009:261, 259) argumentan que los protectores del Estado prefieren a múltiples organizaciones criminales sobre la protección exclusiva porque la competencia hace que suba el costo de la protección. Mientras tanto, los grupos criminales prefieren muchos protectores y una organización para bajar los gastos de protección (2009:259). En la frontera, tener múltiples protectores no reduce los precios para los grupos contrabandistas porque cada agencia (por ejemplo, la policía federal, la policía estatal, aduanas, inspecciones sanitarias y el ejército) cobran para, en forma selectiva, ejercer o no ejercer la autoridad bajo su jurisdicción. Véase Snyder y Durán-Martínez (2009) sobre las implicaciones de cambiar y sobreponer la autoridad jurisdiccional en México.

descentralización y el corte a los horarios de oficiales particulares, estuvieron encaminados a reducir la corrupción y la colusión con el crimen organizado.²⁸ Cuando el PRI ejercía control hegemónico, las organizaciones criminales y el régimen de protección estatal existían en una simbiosis relativamente estable y predecible.²⁹ La desestabilización de este régimen de protección estatal ha llevado a la proliferación de grupos criminales, así como a una geografía del ejercicio de la ley más compleja e impredecible.³⁰ Los conflictos y la incertidumbre siguieron en relación a quién sobornar, así como la competencia entre grupos criminales sobre su cuota del mercado y del territorio. Sin medios estables y confiables de protección oficial, los grupos criminales acuden cada vez más a la violencia y adquieren y ejercen sus propios medios privatizados de protección y depredación.³¹

Hasta este punto, las comunidades fronterizas han mantenido su nicho en la economía independiente del contrabando, apartada de los grupos criminales y cárteles que establecen controles a lo largo de los pasajes de la frontera. Los contrabandistas fronterizos también pueden seguir negociando con oficiales, pero esto se está volviendo una empresa cada vez más costosa e impredecible. Cada año los precios de los sobornos aumentan y el incremento de seguridad en la frontera se ha traducido en más unidades policíacas a sobornar. Cuando la recién creada Policía Estatal Fronteriza (PEF) llegó a la frontera a principios de 2007 para controlar el tráfico de drogas y el crimen organizado, los contrabandistas locales detuvieron su trabajo por unos cuantos días.³² Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que muchos de los oficiales eran los mismos que co-

²⁸ Snyder y Durán-Martínez (2009:267, 270).

²⁹ Snyder y Durán-Martínez (2009:263).

³⁰ Snyder y Durán-Martínez (2009:267).

³¹ Perret (2012); Snyder y Durán-Martínez (2009); Paley (2014); Vogt (2013); Brigden (2016).

³² Esta es una pequeña unidad estatal dentro de la estructura del ministerio de seguridad del estado de Chiapas (Isacson, Meyer y Smith 2015:14). No ha cobrado mucha fuerza; en 2012 tenían solo 50 miembros, aunque actualmente tienen 135 y 50 unidades equipadas (Basail 2016a; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2015; Isacson, Meyer y Smith 2015:14).

nocían de la fuerza policíaca local. Solo tenían nuevos uniformes y eran una unidad más que necesitaba ser agregada a la lista de sobornos.

Los contrabandistas rurales de gasolina y los residentes de la frontera son jugadores pequeños en este complejo enredo y fragmentación de violencia y gobernanza. En efecto, se convierten en peones en un ambiente cambiante de aplicación de la ley donde los grupos criminales y los traficantes de drogas han formado sus propias áreas de control. Los narcotraficantes han aumentado su poder en la región durante la última década y de forma más acentuada desde que dejé el campo en 2007. A medida que más drogas empezaron a pasar desde Centroamérica, el cártel de Sinaloa y los Zetas se movieron hacia Centroamérica para «administrar mejor y garantizar el paso ‘seguro’ de su inventario». ³³ Los Zetas ganaron presencia en Huehuetenango en 2007³⁴ y la incrementaron durante 2008, a medida que las regiones fronterizas se convirtieron en sitios de guerras territoriales en las cuales los locales podían hacer poco más que evitar estos lugares y cerrar los ojos. En noviembre de 2008, en una región en la que los residentes creyeron durante 2006 y 2007 que los traficantes de drogas pasaban sin causar muchos problemas, una célula afiliada a los Zetas (aún asociada con el cártel del Golfo, antes de su separación en 2010), asesinó a casi 20 personas en un punto fronterizo cercano en Agua Zarca, Guatemala, durante un enfrentamiento con el cártel de Sinaloa. El tiroteo ocurrió durante las carreras de caballos, las cuales pueden ser eventos importantes para cubrir los intercambios de drogas según aprendí en la frontera. Cuando leí las noticias mientras intentaba escribir mi tesis de vuelta en los Estados Unidos, llamé a unos amigos de la frontera para corroborar que estuvieran bien, ya que sabía que algunos tenían familia en Agua Zarca. Una mujer de El Nance me dijo que no afectó a su familia que vivía ahí. Me dijo que todos estuvieron bien y nadie de El Nance fue para allá: «Está tranquilo». Francisca, de El Girasol, también agregó que nadie de El Girasol fue tampoco y que además ellos *sabían* que no deberían ir. Este último comentario es

³³ Olson, Shirk y Selee (2010:7-8).

³⁴ López (2013).

particularmente ilustrativo sobre la importancia del conocimiento y las redes en la frontera. Los residentes de la frontera afirmaban que estaban seguros y no se preocupaban demasiado acerca de la violencia, porque estaban íntimamente familiarizados con las ocasiones y los lugares en los que la violencia y las guerras territoriales del narco tendían a suceder. Un artículo de *Prensa Libre* incluía respuestas similares; su título afirmaba que los residentes de Agua Zarca preferían no hablar. De acuerdo con este artículo los residentes decían que no sabían nada, que no estuvieron presentes o que apagaron sus celulares.³⁵

Supe en 2014 que uno de los narcotraficantes más buscados de Guatemala, Eduardo Villatoro Cano, conocido como «El Guayo», había huido a través de un cruce fronterizo sin vigilancia cercano antes de ser capturado en Tuxtla Gutiérrez, donde fue descubierto en una clínica de cirugía plástica intentando alterar su apariencia. Antes de su captura, los residentes reportaban que pueblos cercanos como Camojá se habían vuelto más peligrosos; los soldados patrullaban las entradas al lado guatemalteco del cruce desde la autopista y los miedos cotidianos a robos o asaltos se habían elevado. Las delicadas relaciones entre unidades estatales, grupos criminales, pequeños contrabandistas y residentes continuaron desenvolviéndose; los residentes mantenían su silencio para retener cierto grado de autonomía y subsistencia, pero su posición es cada vez más precaria en la proporción en que los grupos de drogas han establecido influencia en la región y en otros corredores. El modo de operación clave de los Zetas es tomar control de un territorio y establecer un monopolio sobre el crimen para que cualquiera que se involucre en actividades extralegales deba pagarles un «impuesto criminal» o «piso».³⁶ En este punto, no se habían apoderado de este corredor, las comunidades retenían sus propios impuestos de cadena y la vida diaria se mantenía relativamente tranquila. Sin embargo, los residentes también son útiles para mantener un camino abierto y transitable y como transportistas potenciales. La situación de violencia ha mejorado en las tierras fronterizas

³⁵ *Prensa Libre* (2008).

³⁶ López (2013); Dudley (2011).

de Guatemala en los últimos años, pero mucho de esto puede atribuirse a los distintos acuerdos entre el cártel de Sinaloa, los Zetas y las narco-familias guatemaltecas y no al desmantelamiento de estos grupos.³⁷ En 2008, los Zetas iniciaron una oleada para controlar los puntos vitales en Guatemala para la compra y transferencia de droga,³⁸ pero la Fiscalía General de Guatemala, a cargo de Claudia Paz y Paz, dirigió esfuerzos para debilitar su presencia.³⁹ Otros grupos han luchado por llenar los vacíos, y el cártel de Sinaloa retiene poder en la región formando alianzas flexibles con grupos transportistas y criminales guatemaltecos.⁴⁰ Chiapas es actualmente relativamente menos violento que otros estados mexicanos; algunas personas argumentan que esto se debe a que los cárteles han establecido sus propias zonas de influencia en vez de chocar.⁴¹

³⁷ Isacson, Meyer y Morales (2014:9), basándose en López (2013).

³⁸ De acuerdo con *InSight Crime*, los Zetas tienen menos conexiones que el cártel de Sinaloa con los países proveedores, por lo que se remiten a comprar drogas en Honduras y Guatemala (Dudley 2013).

³⁹ (Dudley 2013).

⁴⁰ (Dudley 2013).

⁴¹ Juan Carlos Velasco Santos, comunicación personal, diciembre 6, 2016.

Conclusión. El trío ilícito: drogas, armas y migrantes

La línea entre lo «legal» y lo «ilegal» se toma por clara y definitiva dentro de un Estado particular, una afirmación hegemónica. Sin embargo, en la práctica es ambigua y sujeta a una ingeniosa manipulación. La legalidad y la ilegalidad llevan entonces simultáneamente blanco y negro y tonos de gris.

JOSIAH McC. HEYMAN Y ALAN SMART,
«STATES AND ILLEGAL PRACTICES: AN OVERVIEW» (1999:11).

A través de detallar las vidas de los habitantes de la frontera y los pequeños contrabandistas, este libro ilumina el contexto en el cual la gente define el contrabando de bienes como trabajo honesto. En vez de dar por sentado el contrabando y la ilegalidad, problematiza el cómo y por qué ciertas actividades, junto con sus protagonistas, son etiquetadas como «contrabando» y «crimen», mientras otras disfrutan de mayor movilidad y acceso. La lente del neoliberalismo securitizado revela el modo en que la seguridad regional y las políticas comerciales funcionan en conjunto para sancionar ciertos flujos de bienes, personas y lógicas, y restringir otros. A pesar de ello, la integración del comercio regional y un escalamiento de la seguridad en la frontera coexisten con una extensión de actividades extralegales que gozan de legitimidad creciente entre los habitantes regionales. Sin entender por qué la gente se involucra en actividades extralegales¹ y el cómo y bajo qué condiciones estas actividades se vuelven ilegales, las aproximaciones agresivas hacia el crimen no

¹ Dua y Menkhaus (2012).

solo se condenan al fracaso, sino que pueden aumentar la desconfianza en el Estado y sus instituciones y generar más inseguridad y desigualdad.

Los residentes fronterizos son jugadores relativamente marginales en una región que experimenta el influjo reciente de cárteles de drogas, grupos criminales y vigilancia militarizada para fortalecer la seguridad en la frontera. Sin embargo, el control de los residentes locales sobre el camino fronterizo sin vigilancia en el cual viven los posiciona como los porteros en un ambiente cambiante de gobernanza disputada entre unidades del Estado, grupos criminales y habitantes locales. Los patrones de interacción de los residentes con oficiales del Estado, caracterizados por vínculos patrón-cliente y una crítica interdependencia, revelan las contradicciones de la intensificación y la militarización de la aplicación de la ley para combatir el narcotráfico y un clima de creciente violencia e inseguridad.

En el contexto de una disminución del cultivo de maíz, crisis socioeconómicas y políticas y la falta de opciones de subsistencia, los residentes de la frontera opinan que el contrabando de bienes de consumo diario puede ser ilegal, pero es socialmente aceptable y crítico para su supervivencia.² Aun así el contrabando rara vez permite a los individuos superar su profunda marginación económica, social y geográfica. A pesar de que los residentes y contrabandistas fronterizos me dijeron que las autoridades estatales eran más comprensivas ahora y les permitían trabajar, los contrabandistas continúan dependiendo del poder del Estado —y de muchos modos reforzándolo— y de la discrecionalidad de sus agentes. Los residentes de la frontera generan estrategias creativas para ganarse la vida y eludir regulaciones oficiales de comercio, pero es más probable que sus actividades beneficien a negocios formales más grandes, políticos regionales, comerciantes ilegítimos más poderosos y oficiales de la ley corruptos. Los residentes fronterizos corren los riesgos; deben evadir o sobornar a agentes del Estado y arriesgarse personalmente a robos, accidentes y arrestos. Incluso si el contrabando puede proveer

² Abraham y Van Schendel (2005).

beneficios a fracciones de la economía regional, los pequeños contrabandistas son cada vez más estigmatizados en un ambiente oficial que erróneamente amalgama a campesinos rurales, jóvenes, terroristas, delincuentes, criminales y migrantes como amenazas potenciales a la seguridad pública y nacional.³

En el contexto neoliberal, la aplicación de una lente de seguridad al comercio informal y la confluencia del contrabando con la delincuencia transnacional sirve no solo para elevar y proteger los beneficios de las elites transnacionales y empresariales con las que se contrasta, sino también para ejercer un control sobre las actividades y la movilidad de los grupos marginados.⁴ Los intereses comerciales locales y transnacionales ven a la economía informal como una amenaza a sus ganancias, incluso cuando simultáneamente dependen de ella e incluso pueden beneficiarse de ella. De acuerdo con Alain Basail Rodríguez, los intereses económicos y políticos convergen para hacer de la frontera un «espacio de criminalización y militarización en nombre de un ideal modernizante de seguridad... y un ideal moralizante de la vida social para el control, la vigilancia, el ejercicio de disciplina y la contención del flujo migratorio y la informalidad».⁵ Kedron Thomas argumenta en su trabajo sobre personas dedicadas a la piratería en Guatemala que «los marcos legales internacionales proveen un discurso sancionado para transferir culpa [del subdesarrollo y la pobreza] hacia grupos de ciudadanos considerados ilícitos y problemáticos», lo cual perpetúa la reproducción de la desigualdad y criminalización de los pobres.⁶ A su vez, los grupos marginados o aquellos que compran contrabando o productos falsificados porque no pueden permitirse comprar las versiones legítimas, o que se involucran con el contrabando o la reproducción no autorizada porque están excluidos de las oportunidades comerciales legítimas, denuncian estas desigualdades para legitimar sus prácticas.⁷

³ Véase paralelismos en Jusionyte (2015).

⁴ Aguiar (2014:3, 26); Cross (2011); Dent (2012); Thomas (2013).

⁵ Basail (2016b:15-16); Aguiar (2014).

⁶ Thomas (2013:157).

⁷ Thomas (2013); Dent (2012). Véase Cross (2011:321), sobre «populismo pirata».

El mantener una postura oficial de línea dura contra el contrabando no solo favorece la expansión del aparato de seguridad fronteriza y la exclusión y criminalización de los habitantes marginados de la frontera, sino que también esconde los modos en que el contrabando se incrusta en el comercio normal. La simbiosis del contrabando con la economía formal y las agencias de vigilancia del Estado puede ayudar a contextualizar los modos en que la aplicación de la ley, la política y los actores ilícitos frecuentemente se fusionan en las tierras fronterizas. Las categorías de «lícito» e «ilícito», así como el término «contrabando» en sí, se revelan cargados de política, ya que también se quedan cortos para explicar la compleja realidad social y económica en desarrollo. Aunque es erróneo agrupar a contrabandistas de maíz con cárteles de drogas y traficantes de personas, la lógica de la criminalización los pinta con una brocha gruesa en la lucha contra las actividades ilícitas.⁸ En contraste, el contrabando suele quedar exento de examen por parte de la política económica global. El contrabando y los cruces no monitoreados deben entenderse no como el lado oculto del comercio ni como desviaciones, sino como partes integrales de la economía formal y el Estado.⁹

Ya que los residentes fronterizos justifican el contrabando de bienes básicos a través de la frontera, me pregunté qué cosas consideraban ilícitas o inaceptables, además de ilegales. Esta conclusión examina la securitización relativamente reciente de la migración, o la caracterización de la migración como una preocupación y una amenaza a la seguridad en la frontera entre México y Guatemala para ilustrar los efectos de la construcción social y política de la ilegalidad. La securitización se refiere al modo en el que el Estado construye socialmente a la migración y a los migrantes como amenazas y lo utiliza para justificar la militarización y la vigilancia violenta de ciertos espacios y pueblos en nombre de la seguridad.¹⁰ Las acciones de México contra la migración indocumentada no han logrado que esta disminuya, pero sí que aumenten la corrupción y la violencia. El caso de la migración es ejemplar sobre lo que puede

⁸ Véase Cross (2011); Aguiar (2014).

⁹ Nordstrom (2007:21-23).

¹⁰ Véase Goldstein (2012); Ybarra (2016:195); Jusionyte (2015).

acarrear una aproximación dura a las actividades extralegales sin atender sus causas.

La ilegalización de la migración

Francisca, residente de la frontera guatemalteca, siempre tenía conversaciones aceleradas conmigo; ambas tenemos la reputación de hablar demasiado rápido. A veces tenía que detenerla para analizar las distintas palabras que usaba para describir los negocios transfronterizos. Usualmente se refería a la venta transfronteriza de bienes comunes como «negocio»; sin embargo, ocasionalmente se le escapaba la palabra «contrabando». Defendía firmemente que vender maíz, café y otros bienes de uso diario a través de la frontera sin monitoreo podía ser ilegal, pero seguía siendo negocio. Le pregunté qué consideraba ilícito cuando, de paso, mencionó la existencia de otros tipos de «contrabando ilícito». «Las drogas, las armas y los migrantes», dijo rápido y sin chistar, como si todos se agruparan naturalmente. Muchas personas explicaban que el contrabando de drogas, armas y migrantes era ilegal e ilícito (tanto política como socialmente inaceptables y riesgosos¹¹) porque el Estado vigilaba estas actividades de forma más activa, o al menos se suponía que lo hicieran. Sin embargo, Francisca nunca había reflexionado sobre por qué eran ilícitos. Esta vez lo consideró por unos pocos momentos, repitiendo respuestas similares a las de otros residentes que decían que las drogas eran malas para la salud y una mala influencia para la sociedad, mientras que las armas implicaban un riesgo palpable de daños. Pero cuando pasaban a explicar *por qué* el contrabando de migrantes era ilícito, los residentes dudaban. Francisca hizo una pausa y lanzó sus manos hacia arriba, «¡Saber!». Un residente fronterizo mexicano explicaba que las autoridades están preocupadas porque [los migrantes] «están pasando la frontera sin documentos, pero ¿quién sabe por qué los molestan? No nos molestan a nosotros. ¿Quién sabe por qué?».

¹¹ Véase Abraham y Van Schendel (2005).

Los residentes fronterizos conectan la línea dura que toma el Estado mexicano contra los migrantes indocumentados centroamericanos con una agenda de migración diseñada por los Estados Unidos. Como un migrante empleado por un albergue en Tecún Umán, Guatemala explicó: «[El anterior presidente] Bush le pidió a México ayuda para detener a los migrantes que iban al norte. México está haciendo el trabajo sucio [de los Estados Unidos]».

En contraste, los movimientos de población han sido históricamente porosos a lo largo de la frontera México-Guatemala debido a relaciones de parentesco, sociales y los movimientos de fuga y retorno de refugiados durante y después del conflicto de contrainsurgencia guatemalteca en las décadas de 1980 y 1990. Alonso, un maestro en Santa Rosa, México, recuerda: «Yo lo hice también por más o menos un año [cuando era adolescente a principios de la década de 1980] desde aquí hacia Comitán o [antes de] Brownsville [la frontera norte]. Pero casi no ganaba nada, era muy poco». En esos años no hubo problemas y muchos fronterizos llevaron todo el tiempo guatemaltecos a ciudades mexicanas cercanas por un pequeño peaje. Admitió sonriendo que era «como un coyote».¹² Sin embargo, pocos residentes expresan interés en hacer esto ahora. Alonso ha sido anfitrión de mujeres migrantes centroamericanas en su casa, que trabajaban como ayudantes domésticas hasta que juntaban suficiente dinero para continuar su viaje hacia el norte. Él les enseñaba el himno nacional mexicano, expresiones mexicanas e incluso les aconsejaba que se tiñeran el cabello. Sin embargo, ya no las transporta. Muchos residentes de la frontera relatan la historia de un comerciante local de maíz que fue arrestado por proveer transporte a migrantes centroamericanos. Hay rumores de que unos pocos residentes aprovecharon sus conexiones con empleadores en los Estados Unidos (como mayordomos) para servir como coyotes y manufacturar visas de trabajo para los migrantes durante la década de 1990, pero tales historias son rumores, o se sitúan en el pasado. Pocos hablan actualmente acerca de trabajar como contrabandistas de migrantes, en con-

¹² Véase Galemba (2012c).

traste con el grado de apertura con el que hablan del contrabando de maíz, café, frutas y vegetales, azúcar, gasolina y ropa.

Pero, ¿hay algo intrínsecamente más peligroso en un migrante que en un costal de café? De cualquier modo, parecería que la mayoría de los residentes estarían más dispuestos a ayudar a los migrantes porque empatizan con su lucha debido a sus propias experiencias en los Estados Unidos. Los residentes no solo ven que el Estado ejerce penalizaciones más duras y dirige más esfuerzos de vigilancia hacia los flujos migratorios, sino que también comienzan a repetir las caracterizaciones raciales de los migrantes como amenazas. Los residentes se refieren a los guatemaltecos como «paisanos», pero muchos temen a los hondureños y salvadoreños debido a la proliferación de atención mediática sobre la violencia de pandillas perpetrada por grupos como la mara Salvatrucha y Barrio 18 en estos países, así como en ciudades fronterizas como Tapachula y Tecún Umán. Algunos residentes de la frontera asocian las historias de violencia pandillera con personas de El Salvador y Honduras, a quienes nombran «maras», a pesar del hecho de que estas pandillas tienen sus orígenes en las calles de Los Ángeles y fueron posteriormente deportadas y transnacionalizadas a Centroamérica.¹³ Había poca evidencia en esos momentos de que estas pandillas tuvieran una presencia significativa en esta región particular. Sin embargo, facciones relacionadas con los Zetas y el cártel de Sinaloa estaban empezando a expandirse, y Huehuetenango y Frontera Comalapa se habían convertido en ejes territoriales para el negocio de las drogas.¹⁴ Como hace notar Jennifer Burrell, el término «mara» ha llegado a unificar, y pasar por alto, tipos variados de criminalidad a pesar de sus verdaderas distinciones; el miedo que inspira la etiqueta llega a justificar aproximaciones duras y violentas contra el crimen para lidiar con la inseguridad.¹⁵

Unos cuantos hondureños y salvadoreños residen actualmente en comunidades fronterizas al verse frustrados en su viaje al norte. Encontraron trabajo como cargadores para los contrabandistas o se casaron

¹³ Zilberg (2007; 2011); Burrell (2013:143).

¹⁴ Dudley (2010; 2013).

¹⁵ Burrell (2013:143).

con personas de la región. Debido a las presiones sobre la tierra y el miedo a la delincuencia, Santa Rosa decidió expulsar a los centroamericanos de su comunidad en 2007. No pudieron ejecutar la expulsión, pero muchos discutían que los centroamericanos eran potencialmente peligrosos porque venían de «países conflictivos». Las redadas a migrantes indocumentados se han vuelto más frecuentes en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, así como en cantinas en el cercano Camojá, Guatemala. Un pastor local que deseaba abrir un albergue para migrantes en Frontera Comalapa se enfrentó a resistencia e incluso amenazas de las autoridades locales y residentes, quienes asociaban a los migrantes con la criminalidad.

A pesar de que muchos residentes culpan a los migrantes por las percepciones de inseguridad en aumento, antes de la intensificación de los esfuerzos de México por contener el narcotráfico y a los migrantes a finales de la década de 1990 y la década siguiente, ninguno suponía un riesgo importante para las poblaciones fronterizas. Las drogas y los migrantes pasaban con mínimo escándalo entre otros flujos. Los residentes notaron que el problema con los estupefacientes radicaba en que entre la población de los Estados Unidos había altos índices de adicciones. Sin embargo, en años recientes México se ha ido comprometiendo con una estrategia militar para la contención de los flujos al norte de drogas, bienes ilícitos y migrantes indocumentados, y el tránsito por México se ha vuelto paulatinamente más difícil. Eso ha propiciado que más migrantes y más drogas se queden en el país, especialmente en regiones fronterizas, lo cual justifica un incremento en la vigilancia. Cuando visité la frontera en 2008 fue la primera vez que escuché preocupaciones de que los jóvenes se involucraran en las drogas. Entre 2002 y 2008, el uso de cocaína en México aumentó de 1.4% a 2.4% de la población.¹⁶

Los Estados moldean las formas que adquiere el contrabando a través del poder para regular, facilitar o criminalizar ciertos flujos.¹⁷ Las medidas de seguridad aumentadas llevaron a los migrantes a depender

¹⁶ Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (2012:2), citando a la Secretaría de Salud (2009:173).

¹⁷ Andreas (2000:23).

más de coyotes que sabían cómo evadir o sobornar a agentes del Estado, pandillas y otros actores criminales. Los migrantes en el sur de México encontraron la forma de eludir los puntos de revisión en las carreteras al trasladarse a bordo de un tren de carga llamado «La Bestia», en el que arriesgaban sus vidas y su seguridad con tal de migrar al norte.¹⁸ Cuando las preocupaciones del gobierno estadounidense sobre una «crisis» de migrantes en 2014 llevaron a México a concentrar esfuerzos de vigilancia en el tren, los migrantes optaron por rutas más riesgosas y las cuotas de coyotaje a su vez aumentaron de 6 000-8 000 dólares a 9 000-10 000 por el cruce.¹⁹ La incapacidad para reformar sustancialmente el sistema policiaco y judicial significa que el aumento en la seguridad fronteriza también se traduce en corrupción, la cual actúa, según Peter Andreas, como «un tipo informal de impuesto», de modo que los sobornos se elevan con la escalada de seguridad.²⁰

Las respuestas al reto de la seguridad en México y la corrupción policiaca han incluido reformas legales y profesionalización, «militarización [de la policía], consolidación de las fuerzas policiacas existentes y la creación de nuevas fuerzas».²¹ Una vigilancia basada en la disciplina, que involucra a líderes militares,²² así como la militarización en la vigilancia de drogas y migrantes, han sido contraproducentes y han creado más inseguridad entre la población y una mayor motivación para migrar al norte. Las reformas dirigidas a la función de policía han hecho intentos por medio de aumentos salariales y beneficios, así como de programas de entrenamiento y monitoreo; pero las medidas de rendición de cuentas no han sido prioridades; la falta de cambio institucional socava la efectividad de las reformas, y la corrupción y falta de confianza pública en la policía continúan siendo serios retos.²³ Específicamente, una

¹⁸ Véase Nazario (2014); Kovic (2008).

¹⁹ Isacson, Meyer y Morales (2015:22).

²⁰ Andreas (2011:8).

²¹ Sabet (2012:23).

²² Sabet (2012:38), basándose en Galán (2011), nota que en 2011 más de la mitad los estados mexicanos tenían a líderes militares, en funciones o retirados, a cargo de sus posiciones más altas de seguridad.

²³ Sabet (2010:252, 267; 2012:20-21).

cultura de reglas informales y políticas paternalistas siguen guiando la vigilancia, haciendo difícil que las reformas se institucionalicen y que se traduzcan en la práctica.²⁴

Dawn Paley señala críticamente cómo las reformas policiales bajo la Iniciativa Mérida han fallado en la erradicación de la corrupción.²⁵ Los esfuerzos por especializar, descentralizar y profesionalizar la labor policial distanciaron a las unidades especializadas de los modos de autoridad central y de rendición de cuentas, lo que contribuyó a la escalada de la violencia y las violaciones de los derechos humanos.²⁶ Asimismo, afirma que las reformas a la política según la Iniciativa Mérida para mejorar los organismos de seguridad y reformar el sistema judicial han avanzado de la mano con los componentes de esta iniciativa de militarización y contrainsurgencia, a favor de establecer el orden público y asegurar un clima que conduzca a la inversión transnacional en vez de mejorar la rendición de cuentas democrática.²⁷ La militarización puede ayudar a disciplinar a la policía, pero hace poco para reformarla o hacerla responsable.²⁸ Adicionalmente, sin poner atención en problemas más amplios que afectan la gobernanza, o en un sistema de justicia criminal inadecuado y sobrecargado, o la complicidad entre el crimen organizado y los políticos a quienes responde el liderazgo policial y por quienes son nombrados, la reforma a la seguridad está en riesgo de ser en gran parte ornamental.²⁹

Mientras que México, con apoyo de los Estados Unidos, militariza la frontera sur para combatir el narcotráfico y los migrantes indocumentados, la violencia, la inseguridad y los abusos a los derechos humanos han aumentado. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), México depende fuertemente del ejército para estar al frente de la guerra contra

²⁴ Sabet (2012:23-24).

²⁵ Paley (2014).

²⁶ Paley (2014:140).

²⁷ Paley (2014:85-86, 89).

²⁸ Galán (2011), citando a Ernesto López Portillo Vargas, director fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (*Insyde*).

²⁹ Sabet (2010:266); Bargent (2016).

las drogas; la Comisión de Derechos Humanos de México ha recibido 9 000 reportes de abusos de parte de militares desde 2006.³⁰ La tasa de asesinatos en México se elevó 50% por año desde 2008 hasta 2010; las violaciones a los derechos humanos contra migrantes escalaron y los esfuerzos por reformar el sistema de justicia criminal continúan siendo insuficientes.³¹ En 2015, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, México tiene el segundo lugar en tasa de impunidad entre los 59 países evaluados.³² Solo 7% de los crímenes se reportan, de los cuales apenas 4.46% resultan en sentencias.³³ Si se consideran los crímenes sin reportar, esto significa que menos de 1% de los crímenes en México son castigados.³⁴ Pocos ciudadanos confían en las autoridades, y un sistema de justicia inadecuado con instituciones del Estado sin fondos suficientes impide el acceso a la justicia.³⁵ El Congreso de los Estados Unidos ha establecido condiciones de derechos humanos en porciones de la asistencia de la Iniciativa Mérida, pero la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2017 no contiene tales condiciones.³⁶

En 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que, en los últimos años, los migrantes son más susceptibles a sufrir desapariciones, secuestros, extorsiones, agresiones, asesinato y robo perpetrado por pandillas, policía y oficiales de migración por igual.³⁷ Los abusos han continuado a pesar de que la legislación mexicana descriminalizó la migración en 2008 y pretendía mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes a través de la Ley de Migración de 2011. Pese a ciertas reformas, la estructura institucional del sistema de migración de México permanece sin cambios con «el INM manteniendo

³⁰ HRW (2015). Debido a que la jurisdicción para la investigación de estos reclamos es restringida al sistema de justicia militar, es todo un reto pedirle cuentas al ejército.

³¹ Paley (2014:114); HRW (2015).

³² Le Clercq, Rodríguez y Lara (2016).

³³ Le Clercq, Rodríguez y Lara (2016), resumen ejecutivo.

³⁴ Le Clercq, Rodríguez y Lara (2016), resumen ejecutivo.

³⁵ Le Clercq, Rodríguez y Lara (2016:25); Bargent (2016).

³⁶ Seelke y Finklea (2017:1).

³⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013:48), citado en HRW (2015).

la mayor parte de las responsabilidades políticas y operativas».³⁸ Las causas fundamentales que motivan la migración, como pobreza, violencia política y económica, inseguridad e impunidad en México y Centroamérica, así como las demandas económicas y sociales de los Estados Unidos de una fuerza laboral migrante, continúan siendo inadecuadamente tratadas.

En 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México obtuvo el octavo lugar en el número de abusos a derechos humanos reportado al Ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-México, junto con el ejército y la policía federal, los cuales tuvieron incluso más abusos reportados.³⁹ De acuerdo con un informe de la Casa del Migrante en Saltillo, México, en la mayor parte de las denuncias los abusos contra migrantes eran atribuidos a la policía federal, incluso más que al cártel de los Zetas y las pandillas.⁴⁰ Como ilustran los contrabandistas de gasolina en el Capítulo 7, la adición de la nueva PEF a las fuerzas policíacas no representó más vigilancia, sino otra unidad a sobornar. El contrabando de gasolina no cesó cuando llamó la atención del Estado; en cambio, los oficiales exigieron mayores sobornos. De modo similar, un comerciante al sur de México le dijo al periodista Manu Ureste: «Mientras más retenes, más corrupción».⁴¹ La securitización de la migración empoderó más a los coyotes y a los oficiales corruptos.

México está sufriendo recientemente los efectos de una «crisis» migratoria proclamada por los Estados Unidos, después de que miles de menores centroamericanos llegaran a la frontera entre los Estados Unidos y México en el verano de 2014. Los gobiernos de ambos países y los de Centroamérica buscaron atender este problema mejorando la seguridad de sus fronteras y centrando la atención en las causas por medio del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. En 2014, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto implementó el Programa Frontera Sur, que anunciaba «proteger y salvaguardar los

³⁸ Alba y Castillo (2012:15).

³⁹ Isacson, Meyer y Morales (2014:32).

⁴⁰ Ureste (2014*b*); véase Galemba (2014).

⁴¹ Ureste (2014*a*); véase Galemba (2014).

derechos humanos de los migrantes», pero incluía el envío de unidades de seguridad adicionales a la frontera sur, incluidos policías militares, federales, estatales y municipales, así como más de 300 miembros de la gendarmería, «una nueva fuerza de policía militarizada con el enfoque de proteger los intereses económicos estratégicos». ⁴² El Departamento de Estado de los Estados Unidos planea proveer 86 millones de dólares al fondo de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley para impulsar un programa encargado de instalar más puestos de control y bases navales y mejorar la tecnología a lo largo de la frontera sur de México. ⁴³ El número de detenciones de menores centroamericanos en la frontera México-Estados Unidos se desplomó 45% del otoño de 2014 a septiembre de 2015, pero las deportaciones de menores centroamericanos en México aumentaron 67%, lo que desplaza el asunto pero sin resolverlo. ⁴⁴ Para el verano de 2015, el número de detenciones de menores en la frontera México-Estados Unidos comenzaba a aumentar de nuevo. ⁴⁵ Desde 2012 el índice de crímenes cometidos contra migrantes en estados fronterizos se ha elevado 200%. ⁴⁶ En 2014, más de la mitad de estos actos eran cometidos por organizaciones criminales, pero el siguiente gran culpable era la policía federal, responsable de 20% de los abusos contra migrantes, de acuerdo con la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes. ⁴⁷

Para abordar las causas de la migración en Centroamérica —es decir, la exclusión social, la pobreza y la inseguridad—, los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el vicepresidente en ese momento de los Estados Unidos Joe Biden, se encontraron en la Ciudad de Guatemala en marzo de

⁴² Ureste (2015); Carlsen (2015).

⁴³ Lakhani (2015); Isacson, Meyer y Smith (2015:16). El Pentágono provee asistencia adicional, pero en general las cantidades «destinadas, asignadas y gastadas» quedan de alguna manera poco esclarecidas, aunque hay consenso en que el financiamiento de los Estados Unidos ha aumentado (Isacson, Meyer y Smith 2015:16).

⁴⁴ Isacson, Meyer y Smith (2015:7); también Sorrentino (2015).

⁴⁵ Isacson, Meyer y Smith (2015:32).

⁴⁶ Ureste (2017).

⁴⁷ Tourliere (2015).

2015 para apoyar la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.⁴⁸ Los líderes de Centroamérica solicitaron mil millones de dólares y el Congreso de Estados Unidos asignó 750 millones de dólares en diciembre de 2015.⁴⁹ El plan contiene objetivos de desarrollo y seguridad que van desde la inversión en salud y educación, hasta la expansión de la vigilancia policiaca, el apoyo a microempresas, la facilitación del comercio local y la estimulación de alianzas públicas-privadas.⁵⁰ Busca involucrar a los sectores privado y público, así como a la sociedad civil, aunque el proceso no se especifica.

El plan es amplio e incluye inversión en oportunidades económicas y educativas en áreas marginadas y el apoyo a iniciativas locales, desmantelamiento de barreras al comercio al interior de Centroamérica, la profesionalización del servicio civil y reformas a los sistemas judiciales y policiacos. Sin embargo, el resumen de la declaración conjunta también se lee como una especie de larga lista de temas,⁵¹ lo que hace difícil discernir qué políticas se priorizarán, especialmente si hay aspectos en conflicto. Persisten preguntas sobre quién tendrá poder de decisión sobre los tipos de iniciativas de seguridad y desarrollo que se implementarían y de qué manera. ¿Se facilitará el comercio para todos o solo para inversionistas y desarrolladores, de acuerdo con lo que establecen el NAFTA y el CAFTA? La historiadora y experta en Honduras, Dana Frank, advierte:

El contenido actual [del plan] solo exacerbará los problemas, ya que... premia a la elite y los intereses transnacionales corporativos cuyas políticas y prácticas han producido la crisis de pobreza y seguridad que la propuesta ofrece atender.⁵²

Los críticos señalan el modo en que se interpreta el desarrollo como la implementación de más zonas de libre comercio, el aumento en la

⁴⁸ Departamento de Estado de los Estados Unidos (2015).

⁴⁹ Esto aún representa un gran salto en cuanto al financiamiento para la región (García 2016).

⁵⁰ Departamento de Estado de los Estados Unidos (2015).

⁵¹ Departamento de Estado de los Estados Unidos (2015).

⁵² Frank (2015).

privatización y la disminución de protecciones a los trabajadores, siendo que todas estas políticas han aumentado las ganancias de las corporaciones transnacionales, y a la vez han erosionado los modos de vida de los pobres y aumentado la inseguridad.⁵³ El plan también apoya la expansión, en vez de la revisión, de ciertos enfoques de seguridad. Dado que dichas políticas han agravado la inseguridad que hace que la gente huya, esto debería generar dudas acerca de aceptar el plan tal como se presenta. Los Estados Unidos no han logrado reformar su sistema de inmigración. Los impulsores de la migración permanecen: la demanda de mano de obra barata, las conexiones familiares y los mecanismos insuficientes para visas legales. El plan procede junto con el aumento de la financiación para asegurar las fronteras de Estados Unidos-México y México-Guatemala, lo que solo ha aumentado la inseguridad, las violaciones de los derechos humanos y el poder de los traficantes de personas.

Dada la fama de los líderes de Guatemala y Honduras de reprimir a los disidentes de los modelos dominantes neoliberales de seguridad y economía, queda por verse si la Alianza para la Prosperidad marcará una nueva ruta hacia la inclusión social y la seguridad pública, o si constituye otro paso hacia el neoliberalismo securitizado o el uso de las fuerzas de seguridad, el ejército y la policía para asegurar inversiones excluyendo a los habitantes locales.⁵⁴ Los críticos sospechan lo segundo; la mayor parte de los fondos propuestos fueron asignados a integración del

⁵³ Main (2015).

⁵⁴ Desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, Honduras se ha vuelto uno de los países más violentos del mundo. Zelaya había estado haciendo retroceder las reformas económicas neoliberales y frenando la privatización. La actual administración ha sido acusada de colusión directa con traficantes aun cuando Honduras afirma su compromiso de combatir las drogas y el crimen. No solo se ha militarizado a la policía, lo que ha resultado en un aumento en los abusos a los derechos humanos, sino que también se ha empleado violencia para facilitar la expansión del capital transnacional. Rights Action reportó en el Valle del Aguán, entre 2010 y 2013, ochenta y ocho asesinatos de miembros de las asociaciones de campesinos perpetrados por el ejército y la policía hondureños en coordinación con las plantaciones de palma de aceite que buscan desplazarlos (Bird 2013). En Guatemala, el gobierno ha justificado estados de sitio y militarización de la policía para sofocar las protestas de campesinos en contra de la extracción de recursos por parte de compañías extranjeras (por ejemplo, véase Nolin y Stephens 2010).

comercio y la seguridad, con 400 millones de dólares en el primer rubro y 300 millones de dólares en el segundo, bajo la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés).⁵⁵ Los fondos de CARSI en 2016 duplicaron los de 2015, aun cuando CARSI reintrodujo la policía militarizada a Guatemala y aumentó las violaciones a los derechos humanos.⁵⁶ Los derechos humanos pasan a un segundo plano, con solamente cuatro menciones en el plan de 25 páginas preparado por El Salvador, Honduras y Guatemala, y se enfocan en gran medida en los derechos de los menores migrantes, de interés para la seguridad fronteriza de los Estados Unidos.⁵⁷ No se menciona que el equipar a gobiernos corruptos, en los cuales la inseguridad se propaga por la confabulación entre actores ilícitos y elementos del Estado, puede exacerbar el problema.⁵⁸ Las reformas de buena gobernanza dependen en gran medida de los líderes centroamericanos, más que de unidades independientes e internacionales de monitoreo como la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU en Guatemala, la cual obtuvo cierto éxito en la batalla contra la impunidad en ese país a pesar del hecho de que las figuras políticas en Guatemala y Honduras se han asociado con los problemas mismos de la pobre gobernanza.⁵⁹

La securitización de la migración tampoco desalienta a los migrantes; es una potencial ganancia inesperada para organizaciones criminales y de drogas, las cuales pueden capitalizar los pagos por el rescate de familiares en los Estados Unidos y aprovecharse de la desesperación de los migrantes.⁶⁰ El tráfico de drogas y de personas solían ser empresas separadas, pero la securitización de la migración produjo lo que el Estado temía. Las redes de contrabando de drogas y de migrantes se van

⁵⁵ González (2015a).

⁵⁶ González (2015a); MAWG (2013).

⁵⁷ Banco Interamericano de Desarrollo (2014); véase también Frank (2015).

⁵⁸ La mención del abuso de derechos humanos se refiere a las reparaciones a las comunidades guatemaltecas que sufrieron abusos durante la construcción de la Represa Chixoy. Esto es mencionado aisladamente de los continuos abusos en nombre del desarrollo transnacional (por ejemplo, véase Nolin y Stephens 2010).

⁵⁹ Main (2015).

⁶⁰ Paley (2014:148).

cruzando cada vez más a medida que los migrantes son forzados a llevar drogas a cambio de pasaje seguro. Los coyotes deben pagar a los cárteles de drogas para tener acceso a las rutas o los migrantes buscan a los cárteles y otros empresarios violentos para cruzar las fronteras.⁶¹ Mientras que el Estado mexicano ponía en la mira a los líderes de los cárteles, la fragmentación generó una mayor competencia, violencia y poca predictibilidad. Este enfoque ha llevado al «efecto cucaracha»: en tanto que los cárteles son señalados como blancos por el ejército, las operaciones y la violencia asociada surgen en otros lugares, frecuentemente con más capas de intermediación, haciéndolas más difíciles de erradicar.⁶² Noelle Brigden hace notar cómo este panorama incierto, en el que el control territorial cambia constantemente, llevó a «coyotes [relativamente confiables]... a desertar de sus clientes, quebrando impredeciblemente sus contratos y vendiendo su carga humana a otro transportista potencialmente poco confiable».⁶³ Los grupos criminales como los Zetas se han beneficiado de la vulnerabilidad de los migrantes a medida que diversifican sus actividades para incluir secuestro, tráfico humano, comercio ilícito y extorsión.⁶⁴ Las organizaciones criminales han creado cinturones de control en el territorio mexicano y exigen cuotas para pasar, complicando aún más el paisaje de inmovilidad y vulnerabilidad.⁶⁵ Los esfuerzos militarizados a través de la Iniciativa Mérida también han fallado en disminuir el tráfico de drogas y la violencia relacionada. En la primera mitad de 2015, el Departamento de Estado de los Estados Unidos encontró que 90% de la cocaína en ruta hacia los Estados Unidos era transportada a través de Centroamérica y México, en comparación con 80% que se reportaba en 2012.⁶⁶

⁶¹ Véase Slack y Whiteford (2011).

⁶² Villafuerte (2014).

⁶³ Brigden (2016:3).

⁶⁴ Paley (2014:148).

⁶⁵ Paley (2014:149).

⁶⁶ Departamento de Estado de los Estados Unidos (2013; 2016:182); Lohmuller (2016). De acuerdo con Dudley (2010:63), la presión sobre el tráfico de drogas en México ha intensificado la violencia en Centroamérica.

Lo ilícito y la guerra contra las drogas

¿Por qué los contrabandos de drogas y migrantes se vinculan cada vez más y se han vuelto más lucrativos y violentos? Las respuestas residen en gran parte en los modos de vigilancia que generaron su propia pesadilla: la securitización de la migración y la militarización de la guerra contra las drogas. Estas estrategias proceden sin reformas policíacas, judiciales y militares efectivas; la reconsideración de reformas neoliberales que hacen que grandes porciones de la población queden vulnerables y sacrificables; el modelo de desarrollo exclusivo del neoliberalismo securitizado adoptado por México, los Estados Unidos y Guatemala que beneficia desproporcionadamente a las elites transnacionales y criminaliza a la oposición; así como la corrupción y la impunidad arraigadas. Adicionalmente, los Estados Unidos no ha logrado frenar su demanda de drogas y trabajo barato o establecer un control de armas efectivo. En 2010, casi 80% de las armas de asalto confiscadas en México fueron rastreadas hasta los Estados Unidos.⁶⁷ Dado que ver la migración indocumentada como ilícita es históricamente reciente y aún sorprendente para muchos residentes de la frontera, el examinar la ilegalización de la migración ayuda a ilustrar el proceso social, político y económico mediante el cual una actividad o grupo de personas se representan como ilícitos con los efectos materiales consecuentes.

Es más difícil para los residentes de la frontera, así como para los responsables de formular políticas en México, Guatemala y los Estados Unidos, cuestionar la ilegalización de las drogas. Sin embargo, como denota Peter Andreas, las primeras funciones de la frontera con los Estados Unidos tenían más que ver con los controles de aduana; las drogas y los migrantes no eran una preocupación.⁶⁸ Paul Gootenberg pone en contexto histórico la criminalización de la cocaína y demuestra cómo alguna vez se trató de un comercio relativamente pequeño, pacífico y legal restringido a una zona remota de los Andes y frecuentemente usado

⁶⁷ COHA (2011).

⁶⁸ Andreas (2003:86).

en varios países para fines médicos como anestesia.⁶⁹ Para poblaciones fronterizas, el contrabando, ya sea de comida, medicina o drogas, ha sido aceptado por mucho tiempo como un hecho histórico inevitable.⁷⁰

Las drogas se volvieron una preocupación para los defensores de la moral en los Estados Unidos a principios del siglo xx, pero entonces tenían poco poder para influir en la política mundial sobre el tema de las drogas, hasta que se convirtieron en un poder global dominante tras la Segunda Guerra Mundial. El contexto de la Guerra Fría permitió a los Estados Unidos criminalizar la cocaína e influenciar a los gobiernos latinoamericanos para cumplir con mandatos de erradicación. La criminalización de la cocaína en la década de 1950 fue lo que inició una «cultura y circuito ilícitos de la producción de la cocaína», a medida que se difundía por Sudamérica y el Caribe. La declaración del presidente Nixon de los Estados Unidos sobre una Guerra contra las Drogas en 1969 institucionalizó la estrategia hemisférica de línea dura para contener el tráfico de sustancias, lo cual solamente lo volvió más ilícito, violento, lucrativo y difícil de contener a medida que los traficantes se hacían más sofisticados, el inventario y las ganancias se elevaban, los precios en la calle disminuían y la geografía del tráfico migraba al norte.⁷¹

Al tiempo que los Estados Unidos militarizaban la guerra contra las drogas, el epicentro del negocio de las drogas se fue moviendo más cerca de este país.⁷² La persecución de traficantes chilenos en los setenta en coordinación con el gobierno golpista de Pinochet desplazó el tráfico a Colombia, y la militarización de las rutas aéreas de Colombia y el Caribe en las décadas de 1980-1990 movió el tránsito a Centroamérica y México.⁷³ Para finales de la década de 1990, más de 90% de la cocaína fluía hacia los Estados Unidos vía México.⁷⁴ La ilegalización de las drogas generó más criminalidad y violencia, e hizo poco por disminuir el merca-

⁶⁹ Gootenberg (2012:159, 161); véase también la crítica en Paley (2014).

⁷⁰ Campbell (2009:31), basándose en Dugan (1997).

⁷¹ Gootenberg (2012:162, 163).

⁷² Gootenberg (2012:162, 163).

⁷³ Gootenberg (2012:165).

⁷⁴ Gootenberg (2012:172).

do de drogas, cuyo suministro se elevó rápidamente a más de 100 veces con respecto a los niveles de principios del siglo xx.⁷⁵

Recientemente, los líderes latinoamericanos y críticos estadounidenses, incluido el antiguo fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, han pedido la descriminalización y una reconsideración de la militarización como vía para controlar el problema de las drogas. A pesar de que los líderes mexicanos y guatemaltecos, incluidos los pasados presidentes Calderón y Pérez Molina, se pronunciaron a favor de una reforma para las drogas, ambos gobiernos continúan recibiendo fondos, entrenamiento y equipo para persistir en sus estrategias militarizadas.⁷⁶

Los residentes perciben cada vez más el contrabando de drogas y migrantes como ilícito y peligroso a medida que el Estado pone un el foco mediático en su combate; sin embargo, también reconocen los huecos en la retórica del Estado. Los residentes subrayaban que, a pesar de que evaden los requisitos del comercio legal cuando contrabandean bienes como maíz, café, azúcar y gasolina, estas actividades no eran ilícitas porque las unidades de policía estatales no las perseguían activamente. De acuerdo con los residentes, el mandato de la policía y el ejército, sin importar la división actual de responsabilidades, era llevar a cabo vigilancia contra el tráfico de armas, drogas y migrantes indocumentados, así como bienes robados, como automóviles. Los residentes resentían la interferencia de los oficiales en sus negocios, pero estaban abiertos a que el ejército y la policía hicieran, como ellos lo ponían, «su trabajo». Las evaluaciones locales eran frecuentemente contradictorias; por ejemplo, el ejército a veces entraba en la ruta, según los residentes fronterizos, para buscar drogas, armas y migrantes indocumentados, pero no a interferir en el negocio. El ejército justifica su presencia para proporcionar seguridad. Sin embargo, algunos residentes se dieron cuenta de que los militares, como un señor que me dijo: «no paraban las drogas tampoco. Ellos traen drogas también. Vino el ejército...y detrás las drogas». Explicaba cómo los traficantes conducen por la carretera fronteriza justo detrás del

⁷⁵ Gootenberg (2008:306, 313-314), citado en Gootenberg (2012:160).

⁷⁶ Gootenberg (2012:178); MAWG (2013).

vehículo militar que los escolta. La gente pensaba que mientras el ejército se dedica a combatir las drogas algunos de sus miembros están trabajando directamente con los criminales. Relataron cómo los traficantes de drogas pasaban tranquilamente por los puestos de control de las autopistas al estar involucrados con los jefes militares. Cuando son detenidos, simplemente llaman a sus contactos y se les permite seguir. Los comerciantes de la frontera usualmente consideraban al ejército mexicano menos fácil de corromper que la policía. Sin embargo, en muchas instancias se pensaba que los militares estaban coludidos directamente con los narcotraficantes. Entonces, proponer la solución a la inseguridad y la violencia con base en un aumento de la inversión en el ejército y en la militarización de la policía es profundamente problemático cuando «las líneas entre el Estado y grupos criminales son difusas».⁷⁷ Como Dawn Paley menciona en *Drug War Capitalism* (traducido en 2018 como *Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo*), el influjo masivo de la policía federal y el ejército en Juárez en 2008 para contener la violencia por las drogas fue seguido de una escalada en las tasas de homicidio; cuando se aplicó esa misma estrategia en Acapulco, ocurrió algo similar y la ciudad se convirtió en la más peligrosa de México en 2012.⁷⁸

Las mismas ratas

El empleo de una respuesta estatal militarizada para restringir las actividades extralegales supone que hay una fuerte división entre el Estado y los actores ilegales. Sin embargo, el Estado ha existido históricamente en una tensa simbiosis con los actores extralegales en esta región. Los residentes frecuentemente se refieren a la policía como «rateros», o bien «ratas», dando a entender que son ladrones o incluso llamándolos «maras», el término que utilizan para referirse a las pandillas. Como escribe Michael Taussig sobre la confusión entre los actores violentos

⁷⁷ Paley (2014:28).

⁷⁸ Paley (2014:111, 125).

extralegales y estatales durante la «limpieza» en Colombia: «¿No son [los paramilitares] solo otra pandilla, de hecho la más violenta en el pueblo, cuyo código (si se le puede llamar así) se ha fundido con el código de la «ley y el orden»?... Tal vez así es en todo el mundo ahora, una jerarquía de pandillas, algunas legales y otras no». ⁷⁹ Para combatir ostensiblemente el crimen y la violencia de las drogas, el Estado comienza a mimetizarse con los criminales, empleando sus propias acciones criminales o incluso utilizando grupos criminales en nombre de la seguridad. ⁸⁰

La interdependencia ha caracterizado históricamente las relaciones entre grupos armados ilícitos y el Estado en México y Guatemala, donde unidades clandestinas, paramilitares o escuadrones de la muerte han sido usados para hacer el trabajo sucio del Estado sin asociación directa. ⁸¹ En México, muchos policías continúan «dobleteando... en organizaciones criminales y el Estado»; feroces organizaciones criminales como los Zetas fueron formadas a partir de desertores de fuerzas especiales para protección y operaciones del cártel del Golfo antes de su separación en 2010. ⁸² Howard Campbell cuestiona el término «cártel» porque no solo implica que las organizaciones dedicadas a las drogas son estáticas y tienen organización jerárquica, sino que también ignora cómo «el crimen organizado y el gobierno oficial están tan cercanamente entretejidos». ⁸³ Las revelaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes universitarios de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, ilustra la confabulación entre oficiales del gobierno, la policía y elementos criminales. El alcalde de Iguala y su esposa, quien tiene vínculos familiares con el cártel criminal Guerreros Unidos, fueron descubiertos como los orquestadores de las desapariciones en confabulación con el cártel.

⁷⁹ Taussig (2003:112, 158).

⁸⁰ Schneider y Schneider (2008:366). Véase también Zilberg (2011); Taussig (2003); Aretxaga (2003).

⁸¹ Véase también Sluka (2000).

⁸² Paley (2014:28).

⁸³ Campbell (2009:7, 19).

La atmósfera de guerra contra las drogas aumenta una historia de violencia del Estado contra los jóvenes y los pobres, simbolizada vívidamente por la masacre orquestada por el Estado de estudiantes en Tlatelolco, México, en 1968. Cuando se buscó a los estudiantes desaparecidos de Iguala en 2014, el descubrimiento de una gran cantidad de fosas que no pertenecían a estos estudiantes sacó a relucir el problema masivo de las desapariciones, la impunidad y la confabulación oficial en México, donde más de 40 000 mexicanos y 70 000 migrantes han desaparecido desde 2006.⁸⁴ Las investigaciones incompletas y la evidencia perdida caracterizan las búsquedas. Jonathan Gibler afirma que este caso demuestra que el término «corrupción» ya no es el adecuado, porque lo que existe ahora es una «fundición completa entre las fuerzas policiacas y los gobiernos locales y el crimen organizado... y la confluencia de dos formas de violencia: la clásica violencia de represión del Estado y las más o menos nuevas formas de narcobrutalidad».⁸⁵ La investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló inconsistencias en el reporte oficial del Estado, lo cual podría derivar en mayores niveles de complicidad entre pandillas, el tráfico de las drogas, el ejército y las policías federal y local.

En Chiapas, Víctor Hugo López, anterior director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), reportó que el pretexto de la guerra contra las drogas reintrodujo la presencia del ejército en comunidades indígenas, las cuales recientemente habían experimentado una disminución en la militarización del conflicto zapatista.⁸⁶ La criminalización ha avanzado junto con la militarización a medida que Chiapas ha atestiguado el regreso de formas legalizadas de tortura, detención y desaparición.⁸⁷ A pesar de la adhesión oficial a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos e indígenas, han surgido conflictos entre las industrias extractivistas extranjeras y las comunidades

⁸⁴ Paley (2014:25).

⁸⁵ Gibler (2014).

⁸⁶ Flores (2014).

⁸⁷ Flores (2014).

indígenas a lo largo del estado.⁸⁸ En enero de 2015, en la reserva de Agua Azul, las policías federal y estatales expulsaron por la fuerza a campesinos que defendían su territorio.⁸⁹ De modo similar a los residentes de la frontera, el ejido San Sebastián Bachajón puso una caseta para cobrar a los turistas su entrada a las cercanas cascadas de Agua Azul.⁹⁰ Para contrarrestar su resistencia, el municipio y la policía organizaron «grupos de choque» para generar miedo y violencia.⁹¹

Los residentes de la frontera entienden la intersección entre el aumento en la penetración del capital transnacional en la región, la securitización y su propio despojo. Por ejemplo, el Plan Puebla Panamá (PPP), apuntalado por el expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006), era una iniciativa regional para conectar a los estados mexicanos sureños más pobres con los países centroamericanos en un esfuerzo de desarrollo que esencialmente convertiría la región en un corredor para el libre comercio.⁹² La propuesta provocó fuertes protestas de observadores de derechos humanos, comunidades indígenas y ambientalistas, lo que llevó oficialmente a su cancelación. De hecho, sin embargo, muchos de los proyectos, desde la construcción de presas hidroeléctricas a la extracción de recursos y expansiones de carreteras, continuaron a medida que el gobierno disipaba las protestas al no llamar la atención hacia la existencia de un proyecto unificado. Debido a la impopularidad del PPP, muchos proyectos avanzaron sin mencionarlo como parte de la formulación; asimismo, su ejecución ha estado rodeada de secretos y exclusión.⁹³ El plan se revivió con unos pocos cambios bajo el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón en 2009. Meramente recibió un nuevo apodo, el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica).⁹⁴ Al discutir las posibilidades del PPP, Fredy,

⁸⁸ Flores (2014).

⁸⁹ Dorset Chiapas Solidarity (2015).

⁹⁰ Dorset Chiapas Solidarity (2015).

⁹¹ Dorset Chiapas Solidarity (2015).

⁹² Pickard (2002).

⁹³ Tenuto-Sánchez (2014); Pickard (2003).

⁹⁴ Carlsen (2009).

expresidente comunitario de El Nance, México, expresaba dudas. En la misma discusión él mostraba preocupación acerca de las propuestas para regularizar el cruce no monitoreado instalando personal de seguridad. De acuerdo con Fredy: «Con el PPP viene negocio... Pero si viene, con [el PPP] vendrá la aduana, la migración, judiciales... [Es] seguridad por ellos [los empresarios]. No es seguridad, es injusto... Puros empresarios, los ricos se van a beneficiar, nosotros no... No vamos a hacer nada de beneficio... Nada para nosotros. Vamos a ser sus basureros». En Chiapas, los planes de integración económica regional han ido de la mano con iniciativas de seguridad que han puesto como objetivo el asegurar las inversiones transnacionales, la extracción de recursos y las carreteras y zonas económicas especiales para facilitar el transporte de recursos a mercados internacionales, contribuyendo a un clima de neoliberalismo securitizado o militarizado.⁹⁵

En Guatemala, el regreso del ejército al reino de la seguridad pública para hacerse cargo de la lucha contra las drogas es especialmente preocupante por tratarse de un país que recientemente salió de un conflicto de brutal contrainsurgencia y en el que la impunidad de los tiempos de guerra y los actuales actos de violencia son extremadamente altos.⁹⁶ Los Estados Unidos cortaron su financiamiento al ejército guatemalteco en la década de 1990 debido a abusos a los derechos humanos. A pesar de ello, las condiciones se han hecho más holgadas y estas restricciones no aplican para fondos del Departamento de Defensa, del cual se otorgaron 27.5 millones de dólares a las fuerzas de seguridad guatemaltecas dedicadas al control antinarcóticos entre 2008 y 2012.⁹⁷

Las conexiones de los tiempos de guerra entre la elite del Estado, el crimen organizado, el ejército y la policía persisten en Guatemala.⁹⁸ De

⁹⁵ Alberto Arroyo (2006) acuñó el término «neoliberalismo militarizado» a la conjunción de los intereses neoliberales corporativos con las políticas de seguridad regionales (Otros Mundos, mapas compartidos el 18 de enero de 2017).

⁹⁶ Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/Estados Unidos, en MAWG (2013:20).

⁹⁷ Isacson, Meyer y Morales (2014:29); MAWG (2013).

⁹⁸ Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/Estados Unidos, en MAWG (2013:20).

acuerdo con el Centro de Política Internacional (CIP, por sus siglas en inglés), oficiales militares retirados retienen 40% de los puestos de gobierno en el sector de seguridad.⁹⁹ Los kaibiles guatemaltecos ejemplifican los límites borrosos entre el ejército, las fuerzas especiales del Estado y los actores ilícitos. Los kaibiles son una unidad de fuerzas especiales de elite guatemalteca entrenada por los Estados Unidos en contrainsurgencia, los cuales cometieron atrocidades durante la guerra de contra-insurgencia. Especialmente preocupantes son los vínculos entre los antiguos kaibiles y los traficantes de drogas y organizaciones criminales, como los Zetas de México, quienes reclutan a antiguos kaibiles.¹⁰⁰ El ejército mexicano detuvo a antiguos kaibiles en la ruta sin monitoreo en El Nance en 2005. Las fuentes revelaron que los kaibiles, encontrados poderosamente armados, eran parte del círculo de seguridad del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004). Portillo estaba viviendo en México y enfrentaba cargos de malversación en Guatemala.¹⁰¹ Guatemala utiliza a los kaibiles para militarizar las áreas de selva del Petén y promover «la seguridad ciudadana». Pero como señala Megan Ybarra, los kaibiles siguen estando empoderados para actuar por encima de la ley e infligir violencia en nombre de la seguridad.¹⁰² Irónicamente su tarea es el combate de las incursiones de los Zetas, quienes reclutaban de las viejas filas de los kaibiles.¹⁰³ La respuesta del Estado guatemalteco al crimen y la violencia ha sido la criminalización y vigilancia dura, las cuales son «productivas en lo que se supone que deben vencer, es decir, las empresas criminales».¹⁰⁴

⁹⁹ MAWG (2013).

¹⁰⁰ MAWG (2013).

¹⁰¹ Luego de ser liberado de los cargos por una corte de Guatemala en 2011, fue extraditado a los Estados Unidos donde enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración en 2013. Se declaró culpable en 2014 (*The Tico Times* 2014).

¹⁰² Ybarra (2016:203).

¹⁰³ Ybarra (2016:203).

¹⁰⁴ Schneider y Schneider (2008:367).

Cuestionando la ilegalidad

Al cuestionar el modo en que ciertas personas y actividades se designan como ilegales o criminales y la manera como esto sirve para justificar respuestas militarizadas del Estado, podemos revelar los procesos políticos, sociales y económicos que apuntalan las suposiciones usuales de lo que se considera legal o ilegal. En el discurso de seguridad fronteriza, el contrabando de pequeña escala, el tráfico de drogas, el de migrantes y el de armas se interconectan cada vez más y aumentan las sospechas de sus potenciales vínculos con el terrorismo.¹⁰⁵ Aunque las drogas y las papayas contrabandeadas pueden pasar por las mismas rutas, frecuentemente son transportadas por diferentes personas por razones distintas. En las directivas de seguridad, sin embargo, los campesinos son vistos como potenciales amenazas criminales y terroristas. El general John F. Kelly, comandante veterano de los Marines de los Estados Unidos en el Comando Sur de este país, declaró en un reporte para el 113° Congreso en 2014: «Las organizaciones terroristas podrían buscar aprovechar [estas] mismas rutas de contrabando para movilizar a agentes con intención de causar grave daño a nuestros ciudadanos o incluso sencillamente traer armas de destrucción masiva a los Estados Unidos».¹⁰⁶ Las declaraciones que equiparan la porosa frontera sur de México con el crimen y una potencial amenaza terrorista ignoran el hecho de que Chiapas tiene la doceava tasa más baja de homicidio en el país; los anuncios espectaculares lo promueven como el «Tercer estado más seguro de México».¹⁰⁷ A pesar de los rumores, el contrabando fronterizo sigue practicándose en gran parte por grupos familiares y sociales con lazos históricos profundos que buscan opciones de subsistencia;¹⁰⁸ no hay pruebas claras de

¹⁰⁵ Véase también Aguiar (2014); paralelismos en Jusonyte (2015).

¹⁰⁶ Comando Sur EE.UU. (2014:4).

¹⁰⁷ Isacson, Meyer y Morales (2014:8). La violencia de las drogas es más frecuente en el lado guatemalteco de la frontera, donde las drogas pasan más tiempo mientras se preparan para el transbordo (2014:9).

¹⁰⁸ Véase Cross (2011).

que esté ligado al tráfico de drogas, aun cuando los traficantes puedan implicar con éxito a algunos camioneros.

Los actores criminales pueden beneficiarse de un clima en el que el Estado haya perdido su autoridad, y la ilegalidad y el desacato sean la norma,¹⁰⁹ pero la forma y las condiciones bajo las cuales la tolerancia de actividades extralegales favorece al crimen organizado es una cuestión para investigación más que una verdad demostrada.¹¹⁰ Los residentes fronterizos repetidamente fetichizan la ley como algo que puede comprarse; en esta región queda por verse cómo las sumas de dinero asociadas con el narcotráfico modificarán las relaciones entre la informalidad, el Estado, las organizaciones criminales y los habitantes locales. Sin embargo, contemplar la informalidad con una lente criminal sin examinar las razones por las cuales la gente se aleja, desconfía o es excluida del Estado y el sector formal puede generar una dinámica peligrosa de escalamiento que reproduzca la criminalización, al tiempo que hace que las estructuras criminales sean más difíciles de erradicar. En estas espirales de escalamiento conjunto entre actores criminales y unidades del Estado con la responsabilidad de combatirlos, los que salen perdiendo son los ciudadanos comunes que quedan atrapados en medio.¹¹¹

Comenzamos a cuestionar para quién y para qué es toda esta seguridad —quién resulta más seguro o vulnerable— al mismo tiempo que los campesinos defienden con fervor las estrategias agresivas del Estado por lo que les representan en términos de su propia seguridad. Las lecciones que dejan la securitización y la criminalización de las drogas y los migrantes indocumentados indican que las tendencias a criminalizar a los pequeños contrabandistas, aunque permiten que el contrabando continúe, pueden también llevar a estos tipos de comercio a transformarse de ser relativamente pequeños, inofensivos y a veces regionalmente benéficos a empresas más ilícitas, peligrosas y vinculadas a grupos más

¹⁰⁹ Sabet (2015).

¹¹⁰ Véase Andreas (2011), sobre el sesgo selectivo de conectar flujos ilícitos con la violencia, por ejemplo.

¹¹¹ Carey y Marak (2011:8); Heyman y Campbell (2011); Paley (2014); Muehlmann (2014); Andreas (1999; 2000).

violentos. Víctor Hugo López, del Frayba, en Chiapas, afirma que la actual estrategia para aumentar la seguridad ha:

Endurecido las medidas, no contra el crimen, pero contra la población... La protección de la frontera, el refuerzo a la seguridad y el combate contra el crimen organizado han significado un mayor control social y un alto índice de represión contra la población en general.¹¹²

En Chiapas, el compromiso de México con la seguridad exagera las violaciones a los derechos humanos; los casos de Frayba se duplicaron de entre 400 y 500 en 2011 a 1000 en 2014.¹¹³ Casi la mitad de los casos de derechos humanos eran resultado de los efectos de la criminalización, incluido el acceso inadecuado a la justicia, la detención arbitraria y la tortura.¹¹⁴

A pesar del hecho de que los residentes fronterizos son implícita o incluso explícitamente criminalizados por la seguridad del Estado, muchos expresan el deseo de una mayor presencia de seguridad para prevenir la violencia y el crimen. Este es particularmente el caso en Guatemala; parece desconcertante el rotundo apoyo al resurgimiento del ejército, o una policía militarizada, para contener la violencia criminal y la delincuencia en un país que emergió recientemente de un mandato militar violento. Cuando el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, recordado por muchos por su papel en la violencia genocida durante la guerra contrainsurgente, comenzó una campaña en 2006 por la «mano dura» o plataforma dura contra el crimen, muchos residentes de la frontera aprobaron esta estrategia a pesar de la ausencia de crimen en sus propias comunidades. Solo algunos pocos antiguos refugiados en Nueva Vida, Guatemala, estaban dudosos al ver paralelismos con la violencia que sufrieron en la década de 1980. Guatemala reformuló su estrategia ante la violencia para concentrarse en la seguridad pública y ciudadana, a la que representaban como libertad del miedo al crimen y la violencia.

¹¹² Flores (2014).

¹¹³ Flores (2014).

¹¹⁴ Flores (2014).

En la práctica, sin embargo, esta estrategia sanciona la remilitarización, la cual solo ha aumentado la inseguridad para las poblaciones marginadas.¹¹⁵ El resultado es escalamiento y privatización, a lo cual Daniel Goldstein se refiere como la «neoliberalización de la violencia», mediante la cual la violencia es esparcida entre actores sociales que operan para mantener su propia seguridad.¹¹⁶ Los pobres, urbanos y rurales, frecuentemente han sufrido la peor parte de las policías de seguridad militarizada tanto en México como en Guatemala, ya que es más probable que habiten corredores de tránsito cruciales o territorio propicio para las iniciativas de desarrollo transnacionales.¹¹⁷

Las políticas de comercio y seguridad que criminalizan a los residentes marginales y escalan el refuerzo policial y militar no han logrado detener la violencia en la región, sino que han ampliado la corrupción, la inseguridad y la criminalización de la sociedad. En vez de simplemente agregar más seguridad, necesitamos cuestionar a quién sirven las actuales definiciones de seguridad, revisar las políticas equivocadas de comercio y seguridad, prestar atención a las razones por las cuales la gente se involucra en el comercio extralegal y considerar la ausencia de opciones significativas de medios de vida.

Específicamente, este libro se enfoca en cómo la seguridad y las políticas para el comercio funcionan en conjunto para dar valor y facilitar el comercio y el movimiento transfronterizo transnacional corporativo, mientras que criminalizan el comercio informal y restringen la movilidad de habitantes fronterizos marginados y migrantes. Los residentes de la frontera intentan invertir las designaciones de *legal* e *ilegal* en sus mentes, a la vez que desacreditan la corrupción del Estado y la exclusión de las políticas formales de comercio. Afirman que es legítimo adquirir documentos nacionales múltiples por medios extralegales, contrabandear bienes a través de la frontera y ejercer su control sobre la vía sin monitoreo en la frontera a lo largo de la cual viven, mientras que imponen cuotas a los contrabandistas que usan el camino. Sin embargo,

¹¹⁵ Ybarra (2016); Burrell (2013); Thomas, O'Neill y Offit (2011).

¹¹⁶ Goldstein (2010).

¹¹⁷ Véase Paley (2014).

sus justificaciones morales comienzan a desbaratarse a medida que ciertos negocios de contrabando se vuelven más lucrativos y excluyentes, las desigualdades locales se intensifican y el contrabando de bienes comunes se mezcla con el tráfico de drogas y con redes de corrupción oficial. En un contexto de corrupción, informalización de la economía¹¹⁸ y falta de oportunidades, es tentador para algunos transportistas de la frontera llevar otra mercancía al norte. Las prácticas de los residentes fronterizos no abordan las raíces de su exclusión, es decir, la falta de desarrollo y de empleo retribuido en el campo, así como los compromisos de México y Guatemala con un neoliberalismo securitizado que favorece al capital, así como las ganancias sobre la gente y la subsistencia.

A pesar de que las prácticas extralegales en la frontera puedan constituir pequeñas formas de resistencia diarias o «armas de los débiles»,¹¹⁹ no socavan o cuestionan el orden hegemónico que los excluye. El contrabando hace poco por contrarrestar el avance del neoliberalismo securitizado en la frontera Guatemala-México. Permite a los residentes de la frontera subsistir en un contexto con pocas alternativas, pero no proporciona a la mayoría lo suficiente para superar sus propias circunstancias. Muchos corren riesgos inmensos. A cambio de ser capaces de apenas sostener a sus propias familias y solventar gastos básicos, arriesgan grandes pérdidas financieras, posible arresto si los oficiales deciden cambiar de parecer o violencia de parte de actores criminales.

Gordon Mathews y Carlos Alba Vega utilizan el término «globalización desde abajo» para describir las prácticas informales, y frecuentemente extralegales, transnacionales que caracterizan el modo en que gran parte del mundo experimenta la globalización, en contraste con la esfera de la globalización «de alto nivel», o «globalización desde arriba» que abarca los Estados, las instituciones internacionales y las corporaciones.¹²⁰ La diferencia entre la globalización desde arriba y desde abajo está en las dinámicas de poder y el acceso político, social y económico diferencial en razón de que las dos esferas se interrelacionan de forma

¹¹⁸ Centeno y Portes (2006).

¹¹⁹ Scott (1985).

¹²⁰ Mathews y Vega (2012:1).

desigual.¹²¹ A pesar de que subrayan la interdependencia crítica entre la globalización desde arriba y desde abajo, el término sigue implicando que la globalización desde abajo es una «alternativa», a menudo estigmatizada, variante de la forma dominante de globalización.¹²² Sin embargo, en la frontera el riesgo de separar la «globalización desde abajo» puede desviar el enfoque de los intereses comunes a los cuales ambas formas de globalización sirven y a los actores que criminalizan.

Los residentes fronterizos frecuentemente perciben su propio contrabando de bienes comunes como una forma de resistencia a una economía que los excluye. Sin embargo, sus esfuerzos son a veces contradictorios, porque refuerzan las metas de seguridad fronteriza mientras que sus actividades de contrabando también pueden beneficiar a negocios formales más grandes y a agentes del Estado, así como a otros actores criminales más peligrosos. Mientras tanto, los residentes corren mayores riesgos y enfrentan el incremento de la criminalización a medida que la violencia y la inseguridad en la región se esparcen.

Usualmente solo escuchamos sobre historias de éxito. Pocas personas refieren sus fracasos, como Paco me llevó a considerar en el capítulo seis. En visitas subsecuentes a la frontera conocí a algunos hombres que pasaron más de una década en los Estados Unidos y regresaron a la frontera sur, convencidos de que se ganarían la vida como camioneros. Pero nada fue como lo habían imaginado. Pocos llegan a ser relativamente ricos, y quienes lo logran usualmente tenían ventajas previas como ganancias más sustanciosas o remesas de los Estados Unidos, herencias o tierras y ganado para compensar gastos y contar con un colchón financiero.

En la frontera entre México y Guatemala, los contrabandistas fronterizos gozan de apoyo local en medio de la falta de confianza política, la crisis en el campo y la falta de alternativas, siempre y cuando

¹²¹ Ribeiro (2012:222-223).

¹²² Ribeiro (2012:221, 230). Ribeiro (2012) y Mathews y Vega (2012) enfatizan que «la globalización desde abajo» no debería considerarse separada del sistema. Mi preocupación al aplicar este término en la frontera es el riesgo de romantizar estas estrategias como alternativa aun cuando les permita a algunos residentes ganarse la vida.

parezcan actuar en nombre de sus comunidades, aunque se beneficien en gran medida a sí mismos, a otros actores ilícitos o a políticos y empresas corruptas. Los contrabandistas deben evadir a los oficiales del Estado al tiempo que los buscan para llegar a acuerdos que faciliten sus negocios y retiren a la competencia. Los pequeños contrabandistas de la frontera no roban ni atacan a nadie y rara vez usan medios violentos. El contrabando puede perjudicar a las industrias nacionales al socavar los aranceles o prohibiciones destinados a protegerlas de la competencia internacional, deprimir los precios de los productores locales al crear una competencia adicional e introducir posibles riesgos para la salud y la seguridad debido a la falta de reglamentación e inspección. Sin embargo, el contrabando también les proporciona a los campesinos formas alternativas de subsistencia cuando no les queda mucho más; ofrece mercados para compradores y consumidores que no pueden solventar gastos o se encuentran excluidos de opciones legítimas, y puede estimular partes de la economía formal. Los contrabandistas son a la vez individualistas y socialmente dependientes, y perjudican y apoyan a los órganos de policía del Estado y a los segmentos de la economía formal.

Puede que las empresas de contrabando viajen por una ruta geográfica alternativa al comercio oficial, pero sus bienes y beneficios no fluyen en canales económicos separados. Lo más común es que los bienes contrabandeados acaben en los inventarios de respetados negocios nacionales y transnacionales, los cuales pueden obtener ganancias sustanciales evadiendo impuestos, papeleo e inspecciones. Los negocios irregulares suplen sus inventarios cuando venden bienes en mercados domésticos o exportan a otros países, como ilustra Tito y sus bodegas de café en el Capítulo 6. Los contrabandistas no están necesariamente desafiando al sistema comercial neoliberal, sino que muchas veces lo subsidian. Asumen la lógica de «vender al mejor postor» y corren riesgos de arresto oficial, robo o asalto, mientras que otros intereses privados aumentan sus beneficios libres de riesgos.¹²³ Mientras tanto, los productores en la región se enfrentan a una batalla cuesta arriba compitiendo por vender

¹²³ Véase Mathews y Vega (2012:11) sobre cómo estos actores «ultra-neoliberalizan» a aquellos que imponen «la globalización desde arriba».

maíz y café. Los mandatos neoliberales de desregulación, privatización y liberalización en sociedades plagadas de desigualdad y una pequeña elite que también se beneficia de la vista gorda ante las líneas difusas entre lo ilegal y lo legal impiden a los Estados recolectar suficientes impuestos y tomar el espacio político para impulsar a la economía formal y las instituciones del Estado de modo que inspiren confianza y seguridad.¹²⁴ En vez de voltear a ver cómo los actores de la elite se benefician de los acuerdos actuales y revisar las desigualdades estructurales subyacentes y las políticas de libre mercado que desestabilizan el trabajo de forma más amplia, la informalidad y la criminalidad se convierten en distracciones que son sintomáticas de las mismas dinámicas que están acusadas de desestabilizar.

El Capítulo 4 documentó cómo los residentes fronterizos se unieron para expulsar a oficiales corruptos de la ruta fronteriza. Capitalizaron el clima de crisis política cuando los movimientos sociales abogaban por los derechos de los campesinos, los indígenas y los pobres. Sin embargo, la autonomía es una ilusión si se consideran los riesgos que corren los habitantes locales ante la vigilancia y la perpetuación de los lazos clientelares y de corrupción que entregan los votos comunitarios a las autoridades municipales en el poder a cambio de que les faciliten el comercio extralegal que beneficia desproporcionadamente a unos cuantos. En el sistema paternalista del PRI, el Estado se ligaba a los ejidos por medio de autoridades o elites sociales, «caciques», quienes garantizaban la lealtad y entregaban los votos a cambio de tierras y recursos estatales.¹²⁵ Con el declive del sistema de corporativismo del Estado, los esfuerzos por el cambio democrático, la rendición de cuentas y la inclusión social y económica son socavados con la figura del «cacique» reencarnada en los poderosos contrabandistas locales y la reproducción de las políticas clientelares. Aunque muchos contrabandistas trabajan en nombre de sus comunidades, sus intereses comerciales suelen prevalecer. Como relaté en el Capítulo 4, cuando el municipio ofreció mayor asistencia a las co-

¹²⁴ Centeno y Portes (2006).

¹²⁵ Nash (2001); Rus (1994).

comunidades mexicanas a cambio del retiro de las cadenas, los negociantes locales rechazaron la oferta a pesar del apoyo que la comunidad mostraba. Queda por verse si los intereses de los contrabandistas y la comunidad seguirán alineándose, o si los contrabandistas más poderosos se distanciarán de los miembros de sus comunidades.

Los contrabandistas de la frontera tampoco evitan ni subvierten al Estado. En cambio, buscan activamente a los agentes del Estado y se ganan su aprobación para comenzar o continuar sus negocios de contrabando, como se describe en los Capítulos 6 y 7. Los contrabandistas llenan los bolsillos de agentes estatales particulares con sobornos, al tiempo que brindan las razones para la expansión de la vigilancia y militarización en la frontera, a pesar de que esta no ha reducido el contrabando, el tráfico de drogas o la violencia. Los aspirantes a negociantes, como Alonso, refuerzan el poder mítico o la magia del Estado,¹²⁶ al obsesionarse con la necesidad de «acatar la ley» para trabajar en el contrabando de gasolina. Sus palabras evocan el poder y el aura del Estado que está en todos lados y en ninguno, omnipotente, pero imposible de localizar.¹²⁷

Entender la compleja interdependencia entre el Estado y las prácticas extralegales hace pensar en alternativas al imperativo de ilegalización y criminalización. Estos discursos no solo no producen los resultados esperados de reducción del crimen y la ilegalidad, sino que de hecho pueden producirlos y aumentarlos. En la medida en que los efectos combinados de la ilegalización, la criminalización y la militarización tocan la realidad de comunidades de por sí marginadas, las actividades extralegales ganan mayor legitimidad y licencia social. En una espiral de escalamiento mutuo entre el Estado y los actores extralegales, que se confunden cada vez más, la ilegalidad se utiliza para exigir mayor refuerzo del Estado, mientras que este refuerzo, y su habitual mala cara, da más credibilidad local a las alternativas extralegales.

¹²⁶ Taussig (1997).

¹²⁷ Véase Goldstein (2012) sobre el «Estado fantasma»; Aretxaga (2003).

Búmeran fronterizo

Las interrelaciones de las políticas neoliberales, las políticas antimigratorias en los Estados Unidos y las políticas de seguridad fronteriza y antidrogas han producido un terrible efecto búmeran en la frontera.¹²⁸ A medida que las políticas neoliberales desestabilizan los medios locales de subsistencia, las personas han comenzado a migrar a los Estados Unidos. Las políticas antimigratorias que aumentaron las deportaciones y generaron miedo han orillado a más migrantes de esta frontera a volver a casa, donde encuentran en la economía extralegal una de sus únicas opciones. En esta coyuntura, la violencia perpetrada tanto por actores criminales como por fuerzas en escalada del Estado para combatir a los primeros, junto con la falta de oportunidades, reaniman la necesidad de migrar.

Cuando volví a la frontera en 2011, me senté con Fani en El Girasol, Guatemala, contemplando su futuro. Había completado su educación como maestra. Tenía solamente un trabajo de medio tiempo dando clases extras a jóvenes locales. A pesar de los deseos de sus padres, quienes trabajaban en la economía del contrabando para que sus hijos pudieran tener una educación y volverse profesionales, relataba cuántos jóvenes decían que querían ser cargadores para los negociantes. Cuando visité a Fani en 2014, ella había perdido su trabajo y estaba considerando usar su acta de nacimiento mexicana para viajar a Cancún y trabajar en hoteles. Su hermano Julián fue deportado por segunda vez de los Estados Unidos, y su esposa cayó recientemente detenida y arrestada por el crimen de utilizar documentos de seguridad social falsos en Georgia para pagar su cuenta de servicio eléctrico y mantenerse a flote junto con sus hijos después de la deportación de Julián. En el contexto de la criminalización de la migración, o el de gobernar la migración a través del crimen, más y más migrantes son canalizados al sistema de

¹²⁸ Tomo prestado este término de búmeran del trabajo de Elana Zilberg (2007) sobre los efectos búmeran transnacionales como la mano dura al crimen y la criminalización de políticas de inmigración en Estados Unidos, medidas astringentes para la disolución de pandillas en América Central y ciclos de migración no autorizados hacia el norte.

justicia criminal no por estar cometiendo más crímenes, sino porque más de sus actividades cotidianas de las cuales dependen para sobrevivir son elevadas a un nivel merecedor de castigo criminal y deportación.¹²⁹ Fani parecía resignada ante esta situación. Sentí necesidad de investigar cuando regresara a casa. Quizás no todo estaba perdido. Descubrí que la esposa de Julián había estado en la cárcel por dos años. Sus seis hijos, nacidos en los Estados Unidos, fueron transferidos del cuidado de una amiga al Departamento de Servicios Humanos de Georgia. Me comuniqué con una trabajadora social local para obtener más información sobre su entrega a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encontrar un abogado voluntario y explorar opciones para reunirla con sus hijos. La situación se complica más por el hecho de que el Julián, el padre de los niños, es guatemalteco, mientras que la madre es de Chiapas, México. Logramos poco. Durante las ediciones finales de este libro (en inglés), sin embargo, supe que fue liberada por causas humanitarias, pudo visitar a sus hijos, y esperaba una fecha de audiencia ante la corte de inmigración.

Cuando visité la frontera en 2014, los residentes expresaban esperanza en un cambio en el clima migratorio para sus parientes en los Estados Unidos. Sin embargo, la elección de Donald Trump y sus planes para construir un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y aumentar la criminalización y la deportación de migrantes han detenido muchos de los sueños de los migrantes y sus familias, al menos por el momento. Las políticas de migración de los Estados Unidos, junto con una continua presión sobre México para militarizar su frontera sur en nombre de la seguridad y de la detención de «flujos ilícitos», podrían llevar a más residentes a caer en un destino similar al de la familia de Fani, mientras enfrentan medidas desesperadas a través de las líneas legales, criminalizados por estrategias de subsistencia entre diversas fronteras para apoyar a sus familias. Incluso durante mi visita de verano en 2014, más personas parecían estar regresando a la frontera después de más de una década en los Estados Unidos debido

¹²⁹ Inda y Dowling (2013).

a los efectos residuales de la crisis económica de 2008 junto con las políticas antimigratorias aumentadas en Florida, Carolina del Norte, Georgia y Alabama, a donde la mayor parte de los residentes fronterizos suelen migrar. A su regreso, muchos deciden intentar entrar en los negocios.

Referencias

ABRAHAM, ITTY Y WILLEM VAN SCHENDEL

2005 «Introduction: The Making of Illicitness», en Willem van Schendel y Itty Abraham (eds.), *Illicit Flows and Criminal Things: States, Borders, and the Other Side of Globalization*, Indianapolis, University of Indiana Press, pp. 1-37.

ABRAMS, PHILIP

1988[1977] «Notes on the Difficulty of Studying the State», *Journal of Historical Sociology*, 1(1), pp. 58-89.

ABREGO, LEISY J.

2014 «Rejecting Obama's Deportation and Drug War Surge on Central American Kids», *The Huffington Post*, julio 9, en <https://www.huffpost.com/entry/rejecting-obamas-deportat_b_5568358> [consulta: 09/11/2015].

ACKERMAN, JOHN M.

2016 «Mexico is Not a Functioning Democracy», *Foreign Policy*, en <<http://foreignpolicy.com/2016/02/23/obama-pena-nieto-mexico-corruption/>> [consulta: 23/02/2016].

ADLER-LOMNITZ, LARISSA

2013 *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana*, México, Flacso.

AGAMBEN, GIORGIO

2005 *State of Exception*, Chicago, University of Chicago Press.

AGUIAR, JOSÉ CARLOS G.

2014 «Estados de Simulación: Piratería, contrabando, neoliberalismo y el control de la ilegalidad en América Latina, *Perspectivas, Insyde Ideas*.

AGUILAR, MARCO ANTONIO

- 2003 «Consecuencias del Tratado de Libre Comercio Triángulo Norte de Centroamérica y México», julio, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultades de Quetzaltenango, Universidad Rafael Landívar, en <<http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Articulos%20Doctrinarios/Econ%20C3%B3micas/TLC%20Mexico%20Triangulo%20Norte%20CA.pdf>>.

ALBA, FRANCISCO Y MANUEL ÁNGEL CASTILLO

- 2012 «New Approaches to Migration Management in Mexico and Central America», octubre, San Diego, Woodrow Wilson International Center for Scholars. Migration Policy Institute, pp. 1-24.

ALIANZA MEXICANA CONTRA EL FRACKING

- 2015 «Nueva ley para criminalizar la protesta social y limitar el libre flujo de información en el marco de las reformas estructurales», diciembre 17, en: <<http://nofrackingmexico.org/nueva-ley-paracriminalizar-la-protesta-social-y-limitar-el-libreflujo-de-informacion-en-el-marco-de-las-reformas-estructurales/>> [consulta: 27/04/2017].

ALONSO, ANA MARÍA

- 1994 «The Politics of Space, Time and Substance: State Formation, Nationalism, and Ethnicity», *Annual Review of Anthropology*, vol. 23, octubre, pp. 379-405.

ALVAREZ, ROBERT R. JR.

- 1995 «The Mexican-U.S. Border: The Making of the Anthropology of Borderlands», *Annual Review of Anthropology*, 24(4), pp. 447-470.
- 2005 *Mangos, Chiles, y Truckers: The Business of Transnationalism*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

ANDERSSON, RUBEN

- 2014 «Hunter and Prey: Patrolling Clandestine Migration in the Euro-African Borderlands», *Anthropological Quarterly*, 87(1), pp. 119-149.

ANDREAS, PETER

- 1999 «Smuggling Wars: Law Enforcement and Law Evasion in a Changing World», en Tom Farer (ed.), *Transnational Crime in the Americas*, Nueva York, Routledge, pp. 85-98.
- 2000 *Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- 2002 «Transnational Crime and Economic Globalization», en Mats R. Berdal y Mónica Serrano (eds.), *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?*, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, pp. 37-52.

ANDREAS, PETER

- 2003 «A Tale of Two Borders: The U.S.-Canada and U.S.-Mexico Lines after 9-11», en Peter Andreas y Thomas J. Biersteker (eds.), *The Rebordering of North America: Integration and Exclusion in a New Security Context*, Nueva York/Londres, Routledge, pp. 1-23.
- 2010 «The Politics of Measuring Illicit Flows and Policy Effectiveness», en Peter Andreas y Kelly M. Greenhill (eds.), *Sex, Drugs, y Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict*, Ithaca, NY, Cornell University Press, pp. 23-45.
- 2011 «Illicit globalization: Myths, Misconceptions, y Historical Lessons», *Political Science Quarterly*, 126(3), pp. 403-425.

ANIMAL POLÍTICO

- 2013 «Hacienda cierra 12 garitas aduanales en 4 estados fronterizos», noviembre 28, en: <www.animalpolitico.com/2013/11/hacienda-cierra-12-garitas-aduanales-en-4-estados-fronterizos/> [consulta: 21/10/2015].

ANZALDÚA, GLORIA

- 1999[1987] *Borderlands/La Frontera*, San Francisco, Aunt Lute.

ARIAS, ENRIQUE DESMOND Y DANIEL M. GOLDSTEIN

- 2010 «Violent Pluralism: Understanding the New Democracies of Latin America», en Enrique Desmond Arias y Daniel M. Goldstein (eds.), *Violent Democracies in Latin America*, Durham, NC, Duke University Press, pp. 1-34.

ARETXAGA, BEGOÑA

- 2003 «Maddening States», *Annual Review of Anthropology*, 32, pp. 393-410.

ARRIOLA VEGA, LUIS ALFREDO

- 2009 «Security and Migration in the Tabasco-El Petén Border Region», *Migración y Desarrollo*, 13, pp. 25-40.

ARROYO, ALBERTO

- 2006 «ASPAN y la pérdida de soberanía». *Memorias del X Congreso internacional sobre integración regional, fronteras y globalización*, noviembre 30, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

ASTURIAS, MIGUEL ÁNGEL

- 1993 *Men of Maize*, ed. crítica, trad. Gerald Martin, Pittsburgh/Londres, University of Pittsburgh Press.

AZURDIA, MERCEDES

- 2013 «New Free Trade Agreement with Mexico Takes Effect in Guatemala», *PanAm Post*, septiembre 2, <<https://panampost.com/mercedes-azurdia/2013/09/02/new-free-trade-agreement-with-mexico-takes-effect-in-guatemala/>> [consulta: 28/07/2016].

BACON, DAVID

2008 *Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants*, Boston, Beacon Press.

BARGENT, JAMES

2016 «Mexico Impunity Levels Reach 99%: Study». *InSight Crime*, febrero 4, en <www.insightcrime.com/component/content/article?id=7447:mexico-impunity-levels-reach-99-study> [consulta: 24/08/2016].

BARIENTOS, RICARDO

2012 «Contrabando: expresión de poder real e impunidad», *Plaza Pública*, octubre 30, en <www.plazapublica.com.gt/content/contrabando-expresion-de-poder-real-e-impunidad> [consulta: 22/10/2015].

BARTRA, ARMANDO

2003 «Para que sirve la agricultura?» *La Jornada*, enero 21, México.

BARTRA, ARMANDO Y GERARDO OTERO

2005 «Contesting Neoliberal Globalism and NAFTA in Rural Mexico: From State Corporatism to the Political-Cultural Formation of the Peasantry», *Journal of Latino/Latin American Studies*, Special Edition, 1, pp. 164-190.

BASAIL RODRÍGUEZ, ALAIN

2005 «Gobernar en frontera: desafíos de la gobernabilidad y el desarrollo en el sur mexicano», en Alain Basail Rodríguez (coord.), *Fronteras des-bordadas: ensayos sobre la frontera sur de México*, Chiapas, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pp. 153-188.

2016 «Relaciones comerciales transfronterizas, anclajes y fugas en Chiapas, entre Guatemala y México», ponencia al XXXIV Latin American Studies Congress, Nueva York, pp. 1-23.

BECERRIL, ISABEL

2014 «Economía ilegal genera pérdidas por 950 000 mdp», *El Financiero*, diciembre 2, en <www.elfinanciero.com.mx/archivo/economia-ilegal-genera-perdidas-por-950-000-mdp.html> [consulta: 14/05/2015].

BENÍTEZ-MANAUT, RAÚL

2004 *Mexico and the New Challenges of Hemispheric Security*, Washington, DC, Woodrow Wilson Center for Scholars. Latin America Program.

BENJAMIN, WALTER

1986 «Critique of Violence», en P. Demetz (ed.), trad. de E. Jephcott, *Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings*, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovitch, pp. 277-301.

BENSON, PETER, KEDRON THOMAS Y EDWARD F. FISCHER

2011 «Guatemala's New Violence as Structural Violence: Notes from the Highlands», en Kevin Lewis O'Neill y Kedron Thomas (eds.), *Securing the City. Neoliberalism, Space, y Insecurity in Postwar Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, pp. 127-146.

BIRD, ANNIE

2013 «Human Rights Abuses Attributed to Military Forces in the Bajo Aguan Valley in Honduras», *Rights Action*, febrero 20, en <http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Agvan_Final.pdf> [consulta: 01/12/2015].

BIRSON, KURT

2010 «Mexico: Abuses against U.S. Bound Migrant Workers», *NACLA*, septiembre 23, en <<https://nacla.org/news/mexico-abuses-against-us-bound-migrant-workers>> [consulta: 11/12/2014].

BOLAÑOS, ROSA M. Y MIKE CASTILLO

2010 «Conflicto por ingreso de maíz blanco desde México», *Prensa Libre*, marzo 24, en <www.prensalibre.com/economia/Conflicto-ingreso-maiz-blanco-Mexico_0_230976910.html> [consulta: 09/07/2012].

BOURGOIS, PHILIPPE

1995 *In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio*, Cambridge, UK, Cambridge University Press.

BRADFORD, HARRY

2011 «10 Countries with the Worst Income Inequality: OECD», *The Huffington Post*, mayo 24, en <www.huffingtonpost.com/2011/05/23/10-countries-with-worst-income-inequality_n_865869.html> [consulta: 20/10/2015].

BRADLEY, MEGAN

2013 *Refugee Repatriation: Justice, Responsibility, y Redress*, Reino Unido, Cambridge University Press.

BRIGDEN, NOELLE

2016 «Improvised Transnationalism: Clandestine Migration at the Border of Anthropology and International Relations», *International Studies Quarterly*, 60(2), pp. 1-12.

BURRELL, JENNIFER L.

2013 *Maya after War: Conflict, Power, y Politics in Guatemala*, Austin, University of Texas Press.

BURRELL, JENNIFER L. Y ELLEN MOODIE (EDS.)

2013 «An Introduction: Ethnographic Visions of Millennial Central America», en *Central America in the New Millennium: Living Transition and Reimagining Democracy*, vol. 102, Nueva York/Oxford, Berghahn Books, pp. 1-32.

BUZAN, BARRY, OLE WAEVER Y JAAP DE WILDE

1998 *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder, CO/Londres, Lynne Rienner Publishers.

CAMPBELL, HOWARD C.

2009 *Drug War Zone: Frontline Dispatches from the Streets of El Paso and Juarez*, Austin, University of Texas Press.

CAMUS, MANUELA

2012 «Fronteras, comunidades, indígenas y acumulación de violencias», *Desacatos*, 38, enero-abril, 73-94.

CANALES, ALEJANDRO I., JORGE MARTÍNEZ, LEANDRO REBOIRAS Y FELIPE RIVERO

2010 *Migración y Salud en Zonas Fronterizas: Informe Comparativo sobre Cinco Fronteras Seleccionadas*, Santiago de Chile, ONU.

CAREY, ELAINE Y ANDRAE MARAK

2011 «Introduction», en Elaine Carey y Andrae M. Marak (eds.), *Smugglers, Brothels, y Twine: Historical Perspectives on Contraband and Vice in North America's Borderlands*, Tuscon, The University of Arizona Press, pp. 1-9.

CARLSEN, LAURA

2009 «Plan Puebla-Panama Advances: New Name, Same Game», *Americas Program*, septiembre 10, en <www.cipamericas.org/archives/1834> [consulta: 20/10/2015].

2014 «Mexico's Oil Privatization: Risky Business», *Foreign Policy in Focus*, mayo 27, en <<http://fpif.org/mexicos-oil-privatization-risky-business/>> [consulta: 22/10/2015].

2015 «Deportación, detención ilegal y abusos en la frontera de EEUU con Guatemala», *Programa de las Américas*, julio 7, en <www.cipamericas.org/es/archives/15407> [consulta: 01/12/2015].

CASILLAS, RODOLFO R.

2008 «The Routes of Central Americans through Mexico: Characterization, Principal Agents and Complexities», *Migración y Desarrollo*, 10, pp. 141-157.

CASTELLS, MANUEL Y ALEJANDRO PORTES

1989 «World Underneath: The Origins, Dynamics, y Effects of the Informal Economy», en Alejandro Portes, Manuel Castells, y Laura Benton (eds.), *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, pp. 11-37.

CASTILLO, MANUEL ÁNGEL

2006 «Mexico: Caught between the United States and Central America», *Migration Policy Institute*, abril 1, en <www.migrationpolicy.org/article/mexico-caught-between-united-states-and-central-america> [consulta: 21/10/2015].

- CASTILLO, MANUEL ÁNGEL, MÓNICA TOUSSAINT RIBOT Y MARIO VÁZQUEZ OLIVERA
 2006 *Espacios Diversos, Historia en Común: México, Guatemala y Belice: La Construcción de una Frontera*, México, Frontera Sur, Secretaría de Relaciones Exteriores.
- CASTILLO, MIKE
 2006 «Amenazado por denunciar contrabando: Francisco Hidalgo, Alcalde de la Democracia, Huehuetenango», *Prensa Libre*, septiembre 7, en <www.prensalibre.com/pl/2006/septiembre/07/lectura_dept.html#151072> [consulta: 20/05/2009] (el enlace ya no está disponible).
- CASTRO SOTO, GUSTAVO
 2015 «La minería en Chiapas 2015», *El Escaramujo*, 49, enero 7, Otros Mundos, A.C/ Rema-M4, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
- CELIS, FERNANDO
 2005 «Presentación» al V Congress of the Mexican Association for Rural Studies, Oaxaca, México.
- CENTENO, MIGUEL ÁNGEL Y ALEJANDRO PORTES
 2006 «The Informal Economy in the Shadow of the State», en Patricia Fernández-Kelly y Jon Shefner (eds.), *Out of the Shadows: Political Action and the Informal Economy in Latin America*, University Park, Pennsylvania State University Press, pp. 23-48.
- CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
 2005 «Balance anual 2005 sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas», San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, CDHFB.
- CHALFIN, BRENDA
 2010 *Neoliberal Frontiers: An Ethnography of Sovereignty in West Africa*, Chicago, University of Chicago Press.
- CHAPINCITOS, LOS
 2013 «En Guatemala: Cae Hermano de Jefe Narco que Ordenó la Matanza de 9 Policías», junio 21, <<https://loschapincitos.wordpress.com/2013/07/21/en-guatemala-cae-hermano-de-jefe-narco-que-ordeno-la-matanza-de-9-policias/>> [consulta: 19/04/2017].
- CHÁVEZ, FERNANDO
 2014 «The Threat of Mexico's Massive Underground Economy», *Worldcrunch*, agosto 13, en <www.worldcrunch.com/business-finance/the-threat-of-mexico-o-s-massive-underground-economy/c2s16698/> [consulta: 22/10/2015].

CLOT, JEAN

- 2013 «Acercamiento conceptual a las prácticas económicas informales en los pasos fronterizos entre México y Guatemala», *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 13(1).

COMAROFF, JEAN Y JOHN COMAROFF

- 2006 «Law and Disorder in the Postcolony: An Introduction», en Jean Comaroff y John Comaroff (eds.), *Law and Disorder in the Postcolony*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 1-6.

COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS (CONASAMI)

- s.f. Consultado en <www.conasami.gob.mx/formatestimonios.aspx?ID=10f=0> (el enlace ya no está disponible).

CONN, CLAYTON

- 2014 «Informal Economy Makes up 26% of Mexico's GDP», *Telesur.tv.net*, agosto 8, en <www.telesurtv.net/english/news/Informal-Economy-Makes-Up-26-of-Mexicos-GDP-20140808-0044.html> [consulta: 20/10/2015].

CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL)

- 2015 «CONEVAL Informa los Resultados de la Medición de Pobreza 2014». Dirección de Información y Comunicación Social. Comunicado de Prensa 005, julio 23, en <www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf> [consulta: 03/12/2015].

COUNCIL ON HEMISPHERIC AFFAIRS (COHA)

- 2011 «Mexican Drug Violence Fueled by U.S. Guns», junio 27, en <www.coha.org/mexican-drug-violence-fueled-by-u-s-guns/> [consulta: 01/12/2015].

COUTIN, SUSAN BIBLER

- 2005 «Being En Route», *American Anthropologist*, 107(2), pp. 195-206.

COYOY, ALEXANDER

- 2011 «Aumento en el maíz fomenta contrabando», *Prensa Libre*, julio 29, en <www.prensalibre.com.gt/sanmarcos/Aumento-maiz-fomenta-contrabando-0508149232.html> [consulta: 09/07/2012] (el enlace ya no está disponible)

CROSS, JOHN C.

- 1998 *Informal Politics: Street Vendors and the State in Mexico City*, Stanford, CA, Stanford University Press.
- 2011 «Chapter 6: Mexico», en Joe Karaganis (ed.), *Media Piracy in Emerging Economies*, Nueva York, Social Science Research Council, pp. 305-326.

CRUZ BURGUETE, JOSÉ LUIS

- 1998 *Identidades en fronteras, fronteras en identidades: elogio a la intensidad de los tiempos en los pueblos de la frontera sur*, Ciudad de México, Colmex.

CUARTO PODER

2016 «Excalcalde de Frontera Comalapa no ofrece pruebas», marzo 8, en <www.cuartopoder.mx/excalcaldedefronteracomalapanoofrecepruebas-152524.html> [consulta: 31/08/2016].

CUTTS, MARC (ED.)

2000 *The State of the World's Refugees: Fifty Years of Humanitarian Action*, Oxford, Reino Unido, Oxford University Press.

DAS, VEENA

2007 *Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary*, Berkeley, University of California Press.

DAS, VEENA Y DEBORAH POOLE

2004 «State and its Margins: Comparative Ethnographies», en Veena Das y Deborah Poole (eds.), *Anthropology in the Margins of the State*, Santa Fe, NM, School of American Research Advanced Seminar Series, pp. 3-34.

DAUGHERTY, ARRON

2015 «Guatemala's Big Corruption Scandal, Explained», *InSight Crime*, julio 20, en <www.insightcrime.org/news-analysis/guatemala-la-linea-customs-scandal-explained> [consulta: 21/10/2015].

DAVIS, DIANE

2012 «Prólogo: Fundamentos analíticos para el estudio de la informalidad: una breve introducción», en Felipe de Alba y Frederic Lesemann (eds.), *Informalidad, incertidumbre, metrópolis y Estado: cómo gobernar la informalización?*, Mexico, PUEC-UNAM, INRS/Collegium de Lyon (EURIAS), pp. 11-37.

DENT, ALEXANDER S.

2012 «Piracy, Circulatory Legitimacy, y Neoliberal Subjectivity in Brazil», *Cultural Anthropology*, 27(1), pp. 28-49.

DE VOS, JAN

2002 «La frontera sur y sus fronteras: una visión histórica», en Edith F. Kauffer Michel (ed.), *Identidades, migraciones y género en la frontera sur de México*, Chiapas, Mexico, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), pp. 49-67.

DÍAZ, GEORGE T.

2015 *Border Contraband: A History of Smuggling across the Rio Grande*, Austin, University of Texas Press.

DÍAZ, MIGUEL

2001 «Mexico: Free Trade Agreements Anyone?», *United States-Mexico Chamber of Commerce. NAFTA Series*, en <www.usmccoc.org/b-nafta2.php> [consulta: 21/10/2015].

DICKENS DE GIRÓN, AVERY

- 2011 «The Security Guard Industry in Guatemala: Rural Communities and Urban Violence», en Kevin Lewis O'Neill y Kedron Thomas (eds.), *Securing the City. Neoliberalism, Space and Insecurity in Postwar Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, pp. 103-126.

DONNAN, HASTINGS Y THOMAS M. WILSON

- 1999 *Borders: Frontiers of Identity, Nation and State*, Oxford, Reino Unido, Berg.

DORSET CHIAPAS SOLIDARITY

- 2015 «Ejidatarios of San Sebastián Bachajón Continue to Defend Their Territory against the Threat of Dispossession from the Government of Chiapas», enero 31, en <<https://dorsetchiapassolidarity.wordpress.com/2015/01/>> [consulta: 01/12/2015].
- 2016 «Senate Passes Federal Law for Special Economy Zones (SEZ)», abril 22, en <<https://dorsetchiapassolidarity.wordpress.com/2016/04/22/senate-passes-federal-law-for-special-economic-zones-sez/>> [consulta: 25/04/2017].

DOYLE, KATE

- 2003 «The Tlatelolco Massacre: U.S. Documents and the Events of 1968», *The National Security Archive*, octubre 10, Washington DC, The George Washington University, en <<http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB99/>> [consulta: 03/03/2017].

DUA, JATIN Y KEN MENKHAUS

- 2012 «The Context of Contemporary Piracy: The Case of Somalia», *Journal of International Criminal Justice*, 10(4), pp. 749-766.

DUDLEY, STEVEN

- 2010 «Drug Trafficking Organizations in Central America: *Transportistas*, Mexican Cartels and *Maras*», en Eric L. Olson, David A. Shirk y Andrew Selee (eds.), *Shared Responsibility: U.S.-Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime*, San Diego, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute, Trans-Border Institute, UCSD, pp. 63-94.
- 2011 «The Zetas in Guatemala», *InSight Crime*, septiembre 8, en <www.insightcrime.org/media/k2/attachments/insight_crime_the_Zetas_in_guatemala.pdf> [consulta: 29/07/2016].
- 2013 «Guatemala's New Narco-Map: Less Zetas, Same Chaos», *InSight Crime*, septiembre 13, en <www.insightcrime.org/news-analysis/guatemalas-new-narco-map-less-Zetas-same-chaos> [consulta: 29/07/2016].

DUGAN, RICHARD

1997 *Benefit of Location: The National Rationing System and El Paso, Texas, 1942-1945*, tesis de maestría, ETD Collection for University of Texas, El Paso.

ECOM

s.f. Agroindustrial Corp, sitio disponible en <www.ecomtrading.com/>.

EDELMAN, MARC

2005 «Bringing the Moral Economy back in... to the Study of 21st Century Transnational Peasant Movements», *American Anthropologist*, 107(3), pp. 331-354.

EGAN, BRIAN

1999 «Somos de la Tierra: Land and the Guatemalan Refugee Return», en Liisa L. North y Alan B. Simmons (eds.), *Journeys of Fear: Refugee Return and National Transformation in Guatemala*, Montreal, PQ/ Kingston, ON, McGill-Queen's University Press, pp. 95-111.

ELLIOT, JOHN H.

1984 «Spain and America in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», en Leslie Bethell (ed.), *Cambridge History of Latin America*, vol. I, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 287-340.

ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI)

2011 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Guatemala.

ENDRES, KIRSTEN W.

2014 «Making Law: Small-Scale Trade and Corrupt Exceptions at the Vietnam-China Border», *American Anthropologist*, 116(3), pp. 611-625.

ETTEN, JACOB VAN Y MARIO R. FUENTES

2004 «La Crisis del Maíz en Guatemala: Las Importaciones de Maíz y la Agricultura Familiar», *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 30(1-2), pp. 51-66.

FABILA MELÉNDEZ, ANTONIO

2002 «Perspectiva histórica del refugio guatemalteco en México y los retos para su integración», en Edith F. Kauffer Michel (ed.), *La integración de los exrefugiados guatemaltecos en México: Una experiencia con rostros múltiples*, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ECOSUR, pp. 21-27.

FÁBREGAS PUIG, ANDRÉS

1996 «Desde el sur: una revisión del concepto de frontera», *Fronteras*, 1(1), pp. 10-15.

FÁBREGAS PUIG, ANDRÉS Y RAMÓN GONZÁLEZ PONCIANO

2014 «The Mexico-Guatemala, Guatemala-Mexico Border: 1983-2013», *Frontera Norte*, 26(3), pp. 7-35.

FAIRRISS, DAVID, GURLEEN POPLI Y EDUADRO ZEPEDA

2008 «Minimum Wages and the Wage Structure in Mexico», *Review of Social Economy*, junio, 66(2), pp. 181-208.

FASSIN, DIDIER Y ESTELLE D'HALLUIN

2005 «The Truth from the Body: Medical Certificates as Ultimate Evidence for Asylum Seekers», *American Anthropologist*, 107(4), pp. 597-608.

FERGUSON, JAMES

2006 *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order*, Durham, NC, Duke University Press.

FERME, MARIANE C.

2004 «Deterritorialized Citizenship and the Resonances of the Sierra Leonean State», en Veena Das and Deborah Poole (eds.), *Anthropology in the Margins of the State*, Santa Fe, NM, School of American Research Advanced Seminar Series, pp. 81-116.

FERNÁNDEZ-KELLY, PATRICIA Y DOUGLAS S. MASSEY

2007 «Borders for Whom? The Role of NAFTA in Mexico-US Migration», *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 610(1), pp. 98-118.

FIGUEROA, ALEJANDRO, ERIK LEE Y RICK VAN SCHOIK

2011 *Realizing the Full Value of Transborder Trade with Mexico*, Tempe, AZ, Arizona State University.

FINANCIERO, EL

2006 «Frontera Sur, Paraíso del Contrabando», septiembre 7, en <www.sintesis-caaarem.org.mx/COM/SPRENSA.NSF/edd9fcf3e268b3c606256d94006eab12/c4e289a329bbe924862571e200633e85?OpenDocument> [consulta: 08/09/2016].

FISCHER, EDWARD F. Y PETER BLAIR BENSON

2006 *Broccoli and Desire: Global Connections and Maya Struggles in Postwar Guatemala*, Stanford, CA, Stanford University Press.

FITTING, ELIZABETH

2011 *The Struggle for Maize: Campesinos, Workers, and Transgenic Corn in the Mexican Countryside*, Durham, NC, Duke University Press.

FITZGERALD, DAVID

2008 *A Nation of Emigrants: How Mexico Manages Its Migration*, Berkeley, University of California Press.

FLORES, NANCY

2014 «Chiapas: Militarization and Looting Threaten Indigenous». *Chiapas Support Committee*, junio 20, en <<http://compamanuel.com/2014/06/20/chiapas-militarization-and-looting-threaten-indigenous/>> [consulta: 01/12/2014].

FLYNN, DONNA K.

1997 «'We Are the Border': Identity, Exchange, and the State along the Bénin Nigeria Border», *American Ethnologist*, 24(2), pp. 311-330.

FOUCAULT, MICHEL

1990 *The History of Sexuality. 1: An Introduction*, Nueva York, Vintage.

FOX, JONATHAN

1994 «The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from Mexico», *World Politics*, 46(2), pp. 151-184.

FOX, JONATHAN Y LIBBY HAIGHT

2010 «Preface and Synthesis of Research Findings: Farm Subsidy Policy Trends» y «Mexican Agricultural Policy: Multiple Goals and Conflicting Interests», en Jonathan Fox y Libby Haight (eds.), *Subsidizing Inequality: Mexican Corn Policy since NAFTA*, Ciudad de México/ Santa Cruz, Woodrow Wilson International Center for Scholars' Mexico Institute, The University of California, Santa Cruz/CIDE, pp. 5-22.

FRANK, DANA

2015 «Just Like Old Times in Central America: Why the U.S. Needs to Stop Funneling Money to Honduras and Start Treating Its President like the Corrupt Ruler He Really Is», *Foreign Policy*, marzo 9, en <<http://foreignpolicy.com/2015/03/09/just-like-old-times-in-central-america-honduras-juan-orlando-hernandez/>> [consulta: 01/12/2015].

FREYERMUTH ENCISO, GRACIELA Y ROSALVA AÍDA HERNÁNDEZ CASTILLO (COMPS).

1992 *Una década de refugio en México: los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos*, Ciudad de México, CIESAS.

FRIMAN, H. RICHARD

2009a «Crime and Globalization», en H. Richard Friman (ed.), *Crime and the Global Political Economy*, Boulder, CO/ Londres, Lynne Rienner Publishers, pp. 1-19.

2009b «Externalizing the Costs of Prohibition», en H. Richard Friman (ed.), *Crime and the Global Political Economy*, Boulder, CO/ Londres, Lynne Rienner Publishers, pp. 49-65.

FRONTERIZO, EL

2007 «Trafican con gasolina en la zona fronteriza con Guatemala», *El Fronterizo*, septiembre 4, Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

FUENTES LÓPEZ, MARIO R., JACOB VAN ETTEN, JOSÉ LUÍS VIVERO Y ÁLVARO ORTEGA

2005 *Maíz para Guatemala, Propuesta para la reactivación de la cadena agroalimentaria de maíz blanco y amarillo*, serie «PESA Investigación», 1, Guatemala, FAO Guatemala.

GACETA MEXICANA

2016 «Libera al ex presidente municipal de Frontera Comalapa», *Gaceta Mexicana*, abril 7, en <www.gacetamexicana.com/libera-al-expresidente-municipal-comalapa/> [consulta: 31/08/2016].

GAGNE, DAVID

2016 «Death but No Taxes: How Guatemala's Elite Foster Crime, Impunity». *InSight Crime*, junio 27, en <www.insightcrime.org/news-analysis/death-but-no-taxes-how-guatemala-elites-foster-crime-impunity/> [consulta: 29/06/2016].

GALÁN, MARCELO

2011 «Militares, a cargo de seguridad en 17 entidades», *El Universal*, febrero 28, en <<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/36411.html>> [consulta: 04/08/2016].

GALEMB, REBECCA B.

2012a «'Corn Is Food, Not Contraband': The Right to 'Free Trade' at the Mexico Guatemala Border», *American Ethnologist*, 39(4), pp. 716-734.

2012b «Remapping the Border: Taxation, Territory, and (Trans) National Identity at the Mexico-Guatemala Border», *Environment and Planning D: Society and Space*, 30(5), pp. 822-841.

2012c «Taking Contraband Seriously: Practicing 'Legitimate Work' at the Mexico-Guatemala Border», *The Anthropology of Work Review*, 33(1), pp. 3-14.

2013 «Illegality and Invisibility at Margins and Borders», *PoLAR. Political and Legal Anthropology Review*, 36(2), pp. 274-285.

2014 «Mexico's Border (In)Security», *The Postcolonialist*, 2(2), en <<http://postcolonialist.com/academic-dispatches/mexicos-border-insecurity/>> [consulta: 09/11/2015].

GALLANT, THOMAS W.

1999 «Brigandage, Piracy, Capitalism, and State-Formation: Transnational Crime from a Historical World-Systems Perspective», en Josiah McC. Heyman (ed.), *States and Illegal Practices*, Oxford, Reino Unido, Berg, pp. 25-62.

GANDOLFO, DANIELLA

2009 *The City at Its Limits: Taboo, Transgression, and Urban Renewal in Lima*, Chicago, University of Chicago Press.

GARCÍA, MARÍA CRISTINA

2006 *Seeking Refuge: Central American Migration to Mexico, the United States, and Canada*, Berkeley, University of California Press.

GARCÍA, MERCEDES

2016 «Alliance for Prosperity in the Northern Triangle: Not a Likely Final Solution for the Central American Migrant Crisis», marzo 3, Washington, DC, Council on Hemispheric Affairs (COHA).

GARCÍA GARCÍA, ANTONINO

- 2002 «La integración de los refugiados guatemaltecos en Chiapas», en Edith Michel Kauffer et al. (comps.), *La integración de los exrefugiados guatemaltecos en México: una experiencia con rostros múltiples*, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ECOSUR, pp. 207-224.

GAS PRICES EXPLAINED

- s.f. en <from <http://gaspricesexplained.org/>> [consulta: 22/10/2015].

GAUTHIER, MELISSA

- 2007 «Fayuca Hormiga: The Cross-Border Trade of Used Clothing between the United States and Mexico», en Emmanuel Brunet-Jailly (ed.), *Borderlands: Comparing Security in North America and Europe*, Ottawa, University of Ottawa Press, pp. 95-116.

GIBLER, JOHN

- 2014 «Are Mexico's Missing Students the Victims of U.S.-Backed Drug War?», *Democracy Now*, noviembre 13, en <http://www.democracynow.org/2014/11/13/are_mexicos_missing_students_the_victims>. [consulta: 01/12/2015].

GIUGALE, MARCELO, OLIVIER LAFOURCADE Y VINH H. NGUYEN (EDS.)

- 2001 *Mexico, A Comprehensive Development Agenda for the New Era*, Washington, DC, World Bank Publications.

GLEDHILL, JOHN

- 2004 «Corruption as a Mirror of the State in Latin America», en Italo Pardo (ed.), *Between Morality and Law: Corruption, Anthropology and Comparative Society*, Aldershot, Hampshire, Reino Unido, Ashgate, pp. 155-179.

GODOY, ANGELINA SNODGRASS

- 2004 «When 'Justice' Is Criminal: Lynchings in Contemporary Latin America», *Theory and Society*, 33(6), pp. 621-651.
- 2006 *Popular Injustice: Violence, Community, and Law in Latin America*, Stanford, CA, Stanford University Press.

GOLDÍN, LILIANA R.

- 2011 *Global Maya: Work and Ideology in Rural Guatemala*, Tucson, University of Arizona Press.

GOLDSTEIN, DANIEL M.

- 2004 *The Spectacular City: Violence and Performance in Urban Bolivia*, Durham, NC, Duke University Press.
- 2005 «Flexible Justice: Neoliberal Violence and Self-Help Security in Bolivia», *Critique of Anthropology*, 25(4), pp. 389-411.
- 2010 «Toward a Critical Anthropology of Security», *Current Anthropology*, 51(4), pp. 487-517.

GOLDSTEIN, DANIEL M.

- 2012 *Outlawed: Between Security and Rights in a Bolivian City*, Durham, NC, Duke University Press.
- 2016 *Owners of the Sidewalk: Security and Survival in the Informal City*, Durham, NC, Duke University Press.

GOMBERG-MUÑOZ, RUTH

- 2011 *Labor and Legality: An Ethnography of a Mexican Immigrant Network*, Oxford, Reino Unido, Oxford University Press.

GÓMEZ, PEDRO JOAQUIN ORTIZ GUZMÁN

- 2002 «Comité Coordinador de Integración y Desarrollo Comunitario en Chiapas, México (CIDECH) y su Papel en el Proceso de la Integración de los Refugiados Guatemaltecos en Chiapas», en Edith F. Kauffer Michel (ed.), *La integración de los exrefugiados guatemaltecos en México: una experiencia con rostros múltiples*, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ECOSUR, pp. 111-121.

GONZÁLEZ, ELIZABETH

- 2015a «Central America Update: Unpacking \$1 Billion in U.S. Assistance to the Northern Triangle», *Council of the Americas*, febrero 6, en <www.as-coa.org/articles/central-america-update-unpacking-1-billion-us-assistance-northern-triangle> [consulta: 01/12/2015].
- 2015b «Weekly Chart: Latin America's Informal Economy». *Council of the Americas*, abril 2, en <www.as-coa.org/articles/weekly-chart-latin-americas-informal-economy> [consulta: 20/10/2015].

GONZALES, MARIANO

- 2011 «Violencia en Guatemala: aproximaciones al panorama estadístico e hipótesis sobre su aumento en postguerra», *Diálogo* 29, Tercera Época, Guatemala, Flacso-Guatemala.

GOODALE, MARK Y NANCY POSTERO

- 2013 «Revolution and Retrenchment: Illuminating the Present in Latin America», en Mark Goodale y Nancy Postero (eds.), *Neoliberalism. Interrupted: Social Change and Contested Governance in Contemporary Latin America*, Stanford, CA, Stanford University Press, pp. 1-22.

GOOTENBERG, PAUL

- 2008 *Andean Cocaine: The Making of a Global Drug*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- 2012 «Cocaine's Long March North, 1900-2010», *Latin American Politics and Society*, 54(1), pp. 159-180.

GORDILLO, GASTÓN

2006 «The Crucible of Citizenship: ID-paper Fetishism in the Argentine Chaco», *American Ethnologist*, 33(2), pp. 162-176.

GRANDIA, LIZA

2012 *Enclosed: Conservation, Cattle, and Commerce among the Q'eqchi' Maya*, Seattle, University of Washington Press.

GRANN, DAVID

2011 «A Murder Foretold: Unraveling the Ultimate Political Conspiracy», *The New Yorker*, abril 4, en <www.newyorker.com/magazine/2011/04/04/a-murder-foretold> [consulta: 20/10/2015].

GRANDIN, GREG

2000 *The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation*, Durham, NC, Duke University Press.

GRIMSON, ALEJANDRO

2002 «Hygiene Wars on the Mercosur Border: Local and National Agency in Uruguaiana (Brazil) and Paso de los Libres (Argentina)», *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 9(2), pp. 151-172.

GRINDLE, MERILEE SERRILL

1996 *Challenging the State: Crisis and Innovation in Latin America and Africa*, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.

GUATEMALA HUMAN RIGHTS COMMISSION/ USA FACT SHEET

s.f. <www.ghrc-usa.org/Publications/factsheet_USAssistance_Guatemala.pdf> [consulta: 20/10/2015].

GUPTA, AKHIL Y JAMES FERGUSON

1997 *Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology*, Durham, NC, Duke University Press.

GUTMANN, MATTHEW

2002 *The Romance of Democracy: Compliant Defiance in Contemporary Mexico*, Berkeley, University of California Press.

GUZMÁN MÉRIDA, PEDRO ALBERTO

2004 *Olas en la Sierra: Eventos, Casos y Observaciones de Huehuetenango*, Huehuetenango, Guatemala, CEDFOG.

HALE, CHARLES R.

2005 «Neoliberal Multiculturalism: The Remaking of Cultural Rights and Racial Dominance in Central America», *Political and Legal Anthropology Review*, 28(1), pp. 10-28.

HALE, CHARLES R.

2006 *Más que un Indio: Racial Ambivalence and Neoliberal Multiculturalism in Guatemala*, Santa Fe, NM, School for Advanced Research Press.

HART, KEITH

1973 «Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana», *Journal of Modern African Studies*, 11(1), pp. 61-89.

HARVEY, DAVID

2005 *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford, Reino Unido, Oxford University Press.

HARVEY, NEIL

1998 *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*, Durham, NC, Duke University Press.

HERNÁNDEZ, LUIS

1992 «Maiceros: De la guerra por los precios al desarrollo rural integral», en Cynthia de Alcantará (coord.), *Reestructuración económica y subsistencia rural: el maíz y la crisis de la década de 1980*, México, Colmex, pp. 87-107.

HERNÁNDEZ CASTILLO, ROSALVA AÍDA

1992 «Los refugiados guatemaltecos y la dinámica fronteriza en Chiapas», en Graciela Freyermuth Enciso y Rosalva Aída Hernández Castillo (comps.), *Una década de refugio en México: los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos*, Chiapas, México, CIESAS/Instituto Chiapaneco de Cultura, pp. 93-105.

2001 *Histories and Stories from Chiapas: Border Identities in Southern Mexico*, Austin, University of Texas Press.

2012 «Cross Border Mobility and Transnational Identities: New Border Crossings Amongst Mexican mam People», *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 17(1), pp. 65-87.

HENRÍQUEZ, ELIO

2016 «Rechazan 60 poblados de Chiapas hidroeléctrica en el río Usumacinta». *La Jornada*, abril 10, en <www.jornada.unam.mx/2016/04/10/estados/024niest> [consulta: 07/12/2016].

HEWITT DE ALCANTARÁ, CYNTHIA

1992 «Introducción: Reestructuración económica y subsistencia rural», en Cynthia Hewitt de Alcantará (coord.), *Reestructuración económica y subsistencia rural: el maíz y la crisis de la década de 1980*, Ciudad de México, Colmex, pp. 15-61.

HEYMAN, JOSIAH MCC.

1994 «The Mexico-United States Border in Anthropology: A Critique and Reformulation», *Journal of Political Ecology*, 1(1), pp. 43-66.

HEYMAN, JOSIAH MCC.

- 1995 «Putting Power in the Anthropology of Bureaucracy: The Immigration and Naturalization Service at the Mexico-United States Border», *Current Anthropology*, 36(2), pp. 261-287.
- 2013 «The Study of Illegality and Legality: Which Way Forward?», *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, 36(2), pp. 304-307.

HEYMAN, JOSIAH MCC. Y HOWARD C. CAMPBELL

- 2007 «Corruption in the U.S. Borderlands with Mexico: The 'Purity' of Society and the 'Perversity' of Borders», en Monique Nuijten y Gerhard Anders (eds.), *Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective*, Aldershot, Hampshire, Reino Unido, Ashgate, pp. 191-218.
- 2011 «Afterword: Crime on and across Borders», en Elaine Carey y Andrae M. Marak (eds.), *Smugglers, Brothels, and Twine: Historical Perspectives on Contraband and Vice in North America's Borderlands*, Tuscon, University of Arizona Press, pp. 177-190.

HEYMAN, JOSIAH MCC. Y ALAN SMART

- 1999 «States and Illegal Practices: An Overview», en Josiah McC. Heyman (ed.), *States and Illegal Practices*, Oxford, Reino Unido, Berg, pp. 1-24.

HONDAGNEU-SOTELO, PIERRETTE Y ERNESTINE AVILA

- 1997 «'I'm Here, but I'm There': The Meanings of Latina Transnational Motherhood», *Gender & Society*, 11(5), pp. 548-571.

HOYO, HENIO

- 2015 «Report on Citizenship Law: Mexico». EUDO Citizenship Observatory. Robert Schuman Centre for Advanced Studies en colaboración con Edinburgh University Law School. Country Report, RSCAS/EUDO-CIT-CR 2015/2016. San Domenico di Fiesole, Italia, Badia Fiesolana.
- 2016 «Nationals, but Not Full Citizens: Naturalisation Policies in Mexico», *Migration Letters*, 13(1), pp. 100-115.

HRISTOULAS, ATHANASIOS

- 2003 «Trading Places: Canada, Mexico, and North American Security», Peter Andreas y Thomas J. Biersteker (eds.), *The Rebordering of North America: Integration and Exclusion in a New Security Context*, Nueva York/ Londres, Routledge, pp. 24-45.

HUBBARD URREA, E.

- 2010 *Nacionalidad, Ciudadanía y Voto en el Extranjero*, Culiacán, Comisión Estatal Electoral de Sinaloa.

HUFBAUER, GARY CLYDE Y GUSTAVO VEGA-CÁNOVAS

2003 «Whither NAFTA? A Common Frontier», en Peter Andreas y Thomas J. Biersteker (eds.), *The Rebordering of North America: Integration and Exclusion in a New Security Context*, Nueva York/ Londres, Routledge, pp. 128-152.

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)

2015 «World Report 2015: Mexico. Events of 2014», en <www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/mexico> [consulta: 01/12/2015].

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (IDIES)

2012 «Estudio de potencial económico y propuesta de mercado territorial de Huehuetenango», coordinado por María Frausto, Universidad Rafael Landívar, en <www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/HUEHUETENANGO%20Estudio%20de%20potencial%20econ%C3%B3mico.pdf> [consulta: 03/12/2015].

IMMERMAN, RICHARD H.

2010 *The CIA in Guatemala: The Foreign Policy of Intervention*, Austin, University of Texas Press.

INDEX MUNDI

2016 «Mexican Peso to US Dollar Exchange Rate. Agosto 28, 2006-Agosto 19, 2016», New York: United States Federal Reserve Bank of New York, en <www.indexmundi.com/xrates/graph.aspx?c1=MXN&c2=USD&days=3650> [consulta: 24/08/2016].

INDA, JONATHAN XAVIER Y JULIE A. DOWLING

2013 «Introduction: Governing Migrant Illegality», en Julie Dowling y Jonathan Inda (eds.), *Governing Immigration through Crime: A Reader*, Stanford, CA, Stanford University Press, pp. 1-36.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).

2013 «Caracterización Departamental de Huehuetenango 2012», noviembre, Gobierno de Guatemala, pp. 1-76, en <www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2013/12/09/Rg8LuLRvK4eMdsJ1Ox2RARHwzDBRC6YD.pdf> [consulta: 03/12/2015].

2013 «Caracterización Huehuetenango 2012», diciembre, Gobierno de Guatemala, pp. 3-37, en <www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2013/12/10/c17rorHI84x540Kpu-3DPOYIXVfVJ4VLt.pdf> [consulta: 08/04/2017].

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)

2010 «Estados Unidos Mexicanos. Censo de Población y Vivienda 2010. Resultados definitivos. Tabulados básicos», en <www.inegi.org.mx> [consulta: 04/03/2011].

2011 «Perspectiva Estadística Chiapas», Diciembre 2011, Aguascalientes, México, INEGI.

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, SECRETARÍA DE SALUD

2012 *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*, Ciudad de México, en <<https://encuestas.insp.mx/ena/en2011.php>>.

INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

2013 «Human Rights of Migrants and Other Persons in the Context of Human Mobility in Mexico», *Organization of American States*, diciembre 30.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

2014 «Plan of the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle: Regional Plan Prepared by El Salvador, Guatemala y Honduras», septiembre, en <<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39224238>> [consulta: 01/12/2015].

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD)

2012 «Enabling Poor Rural People to Overcome Poverty in Guatemala», Roma, Italia, mayo, en <www.ifad.org/documents/10180/16e68b93-2e7f-4804-8385-b8d53d784130> [consulta: 17/04/2017].

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION (ILO)

2014 «Thematic Labour Overview: Transition to Formality in Latin America and the Caribbean», Regional Office for Latin America and the Caribbean, en <http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_314469.pdf> [consulta: 22/10/2015].

ISACSON, ADAM, MAUREEN MEYER Y GABRIELA MORALES

2014 «Mexico's Other Border: Security, Migration, and Humanitarian Crisis at the Line with Central America», agosto, Washington, DC, Washington Office on Latin America, pp. 2-44.

ISACSON, ADAM, MAUREEN MEYER Y HANNAH SMITH

2015 «Increased Enforcement at Mexico's Southern Border: An Update on Security, Migration and U.S. Assistance», noviembre 9, Washington Office on Latin America, en <www.wola.org/analysis/new-report-increased-enforcement-at-mexicos-southern-border/> [consulta: 08/08/2016].

ITA, ANA DE

1997 «Impunidad local en el mercado global: Los maiceros entre el filo del gobierno mexicano y el libre comercio», ponencia al Congreso de LASA 97, Guadalajara, México, del 17 al 19 de abril de 1997.

2007 «Fourteen Years of NAFTA and the Tortilla Crisis», *Bilaterals.org* en <www.bilaterals.org/?fourteen-years-of-nafta-and-the/> [consulta: 21/10/2015].

ITZIGSOHN, JOSÉ

- 2000 *Developing Poverty: The State, Labor Market Deregulation, and the Informal Economy in Costa Rica and the Dominican Republic*, University Park, Pennsylvania State University Press.

JARAMILLO, VELIA

- 2001 «Mexico's Southern Plan: The Facts. Crackdown Underway on Migration from Central America», *World Press Review*, junio 26, en <www.worldpress.org/0901feature22.htm> [consulta: 01/12/2015].

JOHNSON, JENNIFER

- 2008 «The Forgotten Border: Migration & Human Rights at Mexico's Southern Border», enero, Washington, DC, Latin America Working Group Education Fund, pp. 1-24.

JONAS, SUSANNE

- 2013 «Guatemalan Migration in Times of Civil War and Post-War Challenges», *Migration Policy Institute*, marzo 27, en <www.migrationpolicy.org/article/guatemalan-migration-times-civil-war-and-poswar-challenges> [consulta: 18/12/2015].

JUSIONYTE, IEVA

- 2013 «On and off the Record: The production of legitimacy in an Argentine border town», *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, 36(2), pp. 231-248.
- 2015 *Savage Frontier: Making News and Security on the Argentine Border*, Berkeley, University of California Press.

KAR, DEV

- 2012 «Mexico: Illicit Financial Flows, Macroeconomic Imbalances, and the Underground Economy», Washington DC, Global Financial Integrity (GFI), A Program of the Center for International Policy.

KARIBO, HOLLY

- 2011 «Detroit's Border Brothel: Sex Tourism in Windsor, Ontario, 1945-1960», en Elaine Carey y Andrae M. Marak (eds.), *Smugglers, Brothels, and Twine: Historical Perspectives on Contraband and Vice in North America's Borderlands*, Tuscon, University of Arizona Press pp. 83-100.

KAUFFER, EDITH F. MICHEL

- 2002 «Introducción», en Edith F. Kauffer Michel (ed.), *La integración de los exrefugiados guatemaltecos en México: una experiencia con rostros múltiples*, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ECOSUR, pp. 13-18.

KAUFFER, EDITH F. MICHEL Y JUAN CARLOS VELASCO SANTOS

2002 *En el camino de la integración: exrefugiados y mexicanos en Chiapas*, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ECOSUR.

KELLY, PATTY

2008 *Lydia's Open Door: Inside Mexico's Most Modern Brothel*, Berkeley, University of California Press.

KELLY, TOBIAS

2006 «Documented Lives: Fear and Uncertainties of law during the Second Palestinian Intifada», *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 12(1), pp. 89-107.

KING, AMANDA

2006 «Ten Years with NAFTA: A Review of the Literature and an Analysis of Farmer Responses in Sonora and Veracruz», CIMMYT Special Report 06-01. Ciudad de Mexico, CIMMYT/Congressional Hunger Center.

KNIGHT, ALAN

1986 *The Mexican Revolution*, vol. I, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.

KOVIC, CHRISTINE

2008 «Jumping from a Moving Train: Risk, Migration and Rights at NAFTA's Southern Border», *Practicing Anthropology*, 30(2), pp. 32-36.

LAKHANI, NINA

2014 «Claudia Paz y Paz Ousting Puts Spotlight on Guatemalan Justice System», *The Guardian*, febrero 19, en <www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/feb/19/claudia-paz-y-paz-guatemala-justice-system> [consulta: 17/04/2017].

2015 «Mexico Departs Record Numbers of Women and Children in US Driven effort», *The Guardian*, febrero 4, en <www.theguardian.com/world/2015/feb/04/mexico-departs-record-numbers-women-children-central-america> [consulta: 01/12/2015].

2016 «Mexico Tortures Migrants —and Citizens— in Effort to Slow Central American Surge», *The Guardian*, abril 4, en <www.theguardian.com/world/2016/apr/04/mexico-torturemigrants-citizens-central-america> [consulta: 13/06/2016].

LATINO NEWS

2012 «Información Valiosa sobre la 'Nueva Cédula de Guatemala'», *Latino Alabama/Tennessee*, diciembre 1, en <www.latino-news.com/informacion-valiosa-sobrela-nueva-cedula-de-guatemala/> [consulta: 02/08/2016].

- LE CLERCQ ORTEGA, JUAN ANTONIO, GERARDO RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ LARA (COORDS.)
2016 «Índice Global de Impunidad México IGI-MEX 2016», *Centro de Estudios Sobre Impunidad (CESIJ)*, febrero, Puebla, Universidad de las Américas Puebla.
- LEWIS, STEPHEN E.
2005 *The Ambivalent Revolution: Forging State and Nation in Chiapas, 1910-1945*, Albuquerque, University of New Mexico Press.
- LITTLE, WALTER E.
2013 «Maya Handicraft Vendors' craft Discourses, 'Free Trade Is Not For Everyone in Guatemala'», en Jennifer L. Burrell y Ellen Moodie (eds.), *Central America in the New Millennium: Living Transition and Reimagining Democracy*, Oxford/Londres, Berghahn Books.
- LITTLE-SIEBOLD, CHRISTA
2001 «Beyond the Indian-Ladino Dichotomy: Contested Identities, Ethnicities, Class and the Emergent National State», *Journal of Latin American Anthropology*, 6(2), pp. 176-197.
- LOHMULLER, MICHAEL
2016 «CentAm Still Dominant Cocaine Route into US: State Dept», *InSight Crime*, marzo 5, <www.insightcrime.org/news-analysis/central-america-still-dominant-cocaine-route-us-state-department-report> [consulta: 17/04/2017].
- LOMNITZ, CLAUDIO
1995 «Ritual, Rumor and Corruption in the Constitution of Polity in Mexico», *Journal of Latin American Anthropology*, 1(1), pp. 20-24.
- LÓPEZ, JULIE
2013 «Guatemala: la cambiante cara del narco», *Plaza Pública*, julio 18, en <www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-la-cambiante-cara-del-narco> [consulta: 29/07/2016].
- LUDY, VIRGINA MOLINA
1998 «Migración, Historia e Identidad. El Caso de los Guatemaltecos en Chiapas», en Raquel Barcelo y Martha Judith Sánchez (coords.), *Diversidad étnica y conflicto en América Latina*. Vol. III: *Migración y etnicidad: reflexiones teóricas y estudios de caso*, Ciudad de México, IIS-UNAM, pp. 201-216.
- MACGAFFEY, JANET Y RÉMY BAZENGUISSA-GANGA
2000 *Congo-Paris: Transnational Traders on the Margins of the Law*, Bloomington, Indiana University Press.
- MAIN, ALEXANDER
2015 «Will Biden's Billion Dollar Plan Help Central America?», *NACLA*, febrero 27, en <<https://nacla.org/news/2015/02/27/will-biden-s-billion-dollar-plan-help-central-america>> [consulta: 01/12/2015].

MALKIN, VICTORIA

2001 «Narcotrafficking, Migration, and Modernity in Rural Mexico», *Latin American Perspectives*, 28(4), pp. 101-128.

MANZ, BEATRIZ

1988 *Refugees of a Hidden War: The Aftermath of Counter-Insurgency in Guatemala*, Albany, State University of New York Press.

2004 *Paradise in Ashes: A Guatemalan Journey of Courage, Terror, and Hope*, Berkeley, University of California Press.

MARTÍN PÉREZ, FREDY

2006 «Las pistas del narco», *Contralínea*, febrero, en <<http://chiapas.contralinea.com.mx/archivo/2006/febrero/htm/LasPistasNarco.htm>> [consulta: 21/10/2015].

MARTÍNEZ, OSCAR J.

1994 *Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands*, Tucson, University of Arizona Press.

MARX, KARL

1990 [1867] «The Fetishism of the Commodity and Its Secret», *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. 1, Londres, Penguin, pp. 163-177.

MATHEWS, GORDON Y CARLOS ALBA VEGA

2012 «Introduction: What Is Globalization from Below?», en Gordon Mathews, Gustavo Lins Ribeiro y Carlos Alba Vega (eds.), *Globalization from Below: The World's Other Economy*, Londres/ Nueva York, Routledge, pp. 1-16.

MCCUNE, NILS MAX, FRANCISCO GUEVARA-HERNÁNDEZ, JOSE NAHED-TORAL, PAULA MENDOZA-NAZAR, JESUS OVANDO-CRUZ, BENIGNO RUÍZ-SESMA Y LEOPOLDO MEDINA-SANSON

2012 «Social-Ecological Resilience and Maize Farming in Chiapas, Mexico», en Sime Curkovic (ed.), *Sustainable Development-Authoritative and Leading Edge Content for Environmental Management*, Rijeka, Croacia, INTECH, pp. 485-512.

McMURRAY, DAVID

2001 *In and Out of Morocco: Smuggling and Migration in a Frontier Boomtown*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

MEAGHER, KATE

2014 «Smuggling Ideologies: from Criminalization to Hybrid Governance in African Clandestine Economies», *African Affairs*, 113(453), pp. 497-517.

MELGAR, LOURDES

2012 «The Future of Pemex», *Americas Quarterly*, verano, en <www.americasquarterly.org/node/3781> [consulta: 05/08/2016].

MERCADO ASENCIO, KAREN

2012 «The Under-Registration of Births in Mexico: Consequences for Children, Adults, and Migrants». *Migration Policy Institute*, abril 12, en <www.migrationpolicy.org/article/under-registration-births-mexico-consequences-children-adults-and-migrants> [consulta: 12/08/2016].

MERRY, SALLY ENGLE

2006 «Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle», *American Anthropologist*, 108(1), pp. 38-51.

MESOAMERICAN WORKING GROUP (MAWG)

2013 «Rethinking the Drug War in Central America and Mexico», noviembre, en <www.ghrc-usa.org/wp-content/uploads/2013/12/Mesoamerica-Working-Group_Rethinking-Drug-War-Web-Version.pdf> [consulta: 11/12/2014].

MILLAR, KATHLEEN

2014 «The Precarious Present: Wageless Labor and Disrupted Life in Rio de Janeiro, Brazil», *Cultural Anthropology*, 29(1), pp. 32-53.

MINISTERIO DE LA ECONOMÍA (MINECO)

2011 *Comunicado: Se autoriza la importación de contingentes de harina de trigo y maíz blanco*, febrero 9, Ciudad de Guatemala, MINECO.

MITCHELL, TIMOTHY

1999 «Society, Economy, and the State Effect», en George Steinmetz (ed.), *State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn*, Ithaca, NY/ Londres, Cornell University Press, pp. 7-97.

MOLYNEUX, MAXINE

2006 «Mothers at the Service of the New Poverty Agenda: Progresas/Oportunidades, Mexico's Conditional Transfer Programme», *Social Policy & Administration*, 40(4), pp. 425-449.

MONTEJO, VICTOR

1999 *Voices from Exile: Violence and Survival in Modern Maya History*, Norman, University of Oklahoma Press.

MORALES, ISIDRO

1999 «NAFTA: The Institutionalisation of Economic Openness and the Configuration of Mexican Geo-Economic Spaces», *Third World Quarterly*, 20(5), pp. 971-993.

MUCIÑO, FRANCISCO

2014 «SAT invertirá 9,300 mdp para modernizar aduanas». *Forbes*, México. *Forbes*, julio 10, en <www.forbes.com.mx/sat-invertira-9300-mdp-paramodernizar-aduanas/> [consulta: 21/10/2015].

MUEHLMANN, SHAYLIH

2014 *When I Wear My Alligator Boots: Narco-Culture in the U.S.-Mexico Borderlands*, Berkeley, University of California Press.

NADAL, ALEJANDRO

2000 «The Environmental and Social Impacts of Economic Liberalization on Corn Production in Mexico», Oxford, Reino Unido, Oxfam-GB-WWF-International.

NAVARRO HERNÁNDEZ, LUIS

2004 «To Die a Little: Migration and Coffee in Mexico and Central America», *Counterpunch*, diciembre 15, en <www.counterpunch.org/2004/12/15/migration-and-coffee-in-mexico-and-central-america/> [consulta: 01/12/2015].

NAZARIO, SONIA

2014 *Enrique's Journey*, Nueva York, Random House.

NAÍM, MOISES

2005 *Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats Are Hijacking the Global Economy*, Nueva York, Anchor Books and Random House.

NASH, JUNIO

2001 *Mayan Visions: The Quest for Autonomy in an Age of Globalization*, Nueva York, Routledge.

NAYLOR, R. T

2002 *Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy*, Ithaca, NY/ Londres, Cornell University Press.

NEVINS, JOSEPH

2002 *Operation Gatekeeper: The Rise of the «Illegal Alien» and the Making of the U.S.-Mexico Boundary*, Nueva York, Routledge.

2014 «Policing the Workplace and Rebuilding the State in 'America's Finest City': US Immigration Control in the San Diego, California-Mexico Borderlands», *Global Society*, 28(4), pp. 462-482.

NOLAN-FERRELL, CATHERINE

2005 «El desarrollo de una región sin una identidad nacional: la zona del Soconusco, Chiapas, 1880-1920», en Mercedes Olivera y María Dolores Palomo (eds.), *Chiapas: de la Independencia a La Revolución*, Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CIESAS/ Cocytch, pp. 301-312.

NOLIN, CATHERINE Y JAQUI STEPHENS

2010 «'We Have to Protect the Investors': Development & Canadian Mining Companies in Guatemala», *Journal of Rural and Community Development*, 5(3), pp. 37-70.

NOLIN HANLON, CATHERINE

- 1999 «Guatemalan Refugees and Returnees: Place and Maya Identity», en Liisa North y Alan B. Simmons (eds.), *Journeys of Fear: Refugee Return and National Transformation in Guatemala*, Montreal, PQ/ Kingston, ON, McGill-Queen's University Press, pp. 213-236.

NORDSTROM, CAROLYN

- 2007 *Global Outlaws: Crime, Money, and Power in the Contemporary World*, Berkeley, University of California Press.

NUGENT, DAVID Y ANA MARÍA ALONSO

- 1994 «Multiple Selective Traditions in Agrarian Struggle: Popular Culture and State Formation in the *Ejido* of Namiquipa, Chihuahua», en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham, NC, Duke University Press, pp. 209-246.

NUIJTEN, MONIQUE

- 2003 *Power, Community, and the State: The Political Anthropology of Organization in Mexico*, Londres, Pluto Press.

OBJECTIVE CORPORATE RESEARCH (OCR)

- 2006 Taghmen Energy (TAG). An Exposure to Oil Exploration and Production in Colombia and Guatemala, mayo 12, Sam Kiri, analyst, Londres, Objective Capital Limited, pp. 1-40.

OGREN, CASSANDRA

- 2007 «Migration and Human Rights on the Mexico-Guatemala Border», *International Migration*, 45(4), pp. 203-243.

OKEOWO, ALEXIS

- 2017 «The Gas-Price Protests Gripping Mexico», *The New Yorker*, enero 24, en <www.newyorker.com/news/daily-comment/the-gas-price-protests-gripping-mexico> [consulta: 19/04/2017].

OLSON, ERIC L., DAVID A. SHIRK Y ANDREW SELEE

- 2010 «Introduction», en Eric L. Olson, David A. Shirk y Andrew Selee (eds.), *Shared Responsibility: U.S.-Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime*, San Diego, CA, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute, Trans-Border Institute, USCD, pp. 1-30.

ONG, AIWHA

- 2006 *Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Durham, NC: Duke University Press.

ORBE, EL

- 2015 «Imparable el Contrabando en la Frontera Sur», *El Orbe*, abril 1, en <<http://elorbe.com/portada/2015/04/01/imparable-el-contrabando-en-la-frontera-sur-2.html>> [consulta: 08/08/2016].

OSBURG, JOHN

- 2013 «Meeting the ‘Godfather’: Fieldwork and Ethnographic Seduction in a Chinese Nightclub», *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, 36(2), pp. 98-303.

PALEY, DAWN

- 2014 *Drug War Capitalism*, Oakland, CA, AK Press.

PELÁEZ-HERREROS, ÓSCAR

- 2012 «Análisis de los Indicadores de Desarrollo Humano, Marginación, Rezago Social y Pobreza en los Municipios de Chiapas a Partir de una Perspectiva Demográfica», *Economía, sociedad y territorio*, 12(38), pp. 181-213.

PENGLASE, BEN

- 2009 «States of Insecurity: Everyday Emergencies, Public Secrets, and Drug Trafficker Power in a Brazilian Favela», *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, 32(1), pp. 47-63.
- 2011 «Lost Bullets: Fetishes of Urban Violence in Rio de Janeiro, Brazil», *Anthropological Quarterly*, 84(2), pp. 411-438.

PEOPLE'S World

- 2007 «Mexico's Tortilla Crisis: Harvest of NAFTA», febrero 9, en <<http://peoplesworld.org/mexico-s-tortilla-crisis-harvest-of-nafta>> [consulta: 21/10/2015].

PÉREZ GROVAS, VÍCTOR, EDITH CERVANTES, JOHN BURSTEIN, LAURA CARLSEN Y LUIS HERNÁNDEZ

- 2002 *El Café en México, Centroamérica y el Caribe: Una Salida Sustentable a la Crisis*, Ciudad de México, Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas/Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras.

PÉREZ RUIZ, MAYA LORENA

- 2004 «Cercos antizapatista y lucha por la tierra en Chiapas: El Caso de CEOIC», en Maya Lorena Pérez Ruiz (ed.), *Tejiendo historias: tierra, género y poder en Chiapas*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 31-70.

PERRET, ANTOINE

- 2012 «Privatization of the War on Drugs in Mexico and Colombia», *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law*, 7(1), pp. 45-67.

PICKARD, MIGUEL

- 2002 «PPP: Plan Puebla Panama, or Private Plans for Profit?», CorpWatch, septiembre 19, en <www.corpwatch.org/article.php?id=3953> [consulta: 01/12/2015].
- 2003 «Grassroots Protests Force the Mexican Government to Search for a New ppp Strategy», *Americas Program Policy Report*, marzo 1, Silver City, NM, Interhemispheric Resource Center.
- 2005 «Trinational Elites Map North American Future in 'NAFTA Plus'», *Americas Program*, agosto 24, Silver City, NM, International Relations Center.

PLANTE, MICHAEL D. Y AMY JORDAN

- 2013 «Getting Prices Right: Addressing Mexico's History of Fuel Subsidies», *Southwest Economy. Federal Reserve Bank of Dallas*, Third Quarterly, pp. 10-13.

PRENSA LIBRE (LA)

- 2008 «Pobladores de Agua Zarca prefieren callar», diciembre 2, en <www.prensali-bre.com/pl/2008/diciembre/02/280467.html> [consulta: mayo 2009] (el enlace ya no está disponible).

PRESTON, JULIA

- 1998 «Mexican Governor Resigns in Aftermath of Indians' Massacre», *The New York Times*, enero 8, en <www.nytimes.com/1998/01/08/world/mexican-governor-resigns-in-aftermath-of-indians-massacre.html> [consulta: 21/10/2015].

QUIMINET.COM

- 2006 «Frontera Sur. Paraíso del contrabando», septiembre 7, en <www.quiminet.com/noticias/frontera-sur-paraíso-del-contrabando-2275020.htm> [consulta: 22/10/2015].

QUINTO, RICARDO

- 2007 «Los precios de combustible llegaron a su nivel más alto de la historia de Guatemala», *El Periódico*, mayo 24, en <www.elperiodico.com.gt/es/20070524/actualidad/39945> [consulta: mayo de 2009] (el enlace ya no está disponible).

RADIO EN LÍNEA (EMISORAS UNIDAS 89.7)

- 2011 «Manifestantes bloquean rutas de Huehuetenango por controles de maíz de contrabando», con información de Mike Castillo, en <<http://noticias.emisora-sunidas.com/noticias/nacionales/manifestantes-bloquean-rutas-de-huehueta-nango-por-controles-al-maiz-de-contraban>> [consulta: 09/07/2012].

RECINOS, ADRIÁN

- 1991 *Popol Vuh: The Sacred Book of the Ancient Quiché Maya*, trad. al inglés de Delia Goetz y Sylvanus G. Morley, Norman, University of Oklahoma Press.

REEVES, BENJAMIN

- 2014 «Attorney General Out in May, Says Guatemalan Court», *The Tico Times News*, marzo 11, en <www.ticotimes.net/2014/03/11/attorney-general-out-in-may-says-guatemala-court> [consulta: 20/10/2015].

REEVES, MADELEINE

- 2013 «Clean Fake: Authenticating Documents and Persons in Migrant Moscow», *American Ethnologist*, 40(3), pp. 508-524.
- 2014 *Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia*, Ithaca, NY, Cornell University Press.

RENARD, MARIE CHRISTINE

- 2011 «Free Trade of Coffee, Exodus of Coffee Workers: The Case of the Southern Mexican Border Region of the State of Chiapas», en Alessandro Bonanno, Josefa Salette Barbosa y Terry Marsden (eds.), *Research in Global Sociology and Development: Globalization and the Time-Space Reorganization: Capital Mobility in Agriculture and Food in the Americas*, vol. 17, Somerville, MA/ Bingley, West Yorkshire, Reino Unido, Emerald Group Publishing Limited, pp. 147-165.

RIBEIRO, GUSTAVO LINS

- 2006 «Economic Globalization from Below», *Etnográfica*, 10(2), pp. 233-249.
- 2012 «Conclusion: Globalization from Below and the Non-Hegemonic World-System», en Gordon Mathews, Gustavo Lins Ribeiro y Carlos Alba Vega (eds.), *Globalization from Below: The World's Other Economy*, Londres/ Nueva York, Routledge, pp. 221-235.

ROBBEN, ANTONIUS

- 1996 «Ethnographic Seduction, Transference, and Resistance Dialogues about Terror and Violence in Argentina», *Ethos*, 24(1), pp. 71-106.

ROITMAN, JANET

- 2005 *Fiscal Disobedience: An Anthropology of Economic Regulation in Central Africa*, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- 2006 «The Ethics of Illegality in the Chad Basin», en Jean Comaroff y John Comaroff (eds.), *Law and Disorder in the Postcolony*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 247-272.

ROSALDO, RENATO

- 2001 «Foreword», en Rosalva Aída Hernández Castillo (ed.), *Histories and Stories from Chiapas: Border Identities in Southern Mexico*, Austin, University of Texas Press, pp. ix-xi.
- 1993 [1989] *Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis*, Boston, Beacon Press.

ROSAS, GILBERTO

- 2006 «The Thickening Borderlands Diffused Exceptionality and 'Immigrant' Social Struggles during the 'War on Terror'», *Cultural Dynamics*, 18(3), pp. 335-349.
- 2012 *Barrio Libre: Criminalizing States and Delinquent Refusals of the New Frontier*, Durham, NC, Duke University Press.

ROUSSEAU, CECILE, MARÍA MORALES Y PATRICIA FOXEN

- 2001 «Going Home: Giving Voice to Memory: Strategies of Young Mayan Refugees Who Returned to Guatemala as a Community», *Culture, Medicine, and Psychiatry*, 25(2), pp. 135-168.

RUS, JAN

- 1994 «The 'Comunidad Revolucionaria Institucional': The Subversion of Native Government in Highland Chiapas, 1936-1968», en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham, NC, Duke University Press, pp. 265-300.

RUS, JAN, AÍDA HERNÁNDEZ CASTILLO Y SHANNON L. MATTIACE, EDS

- 2003 *Mayan Lives, Mayan Utopias: The Indigenous Peoples of Chiapas and the Zapatista Rebellion*, Lanham, MD, Rowman and Littlefield Publishers.

RUS, JAN Y DIEGO VIGIL

- 2007 «Rapid Urbanization and Migrant Indigenous Youth in San Cristóbal, Chiapas, Mexico», en John Hagedorn (ed.), *Gangs in the Global City: Alternatives to Traditional Criminology*, Urbana, University of Illinois, pp. 152-184.

SABET, DANIEL M

- 2010 «Police Reform in Mexico: Advances and Persistent Obstacles», en Eric L. Olson, David A. Shirk y Andrew Selee (eds.), *Shared Responsibility: U.S.-Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime*, San Diego, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute, Trans-Border Institute, UCSD, pp. 247-270.
- 2012 *Police Reform in Mexico: Informal Politics and the Challenge of Institutional Change*, Stanford, CA, Stanford University Press.
- 2015 «Informality, Illegality, and Criminality in Mexico's Border Communities», *Journal of Borderland Studies*, 30(4), pp. 505-517.

SACK, ROBERT DAVID

- 1986 *Human Territoriality: Its Theory and History*, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.

SAHLINS, PETER

- 1989 *Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees*, Berkeley, University of California Press.

SÁNCHEZ, GABRIELLA

- 2014 «Contextualizing the Discourse of Unaccompanied Minors: Postcards from the Frontlines», *Anthropology News: Postcards from the Frontlines*, 55(6), p. 10.

SANDOVAL PALACIOS, JUAN MANUEL

- 2006 «Migración y seguridad nacional en las fronteras norte y sur de México», en Daniel Villafuerte Solís y Xochitl Leyva Solano (eds.), *Geoeconomía y geopolítica en el área del Plan Puebla-Panamá*, Ciudad de México, CIESAS, pp. 237-264.

SARAZÚA, JUAN CARLOS

- 2016 «Informe sobre la Ciudadanía Guatemala», EUDO Citizenship Observatory. Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School. Country Report, RSCAS/EUDO-CIT-CR 2016/2. San Domenico di Fiesole, Italy, Badia Fiesolana.

SCHIRMER, JENNIFER G.

- 1998 *The Guatemalan Military Project: A Violence Called Democracy*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press.

SCHLESINGER, STEPHEN Y STEPHEN KINZER

- 1999 *Bitter Fruit: The Story of an American Coup in Guatemala*, Cambridge, MA, Harvard University Press.

SCHNEIDER, AARON

- 2012 *State-Building and Tax Regimes in Central America*, Nueva York, Cambridge University Press.

SCHNEIDER, JANE Y PETER SCHNEIDER

- 2008 «The Anthropology of Crime and Criminalization», *Annual Review of Anthropology*, 37, pp. 351-373.

SCOTT, JAMES C

- 1976 *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Haven, CT, Yale University Press.
- 1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven, CT, Yale University Press.
- 1998 *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*; New Haven, CT, Yale University Press.
- 2009 *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*, New Haven, CT, Yale University Press.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS/ COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SARH-CEPAL)

- 1992 *Primer informe nacional sobre tipología de productores del sector social*, Ciudad de México, Subsecretaría de Política Social y Concertación/ SARH.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)/ CONEVAL

- 2013 Catálogo de localidades. Unidad de Microregiones. Dirección General Ajunta de Planeación Microregional, en <www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=07&mun=034> [consulta: 03/12/2015].
- 2014 *Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social*. Frontera Comalapa, Chiapas, en <www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2014/Municipios/Chiapas/Chiapas_034.pdf> [consulta: 03/12/2015].

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

- 2016 «Inversión Extranjera Directa en México y en el Mundo. Carpeta de Información Estadística», Dirección General de Inversión Extranjera, junio 1, en <www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/99366/Carpeta_IED_2015_0601.pdf> [consulta: 08/03/2017].

SECRETARÍA DE SALUD

- 2009 «Consejo Nacional contra las Adicciones», Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Instituto Nacional de Salud Pública. *Publicación Especial. Encuesta Nacional de Adicciones*. Reporte de Resultados Nacionales.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

- 2015 *Fronteriza*. Gobierno de Estado de Chiapas, mayo 27, en <<https://sspc.chiapas.gob.mx/Secciones/fronteriza>>.

SEELKE, CLARE RIBANDO

- 2016 «Mexico's Recent Immigration Enforcement Efforts», *Congressional Research Service: In Focus*, marzo 9.

SEELKE, CLARE RIBANDO Y KRISTIN FINKLEA

- 2017 «U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond», *Congressional Research Service*, enero 18, CRS Report for Congress. R41349. Washington, DC.

SIEDER, RACHEL

- 2002 «Recognizing Indigenous Law and the Politics of State Formation in Mesoamerica», en Rachel Sieder (ed.), *Multiculturalism in Latin America: Rights, Diversity, and Democracy*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 184-207.

SIPAZ

- 2001 «UPDATE: Indigenous Rights Law, A New Obstacle to the Peace Process in Chiapas», vol. VI, núm. 3, agosto, en <www.sipaz.org/update-indigenous-rights-law-a-new-obstacle-to-the-peace-process-in-chiapas/?lang=en> [consulta: 17/04/2017].

SLACK, JEREMY Y SCOTT WHITEFORD

- 2011 «Violence and Migration on the Arizona-Sonora Border», *Human Organization*, 70(1), pp. 11-21.

SLUKA, JEFFREY

2000 «Introduction: State Terror and Anthropology», en Jeffrey A. Sluka (ed.), *Death Squad: The Anthropology of State Terror*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, pp. 1-45.

SMART, ALAN

1999 «Predatory Rule and Illegal Economic Practices», en Josiah McC. Heyman (ed.), *States and Illegal Practices*, Oxford, Reino Unido, Berg, pp. 99-128.

SMITH, CAROL A.

1990 *Guatemalan Indians and the State: 1540-1988*, Austin, University of Texas Press, pp. 99-128.

SNYDER, RICHARD Y ANGÉLICA DURÁN-MARTÍNEZ

2009 «Does Illegality Breed Violence? Drug Trafficking and State-Sponsored Protection Rackets», *Crime, Law and Social Change*, 52(3), pp. 253-273.

SORRENTINO, JOSEPH

2015 «Cómo Estados Unidos «Resolvió» La Crisis de Migración Centroamericana», *La Jornada del Campo*, junio 20, en <www.jornada.unam.mx/2015/06/20/cam-crisis.html> [consulta: 01/12/2015]. Publicado originalmente en *These Times*.

STAUDT, KATHLEEN A.

1998 *Free Trade? Informal Economies at the US-Mexico Border*, Filadelfia, Temple University Press.

2001 «Informality Knows No Borders: Perspectives from El Paso-Juárez», *SAIS Review*, 21(1), pp. 123-130.

STEPHEN, LYNN

1999 «The Construction of Indigenous Suspects: Militarization and the Gendered and Ethnic Dynamics of Human Rights Abuses in Southern Mexico», *American Ethnologist*, 26(4), pp. 822-842.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)

2015 «Arancel Centroamericano de Importación», julio, en <<http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/tramites-o-gestiones/aduanas/paraimportar.html>> [consulta: 27/07/2016].

SWORDS, ALICIA

2010 «Teaching Against Neoliberalism in Chiapas, Mexico: Gendered Resistance via Neo-Zapatista Network Politics», en Philip McMichael (ed.), *Contesting Development: Critical Struggles for Social Change*, Nueva York/ Londres, Routledge Press, pp. 116-131.

TAUSSIG, MICHAEL

1997 *The Magic of the State*, Nueva York/ Londres, Routledge.

TAUSSIG, MICHAEL

1998 «Transgression», en Marc C. Taylor (ed.), *Critical Terms for Religious Studies*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 349-364.

2003 *Law in a Lawless Land*, Chicago, University of Chicago Press.

TENUTO-SÁNCHEZ, MARY ANN

2014 «The Plan Puebla-Panama Is Changing Chiapas». *Chiapas Support Committee*, marzo 25, en <<http://compamanuel.com/2014/03/25/the-plan-puebla-panama-is-changing-chiapas/>> [consulta: 20/10/2015].

THOMAS, KEDRON

2011 «Spaces of Structural Adjustment in Guatemala's Apparel Industry», en Kevin Lewis O'Neill y Kedron Thomas (eds.), *Securing the City. Neoliberalism, Space, and Insecurity in Postwar Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, pp. 147-164.

2013 «Brand 'Piracy' and Postwar Statecraft in Guatemala», *Cultural Anthropology*, 28(1), pp. 144-160.

THOMAS, KEDRON Y REBECCA B. GALEMBA

2013 «Illegal Anthropology: An Introduction», *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, 36(2), pp. 211-214.

THOMAS, KEDRON, KEVIN LEWIS O'NEILL Y THOMAS OFFIT

2011 «Securing the City: An Introduction», en Kevin Lewis O'Neill y Kedron Thomas (eds.), *Securing the City. Neoliberalism, Space, and Insecurity in Postwar Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, pp. 1-24.

TICO TIMES, THE

2014 «Guatemala exPresident Alfonso Portillo Pleads Guilty Money Laundering Conspiracy Charges in New York», *AFP: The Tico Times*, marzo 18, en <www.ticotimes.net/2014/03/18/guatemala-expresident-alfonso-portillo-pleads-guilty-to-money-laundering-conspiracy-charges-in-new-york>. [consulta: 01/12/2015]

TOURLIERE, MATHIEU

2015 «Policía Federal, la institución que más roba y extorsiona a migrantes: Redodem», *Proceso*, julio 29, en <www.proceso.com.mx/?p=411839> [consulta: 01/12/2015].

UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

2010 «USAID Country Profile: Property Rights and Resource Governance: Guatemala, agosto 10, en <www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Guatemala_Profile_o.pdf> [consulta: 17/04/2017].

UNHRC. THE UN REFUGEE AGENCY

- 2001 «From Refugee to Citizen: A Guatemalan in Mexico», noviembre 29, en <www.unhcr.org/3c064aab4.html> [consulta: 18/11/2015].

UNITED STATES CENSUS BUREAU

- 2017 Top Trading Partners: February 2017. Washington, DC: U.S. Department of Commerce, febrero, en <www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/toppartners.html> [consulta: 21/04/2017].

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

- 2013 «International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) —Country Reports— Afghanistan through Costa Rica», Diplomacy in Action, marzo 1, en <http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2013/vol1/204048.htm#Costa_Rica> [consulta: 11/08/2016].
- 2015 «Joint Statement by the Presidents of El Salvador, Guatemala y Honduras, and the Vice President of the United States of America Regarding: The Plan for the Alliance for Prosperity of the Northern Triangle», marzo 3, en <www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/03/238138.htm>]consulta: 01/12/2015].
- 2016 «International Narcotics Control Strategy Report, vol. I: Drug and Chemical Control», marzo, Bureau of International Narcotics Law Enforcement Affairs, en <www.state.gov/documents/organization/253655.pdf> [consulta: 12/08/2016].
- 2017 Central American Security Initiative: Fact Sheet: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, enero 20, en <www.state.gov/j/inl/rls/fs/2017/260869.htm> [consulta: 17/04/2017].

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE

- 1997 Truth Commission: Guatemala, febrero 1, en <www.usip.org/publications/truth-commission-guatemala> [consulta: 20/10/2015].

UNITED STATES SOUTHERN COMMAND

- 2014 «Posture Statement of General John F. Kelly, United States Marine Corps Commander, United States Southern Command. Before the 113th Congress», Senate Armed Services Committee, marzo 13, en <www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Kelly_03-13-14.pdf> [consulta: 17/04/2017], pp. 1-45.

URESTE, MANU

- 2014a «Especial: De Tonalá a Tapachula, 224 kilómetros de retenes y corrupción». *AnimalPolítico*, diciembre 15, en <www.animalpolitico.com/2014/12/especial-de-tonala-tapachula-224-kilometros-de-retenes-y-corrupcion/> [consulta: 01/12/2015].
- 2014b «Federales extorsionan a más migrantes que el crimen organizado». *AnimalPolítico*, enero 30, en <www.animalpolitico.com/2014/01/federales-con-mas-denuncias-de-extorsion-migrantes-que-el-crimen-organizado/#axzz37BroGA9m> [consulta: 01/12/2015].

URESTE, MANU

- 2015 «Plan Frontera Sur: un año después, los robos de migrantes se disparan 81% en los estados del sur», *AnimalPolítico*, julio 7, en <www.animalpolitico.com/2015/07/plan-frontera-sur-prometia-protger-a-migrantes-un-ano-des-pues-robos-se-disparan-81-en-estados-del-sur/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=59254541ae-ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-59254541ae-392950997> [consulta: 01/12/2015].
- 2017 «Peña prometió protegerlos, pero delitos contra migrantes en la frontera sur se disparan 200%», *AnimalPolítico*, enero 13, en <www.animalpolitico.com/2017/01/pena-prometio-protgerlos-delitos-migran-tes-la-frontera-sur-se-disparan-200/> [consulta: 19/04/2017].

VÁZQUEZ OLIVERA, MARIO

- 2010 *Chiapas, años decisivos. Independencia, unión a México y Primera República Federal*, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, UNICACH, Colección Selva Negra.

VILA, PABLO

- 1999 «Constructing Social identities in Transnational Contexts: The Case of the Mexico-US border», *International Social Science Journal*, 51(159), pp. 75-87.

VILLAFUERTE SOLÍS, DANIEL

- 2004 *La Frontera Sur de México: Del TLC México-Centroamérica al Plan-Puebla Panamá*, México, UNAM.
- 2005 «Rural Chiapas Ten Years after the Armed Uprising of 1994: An Economic Overview», *The Journal of Peasant Studies*, 32(3-4), pp. 461-483.
- 2009 «Cambio y continuidad en la economía chiapaneca», en Marco Estrada Saavedra (ed.), *Chiapas después de la tormenta: estudios sobre economía, sociedad y política*, Ciudad de México, El Colegio de México, pp. 25-94.
- 2014 «Security Issues on the Mexico-Guatemala Border and Their Relationship to the New National Security Policy of the United States», en Gary Prevost, Harry E. Vanden, Carlos Oliva Campos y Luis Fernando Ayerbe (eds.), *US National Security Concerns in Latin America and the Caribbean: The Concept of Ungoverned Spaces and Failed States*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 113-141.
- 2015 «Crisis Rural, Pobreza y Hambre en Chiapas», *Revista Liminar: Estudios Sociales y Humanísticos*, 13(1), pp. 13-28.

VILLAFUERTE SOLÍS, DANIEL Y MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUILAR

- 2006 «Crisis rural y migraciones en Chiapas, *Migración y Desarrollo*, 6, primer semestre, pp. 102-130.

VILLAFUERTE SOLÍS, DANIEL Y XÓCHITL LEYVA SOLANO (COORDS.)

- 2006 *Geoeconomía y geopolítica en el área del Plan Puebla-Panamá*, Ciudad de México, CIESAS.

VILLAREAL, M. ANGELES

2012 «Mexico's Free Trade Agreements», *Congressional Research Service. CRS Report for Congress*, 7-5700, Washington, DC, U.S. Government Printing Office.

VOGT, WENDY

2013 «Crossing Mexico: Structural Violence and the Commodification of Undocumented Central American Migrants», *American Ethnologist*, 40(4), pp. 764-780.

WALLACE WILKIE J., MEYER M. C., AND MONZÓN DE WILKIE E.

1976 *Contemporary Mexico: Papers of the 4th International Congress of Mexican History*, Berkeley, University of California Press.

WARREN, KAY

2001 «Introduction: Rethinking Bipolar Constructions of Ethnicity», *Journal of Latin American Anthropology*, 6(2), pp. 90-105.

WATANABE, JOHN M.

1992 *Maya Saints and Souls in a Changing World*, Austin, University of Texas Press.

2000 «Cultural Identities, the State, and National Consciousness in Late Nineteenth-Century Guatemala», *Bulletin of Latin American Research*, 19, pp. 321-340.

WILSON, THOMAS M. Y HASTINGS DONNAN, EDS

1998 *Border Identities: Nation and State at International Frontiers*, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.

WISE, TIMOTHY A.

2010 «The Impact of U.S. Agricultural Policies on Mexican Producers», en Jonathan Fox y Libby Haight (eds.), *Subsidizing Inequality: Mexican Corn Policy since NAFTA*, Ciudad de México/ Santa Cruz, Woodrow Wilson International Center for Scholars/ Mexico Institute/ University of California, Santa Cruz/ Centro de Investigación y Docencia Económicas, pp. 163-172.

2011 «Mexico: The Costs of U.S. Dumping», *NACLA Report on the Americas*, 44(1), pp. 47-49.

WORBY, PAULA

2001 «Security and Dignity: Land Access and Guatemala's Returned Refugees», *Canada's Journal on Refugees*, 19(3), pp. 17-24.

WORLD BANK, THE

2015 «World Development Indicators». Mexico: Employment in Agriculture (% of total employment), septiembre 24, en <<https://knoema.com/WBWDIGDF-2015Aug/world-development-indicators-wdi-september-2015?tsId=2423740>> [consulta: 10/08/2016].

WORLD BANK DATA

- 2014 «Gross Domestic Product 2014», en <<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>> [consulta: 03/12/2015].

WORLD BANK GROUP

- 2015 «Doing Business: Measuring Business Regulations», en <www.doingbusiness.org/rankings> [consulta: 06/07/2016].

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

- 2015 «Factual Presentation: Free Trade Agreements between Mexico and Central America —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua», septiembre 7, Report by the Secretariat, Ginebra, Committee on Regional Trade Agreements. WT/REG349/1.
- 2016 «Trade Policy Overview of Guatemala», septiembre 28, Report by the Secretariat, Trade Policy Review Body. WT/TPR/S/348, Submitted by Guatemala.

YBARRA, MEGAN

- 2016 «'Blind passes' and the Production of Green Security through Violence on the Guatemalan border», *Geoforum*, 69, pp. 194-206.

YIFTACHEL, OREN

- 2009 «Critical Theory and 'Gray Space': Mobilization of the Colonized», *City*, 13(23), pp. 240-256.

YÚNEZ-NAUDE, ANTONIO

- 2003 «The Dismantling of Conasupo, A Mexican State Trader in Agriculture», *The World Economy*, 26, pp. 97-122.

ZEPEDA, EDUARDO, TIMOTHY A. WISE Y KEVIN P. GALLAGHER

- 2009 «Rethinking Trade Policy for Development: Lessons from Mexico under NAFTA», Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace: Policy Outlook, pp. 1-22.


ZILBERG, ELANA

- 2007 «Refugee Gang Youth: Zero Tolerance and the Security State in Contemporary US-Salvadoran Relations», en Sudhir Alladi Venkatesh y Ronald Kassimir (eds.), *Youth, Globalization, and the Law*, Stanford, CA, Stanford University Press, pp. 61-90.
- 2011 *Space of Detention: The Making of a Transnational Gang Crisis between Los Angeles and San Salvador*, Durham, NC, Duke University Press.

La cadena: vida y negocio en el límite
entre México y Guatemala
de REBECCA BERKE GALEMBA

estuvo bajo el cuidado de Gustavo Peñalosa Castro, con la colaboración de la autora. La composición tipográfica fue de Raúl Berea Núñez.

La obra terminó de imprimirse en abril de 2021 en los talleres de Gráfica Premier, S.A de C.V., ubicados en 5 de febrero 2039, col. San Jerónimo Chichahualco, C. P. 52170, Metepec, Estado de México. Los interiores se tiraron sobre papel Snow Cream de 60 g y los forros sobre cartulina sulfatada de 14 pts. En la composición tipográfica se utilizaron tipos Minion Pro y Ocean Sans. El tiraje fue de 250 ejemplares.



La cadena detalla la vida cotidiana de las personas que residen en un cruce fronterizo no controlado. Explora cómo las personas manejan y reinterpretan las directivas de seguridad y comercio regionales que no son de su propia creación y que, sin embargo, tienen un impacto en sus vidas al esforzarse por mantener a sus familias en medio de opciones limitadas. Mi objetivo es desafiar los discursos políticos y de los medios sensacionalistas, que omiten la historia y están descontextualizados sobre las crisis de criminalidad y los flujos ilícitos. La etnografía demuestra las tensiones entre la política y la práctica, las intenciones y las realidades, y cómo las políticas comerciales y de seguridad, aparentemente neutrales, reflejan intereses económicos particulares y lógicas culturales que pueden chocar con las experiencias locales.



CIMSUR

